

00482
2
29.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO

**"LOS ORIGENES SOCIALES DE LA
VIOLENCIA POLITICA EN EL PERU."**

T E S I S

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE

DOCTOR EN CIENCIAS POLITICAS

P R E S E N T A

JORGE VICTOR LORA CAM

México, D. F. 1990

**TESIS CON
FALLA DE ORIGEN**



Universidad Nacional
Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N D I C E

INTRODUCCION.....	pág. 1
<u>CAPITULO I FUNDAMENTOS HISTORICOS DE LA VIOLENCIA POLITICA.....</u>	25
--I. Fases y Procesos constitutivos.....	25
---1. Las fases: Capitalismo y Colonialismo en el Perú.....	25
-----a. Acumulación de capital y colonialismo español.....	25
-----b. La libre concurrencia y el semicolonialismo inglés.....	34
---2. Los procesos constitutivos de la sociedad.....	45
--II. El Estado y la violencia como politica.....	60
-III. Violencia étnica y lucha de clases.....	70
---1. Relevancia actual.....	70
---2. Violencia étnica anticolonial.....	73
---3. Los movimientos campesinos 1956-1964.....	84
-----a. Violencia andina y desarrollo monetario-mercantil.....	84
-----b. Movimientos sociales y violencia política: el -----renacimiento étnico-clasista.....	96
-----c. La rebelión campesina 1958-1964 y Hugo Blanco.....	104
-----d. El Fokuismo.....	117
--IV. El problema nacional y colonial, dos proyectos antagónicos.....	126

CAPITULO II PROCESO DE INSERCIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA EN LA ECONOMÍA CAPITALISTA MUNDIAL Y SUS CONFLICTIVAS CONSECUENCIAS.....pag. 145

--I. Semicolonialismo y entramamiento del desarrollo.....	145
--II. Semicolonialismo y reformismo contrainsurgente.....	161
---1. Las bases financieras de la recomposición del -----semicolonialismo.....	165
---2. El capital extranjero y la recolonización de la industria..	177
-----El bloqueo tecnológico industrial.....	193
---3. Materias primas, el otro eje de la estrategia económica -----neocolonial.....	203
---4. El Sector agrario: Programa y reforma agraria del gobierno -----militar.....	221
-----a. La tierra: propiedad y otras relaciones de producción...	228
-----b. La semifeudalidad y la reforma agraria, objetivo político: -----el campesinado.....	235

CAPITULO III LA CRISIS ESTRUCTURAL: UNA ESPIRAL DE EXPANSION Y RUPTURA.....257

--I. La racionalidad de la crisis.....	265
--II. Evolución histórica de la crisis: Desarrollismo y -----polarización social.....	270
---1. Primer período 1967-1979: La gestación de la deuda.....	270
-----Algunas particularidades de la crisis.....	292
-----a. Capital financiero, descapitalización y entramamiento del -----desarrollo.....	292
-----b. Una crisis de base agraria.....	300
-----c. Crisis en la balanza de pagos.....	310

---2. Segundo periodo 1980-1985. Estabilización, ajuste y
-----neoliberalismo: Productos del desarrollismo.....315

--III.Limites de la política económica y bloqueo de la
-----acumulación.....330

CAPITULO IV. LA BURGUESIA BUROCRATICA Y LOS LIMITES DEL ESTADO.345

--I. Escenario geográfico y frustración estatal.....349

--II. Reconposición oligárquica, burguesía burocrática y Estado..355

---1. La reconposición oligárquica.....369

---2. La burguesía.....386

--III.La burguesía, las capas medias y la política.....391

---1. Burguesía y política económica.....391

---2. La politicidad criolla.....402

---3. Participación electoral e Ideología de la violencia.....406

---4. Las capas medias y la política.....411

CAPITULO V. CONFORMACION DEL ESPACIO POLITICO DE LA VIOLENCIA Y
APERTURA A LA LUCHA ETNICO-CLASISTA......421

--I. Reformismo y lucha de clases 1968-1975.....421

--II. Crisis orgánica y movimiento social.....430

--III.Desintegración económica y pobreza rural.....441

--IV. La andinización del país: hiperurbanización, desempleo y
-----pauperización.....454

--V. Los movimientos sociales.....469

---1. El movimiento obrero.....	469
---2. El movimiento popular.....	473
---3. El movimiento regional.....	484
---4. El movimiento femenino.....	490
---5. El espacio serrano de la violencia política.....	503
-----a. La violencia económica anticampesina.....	503
-----b. La violencia política campesina.....	511
----- Conclusiones.....	524
----- Bibliografía.....	543

RESUMEN DE LA TESIS

TEMA: LOS ORIGENES SOCIALES DE LA VIOLENCIA POLITICA EN EL PERU

AUTOR: JORGE VICTOR ROMULO LORA CAM

GRADO AL QUE OPTA: DOCTORADO EN CIENCIAS POLITICAS

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

La presente investigación pretende demostrar que la violencia política exige una base material y subjetiva, que el proyecto político que precede a esta violencia es producto de contradicciones y luchas coyunturales e históricas entre fuerzas con concepciones antagónicas sobre el futuro y, que la potencialidad objetiva para potenciar un contenido no ejecutado solo se cristaliza en la medida en que representa la realización de las necesidades populares.

Partimos de una comprobación empírica, por los mas destacados intelectuales peruanos y extranjeros reconocida: Perú vive una década de violencia política (1980-1990), permanente y sostenida, que bajo una dirección intransigente en su propósito de destruir el Estado para construir uno nuevo ha conseguido significativos avances en la transformación del sistema. No obstante sus orígenes sociales no han sido ni suficiente, ni sistemáticamente explicitados.

Para explicar este proceso social nuestro punto de arranque es la teoría y método marxistas, en la medida en que reflejan y permiten explicar la necesidad histórica de la violencia. Los teóricos que utilizamos son los clásicos del marxismo y aquellos de sus seguidores que en oposición al teoricismo esquematizante han desarrollado aspectos sustantivos de la teoría revolucionaria. Sobre la base de un conjunto de premisas fundadas en el materialismo histórico y comprobadas en la lucha de clases intentamos estructurar conceptualmente el conocimiento de las causas fundamentales de la violencia política. Algunos de estos teóricos son los peruanos: José Carlos Mariátegui, Pablo Macera, Alfredo Torero, J.M. Arguedas, L.G. Lumbreras, Virgilio Roel Y abimael Guzman; de los latinoamericanos: Sergio Bagú, Hugo Zemelman, René Zavaleta, Edelberto Torres Rivas, Pablo Gonzalez Casanova, Marcos Kaplan y muchos otros.

Respecto al método, tratamos de reinterpretar aquellos elementos de la historia, la economía, la sociedad y la política que expliquen las causas de la violencia política. Examinamos fuentes principalmente secundarias en base a un conjunto de procedimientos racionales de aprehensión de la realidad fundado en la dialéctica. El descubrimiento de las posibilidades objetivas y subjetivas ya existentes capaces de potenciar la violencia política no nos exigieron revisar fuentes primarias. Siguiendo a Mariátegui reconocemos la complejidad histórico social y el vasto horizonte de contradicciones.

Considerando que por su propia naturaleza la teoría busca reducir la complejidad de lo real, lo que se precisa son los análisis de la experiencia histórica y los problemas de la coyuntura para enriquecerlos y así encontrar las potencialidades y los procesos constitutivos de la violencia política. En esta perspectiva y la de una ciencia social única articulamos el campo de las regularidades económicas y sociales con la dirección que toma la realidad como campo de fuerzas.

Nuestro posible aporte radicaría en la búsqueda de los procesos constitutivos y la potencialidad de la violencia política en una estructura e historia preñada de conflictos; el estudio de las formas de acumulación y la correspondiente constitución clasista arraigada en antagonismos étnicos; el análisis de como la voluntad política no puede fácilmente trascender las relaciones de producción constituidas históricamente y el porqué la relación entre estructura y praxis determina la posibilidad y realidad de la violencia política considerando el desencuentro entre las tendencias predominantes en la sociedad civil y las que se dan en el Estado.

Cinco son los capítulos a través de los cuales se intenta comprobar las hipótesis: I.-Fundamentos históricos de la violencia política. II.-Proceso de inserción de la economía peruana en la economía capitalista mundial y sus conflictivas consecuencias. III.- La crisis estructural: una espiral de expansión y ruptura. IV.-La burguesía burocrática y los límites del Estado. V.-Conformación del espacio político de la violencia y apertura de la lucha étnico-clasista.

Las revoluciones exigen una base material.
La teoría sólo se realiza en un pueblo en la
medida que representa la realización de sus
necesidades.

K. Marx.

INTRODUCCION

La presente investigación parte del siguiente postulado:

"toda visión global de la historia constituye una genealogía del presente. Selecciona y ordena los hechos del pasado de forma que conduzcan en su secuencia hasta dar cuenta de la configuración del presente, casi siempre con el fin, consciente o no, de justificarla" (1). Con base en él, trataremos de explicar los grandes obstáculos para el desarrollo de la sociedad peruana que se han configurado en distintas fases y momentos constitutivos, los cuales condicionan la violencia política actual.

El lapso privilegiado de la investigación es la coyuntura de 1960-1980, periodo decisivo en la transformación de la realidad social y creador de posibilidades de quiebre de la misma. En este último, economía y política se conjuntan con los procesos de larga duración para dar origen a la violencia política. Violencia política: es el uso de la fuerza, de la violencia física

(1) Josep Fontana. Historia: análisis del pasado y proyecto social, Colección Crítica, Barcelona, 1981 p.1.

activa y organizada, en la disputa por el poder. Ocorre, en el plano de las relaciones conflictivas entre agrupaciones o clases sociales, como continuación de la lucha política. La lucha de clases es la fuerza motriz de la historia y asume, en determinadas circunstancias, la forma de violencia armada. Engles - en el Anti Dühring - esboza la concepción marxista de la violencia cuando escribe "Hasta el momento todas las formas sociales han necesitado de la violencia para sostenerse, y a veces se introdujeron violentamente ya. Esta violencia organizada se llama Estado". En correspondencia, quienes defienden la violencia revolucionaria afirman que ésta es el recurso de las masas para la conquista del poder, o como dice Marx: "para abreviar, simplificar, concentrar la agonía de la sociedad burguesa, no hay más que un sólo medio: el terror revolucionario" (Neue Rheinische Zeitung, No. 136, 1848). Se redefinen viejas solidaridades con nuevas ideopolíticas expresándose en una violencia inusitada. Renace la reciprocidad ante el desgarramiento mercantil de la sociedad y el arrasamiento de la comunidad histórica.

Hemos seleccionado dos elementos genealógicos explicativos: 1) la visión mariateguiana de un Perú desintegrado donde, en un contexto agrario andino semifeudal, las mayorías indígenas son víctimas de la destrucción cultural (etnocidio), exterminio, explotación y discriminación racial; y 2) Perú es uno de aquellos países "con regímenes egregiamente feroces e instituciones

desesperadamente inservibles y fatalmente expuestos a una 'dominación modernizadora' por parte de potencias extranjeras, aquéllas donde más fácilmente se puede movilizar una 'voluntad general'" (2). Dos elementos más completan la explicación: 1) la dominación imperialista del Perú esta arraigada en una estructura de integración subordinada a la economía imperialista mundial, que es al mismo tiempo factor determinante de su crecimiento y de su trabazón. Ello es así porque tal desarrollo responde a los requisitos de los centros de acumulación ubicados en los países imperialistas (3); y 2) los intentos desarrollistas reformadores y neoliberales, que cíclicamente tienen continuidad, se ven totalmente limitados para superar aquella estructura de explotación, desigualdad y dominación: las salidas que proponen profundizan las relaciones de subordinación y las enormes contradicciones sociales, agravando el déficit y confusión institucionales.

La violencia política surge de estas relaciones y de la lucha de los hombres y mujeres de un pueblo politizado por impedir su destrucción. De allí que tratemos de repolitizar el exámen de las reestructuraciones sociales y de los movimientos renovadores de un pasado que a cada momento y en cada palmo de terreno expresa su presencia.

(2) Richard Morse, De Historia e historiadores, siglo XXI Editores, México, p.257.

(3) Raymond Lotta, "Sobre el dinamismo del Imperialismo y el entramamiento del Desarrollo social" en Un Mundo que ganar, Londres, 1985.

La historia contemporánea del Perú, en especial los últimos ocho años, está enmarcada en la lucha por el poder. Explicar sus orígenes nos orilla a una historia combinada de las fases y procesos constitutivos de estructuras sociales de poder violentamente institucionalizadas, con la coyuntura no menos central en la explicación de la violencia política actual.

La dialéctica de la producción y del poder complica y diversifica la interacción entre lo continuo y lo discontinuo, entre la reforma y la revolución. (4) La lucha revolucionaria debe destruir y construir estructuras y, al mismo tiempo, enfrentarse a los intentos estatales de estabilización en el contexto de una abigarrada sociedad en trance de hacerse predominantemente capitalista.

Al cambiar el patrón de acumulación se modifica el bloque en el poder y los mecanismos de dominación. Desde 1968 las Fuerzas Armadas, constituidas en clase política, buscaron renovar el proyecto de las clases dominantes y evitar el riesgo de crisis política. Pero al hacerlo, reconstituyeron también sujetos sociales, gestándose proyectos políticos de oposición que van configurándose en el enfrentamiento de intereses. De este modo, la reinserción de la economía peruana en la economía mundial crea nuevos factores que potencian las crisis y que no pueden ser frenados por las políticas heterodoxas inventadas

(4) Pablo González Casanova, "La dialéctica de la situación y la historia" en Historia y Sociedad, núm. 23, México, 1979.

por la CEPAL. Por el contrario, conducen a que el pueblo viva en el reino de la necesidad y a que aparezca la violencia política como interés de la sociedad.

El análisis que hacemos de los diversos movimientos sociales nos muestran que sus determinaciones van más allá de lo económico-social y que la democracia en un país así sólo se consigue mediante la conquista del poder. Para hablar de democracia, no basta aquí "el reconocimiento formal de la igualdad entre los ciudadanos, del derecho igual para todos de determinar la forma de Estado y de administrarlo" (5), pues en Perú lo fundamental de ella es la aplicación organizada y sistemática de la coacción estatal sobre los hombres.

Los movimientos sociales son combates por libertades políticas y contra un régimen capitalista entrabado. Estos se transforman en rebeliones orientadas a la destrucción del poder estatal como poder esencialmente coactivo y separado de la sociedad, que proviene de la disgregación social y la ausencia de institucionalidad: es la conjunción de la lucha económica, social e ideológica contra las formas serviles y salariales de superexplotación con la lucha política y por la conquista de un nuevo consenso integracionista.

En síntesis, la violencia política aparece como una necesidad histórica, vinculada a una crisis múltiple, a factores económicos, sociales y políticos; es el instrumento

(5) Umberto Cerroni, Introducción a la ciencia de la Sociedad, Grijalbo, Colección Crítica, Barcelona.

y el método a través del cual el movimiento social se abre camino, rompiendo así las formas sociales muertas: es la partera de la historia (Marx) impuesta por las contradicciones irreconciliables de una sociedad sumamente dividida.

Llegando a sus raíces en esta investigación, se desecha la falsa eternidad de las formas de violencia establecidas e insitucionalizadas, se desentrañan sus fundamentos políticos y morales, y se descubren las formas pasadas y actuales que han adoptado y adoptan. Al mismo tiempo, se explica porqué el objeto de la violencia política actual lo constituyen las relaciones sociales que dan sustento al poder estatal y cómo, de objeto de la violencia, el hombre se convierte en sujeto destructor de un orden que se resiste a cambiar.

LA VIOLENCIA POLITICA

Desde el punto de vista del marxismo, la vinculación entre la violencia y los factores económicos y sociales que la determinan es esencial. Su reconocimiento es también la clave para la creación de una sociedad en la que puedan abolirse las relaciones violentas entre los hombres.

Ya Engels, en el Anti-Dühring, le salía al paso a la tendencia que hace de la violencia el factor decisivo o la fuerza motriz del desarrollo histórico, y señala su

subordinación a factores económicos. Al enfrentarse a Dühring, para quien "la violencia es el factor histórico fundamental", (6) Engels afirmaba que la "violencia no es más que el medio y que -en cambio- el fin reside en el provecho económico". En este mismo sentido Marx sostiene lo siguiente: "La fuerza es la partera de las sociedades... También es un poder económico." Para agregar luego que "Todas las luchas de la historia tienen su fundamento profundo en la contradicción entre las fuerzas productivas y la forma de las relaciones." (7)

La violencia política -como también la guerra- es un fenómeno histórico determinado por la realidad económica de la sociedad clasista, por ello inevitable. Su contenido político nos remite al Estado. Eugenio del Rio expresa de la siguiente manera la relación entre violencia y Estado.

"la presencia misma del poder político militar del Estado supone ya una forma de violencia. No es casual que Engels identificara del siguiente modo violencia y poder político: La violencia (es decir, el poder político) es también una potencia económica. Tal identificación se opera, asimismo, en su obra Anti-Dühring cuando escribe: La violencia es actualmente el ejército y la marina" (8).

Los grandes problemas políticos son problemas

(6) F. Engels, Anti-Dühring, Grijalbo, México, 1968.

(7) C. Marx y F. Engels, La ideología alemana; y C. Marx, El capital

(8) Eugenio del Rio, "El marxismo y la violencia" en El viejo topo, Extra núm. 3, Madrid.

militares: la guerra es la continuación de la política por otros medios (Clausewitz). Esto significa que los antagonismos sociales en sus estadios superiores se resuelven por la violencia.

Este planteamiento se extiende a la transformación de la lucha de clases y antimperialista en guerra de clases y de liberación, en la fase de agudización de las contradicciones sociales y en el contexto de la dependencia de formas coloniales. Fanon y Sartre (9) incluso Mao Tse Tung sostienen que tal dependencia se expresa en violencia imperialista, que destruye las estructuras sociales de los pueblos sometidos y la personalidad de los individuos. A tal punto es así que la violencia se reproduce dentro de las jerarquías y discriminación étnica en el propio pueblo. En respuesta, la violencia del colonizado adquiere así un carácter catártico y libertador, asociada a la integración nacional.

La violencia política -aceptando que todos los Estados la utilizan- se presenta con más frecuencia en determinadas condiciones históricas. En Latinoamérica se asocia a la lucha de clases derivada de cambios en la forma de acumulación, en un contexto que no supera las formas originales de manera definitiva ni la integración política

(9) F. Fanon, Los condenados de la tierra, FCE, México, J.P. Sartre, Antología de la violencia, FEC, México, 1975.

de grupos sociales étnicamente diferenciados. Los Estados practicaron el etnocidio y el genocidio contra los étnias que sobreviviendo al exterminio y la superexplotación, ofrecieron resistencia o desconocieron la legitimidad del Estado.

Para Piel, en el Perú, con la Independencia se negó, por parte del Estado, la realidad jurídico étnica mediante una política neocolonial, fundada en relaciones serviles y en la coerción extraeconómica (10).

En todos estos casos, la violencia efectiva era reemplazada en periodos de paz, por una violencia potencial concentrada en el Estado. En efecto, la violencia política es un elemento constitutivo de la sociedad clasista y es la fuerza generadora de nuevas sociedades; así su presencia es considerada constante en la historia.

Stoppino (11) anota varias funciones políticas de la violencia; que adecuadas al Perú consisten en:

a). Destruir a los adversarios políticos o ponerlos en la imposibilidad física de actuar con eficacia (como genocido).

b). Doblegar su resistencia y voluntad (v. gr. etnocidio, extirpación de idolatrías) e imponerles

(10) J. Piel, "Los aspectos etnocidarios del Estado neocolonial peruano después de la independencia del Perú" en Etnocidio a través de las Américas, Compilador, Jaulin R. siglo XXI, Editores, Mexico, 19..

(11) S. Stoppino, Diccionario de Política, S. XXI, Editores, México, 1982, pp.1678-1680.

condiciones.

c). Crear un simbolismo contra la injusticia e ilegitimidad, suspendiendo las formas del orden social constituido sobre el engaño, la manipulación, etc. En muchos casos se trata de buscar apoyo y generalizar el conflicto.

d). Desarrollar la identidad, la conciencia de clase, la cohesión y solidaridad.

Empero, como tratamos de demostrar a lo largo de la presente investigación, "la política es la expresión concentrada de la economía... (y) la política no puede menos de tener supremacía sobre la economía. Pensar de otro modo significa olvidar el abc del marxismo"(12). En lo que sigue intentaremos precisamente bosquejar esta relación.

(12) V.I. Lenin, Obras escogidas, T.III, p. 544.

CARACTER DE LA INVESTIGACION

En la presente investigación nos propusimos como objetivo principal descubrir y explicar los orígenes de la violencia política, los momentos constitutivos de los antagonismos sociales y la aparición y ascenso de la violencia; asimismo, establecer la relación entre fases y momentos constitutivos: Expliquémonos.

Al inicio, los señoríos étnicos y la conquista colonial se enfrentaron a una prolongada resistencia indígena. Después, en una relevante segunda fase constitutiva, la inserción en la economía mundial capitalista significó el desmoronamiento de parte de la estructura colonial precapitalista y el establecimiento de límites estructurales a la acumulación interna. Por último, la historia del presente siglo, en lo fundamental, es la historia del capital extranjero y del imperialismo. Todo el proceso es una acumulación de antagonismos sociales que luego se convertirán en fundamentos de la violencia política.

En suma, se explica cómo sobre la diferenciación étnico-nacional (*) se constituye un Estado etnocida y

(*)ETNIA: Retomamos el concepto de Levi: "grupo social cuya identidad se define por la lengua y cultura comunes, las tradiciones y memoria histórica y territorio... las relaciones sociales que son la consecuencia de pertenecer a una misma etnia, crean intereses colectivos y vínculos de solidaridad de carácter comunitario (Claude Levi, en suplemento al Diccionario de Política, Norberto Bobbio et.al., Ed. S.XXI, México 1988). La nación es una categoría histórica burguesa resultado de la acción política e ideológica de una clase sobre el modo nacional de organización. En Perú la interrelación de ambas categorías identificaron pueblo, trabajadores y clase enfrentando el bloqueo desintegrador colonial para reconstruir la nación.

genocida que -siendo una constante hasta fines de los cincuenta- reaparece ante la convocatoria de los movimientos sociales y políticos, adquiriendo mayor virulencia en periodos de crisis. Una extensa población diferenciada étnicamente empieza a destruir las estructuras creadas y desarrolladas por la violencia, al tiempo que rechaza la mayor explotación que supone un prolongado proceso de acumulación y reproducción ampliada de capital.

En términos más específicos, con este estudio buscamos:

1. Explicar cómo se forma el capitalismo subordinado a distintas formas coloniales, los cambios en los mecanismos de acumulación, el estancamiento y la creciente explotación de la población andina, así como otros aspectos que contribuyan a comprender la violencia política actual.
2. Entender la naturaleza del Estado peruano, los mecanismos de socialización y movilización, el sustento del poder, las estructuras de participación y representación, la reproducción de la dominación, las formas ideológicas oligárquicas y las formas reaccionarias de identidad burguesa y popular. Todo ello en relación con sus efectos sobre la aparición y ascenso de la violencia política.

3. Analizar y correlacionar los diversos factores, en particular los económicos y políticos, que intervienen en la descomposición de la vieja sociedad: reforma agraria, descampesinización, política liberal, crisis económica, renovación ideológica-política, etc. Esto en el contexto de la desestructuración global de la sociedad y sus efectos en el desarrollo de la violencia política.

4. Finalmente, tratamos de relacionar un conjunto de elementos concurrentes en el desencadenamiento de la violencia política actual: la constitución de las clases sociales y su vinculación con los factores étnico y nacional, la concentración del poder político y los intereses regionales, el carácter de la dominación política y la distribución del poder, los movimientos políticos que afectan la legitimidad del Estado, las relaciones conflictivas pueblo-Estado y la constitución de partidos políticos institucionalizados y subversivos.

DOS HIPOTESIS GENERALES.

En la investigación nos orientaron las siguientes hipótesis:

La primera: en la historia existe un conjunto de fases y procesos constitutivos de los principales antagonismos étnico-sociales, ideológico-culturales y

económico-políticos no resueltos, y que hoy coexisten expresándose en una crisis múltiple en un conglomerado de conflictos sociales: en las contradicciones que surgen del mantenimiento de formas coloniales y precapitalistas que impiden un desarrollo más fluido del capitalismo y en la presencia del problema étnico cuya síntesis es la presencia de un Estado etnocida y genocida.

La segunda: el proceso de destrucción de las relaciones precapitalistas es lento y no produce un ritmo similar de construcción de relaciones económicas y políticas burguesas. Más bien significa una mayor desestructuración social e institucional y la apertura en la sociedad de la lucha étnico-clasista entre agrupaciones sociales incompletas. Es un prolongado proceso de constitución, recomposición e identificación social.

Asimismo, la violencia política como fenómeno histórico-social es una respuesta a los obstáculos al desarrollo, a la intolerancia etnocida-genocida, y a la aguda insatisfacción de viejas y nuevas necesidades acumuladas. En este sentido es un proceso condicionado por la realidad material, por las estructuras de explotación y dominación.

Etnias y clases -en interacción- son sometidas

a formas de explotación que combinan la coerción extraeconómica y el mercado; son excluidas de la riqueza y los beneficios sociales derivados de la propiedad, y despojadas de su soberanía, libertad, seguridad y derechos para actuar por sí mismas. Y esta dominación la ejerce una clase oligárquica renovada, apoyada en un Estado instaurado por la violencia y el consenso pasivo, que contradice el desarrollo económico. Aquí la violencia estatal es la manifestación cotidiana del poder y la capacidad de representar e influir en las masas.

Los distintos momentos constitutivos de la estructura social tienen un carácter violento: el sometimiento de los señoríos étnicos por el Imperio Inca, la conquista hispánica, la formación del Estado colonial y después republicano etnocida y genocida, los cambios en la dominación colonial y las diversas formas de acumulación que se suceden unas a otras sin acabar con las anteriores. Es así porque responden a los cambios en la economía mundial y no a un desarrollo autónomo, produciendo con ello una estructura económica vulnerable a las crisis. De este modo, la coexistencia de relaciones sociales de naturaleza conflictiva se expresará en la solidez de los obstáculos para el desarrollo económico, social y político, así como en lo latente y la potencialidad de una disposición popular a la violencia que puede llegar rápidamente a las formas

superiores de la 'lucha de clases o, lo que es lo mismo a usar los recursos últimos para resolver los problemas últimos.

La historia del Estado peruano es la historia de la violencia política. Desde la década de los sesenta del presente siglo, al aparecer la violencia política revolucionaria como producto de la lucha de clases, la modernización del Estado se reduce a las reformas, al crecimiento de la burocracia y de las fuerzas armadas, al combate ideológico al comunismo y a la construcción de formas reaccionarias de identidad.

El consenso pasivo, que es la otra vertiente de la dominación, se resquebraja hasta la pérdida de legitimidad; más aún, se dan reiteradas crisis y se dispone de cada vez menos excedentes para ofrecer concesiones a las clases subalternas.

La descolonización es un proceso cargado de violencia social que, al no transformarse en política por sus limitadas aspiraciones o la ausencia de una conciencia nacional, quedó inconcluso. Hoy aquel largo movimiento prosigue y busca unir clases y etnias desde abajo, en la misma medida en que pretende expulsar el capital extranjero y destruir el Estado.

Algunos elementos contenidos en la naturaleza de la actual lucha por la igualdad se refieren a las relaciones económicas, lingüísticas, culturales, tecnológicas, modos de

apariciencia y de vida cotidiana, acompañados de expresiones ideológicas que apuntan a la soberanía popular y a la integración del país, en oposición a la discriminación racial la ideología aristocratizante y el autoritarismo estatal. Estos procesos son los que en parte explican el llamado "desborde de la institucionalidad" (13), que tiene múltiples manifestaciones (economía informal y subterránea, migraciones, desempleo, bajos ingresos, ausencia de servicios de salud, educación, vivienda) en la formación de partidos y nuevas iglesias, así como en nuevas formas de conciencia social y cultural.

Cuando las masas superan los marcos institucionales establecidos se presentan intentos de apaciguar los enfrentamientos, en particular a través de reformas y del corporativismo estatal. Contradictoriamente, crean mayores expectativas y extienden la participación social de grupos sociales potencialmente homogenizables y capaces de subversión.

Las bases constitutivas del movimiento opositor se encuentran en la identidad histórica étnico-clasista con la ideología anticolonialista y antiaristocratizante y en su oposición a la jerarquización, segmentación y extremo distanciamiento de clases sociales, como al poder de las clases dominantes fundado en el etnocidio y genocidio traducidos en ideología hegemónica en extensos sectores del Estado, en particular las fuerzas armadas. La oposición a

(13) José Matos Mar, Desborde popular y crisis de Estado, Ed. IEP, Lima, 1984.

esta estructura social y de Estado se presenta como un conjunto de fuerzas de izquierda divididas en dos tendencias principales: una -aunque sus objetivos en el discurso sean otros- orientada al desarrollo de la ideología social-demócrata que conduce a formas de alienación política y, obviamente, al fortalecimiento del Estado. La otra, expresa los antagonismos sociales de naturaleza histórica y la violencia estructural y estatal, capta el descontento popular, sintetiza los vínculos comunitarios étnico-clasistas preexistentes y el tejido histórico de pertenencia común en los planos espiritual y material.

Si bien es cierto que ambas formas de oposición son parte del movimiento democrático popular del presente siglo y de la revolución ideológica que se inicia a fines de los cincuenta, una extrae su fuerza de la pequeña burguesía, burguesía y sectores obreros y campesinos. Mientras, la otra lo hace a partir del campesinado y la pequeña burguesía mestiza-indígena, de los obreros -principalmente mineros y agrícolas-, de la andinización del país (producto de las migraciones de la población andina), de la desestructuración económico-social y la reconstitución de clases y miseria de las masas agravada por la crisis.

Una expresa una forma de desarrollo ideológico y de constitución de actores políticos enraizados en la ideología oligárquica y en las instituciones estatales, aunque modernizada y cubierta de ideas marxistas y

socialdemócratas.

La otra, comprometida con la ideología marxista-mariateguista de la violencia política al margen y contra las instituciones, pretende acelerar el tiempo social, la intersubjetividad del hombre andino y desarrollar una milenaria agitación interpeladora, profundamente histórica.

Una opta por la vía de la renovación cultural de la acción política, de la conquista de la hegemonía ideológica y del gobierno -previas al control del Estado-, por la presentación de proyectos alternativos antirrecesivos y por el aumento de concesiones a las clases subalternas. Todo ello recurriendo a la tradición cultural más racionalista.

La otra, autoproclamándose representante del proyecto de vida de las masas segregadas del país y de la cultura andina en ascenso como sustento de la nación, forma un nuevo proyecto político contrahegemónico. Rompe con la inhibición y enraizamiento de reflejos de obediencia y transforma la conciencia histórica de la derrota popular a través de la permanente y larga transgresión de las normas establecidas, utilizando la experiencia inmediata y directa que desarrolla la situación revolucionaria.

El método y las fuentes.

La investigación que realizamos no es una reconstrucción histórica que abarque la totalidad de

acontecimientos de cinco siglos. Ni siquiera es una historia económica o social. Es partir de una síntesis explicativa orientada por principios organizativos sincrónicos y diacrónicos que, al incorporar como elemento ordenador los antagonismos sociales que bajo determinadas condiciones genera la violencia, nos conduzca a la coyuntura 1960-1980, en la que surge la violencia política que continúa a pesar de dos décadas de reformas burguesas inscritas en la conformación de la estrategia de seguridad y desarrollo.

En la primera parte, la lectura de fuentes nos proporciona una historia diferente a la "conciencia histórica atribuida". Los resultados de los últimos avances etno-históricos, al poner énfasis en la historia andina, aclaran oscuros aspectos del pasado, como el carácter etnocida y genocida del estado colonial y poscolonial que se diferencia de los estados prehispánicos multiétnicos (14).

La teoría de la violencia política se ha ido quedando en la "alta teoría", (15) y ha sido sometida a los avatares del debate ideológico. De allí nuestra pretensión de intentar la teoría aplicada y la crítica de algunas interpretaciones del origen de la actual violencia política en el Perú, que son producto del actual estado de la conciencia histórica de raigambre oligárquica, encarnada incluso en los intelectuales progresistas influidos por

(14) Véase Jean Piel, El etnocidio en las Américas, siglo XXI, Editores, México, 1976.

(15) Agnes Heller, Teoría de la Historia, Fontamara, México, 1984.

motivaciones y justificaciones social-demócratas.

La periodización se ajusta al principio básico que considera que las causas de la violencia son acumulativas, en un modelo diacrónico -que incluye discontinuidad como continuidad- ajustado a un modelo sincrónico. En el primer aspecto adquiere relevancia el largo y lento periodo transitorio de relaciones de producción precapitalistas a otras capitalistas (que muchos académicos en Perú han llamado semifeudales (16), y el paso paralelo de la semicolonialidad al neocolonialismo que la comunidad científica, antes reticente a aceptarlo, hoy coincide en subrayar.

Nuestro propósito es ofrecer una nueva explicación acerca de los orígenes de la violencia, reorganizando y sistematizando la información que se encuentra principalmente en fuentes secundarias.

Las aproximaciones al problema de la transición de una formación a otra y la necesidad de un Estado fundado en la fuerza son insatisfactorias. De allí la necesidad de modificar la "conciencia atribuida de nuestra historicidad". Únicamente en la parte concerniente a los movimientos sociales se intenta comprender los motivos y fines más generales de los agentes en correspondencia con sus condiciones y sus objetivaciones históricas. Como sostiene Heller: "La explicación comienza con la historia, la génesis es una explicación" (17).

(16) Entre éstos cobra relevancia José C. Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad Peruana, Amauta Lima

(17) Ibid., p. 148

Tratamos de agrupar aspectos similares en un lado u otro, de manera tal que tengamos un cuadro lo más completo posible de las diversas causas de la violencia política. Incidimos especialmente en las causas formalis (Heller) que explican este fenómeno a partir de la estructura social, de acciones y acontecimientos como elementos inherentes al hecho histórico. A este tipo de causa habría que agregar la ideología, los objetivos y la voluntad de los actores en el marco de las condiciones mínimas para que se produzca un movimiento social, como son los límites a la acumulación, la miseria de las masas, las luchas objetivas o la crisis política.

Si se pretende reconstruir los fundamentos de la violencia política, su surgimiento, los cambios en su desenvolvimiento y las formas y medios en que unas agrupaciones sociales se defienden e incorporan su voluntad e intereses, la base analítica estará en las relaciones de producción, sus mecanismos de cambio o estabilidad y las pautas de su transformación. Las fuentes son principalmente secundarias en la medida que son suficientes para demostrar nuestros objetivos.

En el capítulo pertinente, analizamos los fundamentos de la aparición de la violencia e identificamos los momentos constitutivos de los antagonismos sociales, los cambios en las formas de dominación colonial y la constitución de clases y del Estado moderno. Relacionamos

en cada momento la acción humana consciente como también los cambios históricos no dependientes de la voluntad del hombre que se dan a largo plazo; asimismo, las complejas formas de los cambios evolutivos y reformistas, su relación dinámica y los resultados.

En el capítulo II estudiamos cómo el proceso de acumulación ha entrabado el desarrollo, reactivando contradicciones étnicas, sociales y políticas que fueron agudizadas por el Estado en su intento de frenar con reformas el ascenso de la violencia.

Los últimos dos capítulos están orientados a estudiar la coyuntura social y política de 1960-1980 -periodo en el que se precipita la violencia política- con énfasis en las estructuras sociales en que se produce y estableciendo las vinculaciones entre el conjunto de elementos condicionantes de la violencia política que se inicia en 1980 como acumulación e factores que se desencadenan en un momento dado.

Lo que ocurre en el sector agrario con respecto a la sociedad global (18), y en particular las relaciones del campesinado con otras clases y étnias, nos servirá para explicar el conjunto de antagonismos y conflictos en la sociedad y el Estado.

Los hechos de la coyuntura -momento y resultado del funcionamiento de la estructura- modifican permanentemente el carácter de las relaciones fundamentales,

(18) Véase Barrington Moore, Los orígenes sociales de la democracia y la dictadura, Península, España.

la naturaleza de los conflictos y la correlación de fuerzas. La coyuntura o "conjunto de condiciones, articuladas entre sí, que caracterizan un momento en el movimiento global de la materia histórica" (19) son lo central de estos apartados.

(19) P. Vilar, Introducción al vocabulario histórico, Grijalbo, p.81.

CAPITULO IFUNDAMENTOS HISTORICOS DE LA VIOLENCIA POLITICA

"A cada gran etapa del desarrollo de la sociedad capitalista corresponde una etapa particular de la historia de las empresas coloniales, los objetivos y los medios se modifican en relación con las nuevas necesidades y los nuevos caracteres que van apareciendo en el desarrollo de la economía. A los tres grandes periodos de la historia del modo de producción capitalista (periodo de acumulación de capital, periodo de capitalismo de concurrencia y periodo de capitalismo monopolista) corresponden tres grandes etapas en la historia de las empresas coloniales"

Jaques Arnault, Historia del Colonialismo.

I. FASES Y PROCESOS CONSTITUTIVOSA. Las fases: Capitalismo y Colonialismo en el Perú.

a). Acumulación de capital y colonialismo Español. La revolución que vive Perú es popular y nacional, étnica y clasista. Popular, porque las masas que

combaten surgen de las mismas condiciones históricas de producción-materiales y no materiales; nacional y clasista, por el desarrollo de una conciencia histórica de integración liderada por obreros y campesinos; y étnica por la lucha del pueblo por recuperar sus condiciones de vida (tierra, cultura y lengua) articulada por lazos comunitarios.

En resumen, grupos sociales de origen étnico común asumen una identidad nacional y de clase, agrupándose en el pueblo e incorporándose a un proyecto revolucionario democrático que resurge de una cultura política alternativa.

Estas relaciones nos llevan a buscar los orígenes históricos de la violencia política en la historia (Cap.I) y en la coyuntura (Cap. II al V). Esta última tiene relativamente más peso porque en ella se crean las condiciones económicas, sociales, políticas e ideológicas del enfrentamiento y se combinan los elementos desencadenantes de la violencia política actual: maduración de la sociedad civil, desarrollo de una generación marcada por el derrumbe de la conciencia de obediencia y el nacimiento de una politización que gira en torno a la destrucción del poder.

Cuando hablamos de fases constitutivas aludimos a

las modificaciones que determinan el cambio de tipo de inserción del Perú en el sistema colonial y modifican el carácter de la sociedad y del Estado. No obstante, una forma de dominación no suprime las relaciones anteriores de subordinación. Y cuando nos referimos a momentos constitutivos estamos pensando en los procesos que de modo acumulativo han configurado las contradicciones principales que sobreviven y se conjugan en el Perú de hoy.

Una constante que apreciamos en este apartado es la subsistencia de los mecanismos coloniales y semicoloniales de apropiación de recursos naturales y del excedente, la actitud coercitiva frente a la fuerza de trabajo y el entramamiento del desarrollo, derivados de la subordinación colonial.

En la primera mitad del siglo XVI, España se erige en potencia económica cuando el mundo ingresa en el colonialismo mercantil, y llega a dominar -mediante la conquista- gran parte de América del Sur, del Norte y América Central. En Europa se expresa en una dinámica que unifica las coronas de Alemania, Bélgica, Países Bajos, gran parte de Italia y otros.

Luego de la reconquista de España dirigida por su nobleza feudal, el proceso colonialista continuó con el

objeto de impulsar la acumulación originaria europea, transfiriendo con ello las decadentes instituciones feudales y las primeras expresiones de un naciente capitalismo.

En la época del surgimiento del sistema capitalista, el poder soberano da vida y definición a las naciones europeas que comienzan a unificarse en un movimiento que desemboca en el estado absoluto y el sistema colonial. En América Latina la acción es violenta y depredadora hasta llegar a destruir las culturas precolombinas. Pero el expansionismo español no se consolidó, pues en España no se dio un desarrollo capitalista y con él un desarrollo de su mercado interno. Las barreras aduanales y la ausencia de vías de comunicación interciudades limitaron el comercio interno.

La nobleza feudal se hizo dominante luego de un largo proceso que culmina con las batallas de Villalar (23 de abril de 1521) y, posteriormente, en "Los comuneros de Castilla" y "Las hermandades de Valencia"(20), donde vencen definitivamente los grandes de Castilla y el Imperio de Carlos V a la burguesía española. Tal nobleza explotaba a la servidumbre campesina, combatía el desarrollo industrial y reprimía incluso las ideas de la ilustración.

Debemos remarcar que el descubrimiento y la colonización de América fueron apoyados por los complejos procesos económicos sociales que se operaban en Europa. Empero, para América significó la suspensión del desarrollo

(20) Rodolfo Puiggrós, De la Colonia a la Revolución, Buenos Aires.

de las fuerzas productivas y la postración económica y social.

Las mercancías que comerciaba España provenían de los Países Bajos, lo cual repercutía en un rápido desarrollo del capitalismo en otros países europeos. Mientras, el reino de España -cuyo expansionismo feudal-mercantil llegó a su crisis insuperable para un sistema y una clase en decadencia- sólo logró, bajo esas circunstancias, acumular riqueza, una producción en gran escala y crear las condiciones para expandir el capital en Europa, de forma tal que contribuía en un mayor flujo de mercancías y en la expansión de los medios de pago. Pero a medida que aumentaba la demanda del mercado mundial, se trató de elevar el excedente con mayores exacciones. Las colonias, por tanto, producirán lo que necesitan los países centrales para su acumulación y desarrollo bajo una organización social que les permite obtener una máxima utilidad: mediante esclavos y otras formas basadas en dependencia y coerción personal.

Instituciones como la encomienda, la mita, el yanaconazgo, y en general la actividad agropecuaria, se explican por su importancia para el sostenimiento de la actividad minera. La organización económica y social incaica construida para la generación de un excedente que se destina a la nobleza, se modifica. Se rompe la articulación espacial y económica anterior y se establece un sistema radial de intercambio mercantil.

La sede geográfica de poder se desplaza hacia la costa, cuyos centros regionales cumplen el papel de intermediarios en la nueva forma de conducción del excedente, cuyo destino inmediato es la metrópoli española a través del monopolio entre puertos determinados. La propiedad territorial y la riqueza del suelo y subsuelo se trasladan de golpe al poder imperial del reino de Castilla y de León: la explotación minera del subsuelo, el latifundio feudal, la comunidad, el sistema parcelario y la propiedad de la iglesia.

La población aborígen se repartió bajo formas feudales como la encomienda y la mita. Surge la división y distribución servil de la fuerza de trabajo en un proceso de reacondicionamiento para el despojo y la explotación generalizada.

El carácter monopólico del comercio exterior -dentro de un esquema típicamente colonial- liquida sistemáticamente todo proceso productivo autónomo capaz de competir con la metrópoli. La burocracia administrativa y judicial, la iglesia y el comercio portuario, -reservados a españoles residentes y sin vínculos con los medios de producción del interior y cuidadosamente separados de los grupos de productores locales-, configuran la capa dominante de la sociedad colonial peruana de esa etapa.

La política colonial de los señores feudales y mercaderes europeos se caracterizó por el monopolio de puertos y del comercio entre oriente y occidente, la

conquista y el pillaje de países enteros, la dilapidación de la riqueza de esos países y la explotación feudal-esclavista de la población local.

La acumulación no contribuyó al desarrollo de las relaciones capitalistas en los países dominados. Por el contrario, condujo a un retroceso económico y cultural: el curso del desarrollo independiente de los pueblos sometidos fue perturbado por la violencia y empujado a un franco retroceso.

El capitalismo europeo, en su desarrollo, se interesa por la máxima acumulación monetaria posible, para lo cual incrementa la producción y la productividad. Tal situación funda la necesidad de una política de expansión del mercado internacional y se manifiesta, por un lado, en la búsqueda de una balanza comercial favorable; y, por el otro, en construcción de un Estado protector de la industrialización que incrementa la expansión industrial.

España, que había liquidado los iniciales brotes de una burguesía industrial con la expulsión de los moros y la represión de los judíos -más tarde inclusive los brotes de una burguesía jesuita-, se enfrenta desarmada a la nueva situación. Una consecuencia será la permanente inflación. En el campo internacional, se resquebraja el monopolio comercial con sus colonias. El oro y la plata de las colonias, por este doble camino, continúa siendo parte de la acumulación de los países europeos en vías de

industrialización.

A mediados del siglo XVIII la crisis se agrava sensiblemente, declina aún más la producción de metales preciosos y se deteriora el aparato político administrativo.

El excedente agropecuario, al no poder ser monetizado, cambia de significación. Al desaparecer el mercado de productos agropacuarios, el excedente económico es empleado localmente. Esta situación genera unidades de producción en cierta medida cerradas y la refeudalización del campo. La consecuencia es la creación de nuevos virreynatos y una relación más fuerte de las colonias del Atlántico con Inglaterra. La aparición de la renta diferencial agropecuaria en Argentina, como producto de un proceso de capitalización del agro, y la invasión napoleónica a España constituyen la estructura y la coyuntura de la independencia política de este país que asume la vanguardia en la independencia. Al llegar la independencia del Perú, -como exigencia externa- éste enfrentaba una crisis derivada de la ruptura con su vínculo al sistema económico internacional. La minería de oro y plata atraviesa su peor momento y existe un vacío político-administrativo producto de la salida de los españoles. Lo más importante es, sin embargo, la ausencia de una burguesía nacional: la política metropolitana de monopolio dentro de un sistema económico "subdesarrollante" anuló tal posibilidad. A esto se agrega el pobre transporte

marítimo y la topografía, que impidieron un rápido contacto con Inglaterra.

Roto el vínculo externo fundamental, la minería en crisis y quebrado el circuito comercial establecido por la metrópoli, la economía se contrajo a los mercados locales, sin tener, por lo tanto, alicientes para un incremento intensivo de la producción.

De este modo las relaciones de dominación, permitieron al mismo tiempo que se afianzaba la feudalidad, la penetración del capitalismo inglés para dar origen a un proceso de dependencia y semicolonialidad desde mediados del siglo pasado.

Se instaure un Estado reaccionario que, propuesto como arma ideológica de lucha frente a España, al terminar la campaña militar muestra su orfandad de contenido. Su base formalmente liberal, igualitaria e individualista, contrasta con la forma como se financia su funcionamiento. Es éste un Estado perteneciente a la aristocracia terateniente y usurera.

El movimiento popular y sus luchas fueron capitalizados, después de la independencia, por los caudillos militares para turnarse en el gobierno.

La actividad estatal -vía tributos y fuente para un enriquecimiento rápido- y el carácter redentor del ejército explican la permanente ruptura de esta pesada república formal y el poder del caudillismo. Con fines de

lucro y poder promueven la formación de más y mayores latifundios y la entrega del país al capitalismo inglés.

El desarrollo del comercio -vía intermediarios de Inglaterra- y el endeudamiento a través de préstamos gubernamentales darán fisonomía a la nueva dependencia semicolonial. (sirva de ejemplo el empréstito contraído por Bolívar, en Londres, en 1823 por la cantidad de seis millones de pesos.)

b). La libre concurrencia y el semicolonialismo inglés.

A partir de 1840 el Perú reingresa al mercado internacional. En ese periodo el producto en turno es el guano, importante por el proceso de desarrollo de una agricultura capitalista en países hegemónico.

La independencia política no cambia la situación. Es más, en muchos casos se declara explícitamente la libertad de comercio, lo cual arruina o detiene el surgimiento de manufacturas nacionales imposibilitadas de competir con las de origen inglés.

La vinculación y la subordinación económica que surgen con las potencias europeas, en especial Inglaterra, mantienen y acentúan la división internacional del trabajo que históricamente se ha generado y que asigna el papel de productores de materias primas y mercado para las manufacturas. Esta división del trabajo real, como es lógico recibe el manto protector de una teoría económica que

la justifica: la teoría de las ventajas comparativas.

Dadas las características del sector económico interno, fundamentalmente agrícola, las clases dominantes no pudieron asumir el papel dinamizador del sistema (limitaciones estructurales). De allí que el elemento realmente dinamizante sean las exportaciones, fundamentalmente desde la segunda mitad del siglo XIX. Esto ha llevado a economistas e historiadores a calificar tal periodo de desarrollo hacia afuera. En él la economía se centra en el sector exportador, que a su vez genera las divisas que permiten realizar las importaciones. Ello, a su vez, da lugar a la constitución de un tipo de demanda que, en primer lugar, tiene que ver con la estructura de distribución del ingreso, que sabemos es concentrada. Y, en segundo término, la posibilidad de importar determinando una estructura de demanda interna que no responde a la realidad productiva del país. No es raro, entonces encontrar que se consuman bienes que corresponden a un estado superior de desarrollo, pero que pueden ser adquiridos por los grupos de mayores ingresos debido a la concentración de éste.

Sin embargo, una economía cuya dinámica descansa en la demanda externa, y por lo tanto en el nivel de actividad de los países desarrollados, está expuesta a las fluctuaciones económicas que en estos países se produzcan. Así, las crisis económicas generadas en los centros desarrollados repercuten en forma violenta sobre el país, en primer lugar disminuyendo la demanda de productos y, en

segundo, y como consecuencia de lo anterior, imposibilitando mayor demanda por falta de divisas.

Se ha generado, a esta altura del proceso, un tipo de acumulación semicolonial que no está todavía internalizado. Lo imprescindible dentro de lo que se importa son los bienes de capital para el sector exportador y para el sector interno, que no son significativos dado el escaso desarrollo: Sin embargo la fluctuación de las exportaciones de oro, plata y caña de azúcar entre 1830-1840 y después el guano y el salitre no tendrían repercusiones tan seria como para frenar las posibilidades de invertir y reponer los bienes de producción. Lo que se afecta, en forma significativa, es el consumo de bienes duraderos, aunque no en el nivel de actividad económica interna, salvo tal vez la actividad de comercialización de los bienes importados.

El centro hegemónico se desplaza a Inglaterra, país donde madura el capitalismo y ocurren profundas transformaciones en la industria y la tecnología. El poderoso movimiento de expansión del mercado termina incorporando grandes regiones al proceso de reproducción ampliada, del capitalismo inglés. Se implanta así de acuerdo a las necesidades de los centros donde se desarrollo una industria maquinizada, una nueva división internacional del trabajo.

La metrópoli inglesa rearticula, mediante el

flujo de capitales y pasando por el de mercancías, la economía del país adecuándola a sus necesidades de materia prima y alimentos, tanto bajo la forma de medios de subsistencia de origen agropecuario como de materias primas industriales; y contribuye de esta manera, en algunos casos, a que la acumulación pase de una base en la plusvalía absoluta a otra en la plusvalía relativa, o sea, convierte el fondo necesario de consumo obrero en un fondo de acumulación de capital, al decir de Marx. Al respecto, Ruy Mauro Marini escribe: "En la economía exportadora latinoamericana, las cosas se dan de otra manera. Como la circulación se separa de la producción y se efectúa básicamente en el ámbito del mercado externo, el consumo individual del trabajador no interfiere en la realización del producto, aunque sí determine la cuota de plusvalía" (21).

Este periodo debía conducir al capitalismo de concurrencia y el libre cambio, pero los nuevos conquistadores extranjeros adaptaron las relaciones feudales de las colonias y los países dependientes a las necesidades de la explotación colonial; se esforzaron por afirmar estas relaciones en el agro, en el dominio de la organización política, de la ideología y de las costumbres.

La colonización estaba interesada en que la explotación campesina de las colonias produjese más para el mercado; en cambio frenó, con todas las medidas, la

(21) Ruy Mauro Marini, "Dialéctica de la Dependencia", en Sociedad y Desarrollo, núm. 1, Santiago de Chile, p. 50.

transformación de la explotación mercantil en explotación capitalista, haciendo fluir los excedentes por un mecanismo estrictamente económico a través del comercio.

La explotación campesina fue proyectada al mercado mundial, pero el campesino no por eso se convirtió en un productor libre: siguió dependiendo de los grandes terratenientes y continuó sometido a las cadenas de la usura. En esta división internacional del trabajo se da una articulación externa que desarticula a los países de América Latina y a las regiones en cada país.

El reforzamiento de la explotación feudal de los campesinos, la ruina del artesanado, de la industria familiar y de las manufacturas en decadencia como resultado de la importación masiva de artículos industriales de Europa y de América del Norte, produjeron una crisis profunda en la economía de nuestros países. En tanto, la demanda extraordinaria del guano en los países industrializados encuentra al gobierno peruano en turno sin administración adecuada para tomar el negocio bajo su control. En toda la sociedad no hubo, dentro de la clase dominante, una burguesía que intentara tomar su control.

El resultado fue la entrega de la explotación del guano a concesionarios extranjeros mientras las finanzas públicas descansaban sobre este producto; los concesionarios paulatinamente empezaron a controlar el movimiento económico del país, para contribuir así a que rápidamente se

instituyera la dependencia de Inglaterra. Uno de los niveles de esta subordinación lo constituye el desarrollo de una capa oligarquica en la clase dominante, diferenciación que se da por la distribución desigual de la renta del guano. A través de esta medida un grupo de familias de la oligarquía terrateniente incrementa rápidamente su riqueza y su poder. Tal sector nace con un carácter mediador, no sólo por su origen sino por el uso del capital, que sirvió para ampliar el comercio internacional en la importación de bienes suntuarios, la usura y las finanzas públicas y la formación de bancos en alianza con el capital extranjero.

Aquí se puede considerar también la conversión de la deuda interna en externa (*), para asegurar sus reservas en el exterior. A pesar de esto se dieron inversiones productivas como son los casos del algodón y el azúcar, orientadas al mercado exterior y financiadas por el guano.

En 1819, con el contrato Grace, se acentúa el ritmo de desarrollo de la producción de tipo capitalista semicolonial con la entrega de los transportes marítimos, incluidos los terrestres, el guano, las minas de cinabrio de Huancavelica, así como el carbón y el petróleo; el libre derecho de importación y exportación, la colonización de la selva y el control del comercio exterior. Es así como se establece en el Perú el semicolonialismo. Lenin, al referirse a un Estado como el nuestro de aquella época,

(*) Aludimos a las deudas por compensación o resarcimiento a los criollos por causales de diversa índole derivadas del proceso de la independencia, los costos de la liberación de esclavos, empréstitos de los consignatarios del guano pagados con otros foráneos, especulación bancaria y fuga de capitales.

dice "En cuanto a los Estados semicoloniales, nos dan un ejemplo de las formas de transición que hallamos en todas las esferas de la naturaleza y la sociedad."

El capital financiero es una fuerza tan considerable, tan decisiva en todas las relaciones económicas e internacionales, que es capaz de subordinar, y en efecto subordina, incluso a los Estados que gozan de la independencia política más completa, como lo veremos a continuación. Se comprende, sin embargo, que la subordinación más beneficiosa y más cómoda para el capital financiero sea aquella que trae aparejada la pérdida total de la independencia política de los países y de los pueblos sometidos. "Los países semicoloniales son típicos, en este sentido, como 'caso intermedio'. Se comprende, pues, que la lucha en torno a esos países semidependientes haya tenido que exacerbarse sobre todo en la época del capital financiero, cuando el resto del mundo se hallaba ya repartido" (22) Las semicolonias son formas de transición hacia la dominación total por el capital financiero, por tal hecho son disputadas.

En esta etapa se organizan las primeras industrias y aparece un proletariado industrial, surgen entidades bancarias que financian a los grandes comerciantes y a los terratenientes, los cuales, al mismo tiempo, y en alianza con el imperialismo, dominan las finanzas. Esta fase está dominada por preocupaciones importantes: el máximo

(22) V.I.Lenin, Imperialismo, fase superior del capitalismo, en Obras escogidas, Moscú, 1969, p.232.

aprovechamiento de las oportunidades creadas por la libertad de comercio, lo que llevaría a ligar las producciones primarias con Inlaterra, y un débil intento de diversificar la estructura productiva con participación del Estado; orientaciones contradictorias que conforman la base de posteriores divorcios. Es el caso de Pardo: promoción de la libertad de comercio y proteccionismo, ideología liberal e intervención estatal. Con esta propuesta, el dominio final correspondería a las fuerzas vinculadas al comercio externo de materias primas.

Este fenómeno se explica por el extraordinario desarrollo del sector primario exportador, que da lugar al desarrollo de una burguesía intermediaria, ligada a la actividad financiero-comercial del sector externo, y, también, a las condiciones poco propicias para una diversificación industrial que presenta el mercado interno (la población agrícola es casi el 90%, en condiciones serviles), así como a los bajos niveles de producción y concentración del ingreso.

Los expedientes proteccionistas fueron eventuales y vacilantes; no afectaron las relaciones de dependencia. Para el mercado existente, de consumo "aristocrático", no había industria que pudiese satisfacerlo.

La Guerra del Pacífico (1879-1883), en la que Chile, con el apoyo inglés, derrotó a Perú y Bolivia consiguiendo no sólo el control del guano, el salitre y

territorios de estos dos países, sino una hecatombe cuya trascendencia viene trasponiendo el siglo XX. Las consecuencias de la derrota abarcaron todo el sistema. La economía, las clases sociales y el Estado debieron reconstituirse. Basadre elabora un patético retrato: "al empezar el periodo de la reconstrucción y durante varios años la miseria privada y pública fue grande. Hasta familias de la aristocracia solían pasar hambre... Hacia 1889, en Lima no transitaban sino cinco coches particulares y noventa conches de plaza estilo coupé. Considerábase que había quedado sólo cuatro millonarios... La pobreza de las masas llegaba a lo espantoso. La capital, con una población de 80,000 habitantes, tenía una mortalidad de 43 por mil (Jorge Basadre, Historia de la república del Perú, t. IX, p. 38-39).

El siguiente periodo -fines del XIX a la primera guerra mundial- es la primacia de la política del "laissez faire"; es el auge del liberalismo, que no logra acabar con el proteccionismo estatal, mostrando la germinación de centros fabriles para producir cera, bebidas alimentos; tal actividad está asociada a la urbanización que trajo la actividad exportadora y la diferenciación social.

Estos fenómenos se dan en un contexto internacional en el que se acortan las distancias y aumenta el intercambio con los Estados Unidos y Europa por el canal de Panamá; el sistema de libre competencia es sustituido por

el de los monopolios: aparece el imperialismo y con él la exportación de capitales toma el carácter dominante en la penetración económica. La economía imperialista mundial se va configurando como complejo único de producción e intercambio, derivando su cohesión de la internacionalización del capital. La estructura económica de Perú queda configurada por fuerzas externas, donde el imperialismo aparece como elemento interno, sometiendo la producción a las normas mundiales y buscando depender su impulso de las inyecciones de capital foráneo.

La primera guerra mundial -guerra interimperialista por el reparto del mundo en esferas de influencia- repercute en el Perú con el desplazamiento paulatino del capitalismo inglés por el norteamericano. De semicolonía inglesa se convierte en semicolonía norteamericana. Se amplía la confiscación del trabajo excedente a través del mecanismo de los precios diferenciales en el mercado mundial; mientras, la inversión en la industria conduce a una nueva forma de apropiación del excedente: la plusvalía. Es decir, la división internacional de la producción parte tempranamente en el sistema capitalista, pero su cristalización se acelera a medida que en las metrópolis se incrementa la producción industrial y la productividad. Se acrecenta, en consecuencia, la distancia entre países imperialistas y dependientes. Tal situación se agudiza aún más por la

sustitución de materias primas tradicionales y el incremento de importaciones de los países dependientes. Esto implicará un desequilibrio en las cuentas con el exterior.

La primera guerra mundial afecta la economía peruana a través de la extraordinaria demanda de productos primarios y la dificultad en la sustitución de importaciones. La depresión del capitalismo de 1929 impresionó al provocar un decaimiento del comercio internacional. Ideológicamente, el modelo de crecimiento hacia afuera funciona hasta los años cincuenta al ser sucesivamente derrotados los proyectos reformistas por la coalición oligarquía exportadora-ejército (Benavides, Prado, Odría).

En el siguiente capítulo examinaremos los reajustes neocoloniales al semicolonialismo y la crisis del modelo de acumulación.

Con el neocolonialismo de la primera posguerra cada vez más las formaciones nacionales quedan insertas en el sistema capitalista internacional. El Perú queda arraigado en él como estructura de integración subordinada y funciona respondiendo a los requisitos del centro de acumulación imperialista. La lógica de la acumulación y dominación imperialista inscribe la economía y la política de Perú, haciéndose cada vez más difícil salir de este marco sino es con graves consecuencias.

2.- Los procesos constitutivos de la sociedad.

En las fases de desarrollo de la sociedad se viven procesos históricos constitutivos de grandes contradicciones que se presentan como agregados parciales de relaciones conflictivas de distinta intensidad en la estructura y la superestructura, alterando la trama de relaciones sociales, modificando las esenciales y afectando al sistema político en un proceso que impeña al conjunto de la sociedad. Este instrumento descriptivo también alude a importantes transformaciones sociales que continúan en el presente.

En nuestra historia encontramos por lo menos una docena de procesos constitutivos que aún coexisten:

1. La violencia en la historia, la conquista y resistencia indígena.
2. Mestizaje interétnico como nueva base potencial de la nación.
3. Genocidio y etnocidio antiindígena.
4. Economía de exportación.
5. Creación de las dos repúblicas, una de blancos y otra de indios en una unidad contradictoria.
6. Sociedad andina feudal colonial.
7. El problema nacional expresado, en lo político-social, en los linajes de curacas y, en lo económico, en la comunidad agraria campesina y la artesanía.
8. Constitución de un ficticio Estado

criollo-oligárquico excluyente y racista.

9. Establecimiento de la forma semicolonial del Estado, con predominio de las FFAA y la fuerza.

10. Inicio de una nueva forma de dominación neocolonial norteamericana, del desarrollo industrial, de la burguesía y del proletariado. La lucha obrera no corresponde en el tiempo ni en el espacio, ni táctica o estratégicamente con las luchas campesinas.

11. Incorporación de las clases medias a la vida política oligárquica, a través de dos opciones: la violencia y el sufragio; la primera para destruir al Estado y la otra para modernizarlo.

12. Ultimo momento de la industrialización, crisis del patrón de acumulación. Andinización creciente del país y ascenso del movimiento de masas. Institucionalización de las FFAA y ampliación de su dominio en extensión y profundidad, pugna en el sistema político respecto al predominio del consenso o la fuerza en la dirección política. Polarización de las fuerzas político-institucionales.

Explicaremos brevemente cada uno de estos procesos constitutivos:

1. Si violentas fueron la conquista y los

procesos coloniales, la reacción indígena estará marcada por el mismo signo.

La resistencia al invasor -derrotada luego de fracasado el proyecto de Atahualpa- estuvo bajo la dirección de Chalcuchimac y Quisquis. Continúa Manco Inca, que después de una pasajera alianza con los españoles se sublevó en 1536, sostiene una campaña de casi año y medio, que se tradujo enseguida en una resistencia ideológico cultural por más de 40 años y permitió el desarrollo del pensamiento mítico de la identidad y la resistencia.

Entre los años 1565-1570 se produce un movimiento indígena dirigido por los curacas de Ayacucho: el Taqui Oncoy. En el siglo XVI el virrey Toledo (1569-1582) destruye los linajes de los curacas, que en el siglo XVII se reconstituyen en la clandestinidad, así como las tradicionales autoridades, la cultura y las costumbres. Los curacas, a pesar de la persecución, seguirán gobernando ocultamente.

2. La constitución de la economía agraria andina en la colonia es fundamental, porque su descomposición y su desestructuración llegan hasta nuestros días, con su punto más alto en la década del setenta de nuestro siglo.

Al mismo tiempo el mestizaje interétnico en torno a los ejes de las culturas quechua y aymara, provocado por la instauración del dominio de la corona española, funda la nueva base nacional. Si bien algunas de las más de 40 étnias apoyaron la invasión española, no tuvieron el mismo

comportamiento con la colonización, que más bien las unifica fundamentalmente en torno a aquellas dos nacionalidades.

3. Si la primera característica del Estado colonial fué el genocidio, después será reemplazada por un sistemático etnocidio (análogos a la fuerza y la hegemonía de Gramsci). La población andina que bordeaba los 15 millones en 1525, no pasaba del millón y medio en 1571 con Toledo (Aranibar, Dobyms, Lipschutz). Según Noble Cook, la población en 1530 era de 2 738 673 habitantes y en 1630 de 601 645.

Para explicar el genocidio poco importa, sin embargo, si la reducción fue del 10 o el 22% (23) Las causas de tal mortandad fueron las epidemias, la dieta y la destrucción cultural, pero principalmente, junto a las nuevas enfermedades, la explotación (mita), los abusos y las acciones bélicas.

El etnocidio o desestructuración cultural (24) significó: 1). el desplazamiento de la unidad básica de la familia andina -al desarraigarlos de la tierra- y del ayllu; 2) forzamiento de desplazamientos masivos en función de la economía colonial, y 3). fractura de la cohesión ideológica y cierre del acceso a la lengua y la técnica. Hechos, sin duda, también violentos.

(23) Noble Cook, "La población indígena en el Perú colonial" en América Colonial, Anuario del IIH, Rosario, 1965; C. Aranibar, El Señorío de los Incas, IEP, Lima, 1967; B. Dobyms, "An outline of Andean epidemic History to 1720", Boletín de historia de la medicina, 1963; Lipschutz, El problema racial en la conquista de América, siglo XXI, Editores, México.
 (24) Natan Watchel, Los vencidos, Alianza Univers., Madrid 1971.

4. El feudalismo colonial con epicentro en la sierra fué predominantemente minero y sentó las bases del Perú como país productor de materias primas e importador de bienes manufacturados. Su montaje nació con la apropiación de tierra, la fuerza laboral y la fundación de las primeras ciudades. Esto requirió la afinación de la máquina de control. Manuel Burga distingue el momento del oro (1503-1550), de la plata (1550-1650) y de la hacienda, que comienza en 1590 con la primera visita y composición de tierras y se desarrolla al compás de la declinación de la minería en el siglo XVIII (25).

5. En el siglo XVI, las reducciones terminan de articular -superadas las contradicciones entre encomenderos y la corona española, germen del problema colonial- la red campesina de pueblos, o comunidades de indios, supeditada al aparato civil-religioso español.

Al lado de la mita y la tributación subsisten la propiedad colectiva, los usos consuetudinarios del pueblo, las formas de cooperación, la cultura, que preservan la identidad indígena al amparo de la legislación tutelar a pesar de todos sus límites. Conviven las "dos repúblicas" como dos mundos separados y unidos a la vez: indios-criollos, ciudad-campo, hacienda-comunidad, con sus propias ideologías, concepciones y valores.

(25) Manuel Burga, La sociedad colonial, (1580-1780), Mosca Azul, Lima, 1977.

La riqueza y la vitalidad asombrosas de la cultura andina, junto a la discriminación colonial, contribuyen a la existencia de valores autóctonos adaptados y siempre recreados que se expresan en la lengua, el arte, las formas de trabajo, la solidaridad, los cultos, los mitos redencionistas, la tecnología, etc.

Mientras los esclavos negros fueron fácilmente incorporados a la organización estamental, los mestizos e indios conformaron una grieta permanente en la aparente tranquilidad de las dos repúblicas.

6. En el siglo XVII se puede apreciar la acción disolvente de los factores de disgregación social como el derecho predial de la conquista (26), reducciones, encomiendas, repartimientos, mita, apropiación de tierras y el ingreso forzado del indígena al mercado (que destruyó las relaciones de producción).

El factor demográfico y cultural (genocidio, extirpación de idolatrias, evangelización, uso colonial de las lenguas) no pudo ser contrapesada por las fuerzas de cohesión y la sociedad andina se transformó en feudal-colonial de base campesina; siervos, mitayos y jornaleros coinciden y se identifican por la explotación servil indígena y la opresión colonial.

7. En el siglo XVIII se producen crisis y rebeliones indígenas frente a la diversificación económica y el mayor control de excedente de las colonias.

(26) Sinesio López, De imperio a nacionalidades Oprimidas, Mosca Azul, Lima, 1977.

Entre 1651 y 1739, sólo el 20% de la renta iba a España mientras el 30% se invertía en defensa y el 50% en la administración interna.

Los Borbones optan por la modernización de España en momentos que en América entra en crisis la hacienda laica y crece la población indígena. La eliminación del monopolio de Cádiz y Sevilla y el establecimiento del libre comercio (sólo con otros puertos españoles) determinaron una contradicción que hasta hoy persiste entre industriales (obrajeros) y exportadores.

Los corregidores temían perder sus privilegios, los criollos aumentaban el tributo y las masas indígenas veían incrementadas sus cargas feudales.

En este siglo las sublevaciones indígenas recorren cuatro ciclos: (27)

a) En 1737 se levantan los caciques del sur.

b) Entre 1742-1755 Juan Santos Atahualpa, curaca del Gran Pajonal, a pesar de su reducida influencia espacial (Jauja-Tarma) tiene una larga duración. Le siguen revueltas, motines, incendios de haciendas y muerte de corregidores.

c). Carlos III decreta un reajuste de cargas fiscales y es el detonante de la rebelión de Tupac Amaru y los hermanos Catari (1780-1781). Movimiento masivo, amplio,

(27) E. Rowe, The Incas under spanish colonial institutions, 1957.

políticamente intenso y militarmente catastrófico, en donde se dice que asesinaron a más de 100 000 campesinos. Era un movimiento nacional-indígena de las masas indígenas dirigido por caciques. Los criollos se replegaron.

d). Entre 1812-1814 se articula la alianza de indígenas y mestizos, Pumacachua y los hermanos Angulo fueron derrotados. En el siglo XVIII hubo más de cien levantamientos indígenas. (27a)

Hay que destacar que después de la rebelión de Tupac Amaru se intenta destruir linajes con cierto éxito y se produce una forma de vacío de poder. De este modo desaparecen los jefes naturales y aparecen los varayocs que, representando el consenso, constituyen la contraparte del fundamento de la autoridad política central: la violencia. Sin embargo, los varayocs mantienen la identidad étnica y pueden ser un factor de cambio, a pesar de los intentos de institucionalizarlos.

8. En el siglo XIX, sobre la derrota de los movimientos indígenas se levantó el frágil movimiento nacional criollo: urbano, ambiguo, elitista, minoritario y aristocratizante (en aquel momento el 57% de la población era indígena, el 27 % mestiza, el 11% blanca y el 5% negra y mulata. Los intereses de la comunidad indígena y de la gente de castas (negros-mulatos) quedaron fuera. La élite criolla de provincias -mineros, agricultores y comerciantes- apoyó la independencia.

La república se constituye de acuerdo con el esquema tradicional: aristocracia de la tierra (feudal y regionalista), la burguesía comercial, militares e intelectuales, y tras ellos la masa no ciudadana (indios, mestizos y negros). No se plantea un proyecto nacional, aunque sí uno liberal que da origen a nuevos terratenientes y pequeños propietarios, a costa de la desprotección de la comunidad. (Cuando el latifundio no crece, la comunidad también se resquebraja. Bolívar pretendía destruir la autoridad tradicional, los curacazgos y las propiedades caciquiles.)

Se refuerza la separación de las repúblicas, los gamonales (*) reemplazan a los caciques en la intermediación, aparecen los alcaldes o envarados y se prepara el camino para que los criollos se definan como intermediarios ante Inglaterra.

Un proyecto alternativo será de un sector mestizo que propone un Estado multiétnico: la confederación Perú-Bolivia.

9. La fragilidad económica del país, el desorden, la anarquía social y política, y la debilidad administrativa favorecen la expansión británica apoyada por la nueva aristocracia criolla. Entre 1830-1840 los metales preciosos, el oro y la plata, eran las principales

(*) Esta categoría expresa las distintas esferas del poder señorial concentrados en torno al terrateniente. Gamonal: planta parásita andina.

exportaciones. La artesanía se arruinaba. Desde 1840 hasta 1879 el guano es la principal exportación, que pasa del 5% en 1846 a un 80% entre 1869-1875 en los ingresos fiscales. Estos sirven para expandir la burocracia civil y militar del nuevo Estado (53.5%), y para el pago de deudas (19%); el 20% se destina a los ferrocarriles, que facilitan las exportaciones.

En esta economía el gasto era improductivo por ser semicolonial, mientras el gasto productivo se hacía en las haciendas del norte. Esto define la economía de este siglo, así como el militarismo la política.

Hasta 1872, el ejército dirige al Estado. Es un ejército conservador, autoritario y aristocrático. Está fragmentado y se articula a partir de personalidades (carisma). Aunque por problemas fronterizos recibe lo principal de los gastos fiscales, no puede estabilizar al país. Entre 1829-1833, Gamarra combatió catorce subversiones, y entre 1838-1845 se dieron once cambios violentos de gobierno.

10. En 1871 se inicia la construcción del Estado oligárquico con base civil y partidaria. Se constituye el partido civil por la naciente oligarquía; el capital mercantil, el financiero y el agrario se hacen políticos en un largo proceso de 50 años. Al inicio lo hace en circunstancias de crisis y endeudamiento estatal, que concluye en la guerra del Pacífico.

El contrato Grace (1877) establece que el Estado cede la administración de los recursos naturales a cambio de la condonación de la deuda. Desde 1885 hasta 1895 la explotación y la exportación de plata, azúcar y caucho posibilitan un incipiente desarrollo industrial.

Se dice que en 1894 se consolida el Estado moderno con Pierola. Lo que es totalmente discutible. Entre 1900 y 1920, el azúcar, el algodón, el caucho y las lanas son los productos que agregan más del 50% del valor de las exportaciones. En estos años, paralelamente a la dinamización mercantil, la oligarquía logra dar dimensión nacional a su poder político y el capital estadounidense se hace mayoritario (28).

Hacia 1910-1924 se dan los inicios de la lucha obrera. En 1913 se forma la Federación Obrera Regional Peruana, como primer intento de centralización sindical. Entre 1910-1919 tiene lugar la lucha por la jornada de ocho horas. En 1911 se produce el primer paro general. El 15 de enero de 1919 se da el decreto que reconoce las ocho horas (29).

11. El periodo 1919-1956 es el que corresponde a la primera etapa de la sustitución de importaciones o industrialización, cuando aún predomina el campo sobre la ciudad. En el campo, aunque continúa la expansión de la

(28) H. Bonilla, Estudios sobre la formación del sistema agrario peruano, PUC mimeo, Lima, 197.

(29) D. Sulmont, El movimiento obrero en el Perú, PUC, 1975.

hacienda, la mayoría ya ha definido linderos después de un siglo de refeudalización andina.

La respuesta campesina es aislada hasta que se constituye el Comité Pro-derecho indígena Tahuantisuyo que impulsa y coordina la resistencia, que se desarrolla con visos populistas, anarquistas y milenaristas, y despierta la simpatía de escasos sectores mestizos y pequeño burgueses.

El 4 de junio de 1919, con el apoyo del capital financiero norteamericano y sectores medios que irrumpen violentamente en escena política, Leguía llega al gobierno e inunda el país de circulante externo. Esto ocurre por el inconsistente o incoherente desarrollo de los aparatos del Estado, las tendencias civilistas que aunque confluyen y se unifican en torno al liberalismo, se bifurcan ante la participación política (sólo el 5% votaba en 1884 con Pierola) y el papel del capital extranjero en el desarrollo del país, que en esos años tenía en sus manos el crecimiento económico.

La fase oligárquica provocará cuatro procesos importantes:

a) La escisión del contingente criollo mestizo en oligarquía antinacional y democrático popular nacional.

b) La diferenciación entre opresión semicolonial y la opresión de las nacionalidades.

c) El predominio de la costa sobre la sierra.

d) La identificación del problema nacional (indígena) con el problema agrario y campesino (30).

(30) Sinesio López, op. cit.

Con el oncenio de Leguía nacen la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) (1924-1931) y el Partido Comunista (PC) (1928-1930), que desplazan al anarquismo. La política lograba cierta autonomía de la economía, que con el golpe de Sánchez Cerro aparece como una ilusión al mostrar la precariedad del cambio. En 1931 convoca a elecciones y derrota al APRA lo cual trae como epílogo la insurrección aprista de la Ciudad de Trujillo en 1931 y el asesinato de Sánchez en 1933.

Los tres años de represión sobre el PC y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) desmovilizan una década al movimiento obrero y tres al PC, mientras el APRA luchaba por el sufragio.

El APRA se infiltra en la jerarquía militar, único grupo social con capacidad de alterar los cambios políticos, promoviendo levantamientos que definan una convocatoria electoral; en su lugar consigue, sin embargo, el veto de las fuerzas armadas. En 1936 hay nuevas elecciones en las que se enfrentan Villarán (burgués oligárquico), Manuel Prado (oligarca financiero) y Eguiguren (burguesía media); inhabilitados el PC y el APRA, este último apoya a Eguiguren, quien gana las elecciones pero nunca es proclamado. Nueva convocatoria en 1939, en la que compiten José Quesada (oligarca agrario) y Manuel Prado, quien con el apoyo del PC y el APRA derrota al primero.

El PC adhirió al gobierno con el fin de apoyar

los esfuerzos de los "aliados" en su lucha contra el "eje", de acuerdo a las directrices de la III Internacional sobre los frentes antifascistas. Haya de la Torre pensó que la política norteamericana de buena vecindad desvinculaba al gobierno de los monopolios. La demanda de materias primas y las dificultades para importar favorecieron la sustitución de importaciones por los sectores burgueses de la oligarquía y los monopolios norteamericanos.

En 1944, el APRA y el PC crean la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP). El APRA, al conocer las aspiraciones de gobernar de Oscar Benavides, convoca a una huelga general que obligará a Prado a reconocer y permitir la participación del APRA y el PC; Beltrán actúa a través de La Prensa, ante el posible triunfo de Bustamante y el APRA. El triunfo de estas fuerzas significará tres años (1945-1948) de una política clientelar, coyuntural y casuística. Las bases apristas organizan en 1948 una acción revolucionaria, mientras el "Jefe" participaba en un complot con generales. Esta ambivalencia llevó al fracaso la insurrección de los marineros.

El 27 de octubre de 1948 se instaura el gobierno de "restauración nacional" del General Manuel A. Odria, que obliga a Haya de la Torre a exilarse hasta 1954. En ocho años de gobierno ejerce una fuerte represión, al tiempo que abría las puertas al capital extranjero. En Arequipa se dan dos movimientos (1950 y 1955) contra el excesivo

centralismo.

Todos estos procesos constituyen hitos significativos en el devenir histórico, que dan sentido a toda la historia posterior.

12. Este proceso abarca las últimas cuatro décadas y es el contenido de los próximos capítulos. En él la industrialización y la aceleración del intercambio mercantil se ven bloqueados por el carácter de la acumulación semicolonial y la resistencia terrateniente. Son las dos décadas previas al inicio de la lucha armada (1980). Las FFAA consiguen que el Estado sea más político que la sociedad urbana, pero el crecimiento de ésta es tal que no logra subordinarla y menos aún a la sociedad rural, donde en extensos espacios andinos las reformas dejan intactas las estructuras terratenientes. Así, la sociedad no es despojada de su carácter político ni se logra separar la unidad de lo público y lo privado. La conducta de la sociedad no llega a ser regulada por la institucionalidad. Nuevas fuerzas sociales en reestructuración constante se politizan y no admiten mediaciones.

X
X
X
X

II. EL ESTADO Y LA VIOLENCIA COMO POLITICA

Producida la conquista, el rey y la nobleza feudal española construyeron un orden estatal feudal, patrimonial, en Hispanoamérica.

A diferencia del Tawantinsuyo, la corona degradó y homogenizó el poder de los diversos grupos étnicos destruyendo los señoríos para construir un sistema de poder y dominación sobre los indígenas.

Cotler describe así aquella sociedad estamental:

"La delimitación de cada uno de estos estamentos sociales se encontraba asociada a fueros privativos y especiales obligaciones, que delineaban con buscada precisión los lugares donde podían residir, las ocupaciones que podían desempeñar, las imposiciones que debían pagar, los tribunales a que podían recurrir y el peso legal que debía tener el testimonio de españoles e indios, así como el tipo de vestimenta y accesorios que podían llevar, festividades que podían celebrar y medios de transporte que debían usar" (31).

Los mestizos indios y las castas de negros e indios forasteros eran simplemente despreciados. Estamentos, clases, étnias, son agrupaciones sociales que se entremezclaban y entraban en conflictos, principalmente las

(31) Julio Cotler, Clases, Estado y nación en el Perú, UNAM, México, 1984, pp. 30-31.

dominadas, explotadas y segregadas (indígenas, mestizo-indio y negro) contra el feudalismo colonial.

Con la república, al comenzar el siglo XIX, la complejidad social y económica, la reestructuración del ordenamiento económico, la ruptura con el Estado patrimonial -en donde las clases y estamentos dominantes jugaron un ambiguo papel- determinaron un proceso de privatización de poder y de la fuerza en las regiones, reproduciéndose así la dominación con relativa autonomía del Estado. Se construye un nuevo colonialismo regido por un caudillismo clientelar, personal y arbitrario; nuevos señoríos étnicos comandados por caciques criollos o blanco-mestizos.

Desde los inicios, la pugna entre los sectores dominantes se da entre quienes defienden el viejo sistema estamental, jerárquico, patrimonial y caudillista fundado en lealtades personales y corporativas, y quienes están por el poder público, universal, liberal y anticaciquil. Sin embargo, entre ambas fuerzas había un acuerdo básico acerca del sometimiento de la población indígena, de esclavos africanos y, después, de semiesclavos asiáticos.

La naciente burguesía y la oligarquía fueron en toda la república participes de una ideología aristocratizante y racista. Ello se deriva de que

"Cada vez es más amo el amo y más servil la condición del peón, del colono, del artesano, de

las capas populares en general... y la hacienda constituye el elemento básico a partir del cual se organiza poder social... y la étnia -y especialmente el color de la piel- sigue siendo como en el pasado, uno de los elementos determinantes para clasificar un individuo en tal o cual grupo subalterno" (32).

Al comenzar la segunda mitad del siglo XIX, un conjunto de factores impulsaron movimientos campesinos: la liberación del tributo indígena, el incremento de precios y el crecimiento de las haciendas. Esto vinculado al desorden y la arbitrariedad impuestos por los caciques y caudillos locales y regionales, a los problemas fiscal y financiero y a la contradicción entre tendencias burguesas y feudales.

Debelados los movimientos sociales por la fuerza, al Partido Civil le tocó popiciar la necesidad de orden e intentar la primera gran reestructuración estatal, como encarnación directa de la burguesía intermediaria. Lo hizo mediante la disolución de los ejércitos privados y la creación de la Guardia Nacional. Canceló concesiones privadas, afectó los órdenes privativos de la iglesia y eliminó prerrogativas a las oligarquías regionales.

Este proyecto de centralización estatal, que hacia del poder real universal elemento unificador, fracasó por la profundización de la crisis económica y después por la guerra del Pacífico.

(32) Marcelo Carmagnani, Estado y Sociedad en América Latina 1850-1930, Grijalbo, Barcelona, p. 67.

La devastación del país por el "holocausto" de esta guerra, obligó a la oligarquía a renacer reconstruyendo la economía. Los terratenientes y el gamonalismo (o caudillismo) restituyen las condiciones coloniales de explotación y la burguesía continuó con su propósito de incorporarse al mercado capitalista mundial, sin preocuparle su desarrollo subordinado al capital imperialista. Pocos son los industriales que reivindican, por breve lapso, intereses nacionales, que desaparecen al compás del ingreso de capitales foráneos. No existían suficientes capitales y el campesinado no podía ser obligado a proletarizarse. Más bien se adaptaban o transformaban para sí las relaciones precapitalistas. El restablecimiento económico significó para los terratenientes costeños producir para satisfacer las necesidades alimentarias; para los serranos, refeudalizar el campo.

La expansión latifundista y la mayor vinculación monetario-mercantil de las comunidades produjeron la violencia antifeudal y la diferenciación comunal, respectivamente. El campo queda sometido a la ciudad y al comercio, extendiéndose el colonialismo interno. Este proceso va aparejado de la semicolonización del país por los Estados Unidos de Norteamérica. El centralismo oligárquico y el auge de las oligarquías regionales se subordinan a la penetración del capital, que así morigeraba las contradicciones entre ambas tendencias convirtiéndolas en

clientela política.

De este modo se fueron constituyendo los sectores de la burguesía (la intermediaria y la burocrática), que se alimentaban del precapitalismo y prefiguraban a su vez un perfil nitidamente burgués al crear el proletariado.

La burguesía pugna por controlar al Ejecutivo y desarrollar una relación clientelar en el Parlamento otorgando presencia al gamonalismo. Empero la oligarquía no puede unificarse en la gestión del Poder político y ello da fuerza a los caudillos y al mismo tiempo la soberanía queda como retórica. En Los Andes no desaparece la autonomía política y en la costa se reduce a sus últimos límites.

Los espacios señoriales de las haciendas y los "enclaves" extranjeros tienen sus propias normas políticas, estamos "en presencia de un Estado puramente formal, con lo que la Constitución no es sino un acuerdo entre caballeros" (33).

El poder político se acrecienta en su forma institucional en la medida en que el campesinado siervo es separado de sus medios de producción. Sin embargo, para lograrlo será necesario derrotar el caudillismo militar del siglo XIX con sus peculiares formas de violencia y hacer del gamonalismo parte de un sistema político orgánico también violento.

Entre los años 1895-1919 tiene lugar el apogeo de la burguesía intermediaria, conocida también como oligarquía

(33) Carmagnani, op. cit., p.73.

comercial, financiera y terrateniente. Algunos han dominado tal periodo "La República Aristocrática", a un Estado central débil por la fragmentación regional, le corresponde un sobredimensionamiento gremial y frágiles partidos políticos. Dominan las oligarquías regionales orgánicas y económicamente más fuertes.

La diferenciación étnica y clasista, la heterogeneidad popular, sólo pueden ser unificadas por la violencia, el paternalismo y el racismo, bajo sus expresiones más definidas y espacialmente extensas: el Ejército y la Iglesia.

La oligarquía y -en general- las clases dominantes están imbuidas de violencia, etnocidio, religiosidad, ostentación, paternalismo, caballerosidad, racismo, y exigen respeto y sumisión.

Como contrapartida a estas formas de comportamiento, tradiciones, costumbres, idiosincracia, rigidez moral -reales y aparentes-, se desató una velada oposición. En Los Andes se imitaban estas formas de pensar y vivir, pero impregnadas de la cultura indígena que le daban un cariz caricaturesco (34).

El caudillismo gamonalista es despótico y patrimonial; está legitimado por la religión y la propia violencia.

Con Leguía (1919-1930), los conflictos intraoligárquicos entre la burguesía intermedia y la

(34) Véase en la literatura peruana a José Ma. Arguedas, Ciro Alegria y otros.

burocrática se hacen más ostensibles. El Ejecutivo apoyará a quienes modernicen el país: a la burguesía burocrática, que corresponde a la "transnacionalización de la economía" y a la industrialización. Leguía burocratiza e intercomunica parte del país, urbaniza e irriga áreas costeras. Es el gobierno de la costa sobre los Andes. Constituye el segundo intento de reestructuración estatal y logra el real monopolio de la violencia para el Estado. En ese sentido crea el Ministerio de Marina, la Escuela de Aviación, la primera Comandancia de la Guardia Civil y la Policía de Investigaciones. Leguía constituye un intento sistemático de la incorporación de nuestra economía al mercado mundial: es la consolidación del Estado semicolonial. Por un lado, centraliza la banca y la emisión monetaria a través del Banco Central de Reserva; por otra, las finanzas y la actividad productiva extractivo-exportadora, con la aduana y el presupuesto, son reclamadas por el capital extranjero.

Toda la modernización es asesorada y dirigida por la política estatal norteamericana. La formal autonomía política se cambia por la total sujeción económica. La oligarquía terrateniente-exportadora y el gamonalismo se organizan en "bloque" en defensa de sus intereses.

Leguía negocia con ellos obligándolos a subordinarse a su política administrativa y de control territorial sobre el conjunto del país. Igual que antes, la modernización del país fue precedida de una creciente

conflictividad entre los polos de la sociedad. Los obreros y campesinos se enfrentaban abiertamente a la oligarquía. Los cambios estatales favorecían así el desarrollo de las corrientes reformistas.

Los obreros, campesinos, intelectuales y otros sectores pequeñoburgueses, se incorporaban al combate social étnico-clasista en torno al problema nacional bajo los parámetros del marxismo y el nacionalismo burgués. Los movimientos campesinos se expresaban todavía como mesiánico-milenaristas y el movimiento obrero en el anarcosindicalismo.

De las inversiones agro-mineras y la mayor subordinación financiera de parte de la oligarquía nace la burguesía burocrática, enlazada a la burguesía intermediaria y -en las regiones- a comerciantes gamonales. La fusión de parte de la oligarquía con los monopolios provoca el conflicto con otros sectores sociales. La formalización jurídica de estos cambios en las relaciones de producción y en las clases sociales aparece en la carta constitucional de 1933 como ordenamiento demoliberal autocrático.

El exagerado liberalismo va acompañado de serias contradicciones, como el otorgamiento al ejecutivo de la facultad de suspender las garantías constitucionales e impedir que el APRA y el PC contiendan en las elecciones,

por formar parte de "organizaciones internacionales".

Se impone un sistema presidencialista-parlamentario que expresa la alianza de las clases dominantes. El Estado aún no es un poder universal de ciudadanos iguales ante la ley: es un instrumento directo de los intereses de estas alianzas.

Con el General Odría (1948-1956), después con el General Velasco (1968-1975) (35), se compureba que después de cada impulso al proceso de penetración del capital extranjero -y, con los cambios, en la correlación de fuerzas sociales- aparece la necesidad de reestructurar la relación social estatal.

El código de minería (1950), la ley de petróleo (1952), la ley de promoción industrial (1959), legalizan la presencia norteamericana en la economía y con ello promueven su mayor inserción. Algunas cifras lo demuestran: entre 1960-1966, el 80% del crecimiento industrial (9 %) correspondió al capital estadounidense; en 1966, el 34% de los empréstitos se destinó a los industriales; en 1963 el equivalente al 75% del gasto público sirvió como subsidio al capital extranjero y, en 1968, el 33% del valor de la producción industrial era controlado por 41 empresas extranjeras.

Se eternizaba la semicolonialidad.

En la segunda mitad de la década de los

(35) Laura Madalengoitia, "El Estado oligárquico y la transición hacia una nueva forma de Estado en el Perú" en Burguesía y Estado Liberal, Desco, Lima, 1979.

cincuenta, con la crisis terrateniente y el desarrollo capitalista se desencadena una nueva ola de violencia política subversiva que une a amplias masas populares. No concluye sino hasta una década después con el golpe de 1968, que pretende frenarla definitivamente.

La pérdida de legitimidad de las fracciones oligárquicas con los cambios económicos y el desenvolvimiento del movimiento campesino y obrero-popular, exige definiciones en los partidos.

El APRA opta por la defensa del sistema aliándose a la oligarquía, y no quedan otras fuerzas políticas que adecuen el Estado a la trasnacionalización de la economía. Lo hacen las FF.AA. El gobierno militar sólo logra una renovada integración formal de los polos diferenciados de clase. Aparece el neogamonalismo y la oligarquía se incorpora como núcleo dirigente de la burguesía burocrática.

Las dos instituciones con dimensión nacional se modernizan: Las FF.AA. y la Iglesia; que nuevamente se reencuentran en el Centro del sistema político.

III. VIOLENCIA ÉTNICA Y LUCHA DE CLASES

1.- Relevancia actual.

El Estado es una relación social de dominación que sintetiza el conjunto de relaciones básicas y de múltiples fenómenos contradictorios. Además es un poder consustancial a la sociedad de clases que monopoliza legítimamente la fuerza para cumplir su función ordenadora de la sociedad. Por otra parte, el poder político refleja un grado de constitución de las clases sociales, y se expresa en la capacidad de concretar los intereses, necesidades y objetivos de las clases dominantes. La violencia institucional va acompañada de un mundo simbólico que legitima, jerarquiza y moraliza la acción.

En este complejo de relaciones, lo nacional y los "mitos interpelatorios" que marcan su profundidad (36) tienen expresiones simbólicas que representan determinadas relaciones sociales, como la violencia, que cuando se ritualiza asimila al orden colectivo que la canaliza. Los rituales dan vida a la colectividad y a la continuidad, transformando el poder en orden, actualizando el sentimiento de colectividad y su representación mítica. Así como el orden colectivo se ritualiza y mitifica, el desorden insurreccional procede de la misma manera (37).

Los extensos espacios precapitalistas dificultan e incorporen a una práctica política que oriente su sentido

(36) Rene Zavaleta, "La cuestión nacional en América Latina" en Boletín de antropología americana, IPGH, México, 1982.

(37) Lechner, Movimientos populares y alternativas de poder en latinoamérica, N. ed. Cide, México.

que lo simbólico, lo ritual, el mito, la magia y la religión se incorporen a una práctica política que oriente su sentido hacia la generalización, siguiendo el ritmo de la transformación estatal. Los aspectos étnicos: idiosincrasia, costumbres, lengua, cultura, historia regional, son más directamente políticos en estas formaciones sociales. Lo político crea identidades y oposiciones generadas en la lucha de clases, sin que por ello lo económico sea directamente lo determinante. Los códigos culturales son históricos y funcionan en la política creando significados desde la lucha de clases. El estado no es hegemónico.

Otra particularidad de nuestras sociedades consiste en que las relaciones de poder históricamente actuantes y la juricidad normativa -universalizante de las relaciones sociales de poder- el sistema y régimen político no subsumen el problema étnico nacional haciéndolo parte integrante del Estado. Las normas religiosas, étnicas, costumbres, lengua, cultura... no permiten su imposición en el conjunto social.

La conquista de la hegemonía en sociedades como el Perú implica la convocatoria de asociaciones con tendencias étnicas y clasistas hacia una dirección política y moral con capacidad de interpelar, organizar y dirigir las masas mayoritarias. Ello puede lograrlo una organización con una concepción del mundo que permita identificar y

ayudar a identificar al enemigo de su unidad y desarrollo clasista, que cohesione sus fuerzas y aliados tras una voluntad nacional popular, una estrategia y un proyecto a largo plazo ideológica y políticamente coherente. El consenso activo se logra fusionando organización dirigente y masas con una mística, mitos interpretarios, valores sociales y conciencia fundados en lo nacional.

Los elementos unificadores que permiten identificar al enemigo y generalizar la contradicción parten de la oposición al Estado etnocida y semicolonial, como al imperialismo que lo sustenta. Esta oposición abarca no sólo al estado sino a la burguesía criolla e hispanista, a la gran burguesía financiera extranjera y a la cultura alienante y aristocratizante. Esto no será significativo si no se parte de la indispensable autonomía de clase y la convocatoria frentista, las cuales posibilitan una autonomía teórica que deberá establecerse llevando como eje la cuestión nacional y democrática que comprenda las múltiples particularidades nacionales: la relación clase-etnia, la debilidad de clase y corrupción en sectores de la clase obrera, las dificultades para establecer alianzas regionales en masas heterogéneas, la superioridad cultural del partido sobre sus adherentes, la incomprensión de algunos sectores de masas ante mensajes políticos, las tendencias autoritarias del liderazgo, entre otras.

Volvamos a la historia y descubramos la unidad del pasado con el presente.

2.- Violencia Etnica Anticolonial.

Desde la perspectiva teórico-política antes expuesta, pretendemos hacer una breve evaluación de los movimientos sociales desde la colonia. Este intento no busca agotar el análisis ni puntualizar momentos de la historia manifiesta, sino descubrir las regularidades de una realidad potencial, muchas veces no registrados como tal por aquella.

Toda la fuerza de la ofensiva hispánica etnogenocida no pudo evitar que los siglos XVI-XVII y XVIII y parte del XIX, fueran "sucesivos intentos de reconquista" que tuvieron como puntos más altos los siguientes: 1) Manco Inca Yupanqui (1536); 2) Juan Santos Atahualpa (1742-1752); 3) Tupac Amaru (José Gabriel Condorcanqui (1780-1781) y 4) Pumacachua y los Hermanos Angulo (1814-1815), (38).

Excluimos los movimientos sociales entre agrupaciones étnicas subyugadas: negros e indios, mestizos contra negros e indios. Sin embargo, señalaremos que los mestizos pretendieron integrarse a los grupos dominantes y participar en la explotación indígena.

La reacción indígena ante los mecanismos de dominación tuvo casi siempre contenido político, en tanto se impugnó el colonialismo; sin embargo no fue estrictamente política. En el siglo XVI la respuesta indígena adquirió un

carácter militar movilizándolo a amplias masas, sin conseguir hegemonizar debido a los antagonismos étnicos previos a la conquista (el más relevante enfrentaba a los clanes reales del norte y del sur, conducidos por Hascar y Atahualpa) y a las alianzas de los conquistadores con algunas etnias. En lo económico, el enfrentamiento es con los caciques por el señorío sobre hombres, tierras y la distribución del excedente. Ideológicamente, con el avance de la conquista se logró la necesaria unidad anticolonialista. A este enfrentamiento se le conoce como "Guerra de los Wiracochas".

Los españoles desarrollaron acciones económicas, sociales e ideológicas. En lo económico las acciones envolventes buscaron controlar los medios de producción y la fuerza de trabajo. El excedente era captado por el tributo y la renta; parte del cual era redistribuido a través de formas coercitivas, comerciales, religiosas... En lo social, el patriarcalismo se le apoyaba con medidas legislativas, obras pías, tribunales -que creaban la ficción de justicia y buen trato-, legitimando así el mínimo de subsistencia en la explotación complementaria y evitando formas definitivamente esclavistas.

Más importante fue la regulación del funcionamiento de la sociedad a través de la institucionalización de normas de conducta, conducción de reclamos, ordenamiento de conflictos sociales y represión de los líderes. Tal ordenamiento era garantizado por el poder

de la fuerza, bajo la forma de milicias provinciales que aseguraban la jerarquía estamental, de castas y de clases, así como la fidelidad al rey (39).

Las acciones coloniales de asimilación buscaban ordenar las contradicciones culturales en los usos y costumbres sociales, moderando la participación popular subordinada en la vida cotidiana. Mientras que las acciones de diferenciación simbólica, artística y arquitectónica, se expresaban en los protocolos sociales.

Estas formas de asimilación que llegaban a reglamentar la vida de los pueblos -fiestas, vestidos...-, y participación iban acompañadas de formas ideológicas de dominación que aparentaban formas de participación en el poder y enmascaraban el sistema de dominación. Se dosificaba el etnocidio y la alienación simulando un predominio del pensamiento andino. Los métodos más comunes empleados por los colonizadores eran el adoctrinamiento, la extirpación de idolatrias, los mitos sociales y la movilización artístico-cultural.

Con el objeto de legitimar al Rey, a las jerarquías estamentales, los dominios y señoríos, la pugna por la dominación se daba en todas las esferas de la vida social. Las respuestas fueron diversas y llegaban a crear sofisticadas formas de defensa.

Estos mecanismos protectores iban desde la huida y búsqueda de protección señorial, prácticas idolátricas,

(39) Esta parte se basa en reflexiones sobre el ensayo de Javier Tord y Carlos Lazo, El movimiento social en el Perú Virreynal precisiones ontológicas.

movimientos mesiánicos (como recreación de mitos sociales, acciones y prédicas cristianas), la protesta individual (huida, autodestrucción, homicidio, vagabundaje, asaltos), el trabajo a desgano y cambio de ocupaciones, destrucción de medios de producción propios y ajenos, resistencia a las autoridades y a sus ordenanzas, el bandolerismo indígena y negro. Estos últimos implicaban lucha social, cierta incipiente conciencia social y se orientaban a la expropiación de bienes terratenientes.

Otras formas de lucha que no rebasaron la protesta colectiva, el compañerismo o una conciencia inicial fueron el abigeato, la agitación social, la pandilla urbana, los tumultos urbanos y pueblerinos y el palenque cimarrón. Estas acciones muchas veces fueron condicionadas por las masas en las comunidades, pueblos o palenques, en algunos casos reclamando autonomía. Todas -por su debilidad- terminaron transigiendo.

Las sublevaciones, rebeliones, levantamientos, alzamientos y guerras sociales, si fueron movimientos populares masivos y transregionales. En ellos participaban varias castas y estamentos, asociándose sentimientos de venganza a la lucha por intereses económicos y políticos.

El liderazgo podía ser individual o colectivo, el discurso mesiánico y providencialista; contaban con la participación de autoridades locales, agitadores y propagandistas.

En el siglo XVIII hubo más de cien movimientos campesinos que culminan en la gran rebelión de Tupac Amaru (Scarlett O'Phelman). Del conjunto de contradicciones étnicas en una población multiétnica, aparece como la fundamental la que se da entre indio y español. El milenarismo es un rasgo que se expresa en la idea acerca del retorno de los incas, único poder legal y legítimamente reconocido, opuesto al de los españoles: usurpador de tierras y del poder político. Esta visión simbólica proviene de la historia anterior y la organización social inca, que reconocía en la clasificación social al inca como "hijo del Sol" (Inti).

Los elementos programáticos planteaban la creación de un Estado independiente bajo el poder incaico, donde desaparecieran las divisiones estamentales y de casta, pero conservando la jerarquía nobiliaria y los trabajos forzados, incluso el respeto de los derechos de los criollos si aceptaban ser subditos del inca. Por último, las tendencias al compromiso con la Corona a cambio de reformas laborales, comerciales, tributarias, administrativas y sociales, siempre fueron una posibilidad.

El movimiento realizó, en la práctica, algunos cambios: se eliminó el trabajo forzado por la acción de las masas, así como las distintas formas de mita y otras modalidades de trabajo coercitivo.

Este enfrentamiento contenía un conjunto de

contradicciones que combinaban la situación de etnia y clase, aunque el sustrato era el bloqueo al desarrollo de las fuerzas productivas. Las clases inferiores (indios, mestizos, cholos y zambos) se enfrentaban a las superiores. El sistema de castas se imponía sobre el sistema estamental (nobleza). De ahí que en la práctica el movimiento tendiera a liquidar -siquiera parcialmente- castas y estamentos.

Existieron dos variantes en lo programático, una campesina y otra aristocrática. Su punto de convergencia era el enfrentamiento con las relaciones de dominación colonial y la coerción extraeconómica (que enfocaba a los criollos). Eran distintas porque las reivindicaciones campesinas iban más allá, proponiendo la abolición de la hacienda y demandando autoridades locales.

Como sostiene Szeminski (40), los objetivos fueron revolucionarios desde la propuesta de toma del poder por la aristocracia indígena, la abolición de castas, la reducción del sistema jerárquico estamental al binomio "nobles y los demás", liquidación de la coerción, libertad de comercio y contratación, demanda de un sistema único de tributación y de cargas para los súbditos. En resumen, su oposición política sólo era al colonialismo y a las relaciones feudales de explotación y dominación, con una conciencia segmentada local y estamentalmente, donde con lentitud la conciencia étnica va cediendo paso a la conciencia de clase. Para Szeminski, el fracaso del

(40) Jan Szeminski, La utopía tupamarista, PUC, Lima, 1984, p.286.

movimiento se debe a la contradicción entre etnia y clase.

Mientras el movimiento fue sólo étnico, se dieron exitosos combates; pocos meses después la reaparición de los conflictos étnico-clasistas lo llevaron a la derrota.

Un elemento creador de estas oposiciones preexistentes fue la desestructuración de la economía andina y la aparición de una nueva dinámica impulsada por el desarrollo monetario y mercantil, que ocasionaría los conflictos étnicos y de clase, y posibilitaría las correas de comunicación y coordinación política.

Finalmente, será la solidaridad mercantil de una naciente burguesía comercial nativa la que impulse la exigencia de soberanía política y otorgue continuidad al movimiento. El desarrollo del movimiento autonomista de los caudillos creó focos de dispersión y oposición, sobre los que actuó la política y la estrategia militar española a través de la coerción y la negociación (v.g. ascensos militares), la diferenciación comunal, la transformación de mestizos en caciques, los cargos municipales y religiosos, y el aprovechamiento de la oposición entre étnias.

No sólo los intereses de clases son reforzados por diferencias étnicas, sino que las vinculaciones étnicas expresarán, en lo ideológico, las diferencias de clase. La naciente conciencia de clase era afectada por los límites étnicos (41).

ESTA TESIS NO DEBE
SALIR DE LA BIBLIOTECA

(41) Christine Hunefeldt, Conciencia étnica y conciencia de clase en el levantamiento de 1780-1783, en III Congreso del Hombre y Cultura Andina, editora Losontay, Lima, 1980.

El siglo XIX representó el conflicto por la hegemonía criolla blanca -mestiza- y el Perú sufrió, primero, una reconstrucción por más de medio siglo (1820-1879), cuando la destrucción del País producida por la Guerra del Pacífico exigió una nueva reestructuración. El campesinado continuó su combate anticolonialista, jugando un papel protagónico en ambas guerras, con España y con Chile. En la primera los criollos, bolivarianos o no, tienen la opción de reordenar la economía sobre las bases anteriores, construyendo las haciendas a expensas de la expropiación del campesinado indígena y otros grupos sociales que se habían enfrentado durante un cuarto de siglo a los españoles (42).

Lo mismo ocurrió con la Guerra del Pacífico, donde el conflicto contra el invasor deviene en conflicto étnico-clasista. Según Manrique, el movimiento campesino depura su carácter antiterrateniente llegando a ocupar -sólo en Cerro de Pasco y el Valle del Mantaro- tierras de 45 haciendas con centenares de miles de hectáreas (43).

En estos movimientos, que en diferentes dimensiones fueron más o menos mesiánico-milenaristas desde la muerte de Atahualpa, la resistencia de los restos del Estado inca entre 1537-1572 dirigida por Manco Inca, Sayri Tupac, Tito Cusi y Tupac Amaru I, fue recreando mitos

(42) Clement Markhan, Historia general de los peruanos, tomo II; y Wankar, Tawantisuyo, cinco siglos de guerra quechua Inca. Nueva Imagen, México, Ambos registran alrededor de 30 movimientos campesinos en los Andes.

(43) Nelson Manrique, "Los movimientos campesinos en la guerra del Pacífico", en Allpanchis, núms. 11-12, Lima, pp. 94 y 55.

revolucionarios. El movimiento de Tupac Amaru I está vinculado a la agitación religiosa andina del Taqui Ongoy -entre 1560-1570- que predicaba la resurrección de las huacas, la muerte de los dioses cristianos, la expulsión de los blancos y la recreación de un nuevo mundo. Tupac Amaru I termina decapitado en 1572, permitiendo el resurgimiento de los mitos mesiánicos (44).

Después de un siglo se destaca un movimiento contestatario que ocurre en 1885, encabezado por Atusparia y desatado debido a la oposición étnica al aumento de contribuciones por los criollos. Allí participaron más de 20 000 campesinos, de los cuales eliminaron al 25%.

Tal rebelión, ocurrida en la sierra norandina -en la cordillera Blanca-, tuvo dos momentos y tendencias: una, dirigida por Atusparia, de orientación conciliadora y que pretendía mediante la negociación establecer un Estado regional; la otra, dirigida por Uchku Pedro, guerrillera e intolerante con las etnias no indígenas. Este movimiento, además de su contenido milenarista, tuvo tendencias anarquistas e incluso influencias de la Comuna de París.

La crisis continuaba, y en la segunda década del presente siglo se produce un nuevo proceso de expansión latifundista, estrechamente asociado a los altos precios de la fibra de alpaca y lana de ovino que provocan la resistencia comunera, la cual también tiene dos momentos: el primero, antigamonal y antifeudal, tiene contenido

(44) Oscar Dancourt, Aspectos económicos de la huelga campesina, FUC.

mesiánico milenarista y se produce desde 1913 hasta 1916. Su dirigente Rumi Maqui se autoproclama "restaurador indigena del estado de Tahuantisuyo".

El segundo momento se produce posteriormente, entre los años 1920-1923 y 1928-1930. Consiste en una extensa rebelión en el sur andino y corresponde a un ciclo en la baja de los precios pecuarios que anuncian la crisis agraria. La reconstitución clasista articulada al desarrollo mercantil, que incorporaba a los colonos de hacienda, impulsa a éstos a plantear la transformación de la hacienda en comunidad. En estas movilizaciones -más de 175 por año- se combinaron los elementos étnicos-clasistas, diversas ideológicas y programas disímiles. El anarcosindicalismo logro asimilar el milenarismo y los mitos restauradores. Fue, en conjunto, un movimiento casi político con dirección, organización y proyecto difusos, con incipientes propuestas de un nuevo poder y alguna presencia sindical. Los líderes estaban limitados por sus aspiraciones regionales, autonomistas, etnicismo, particularidades simbólicas y por algunas tendencias restauradoras de la jerarquía estamental indigena. En tal movimiento aparecen caudillos mesiánicos, enviados restauradores, alianzas étnicas, tradiciones rituales y mitos, idealizando lo incaico con fuertes sentimientos de venganza. En este movimiento de masas se reemplazaron autoridades, se crearon estrategias militares, se tomaron

pueblos, se recuperaron haciendas, cuya conclusión fue la violenta respuesta estatal.

Mariátegui recuperará el espíritu revolucionario y la fuerza de los mitos interpelatorios, mientras que Haya de la Torre sólo un utópico programa como instrumento de propaganda.

3.- Los movimientos Campesinos 1956-1964

a. La violencia Andina y desarrollo monetario-mercantil.

El desarrollo capitalista en el espacio andino implica violencia, no sólo violencia económica, que va asociada a la expropiación de tierras y a la apropiación forzada de los excedentes campesinos, también es la violencia étnica y cotidiana que magnifica la explotación. Es en determinados espacios andinos y la costa donde se desarrolla la vía terrateniente impulsada por el comercio y la agricultura comercial, al influjo del mercado mundial. En otras áreas andinas la economía campesina se impone paulatinamente a la terrateniente. Esta evolución va acompañada de la centralización de la violencia por parte del Estado, sin superar las violencias locales de corte gamonal.

El movimiento de "colonos" -campesinos bajo relaciones de arrendamiento semifeudal- en los Valles de la Convención y Lares está directamente articulado con los cambios de precio del café, que al incrementarse impulsan la lucha por la libertad mercantil. Esta prolongada movilización influirá en el desencadenamiento de rebeliones entre los comuneros del Cusco, de los andes del sureste y en acciones aisladas de colonos que se enfrentan a los

terratenientes.

Los comuneros pretenden recuperar sus tierras y su relativa autonomía de los señores de la tierra, inclusive usando mecanismos poco evidentes como la lucha por el reconocimiento comunal. Esta tiene repercusiones políticas internas y externas que obligan a los dirigentes naturales a pensar políticamente y a desarrollar una conciencia para sí. Es muy difícil establecer la proporción de campesinos dependientes -problema convertido en objeto de debate por estudiosos como Montoya y Dancourt- (45), pues directa o indirectamente todos dependen del sistema gamonalista de dominación.

La extracción de sobretrabajo mediante formas coactivas extraeconómicas supera el encapsulamiento comunero. El desarrollo normal del capitalismo se enfrenta a una economía campesina que se resiste a nuevas formas de explotación. La abundancia de fuerza de trabajo y la debilidad de la hacienda para asalariar al campesinado de comunidad impiden la consolidación del capitalismo y dan la apariencia de autonomía comunal.

Las leyes de reforma agraria son una respuesta a la lucha campesina, a la vez que a los obstáculos para el desarrollo capitalista. Se trata, también en cierta forma, de legitimar la expansión territorial de las comunidades y colonos a través de parcelaciones, compras e "invasiones".

La recuperación de tierras supera las

(45) Oscar Dancourt, Aspectos económicos de la lucha campesina 1957-1974, PUC... Rodrigo Montoya "Acerca del carácter predominantemente capitalista de la sociedad peruana" UNMSM, Lima.

implicaciones en torno a la renta y el poder feudal, es también la lucha que surge de la incorporación monetario-mercantil del campesinado. La lucha campesina acelera las tendencias precedentes. La construcción de carreteras y la penetración de la agroindustria son factores que incorporan violentamente la economía precapitalista al mercado nacional e internacional. Desde los cuarenta transcurren 20 años de impulso a la vía terrateniente, iniciándose la resistencia e integración de la economía campesina al mercado; ambos momentos corresponden a una mayor inserción de la economía peruana en el mercado internacional, a un mayor desarrollo industrial y un crecimiento del mercado interno.

Si a principios de siglo las víctimas de la expansión latifundista fueron las comunidades, en estas dos décadas son los colonos; si en el primer periodo el motivo expansionista era conseguir fuerza de trabajo y pastos, en el segundo fue la necesidad de conseguir tierras que sirvieran para satisfacer la creciente demanda interna, que aumentaba con el desarrollo industrial y el crecimiento urbano. En resumen, el desarrollo de la economía comercial es el detonante de las contradicciones históricas entre terratenientes y campesinos.

Los movimientos campesinos no descuidan la percepción del conjunto. "Si la estructura de poder -como sostiene Hobsbawm- es firme y cerrada, se retraen en su

postura usual de esperar. Si empieza a abrirse o quebrarse, se prepara para la acción" (46). El despertar de la memoria colectiva, desarrollada por enseñanza oral generacional, es recordada permanentemente en sus luchas colectivas. Aún carece de la conciencia solidaria de clase, política, aunque proyectada en lo nacional, subordina todo el movimiento a los intereses de su agrupación particular.

En estos movimientos actúan los "intelectuales orgánicos" del campesinado, hijos de comerciantes y campesinos medios, artesanos y pequeños terratenientes que introducen nuevas ideologías en una población a la que le abren un mundo nuevo. El campesinado opta por el cambio y desaparece la creencia en un orden social permanente, alterando de esta manera las viejas y nuevas estructuras de poder.

La política aún no se constituye en movimiento de masas, más bien se yuxtapone al desenvolvimiento espontáneo del conflicto sin transponer el interés inmediato.

Examinemos más en detalle lo ocurrido entre 1956-1965. En la coyuntura existe un conjunto de condicionantes como la industrialización sustitutiva, urbanización, desestructuración rural, migraciones, crecimiento del mercado interno, desarrollo de los medios de comunicación, de infraestructura y servicios. Las clases sociales se transforman, aparecen sectores obreros

(46) Eric Hobsbawm, "Ocupaciones campesinas de tierras", en Análisis. Lima. p. 124.

independientes del Estado y del tradicionalismo político patriarcal y caudillista; la burguesía media y la pequeña burguesía pugnan por participar en los asuntos del Estado y desarrollar relaciones democráticas; el campesinado abandona su localización aldeana y aparece en la escena política nacional; finalmente la burguesía burocrática se consolida con la incorporación de sectores oligárquicos. Sin dejar de ser rentistas, los agroexportadores y la burguesía bancaria son asimilados a la acumulación urbana.

La revolución cubana propicia la aparición, en 1959, del APRA Rebelde, que posteriormente se transformará en el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR). Dentro del PC aparece el "Comité Central Leninista," que daría paso al Frente de Izquierda Revolucionario (FIR). Sin embargo, las determinaciones de estas escisiones están en lucha de clases dentro del país y en los virajes derechistas de ambos partidos.

La coyuntura de 1956-1960 prepara las condiciones de la siguiente -que se da entre 1960-1964-, en la que surgen los movimientos políticos modernos.

En 1957 se acrecienta el movimiento sindical-popular y campesino. El primero, centrado en Lima y en las capitales de algunos departamentos; el segundo (campesino), en los valles costeros del norte -cañeros y algodoneros- y en el sureste andino. Aunque su impacto en los partidos tradicionales con presencia en las masas (APRA-PC) es

relevante, el movimiento queda reducido, sin embargo, a los márgenes regionales.

En la década de los sesenta, paralelamente al movimiento político de Hugo Blanco y el trotskismo latinoamericano, diversas organizaciones de izquierda asumen posiciones políticas que globalizan al país, concertan uniones obreras y pactos de solidaridad. El PCP y el APRA prosiguen su viejo enfrentamiento por ganar posiciones entre las masas. Al concluir el régimen pradista se desata un significativo desborde laboral que el gobierno responde con la represión al movimiento sindical y a la izquierda (D.L. 13488) que son marginados en sus pretensiones ciudadanas.

La junta Militar de Gobierno (1961-1962) es un ensayo de la experiencia de 1968. El PCP tiene la esperanza de que éste se transforme en gobierno democrático-popular y lo apoya; en reciprocidad, la JMG le permite la realización del II Congreso de la Confederación Campesina del Perú (CCP) y el desarrollo de acciones en torno a la conformación del Comité Reorganización y Unificación de la Confederación de trabajadores del Perú (CTP).

La recuperación de tierras de Yanacancha y Rancas (Pasco) en 1959 y otras más que impulsó el campesinado comunero estaban, vinculadas al movimiento obrero minero del centro y formaban, de alguna manera, parte del movimiento regional sindical. No tienen la relevancia de las recuperaciones de la siguiente década, que, aunque

continuación de éstos, adquieren dominio en la escena política.

La complejidad, diversidad y heterogeneidad de los movimientos no fueron obstáculo para que existieran elementos de unidad. Estos se expresaban en la tendencia a la generalización, superando a las propias direcciones políticas que involuntariamente actuaban como factores de ruptura regional.

El movimiento de los trabajadores de las haciendas cañeras contó con un gran despliegue de disciplina y organización; empero, sirvió más al APRA como elemento de negociación y conciliación con la oligarquía dejando al movimiento en el plano económico corporativo. El PCP asentado en valles de la costa, algodonereros principalmente, aún no aceptaba fácilmente estos tratos, de ahí que el gobierno respalde al APRA, su fiel conviviente.

Sectores apristas que cuestionan el comportamiento conciliador de su dirección y los pactos con la oligarquía entran en oposición orgánica primero, y después política, en Chepen y Cín Chin. Los líderes eran dos futuros dirigentes de las guerrillas del MIR: Fernández Gasco y De la Puente Uceda.

En Cerro de Pasco, la mayor independencia del campesinado comunero permite que se orienten al enfrentamiento ante la expansión del monopolio minero de origen extranjero (Cerro de Pasco Cooper Corporation) y los

terratenientes. En 1960 conforman la Federación de Comunidades de Pasco y poco después la de Chaupihuaranga. Estas comunidades, con el apoyo de los gremios locales y conducidas por líderes ideológicamente heterodoxos, emprenden la recuperación de sus tierras.

Handelman anota que "las tensiones rurales subyacentes en el departamento (Pasco) produjeron una nueva ola de inquietud, cuando el rígido control de la JMG desapareció" (47). Las tomas de tierras se inician en Pasco y después se expanden a Junín y otros departamentos del centro. Debido al espontaneísmo el movimiento es fácilmente coptado por el reformismo (48), que primero lo aísla de sus dirigentes y a continuación -luego de la represión- consigue el apoyo del Movimiento Comunal del centro. Entre Pasco y Junín se dieron 80 recuperaciones.

En Cusco el movimiento "valluno" es provocado por el boom del café, que empuja a los "arrendires" al enfrentamiento con los terratenientes. En 1963 se expande a las comunidades y colonos de hacienda del Cusco alto andino. Organizados en sindicatos, adoptan formas radicales de lucha y llegan a atacar puestos policiales e intentar la liberación de comuneros presos.

Handelman distingue dos movimientos campesinos: el primero es de cholos y mestizos de la sierra norte y

(47) Howard Handelman, Lucha campesina en los andes, PUC, Mimeo. p.22.

(48) Victoria Guzmán, El movimiento campesino en Perú 1956-1964, Lima.

central (Pasco y Junin), y el segundo se da en las comunidades indígenas tradicionales del sur (Cusco). No incluye otros movimientos como el de Puno, claramente diferenciado de los mencionados.

Para este investigador, las movilizaciones del norte y el centro estuvieron asociadas a específicas motivaciones económicas. Los de la Sierra Sur, a la represión étnica y socio-económica del campesinado, formando parte de una larga tradición rebelde. El movimiento del centro concluyó con dos hechos importantes: el fin de la influencia aprista y el encarcelamiento de dirigentes mineros y asesores legales como Ledesma.

Estas acciones cortaron la relación obrero-campesina, aunque el movimiento pudo prescindir de ella. Esto no ocurrió en el sur, donde el campesinado recibió de fuera potentes influencias políticas, decisivas en la prosecución de las acciones.

El genocidio racista fue un factor represivo en el sur que no tuvo tanta fuerza en el centro. En síntesis: En el Centro las aproximadamente 400 "invasiones" fueron realizadas por comunidades con formas marginales de integración política y social, mientras que en el sur los comuneros expresaban cuatro siglos de exclusión, lo cual les daba mayor radicalidad.

En Pasco, debido a la poco definida orientación política, predominó el interés de la comunidad aislada: las federaciones obreras no penetraron en los pueblos.

En Junín, la Federación Departamental de Comunidades de Junín -fundada en 1958- bajo influencia aprista a través de la Federación Regional de Mineros del Centro, con su líder Elías Tacunan, y de la Federación de Campesinos del Perú (FENCAP), tuvo una vida efímera por la traición aprista y la reacción combativa de la dirigencia contra ella.

Lo mismo ocurrió en la Sierra Norte con De la Puente y Fernández Gasco, que enfrentados a la realidad viva empujaron los movimientos campesinos hasta el límite de terminar distanciados del partido. Tacunan y Ledesma optan por la creación conjunta del Frente de Obreros y Campesinos hasta el límite de terminar distanciados del partido. Tacunan y Ledesma optan por la creación conjunta del Frente de Obreros y Campesinos, que reúne a un grupo de aprista rebeldes. Ledesma contribuye a la organización del Frente de Liberación Nacional (FLN).

Todos los gremios campesinos del centro se vuelven a encontrar en la lucha parlamentaria. El movimiento Comunal de Tacunan conformó un frente étnico-clasista burgués con el Frente Nacional de la familia Cáceres (exdemocrristiana DC) de Puno, que realizaría un Congreso a inicios del año 1967 y que logró reunir a

campesinos de seis departamentos: Puno, Pasco, Junín, Ancash, Huancavelica y Huanuco. Con el golpe de 1968 se aliaron al gobierno de Velasco.

Desde 1959 se organizan sindicatos en las haciendas del altiplano puneño, en combate contra las relaciones serviles y, paradójicamente, en lo inmediato, contra la modernización de la hacienda y la consecuente expropiación y sobreexplotación.

En esta zona el desarrollo mercantil tiene su sede en Juliaca, que al intensificarse, exige el control político regional de la naciente burguesía comercial que se organiza en partido político y crea el Frente Sindical Campesino (FSC), liderado por la familia Cáceres.

La intensificación de la economía mercantil trae aparejadas nuevas relaciones de explotación: descuentos salariales, incremento de la renta conocida como yerbaje, y venta forzada de productos.

Las viejas relaciones reaparecen encubiertas en otras nuevas. Al aumentar la renta en dinero, aparecen desigualdades en las capas del campesinado. Los colonos siervos más ricos entregan más renta en trabajo al disponer de mayor fuerza de trabajo, con lo cual se consolidan los grupos mediadores en la explotación. Pero ocurre también que estos mismos mediadores, al verse afectados por las más radicales medidas de reducción de ganado, organizan un sindicalismo patriarcal. Después los encontraremos como los

beneficiarios de la reforma agraria.

La FSC detecta estas contradicciones y actúa en función de las tendencias, como lo hiciera después Hugo Blanco. La labor patriarcal de la FSC es de naturaleza clientelar al formar sindicatos a través de emisarios mercenarizados que, conocedores de la cultura tradicional popular y recuperando mitos y expresiones de arte popular, atraen al campesinado a este tipo de sindicalismo preburgués. Por el contrario, el PC con su burocratismo rápidamente es subsumido por el movimiento espontáneo. El FSC enseguida conseguirá el control del sindicalismo campesino y sus tendencias levantiscas.

Estas experiencias demuestran que sólo en aquellos lugares donde se impulsa la conciencia étnica apoyada en la de clase, y articulada a objetivos corporativos, los movimientos sociales tuvieron permanencia y hasta lograron darle un contenido radical cuando los programas coincidieron con los intereses de los campesinos movilizados.

Hemos podido mostrar cómo los sindicatos se solidarizan con el movimiento campesino, pero también como éste se agota cuando está ausente la proyección histórica.

Estos movimientos campesinos impulsan formas anarco-sindicalistas y foquistas de violencia política. Las primeras están bien expresadas por Blanco y su experiencia en los valles altoselváticos del Cusco; las segundas, en el

pragmatismo espontaneista del MIR, que niega la necesidad de partido, no se apoya en amplias masas y evade el debate teórico conciliando con el reformismo.

b. Movimientos sociales y violencia política.

Renacimiento Etnico-Clasista.

Si bien los procesos revolucionarios y la violencia política colectiva tienen su origen en las transformaciones políticas e ideológicas de la población -e involucran a las clases sociales que pugnan por el poder-, estas relaciones a su vez surgen de las formas de propiedad y explotación como contradicciones básicas que se expresan en los cambios en las relaciones coloniales, clasistas y los conflictos entre clases.

De allí que, en su momento, hayamos tratado de identificar las relaciones de producción que incluyen a las clases sociales, las etnias y los intereses coincidentes de ambos grupos sociales. Para el trabajo mayor dejamos el análisis de las organizaciones políticas, los elementos con que cuentan para emprender sus luchas, las relaciones internacionales y los hechos de la historia mundial que afectan los procesos de cambio.

Un segundo aspecto es el problema del Estado. En el Estado se desarrollan luchas de carácter diverso: burocráticas, coactivas, económicas y políticas, que definen su capacidad orgánica.

Estas contradicciones intraestatales son centrales en la explicación de los violentos movimientos sociales desarrollados por intereses políticamente proyectados y organizados. La descomposición burocrático-militar en el Estado y las perturbaciones en el control neocolonial han propiciado las crisis revolucionarias. Estas no son creadas por los actores sociales y políticos, pero las luchas objetivas de las masas son un catalizador esencial de su desarrollo. Tales coyunturas surgen de las crisis de dominación de clase y político-militar del Estado.

Los actores pueden acelerar el proceso de la crisis y la ideología cohesionar las vanguardias, mas nunca la lógica de los movimientos se encuentra sólo en las perspectivas de una clase u organización política.

Las fuerzas impersonales -no voluntarias- permiten la interacción y alianza de los actores. Estas relaciones, al darse en los ámbitos objetivo y subjetivo contra el Estado, dan forma a los movimientos políticos. De allí que sean los movimientos políticos precedentes, derivados de cambios socio-económicos y transformaciones en las clases, los que aquí nos interesen.

Es innegable que en la interpetración de la violencia política en el Perú no se puede prescindir del análisis histórico de movimientos sociales prepolíticos como contenido fundamental, aunque sin descartar algunas

influencias políticas. Movimientos sociales prepolíticos como los de Tupac Amaru, Atusparia, el anarco-milenarismo de los veinte de este siglo, e inclusive el movimiento de la Convención y Laras con claro contenido político regional.

Sin embargo, dos son los movimientos sociales que adquieren relevancia respecto a la violencia de la década de los ochenta: las guerrillas del MIR-ELN en 1965 y las tomas de tierras en Andahuaylas y Cajamarca en 1974-1975. Del mismo modo, sin negar el sustrato ideológico aún mesiánico-milenarista y mítico andino de estos últimos movimientos -MIR, ELN, VR-, no se les podría entender sin referirnos a los movimientos ideológicos dentro del marxismo provocados por la revolución cubana y la polémica chino-soviética, cuya profundidad incide -y sus secuelas tienen vigencia- hasta el día de hoy. Esto ocasiona que en algunos partidos se produzca un vuelco del doctrinarismo a la realidad, de la especulación a la práctica: el Partido Comunista, conocido como Sendero Luminoso a través del prisma de Marátegui; el Partido Comunista del Perú Patria Roja bajo la influencia de la teoría de la dependencia; y el MIR, que sintetiza varias corrientes como el academicismo soviético y el pensamiento de Fidel Castro -"Che" Guevara y Mao Tsé Tung; sub-productos serán la historia andina y la investigación social, que comienzan a adquirir relevancia.

La recuperación del pensamiento del fundador del Partido Comunista se inicia en momentos en que el PC estaba

bajo la dirección de Saturnino Paredes Macedo, en calidad de secretario general (1963-1969, y cuando en 1967 el partido publica una obra inédita de Mariategui: La organización del Proletariado.

La búsqueda y la preparación los distrae aproximadamente una década -toda la del setenta-, mientras las mencionadas organizaciones se acercan programáticamente más a la realidad objetiva y a su comprensión.

Será la saturación de las luchas económico-corporativas y del discurso en una muy delimitada región andina que algunos han denominado Pokra-Chanca (49) y las condiciones similares -según el PC del P SL- a las que provocaron los acontecimientos violentos de 1965 los elementos decisivos en el inicio de la lucha armada. El hecho es que en la economía, la sociedad y la política, habían aparecido condiciones objetivas suficientes para un desenlace violento del conflicto de clases.

Si se pretende establecer analogías, ya sea por coincidencias o por diferencias con cercanos referentes en el plano político-militar, como por la naturaleza del momento histórico, debemos hacerlo con el movimiento del MIR de 1965.

Los movimientos iniciados por el FIR y Blanco en 1958, y por las comunidades del centro entre 1962-1963, se dan en un mundo subalterno, precapitalista en el contexto de odernas. Forman parte de un conjunto de movimientos

(49) Ricardo Melgar, Le Monde Diplomatique, México, 1985.

sociales que, "por impotentes que a veces hayan parecido, nuna economía y política en transición hacia formas son en general -para citar las palabras de Gramsci-, otra cosa que un perpetuo fermento como una masa incapaz de llegar a una expresión centralizada de las propias necesidades y de las propias aspiraciones". Constituyen también un poderoso sostén, aunque a menudo de doble sesgo, de los movimientos sociales de la época capitalista (50). Es un proceso en el que se configura un movimiento de tipo moderno que va al encuentro de otro tipo antiguo campesino patentizando el potencial político de los sectores sociales menos tradicionales, modernizadores del campesinado.

En estos movimientos ascendentes ciertas relaciones, ideas e instituciones aparecen como constantes (51).

Los movimientos del FIR-Blanco y de las comunidades del centro, a pesar de formar parte de este auge de masas campesinas que llega hasta el presente, son marginales en nuestra investigación porque a) su origen se encuentra en la insatisfacción de nuevas necesidades sociales que provocan la crisis de la modalidad productiva local; b) la transición, que adquiere solución en la lucha de clases, une distintos ritmos de desarrollo: el de las nacionalidades, del capitalismo y del Estado moderno y de los intereses inmediatos del campesinado local o regional,

(50) Eric Hobsbawm, Marxismo e historia social, Universidad de Puebla, México, 1983, p.58

(51) E.P. Thompson, Tradición, conciencia y revuelta. La economía moral de la multitud, Grijalbo, Colec. Crítica, Madrid.

que se enfrentan a la coyuntura; c) los actores políticos que se van adecuando a la estrategia propiamente campesina; d) la adopción de formas obreras de organización y lucha que otorgan centralidad a lo institucional, excepto en el centro; e) la ruptura entre estrategia y táctica, que configuran en su desarrollo un proceso reformista mientras que en las comunidades del centro era un proceso espontáneo; y f) que en gran parte del proceso prevalece la pugna interpartidaria y dentro de los mismos grupos políticos comprometidos con la violencia.

Si en ambos procesos es posible singularizar el papel relevante del campesinado andino, la alianza entre mestizos pequeñoburgueses e indígenas campesinos es aún incipiente. Es el inicio del ingreso del mundo rural a la vida política moderna bajo la forma de sublevaciones campesinas que logran expresar la campesinización de la universidad y la andinización de la ciudad.

Las relaciones que podemos establecer entre el -movimiento del MIR de 1956 y los actuales del PC SL, y del movimiento Revolucionario Tupac Amaru- (MRTA) son:

1. Ausencia de legitimidad para dar inicio a la violencia.
2. La necesidad de la acción armada -de la práctica como respuesta a la dinámica de la política impulsada por las organizaciones políticas que asumen la violencia política como vía al poder.

3. La estrecha relación con el problema agrario y campesino. El MIR asume la experiencia de Blanco y el FIR, y la consiguiente reforma contrainsurgente como negativas, del mismo modo como las nuevas fuerzas políticas que protagonizan la violencia de hoy asumen la reforma agraria militar después de las guerrillas 1965 y la toma de tierras de 1974 (que al mismo tiempo es la máxima expresión de la movilización campesina reformista).

4. Ambos movimientos derivan de una crisis generalizada, de dificultades de gobernabilidad, de auge del movimiento popular y de luchas campesinas derrotadas.

5. El contexto internacional corresponde a un periodo de auge revolucionario cuyo primer momento concluye con la revolución cubana, y el segundo con la centroamericana: Nicaragua, Guatemala y el Salvador.

6. Ambos procesos son precedidos de periodos de crisis ideológica y política en el Movimiento Comunista Internacional y en la expansión del "revisionismo" y la social-democracia. El primer periodo coincide con el XX Congreso del PCUS y la polémica entre el PC CH y el PCUS. El segundo con el ascenso de Teng Siao Ping-Hua Kuo Feng a la dirección del partido y Estado chino.

7. Un fuerte estímulo a los partidos que actúan en sociedades campesinas poco proletarizadas, lo cual los convierte en los nuevos actores sociales de los movimientos de liberación nacional democrático-populares de Asia, Africa

y Centroamerica, donde la participación obrera es escasa.

8. Así mismo, las características internas del proceso son similares: heterogeneidad que imposibilita la movilización nacional en un corto periodo, ausencia de participación de las masas indígenas campesinas o urbanas en el sistema político, empobrecimiento de la pequeña burguesía y de los pobladores periféricos a la vida política urbano-institucional, cambios en el modelo de acumulación que dinamizan la vida económica, pero traen consigo graves secuelas: las migraciones, la crisis, la desocupación y la miseria.

Finalmente para desarrollarse, extenderse y mantenerse, el PC del P SL y los otros grupos insurgentes retoman de la experiencia del MIR algunos elementos que utilizarán en su práctica política militar:

1. Los frentes guerrilleros se desarrollan en las áreas de mayor movilización y combatividad campesina o donde existe mayor trabajo partidario de masas. El MIR eligió como zonas estratégicas: La Convención y Lares (Cusco), Concepción y Jauja (Junín) y la Mar (Ayacucho). Sendero Luminoso privilegia para su accionar Andahuaylas (Apurímac), Ayacucho y Huancavelica. Sin embargo, mientras que S L pone énfasis en el trabajo político de masas, el MIR se basa en los cambios que se dan en lucha de clases.

2. El establecimiento de una correcta correlación entre los aspectos políticos y militares lo que

evitó hacer el MIR.

3. El peligro que presentan los elementos débiles y dudosos frente al terror estatal.

4. La necesidad de construir partido y bases campesinas; el MIR desde el foco y S L como requisito de las acciones militares.

5. La búsqueda de formas más adecuadas para conducir el apoyo campesino.

6. La observación de las dificultades de penetración en las zonas alto-andinas que albergan a los campesinos más atrasados.

7. La necesidad de crear o recrear mitos y símbolos positivos.

8. La preparación de los combatientes para actuar en los tres tipos de espacios ecológicos: costa, sierra y selva.

9. Desconfianza relativa en algunos sectores sociales: comerciantes, pequeños terratenientes, autoridades políticas locales y agrupaciones religiosas como los protestantes.

10. La andinización del partido, entendida como integración a la población indígena, conocimiento del medio en todos sus aspectos, quechuización del militante. Todo ello en un prolongado proceso.

c. La Rebelión Campesina: 1958-1964 y Hugo Blanco.

No es posible entender los movimientos sociales aislados de la formación social y de su condicionamiento histórico. En nuestro caso surgen dificultades al enfrentarnos a una sociedad en desestructuración, descomposición de la formación socioeconómica anterior y constitución de una nueva.

El movimiento surge en un medio en el cual las relaciones políticas estaban insuficientemente desarrolladas, al que se incorporan partidos políticos con pretensiones de modernidad que en la mayor parte del proceso se enfrentan entre sí, mientras los campesinos continuaban su estrategia -menos consciente y poco madura- basada en el antagonismo de clase contra la explotación feudal y en defensa de la autonomía de la hacienda campesina. Dicho movimiento estuvo determinado fundamentalmente por las condiciones regionales, pero también por reacciones comunes al orden feudal en el mundo rural y particularmente andino.

Se trata de un movimiento colectivo que buscaba trastocar el orden económico-social y político en un área geográfica determinada, primero mediante la lucha por reivindicaciones y, después, por una transformación radical. Es un impacto discontinuo, un acontecimiento cuya eficacia depende o no de su adecuación a las tendencias de la dinámica estructural (52).

La causa estructural se encuentra en la

(52) Pierre Vilar, Introducción al vocabulario histórico, Grijalbo, col. crítica, Madrid, 1980, p.47.

incapacidad de las instituciones feudales locales y regionales para responder satisfactoriamente a las nuevas necesidades sociales. Esta contradicción se expresa en los obstáculos sociales y políticos contra las expectativas creadas por los cambios económicos.

Como afirma Lechner:

"Más plausible es interpretar la contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción también como una lucha de los hombres acerca del orden social existente. Una lucha que surge de la contradicción de la vida material (inadecuación entre necesidades y satisfacciones), pero que deviene contradicción sólo en cuanto grupos sociales, anticipando un buen orden, cuestionan y se oponen a la dominación vigente. Es decir las contradicciones materiales se constituyen como tales solamente a través de la conciencia que adquieren de ella los hombres" (53).

El conflicto en el modo de producción había reaparecido con una forma y ritmo de desarrollo que dependía del sistema político y las relaciones político-sociales, de las fuerzas insurgentes y sus alianzas, de la experiencia política acumulada por las masas. No llegaba a configurar una situación revolucionaria.

(53) N. Lechner. et al Movimientos populares y alternativas de poder en Latinoamérica, 1980, p. 258.

Si bien se habían exacerbado las contradicciones de clase, las dominantes -a pesar de sus grietas- continuaban gobernando con el apoyo norteamericano. Las masas no se habían lanzado a la lucha política: eran principalmente campesinos desvinculados de la ciudad y el acontecer político nacional.

El movimiento consigue unir distintos ritmos del desarrollo histórico: el del campesinado quechua, la acción del capitalismo y los intereses inmediatos del campesinado que exaltan la comunidad y definen con sus luchas el ritmo de desarrollo del capitalismo.

Estas luchas implican, en la práctica, el cambio del hombre y sus circunstancias; en lo teórico, la construcción de conceptos adquiere historicidad.

Von Clausewitz establece una distinción -desde la perspectiva del combate militar- entre estrategia y táctica, que nos parece asimilable al examen del enfrentamiento social y político (54). La táctica es para él la preparación y conducción individual de encuentros aislados, y la estrategia es la combinación de unos con otros para conseguir los objetivos de la guerra. De este modo el movimiento campesino puede verse como un conjunto de acciones concretas, tácticas, que van conformando una estrategia reformista.

La táctica determina la línea de conducta de los sujetos sociales en conflicto durante periodos cortos, de

(54) V. Clausewitz, De la Guerra, Diogenes, s/f, México, pp. 76-77

ascenso o reflujó del movimiento, en términos de formas de lucha y organización, consignas, combates, campañas. La táctica es parte de la estrategia, que hace alusión a los objetivos y por tanto a la dirección del golpe principal en una etapa determinada del enfrentamiento.

Si explicamos el movimiento a partir de sus expresiones concretas, viendo a los actores constituirse en sus relaciones sociales, conociendo la capacidad del campesinado y semiproletariado para autorepresentarse: creando, desarrollando, homogenizando, generalizando y consumando la contradicción con sus enemigos fundamentales, encontramos lo siguiente:

1. El origen del movimiento social se encuentra en la crisis de la modalidad productiva y de la situación de los arrendires (*) provocada por los incentivos del mercado en la hacienda terrateniente y su economía campesina.

2. Las acciones tácticas del movimiento campesino van configurando, en la práctica, una estrategia reformista burguesa. La combinación de los enfrentamientos aislados consigue acelerar el resultado lógico de tendencias previas mediante la intervención institucional del Estado, que ejecuta una reforma agraria burguesa. El sindicato, como medio limitado del enfrentamiento social, crea ese punto de partida reformista estableciendo sin embargo una situación, relaciones y condiciones para el enfrentamiento social.

(*) Arrendatarios de los Valles de La Convención y Lares que se levantaron en contra de los restos feudales.

3. La conducción del movimiento social en el momento táctico más significativo no toma en cuenta las leyes objetivas del proceso revolucionario, esto es, la situación de las masas y la naturaleza del poder estatal. Sus planteamientos programáticos fueron confusos, y entre los distintos niveles de dirección primó el dogmatismo en los principios y el voluntarismo en la acción.

Esta actuación obedecería a la desigual relación entre factores objetivos y subjetivos y a la pretensión de imponer a las masas la idea de la revolución pensada como acciones rectilíneas de grupos y no como actividad de las masas. Hubo abuso de la frase revolucionaria y desprecio por la teoría. El programa superaba las fuerzas sociales que lo respaldaban, divorciándose la dirección de los intereses concretos.

El comportamiento político del Partido Obrero Revolucionario (POR) y Blanco, por su carácter de clase y sus orientaciones, expresa una perspectiva reformista. No tuvo en cuenta las particularidades de la situación histórica, con lo cual provoca una escisión entre estrategia y táctica y pierde el rumbo político general en aras de un éxito parcial.

Su práctica política fue reformista y en esa medida construyó su propia derrota; esto tendría su origen en una línea política que no valoró la etapa objetiva del desarrollo del país, la naturaleza clasista y unitaria del

poder del estado, la situación del imperialismo en el país y la correlación de fuerzas. Sin embargo, la adecuada comprensión de la realidad regional por uno de sus líderes les permitió ejercer en la región una eficaz dirección política-táctica, fusionarse con las masas y conducir las a una nueva postura. La ausencia de una línea adecuada los habría obligado a una pérdida de movilidad política y a descender al nivel de las masas.

4. Dado un régimen productivo que ha generado contradicciones en la estructura económica, sostenemos la hipótesis de que el movimiento campesino se orienta en el sentido definido por el Frente de Izquierda Revolucionario (conducido por Hugo Blanco), sólo en la medida en que sus intereses se encuentran representados por esta organización en la lucha por la tierra, cualquiera que sea la forma que adopte ésta: institucional o extrainstitucional. De esta manera tenemos que:

a) el contenido estratégico de la orientación del Frente de Izquierda Revolucionario (FIR) -programa de transición- poder dual, insurrección no será compartido por las masas campesinas y semiproletariado, b) en la medida en que aparezca una reforma agraria que dote de tierra a un sector del campesinado, aunque solo lo haga formalmente, será capaz de orientar la acción campesina a una acción institucional, c) para tal efecto la acción estatal tenderá a generar instituciones que amplíen su estructura política

dando cabida a las demandas campesinas, a través de sus distintas representaciones. Para que ello ocurra será necesario un Estado autoritario que se coloque sobre los intereses terratenientes y liquide los intentos de autorepresentación campesina.

5. Dado el carácter táctico de la alianza entre el campesinado y el FIR, los enfrentamientos que orientan la acción del Estado hacen retroceder a los terratenientes pero el carácter de la lucha no asume la forma de violencia generalizada que tienda a resolver la contradicción hacendados-campesinos. Los enfrentamientos asumirán formas institucionales: mítines, huelgas, paros, oposición y no acatamiento de mandatos judiciales, reclamos, huelgas de hambre, movilizaciones, ocupaciones de tierra, etc. Para que ello fuera posible concurren dos elementos: a) las relaciones preexistentes, donde el arrendire controla la fuerza de trabajo y, de facto, la tierra; y b) que la ocupación de esas tierras fue el origen de los primeros conflictos, expresados gruesamente en los intentos de desalojar a los arrendires.

-Éxito o fracaso? Esta es una interrogante que se hacen y responden los actores.

Para Hugo Blanco y el trotskismo fue un fracaso, para los arrendires un éxito, y para los campesinos pobres y "habilitados" (*) una derrota.

Si quisiéramos ver el movimiento en esos

(*) Trabajador eventual, sujeto a rentas feudales.

términos, tendríamos que hacer un recorrido histórico de su continuidad por las nuevas fuerzas sociales y políticas y evaluar sus perspectivas revolucionarias a corto y largo plazo, lo cual excede los objetivos de esta investigación. Más bien veamos sus aportes y resultados como una gran experiencia de lucha campesina. Este movimiento significó el inicio de una extensa experiencia colectiva de renovación ideológica antifeudal, fundada en la participación indígena-campesina. Demuestra que la transición al capitalismo se resuelve por la lucha de clases en su modalidad local; resume lo universal y lo particular con todos sus antagonismos dando respuesta a su especificidad, a lo concreto histórico y a su diversidad cultural. En ese sentido, la ortodoxia de Blanco es dogmatismo matizado de una rica heterodoxia recogida de la realidad. Significa también el ingreso del mundo rural a la vida política del país, mostrando una forma incipiente de materialización de la alianza obrero-campesina expresada en el plano orgánico, más que en lo ideológico y político.

Las coincidencias del campesinado fueron principalmente con la táctica del PCP y el FIR no sólo por su interés en conquistar la tierra, sino porque Blanco no contaba con una estrategia de poder donde el campesinado jugara un papel decisivo.

De ahí que tal alianza no tenga profundidad revolucionaria en una perspectiva popular o socialista. La

participación estudiantil es una expresión de la campesinización de la universidad: el movimiento campesino orientó al conjunto de los universitarios hacia la búsqueda de posiciones revolucionarias. La lucha por la tierra el aprovechamiento de formas comunales va acompañada de un liderazgo campesino "mediado entre el ritmo del universo rural y las disonancias criollas occidentalizadas." (Neyra, 1968)

El balance visto microespacialmente puede ser considerado positivo en el aspecto socioeconómico y con limitaciones en lo ideológico; pero en el contexto político y por tanto nacional, y en el aspecto gremial, los resultados son negativos. La solución al problema de la tierra no sólo es coyuntural sino sectorial y parcial, abarcando un reducido sector social.

Los partidos quedan disueltos a la zaga, la CCP no se fortalece por la creación de la Federación Provincial de Campesinos de la Convención y Lares y la Federación de Campesinos de Cusco (FDCC). En lo micropolítico es una minirevolución democrático-burguesa. Se produce una síntesis entre el campesino y el político que pretende ser revolucionario, constituyéndose un sujeto político de nueva estirpe.

Intentemos hacer una breve evaluación. El movimiento campesino consigue transformar parcialmente las relaciones de propiedad, rompiendo con los obstáculos que

frenaban el desarrollo del capitalismo. Las formas de lucha fueron estrictamente reformistas, aunque se hayan usado algunas tácticas de violencia. A tal punto predominaron las tendencias del desarrollo objetivo y de las fuerzas productivas que Blanco reconoce las invasiones como fuera de lugar: "Invasiones: sería un triunfo no utilizar todavía las invasiones de colonos (de comuneros si) hasta uniformar y extender lo más posible la lucha. Ese fue uno de nuestros defectos" (55).

Con el movimiento campesino se desarrolla la burguesía y crece la producción exportable generando divisas que son utilizadas para el desarrollo industrial del país. El capital comercial y usurario sufre transformaciones.

Mejoran los niveles de ingreso del campesinado y con él crece el mercado interno. Se desarrolla la técnica y mejoran las condiciones de transporte y de intercambio, así como las condiciones materiales y espirituales de vida campesina. Sin embargo tales cambios son casi imperceptibles: a) continúa la explotación terrateniente aumentando la porción de trabajo asalariado; b) los terratenientes se unen los arrendires y nuevos capitalistas; c) disminuyen las relaciones precapitalistas pero no son erradicadas; d) Crece la dependencia del campo respecto a la ciudad y de la burguesía.

A la vez que despierta en las Fuerzas Armadas su

(55) Hugo Blanco, De obrero a campesino, Diario del POR, Lima 1963.

interés por los problemas sociales, el cual va de la mano de nuevas formas de contrainsurgencia, aprende a leer la sociedad y a resolver las crisis de hegemonía, y no sólo legaliza cambios en la propiedad sino que programa nuevas reformas más profundas.

En términos militares, los resultados de la rebelión fueron desastrosos para el campesinado y para Blanco: la guerrilla fue liquidada, las milicias no pudieron defender las tierras ocupadas y las movilizaciones de masas perdieron su eficacia. Hubo mucho derramamiento de sangre campesina y centenares de dirigentes apresados.

Los arredires continuaron en la dirección de la FPCC y L. Desde allí priorizaron la acumulación sobre los intereses del resto del campesinado. Paralelamente al desarrollo del cooperatismo, se perdía el interés por el sindicalismo.

El POR y el FIR quedaron desarticulados, mientras que el Partido Comunista Peruano retoma la dirección del campesinado. Blanco es abandonado por las masas. El campesinado retrocede a la vez que crece su desconfianza por Blanco (especialmente entre el campesinado medio y pobre).

Entre el campesinado no beneficiado (campesinos pobres y semiproletarios), pero con expectativas y conciencia desarrollada, se crean excelentes condiciones para el trabajo revolucionario. Blanco se equivoca nuevamente cuando dice: "Los campesinos de la Convención son

en grado elevado pequeño-burgueses, todas las futuras rebeliones indígenas tendrán lugar en la Sierra y no en la Convención" (56).

La falsedad de esta apreciación lo demuestra la guerrilla del MIR bajo la conducción de Luis de la Puente Úceda. El MIR, en 1965, había construido el mínimo de partido que en su concepción se requería para iniciar la lucha armada y tenía el control de la FPCC y L. Ambas cosas gracias a las condiciones creadas por Blanco y el FIR, como lo reconoce el guerrillero Gadea, incluida la dirección central del MIR al evaluar las guerrillas. Estos sostienen que de no haber abortado el movimiento guerrillero la lucha armada hubiera contado con amplio respaldo del campesinado convenciano.

La experiencia miliar del FIR y Blanco fue sistematizada por De la Puente y el MIR, quienes reconocieron que la sindicalización y las milicias inscritas en una estrategia de poder podían ser de extrema utilidad. Retomaban la toma de tierras y las milicias como forma de selección de cuadros militares (57).

Un movimiento que en sus albores dudaba entre la integración y la revolución, termina rompiendo las tensión al aceptar temporalmente la primera opción.

Después de la experiencia mirista, de los cambios en sus intereses materiales y del avance de nuevas fuerzas

(56) Henry Landsberg, The Peasant Movement of La Convención, Londres, 1969, p. 284.

(57) L.de la Puente, Folleto, Lima, 1968, p.40.

políticas, la ambigüedad y la oscilación campesinas serán problemas permanentes. Los partidos y sindicatos no olvidarán la existencia del poder del Estado, lo cual contribuiría al desarrollo de posiciones exclusivamente antiestatales.

Los sindicatos, conociendo su experiencia anterior, actuarán con mayor objetividad y provocarán una tensión en los partidos. La contradicción entre partido y revolución busca una salida.

d). El foquismo.

Esta parte será examinada exclusivamente con base en la obra de Letts Colmenares (58), que identifica tres movimientos armados foquistas: 1) mayo de 1962 en Jauja, departamento de Junín; 2) 1962, en Puerto Maldonado departamento de Madre de Dios, y 3) 1965, guerrillas del MIR en tres ámbitos.

1) Jauja, mayo de 1962. En Jauja se da el primer intento militarista de origen foquista con poca significación política, aunque mayor que el de Huacrachuco, que dejaremos de lado. En Jauja un individuo trotskista, proveniente del POR, compromete a un oficial de la Guardia Republicana, algunos dirigentes campesinos y a un grupo de estudiantes secundarios para que agrupando algunas fuerzas locales tomen la cárcel, desarmen a los soldados y con esas armas se equipen los insurrectos. Con el asalto a dos

(58) R. Letts Colmenares, La izquierda peruana: organizaciones y tendencias, Mosca Azul, Lima.

bancos poseían todos los elementos humanos y materiales para crear el foco en la selva central.

El núcleo revolucionario crearía las condiciones -que aún se requieren- para desatar la lucha revolucionaria. La vulgarización de lo acontecido en Cuba, aún deformando los hechos en aras de ponderar la heroicidad del grupo encabezado por Castro, condujo a este tipo de acciones que concluyeron con la muerte del oficial Vallejo, el asesinato de Mayta y el encarcelamiento del resto. Este hecho "militar" será retomado por Mario Vargas Llosa para desacreditar el movimiento guerrillero actual (59).

2) Madre de Dios. Articulada al movimiento campesino dirigido por Blanco y el trotskismo latinoamericano, en mayo de 1963 una "vanguardia táctica" de 35 hombres ingresa por Brasil hacia La Convención y Lares, y se arma en Bolivia con el objeto de desarrollar el plan estratégico-táctico de apoyar militarmente las milicias campesinas del Frente de Izquierda Revolucionario. La avanzada de seis combatientes se encuentra con la policía y sostiene un enfrentamiento donde muere el poeta Javier Heraud y cae herido Alain Elías. Retroceden a Bolivia para desde allí reingresar con el nuevo nombre de Movimiento 15 de mayo -en clara alusión al movimiento cubano 26 de julio-. Más tarde cambiará de nombre por Ejército de Liberación Nacional (ELN). Su mayor inserción en el movimiento de masas y desarrollo potencial militar táctico

(59) Mario Vargas Llosa, La historia de Mayta, Seix Barral, España.

lo diferencia de los grupos precedentes y de sus propios antecedentes, pero mantiene las limitaciones foquistas y el voluntarismo espontaneista sin aspiraciones nacionales a pesar de su relación con el movimiento trotskista.

La experiencia trotskista, como hemos visto, sufría de rupturas iniciales entre el aparato político internacional y nacional, entre estos dos y el aparato militar, y el conjunto del equipo con el movimiento de masas.

El obrerismo trotskista nace "de la mano" del foquismo pequeño burgués, pues ambos son tendencias del mismo sector de clase. En los dos casos descubierta la avanzada militar queda fracturado el movimiento

Hoy el foquismo ha sido superado; mientras que el trotskismo con su sustento doctrinario "obrerista" persiste en su viejo esquema defendido por Blanco: sindicato, agitación armada, movilización de masas por el proletariado, poder dual, ocupación de haciendas, gestación de los grupos de autodefensa y, finalmente, la constitución de milicias móviles. En 1982 Blanco exige que el PC adopte tal esquema para recibir su apoyo.

3). El movimiento mirista. Corresponde al momento en que la izquierda incorpora programáticamente el problema agrario entendido como lucha antifeudal y antiimperialista, abandonando el espontaneismo y la dispersión orgánica. El APRA Rebelde, formada por

disidentes de esta organización junto con sectores del PC y el FIR, desarrolla movimientos que son el colofón de la gran movilización campesina andina del segundo semestre de 1963 (y que llegó a comprometer a más de medio millón de campesinos e inmensos territorios de haciendas).

Luego de dos años de preparación, el MIR a través de su secretario general Luis de la Puente Uceda anuncia desde el campamento de la guerrilla "Pachacutec" en la zona de seguridad "Illari Chaska" el inicio de la guerrilla. Esta convocatoria conmovió a toda la izquierda: el FIR lo acusó de aventurero, el Partido Revolucionario Obrero-Campesino (PROC) se dividió en dos fracciones -una devino terrorista y la otra se disolvió y se incorporaron algunos de sus miembros a la guerrilla-, Vanguardia Revolucionaria (VR) propuso respaldo con reservas tácticas, el PC inició el debate del problema militar, mientras que la derecha se preparaba para dar una contundente respuesta.

El MIR, al colocar a las ciudades en la última etapa de su estrategia, se ve obligado a exagerar la propaganda y postergar la coordinación revolucionaria. Tres eran las zonas guerrilleras diseñadas:

- a) La Convención y Lares, con la guerrilla "Pachacutec" bajo la dirección de Luis de la Puente Uceda;
- b) Concepción, en Junín, con la guerrilla "Tupac Amaru", jefaturada por Guillermo Lobatón Milla;
- c) Ayabaca en Piura, bajo las órdenes de Fernández Gasco.

A fines de 1964 acuerdan iniciar la acción armada de acuerdo a las condiciones regionales concretas y el 9 de junio de 1965 la guerrilla "Pachacutec" inicia las acciones tomando la hacienda "Rumantullo" y la mina "Santa Rosa", donde expropián 41 cajas de dinamita, asaltan dos puestos de la guardia civil, toman la hacienda "Coto-Villa" -en Huancavelica- y emboscan una patrulla policial.

La violencia espontánea se generaliza en la capital y la guerrilla del sureste andino se prepara para unirse a la acción. El 14 de julio las Fuerzas Armadas cuentan con autorización formal para la lucha antiguerrillera en todos los frentes bajo una dirección centralizada, en caso contrario proceder al "golpe" militar. Belaúnde Terry accede a lo primero y el parlamento se pronuncia por la pena de muerte y por la emisión de bonos con valor de 200 millones de soles para combatir la subversión. Desde ese momento todo combatiente capturado es fusilado o simplemente asesinado.

Con acciones militares de cerco y aniquilamiento son ocupadas las áreas guerrilleras y destruidas las "zonas de seguridad". Estas últimas son bombardeadas con explosivos nalpalm y ocupadas por paracaidistas.

Con un triple cerco las fuerzas contrainsurgentes logran arrasar la guerrilla. Los cercos son móviles y permanentes. El establecimiento de aldeas estratégicas es acompañado por el uso de campesinos para lograr información

y destruir -con sus propios cuerpos- los campos minados. Al finalizar septiembre de 1965, el ELN entra en combate con una guerrilla móvil. Desde los andes de Ayacucho, acercándose a la guerrilla "Tupac Amaru", pretenden abrir un nuevo frente y dispersar al enemigo. Acción tardía, ya que a fines de octubre la guerrilla era derrotada y asesinado Luis de la Puente Uceda.

En la ciudad de Lima del MIR coordina acciones con el PCP "Bandera Roja" y el ELN, actuando en hechos urbanos y constituyendo un comando de coordinación que incluía a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN). La ausencia de una línea correcta, su escasa articulación con las masas y el aislamiento de las organizaciones participantes los llevaron al fracaso.

Asesinados Lobatón y Velando como presos de guerra en diciembre de 1965, capturados Béjar (jefe del ELN) y Gadea (dirigente del MIR) sólo quedó un conjunto de cuadros y militantes de ambas organizaciones en la espera de una próxima oportunidad.

El error fundamental del foquismo fue considerar al campesinado como "carne de cañon" y no como una fuerza revolucionaria fundamental en la revolución, una fuerza social con probado potencial revolucionario. Tal error proviene de la incomprensión del problema agrario y la ausencia de una construcción teórica que explique su entronque con la semicolonialidad, su subordinación al

imperialismo -en este caso norteamericano-. La agricultura, como el conjunto de la economía, viene integrada a la "matriz de acumulación internacional, controlada fundamentalmente por el capital financiero cuya base se encuentra en los países imperialistas" (60).

De esta relación, Wolff deriva las distorsiones y la desarticulación grotesca del agro. El capital financiero desarrolla ciertos cultivos, crianzas y agroindustrias, mientras que otros subsectores se estancan. Inclusive los subsectores precapitalistas se mantienen en el circuito de circulación y acumulación. De la interacción entre las relaciones subsistentes de la Colonia y este marco de acumulación surgen complejas y variadas relaciones de producción que incluyen extensas y diferenciadas áreas étnicas.

Al mismo tiempo, estas relaciones "reproducen y consolidan" las variadas relaciones feudales de producción, de las que puede derivarse la violenta resistencia del campesinado. El foquismo que surge de estas contradicciones no logra, a su vez, explicarlas e interpretarlas.

En segundo lugar, las organizaciones guerrilleras contaban con establecer un frente con los partidos reformistas, a pesar de que ninguna de ellas lo expresara así en un proyecto político. Tampoco se descartaba la posibilidad de aliarse con partidos demoburgueses. En este tipo de alianzas cifraban su potencial fuerza política.

(60) Lenny Wolff, en el semanario El obrero revolucionario, núm. 357, E.U. 1986.

En lo político militar, las bases campesinas de apoyo o grupos tácticos son consideradas por sus funciones estrictamente militares y no como masas políticamente movilizables que sirvieran de "baluartes militares, políticos, económicos y culturales de la revolución, desde donde luchar contra el fiero enemigo" (61). Las bases de apoyo en la concepción maoísta son diferentes, puesto que constituyen el establecimiento del poder político y la politización de masas por la vía armada, adquiriendo así un carácter estratégico. Prefirieron los enfrentamientos decisivos a la lucha armada, y relegar la necesidad de construir zonas de poder político. Lo político y lo militar se convirtieron en hechos excluyentes. Del mismo modo tampoco entendieron la interrelación político-militar entre la concentración y la división. Los éxitos militares de tanta espectacularidad no fueron elementos movilizadores de las masas. Sus reservas campesinas, debido a su atraso político, terminaron por ser reservas de información para las Fuerzas Armadas.

El desprecio de lo político se puso también de manifiesto en el rechazo a los comisarios políticos, a las escuelas de formación de cuadros político-militares, incluso al propio partido, cuando éste debió ser la vanguardia en los variados aspectos de la lucha revolucionaria.

Lenny Wolff enumera algunas de las tareas descuidadas por este tipo de organizaciones militares:

(61) Ibid.

análisis de la situación internacional y de clases, un programa y estrategia revolucionarias, educación de las masas en cuanto a los objetivos y vías que conducen a la victoria. En síntesis, no preparó a las masas para asumir el poder político, negándoles los instrumentos teóricos de su emancipación y las bases para lograr una relativa autonomía en acciones político-militares. A lo máximo que podía llegar un movimiento así era provocar una crisis en el seno del régimen político, trastornar la sociedad y esperar la posibilidad de establecer un gobierno de coalición.

En todo este proceso las masas se toman como objetos manipulables por una élite (62). Para el foquismo son irrelevantes los obreros, campesinos y estudiantes como sujetos que merezcan un profundo tratamiento, y prefieren dejarlos ubicarse espontáneamente en el proceso de lucha.

El pueblo visto como una "esencia" revolucionaria estaría listo para acudir a su convocatoria y realizar una revolución agraria e insurrecciones en las ciudades.

La adaptación de las "zonas de seguridad" como elemento exclusivamente militar donde la guerrilla quedaba inmovilizada alrededor de ella, es un subproducto de esta concepción vanguardista que arriesgaba la seguridad que debe tener la dirección, los cuadros y toda la organización. En un solo acto táctico, en una tarea que formaba parte del establecimiento de las zonas guerrilleras, ponían en peligro todo el proceso.

(62) Wolff, El obrero revolucionario, núm. 358.

IV. EL PROBLEMA NACIONAL Y COLONIAL: Dos Proyectos Antagónicos.

Los elementos constitutivos de la nación surgen de la historia. En el Perú, sólo en las últimas décadas aparece el modo nacional de organización correspondiente al desarrollo capitalista y a la subjetividad del momento nacionalista en las clases medias y el naciente proletariado, expresado orgánicamente en el APRA y el PC. Es una selección integracionista que implica la elección de la comunidad social determinante de la nación en su perspectiva clasista, en su doble significación, como sujeto seleccionador y objeto a elegir.

Las bases objetivas, o "modo nacional de organización" (63), se muestran con la presencia de una estructura general de dominación y lucha que provoca la integración social

Los requisitos deben existir para que aparezca el debate sobre la nación en su dimensión moderna:

Por un lado, será necesario que aparezcan las ciudades, el transporte, el comercio, la industria, el mercado nacional, el proletariado y los gérmenes del Estado moderno.

Por el otro, una transformación social bajo la forma de una "red de intercomunicaciones sociales, políticas e ideológicas", que confluyan en la sociedad civil constituida como ciudadanía (64).

(63) José Ramón Recalde, La constitución de las naciones, Siglo XXI, España, 1982.

(64) Ibid., pp. 9 y 55.

Así queda superado el debate oculto por el hispanismo-indigenismo, como ideologías étnico-clasistas, adquiriendo fondo y contexto las ideologías de clase.

La nación no ha sido construida por las clases comprometidas con ello; la acción de transformar la base económica y social demanda una renovación democrática que altere y configure un modo nacional de organización. Dos proyectos se enfrentan en la construcción nacional: El Conservador-oligárquico con su escuela aprista y el Revolucionario Mariateguista.

La oligarquía y la burguesía han elaborado una identificación de nación con conciencia popular abstracta, un organismo colectivo e histórico donde se diluyen etnias y clases. Su expresión suprema es la Doctrina de Seguridad Nacional. Cuando el APRA sostiene que existen regiones o áreas sin Estado, en realidad propone que la nación fundamental debe ser totalmente absorbida por el Estado y eliminado el pueblo de la construcción de la nación y la nueva politicidad.

En oposición la alternativa revolucionaria (65) propone la construcción de la hegemonía orgánico-política y programática de clase, generalizándola como sentido común con base en la consideración de que el hombre es capaz de descubrir la lógica y la ética de su propio sistema político

(65) Nos referimos a los Partidos Comunistas (Sendero Luminoso y Puka Llacta) como a otras agrupaciones políticas que desde 1980 se deciden al combate revolucionario.

y por tanto de construir la nación como voluntad nacional-popular. Esta propuesta no puede ser etnocentrista y sobrevalorar la diferencia de un sector de la comunidad "portadora de lo nacional", como lo planteó y realizó la oligarquía, que jerarquizaba autoritariamente sus valores, autoproclamándose "esencia de lo nacional", sino que al reconocer la multiétnicidad y la autodeterminación étnica y popular los acepte como base de igualdad.

Hasta hoy el nacionalismo oligárquico ha absolutizado los rasgos hispánicos, lo "misti" -blanco-, sobre una realidad histórica que, aunque ellos contribuyeron a construir, hoy no la reconocen. El Estado de derecho y la legislación se convierten en constructoras de la nación.

Para la ideología liberal, la razón construye al pueblo y crea el contrato social. El espíritu popular expresado en una historia común, lengua, cultura, costumbres y derecho se realiza, en el Estado, como forma pública de la nación. Una expresión es el proyecto aprista -el mismo de las Fuerzas Armadas- y consiste en realizar coercitivamente la nación en el Estado.

La concepción marxista de nación postula la creación de la nación por el proletariado y el pueblo con una orientación internacionalista. Su base social es la conjunción clase-etnia, nación-pueblo, que hegemonice desde abajo las condiciones materiales y espirituales de vida, así

como las relaciones de producción que no pudo lograr el capitalismo y la burguesía.

El pueblo ligado por tradiciones, costumbres, cultura y lengua -con sus diferencias-, mantiene su carácter unitario luego de la inacabada destrucción del feudalismo colonial. El proletariado supera posturas nacionalistas y se dirige a una revolución democrático-nacional internacionalista que subordine las aspiraciones nacional populares.

En un proyecto así, el proletariado, en alianza con otras clases y sectores populares, se constituye en elementos de la nacionalidad, en clases y sectores nacionales, y en el poder crear la nación. En el periodo imperialista la afirmación nacional adquiere un carácter liberador e internacionalista.

En el Perú, cada vez se comprende más la relación entre el proceso histórico que sintetiza el neocolonialismo étnico interno y el semicolonialismo del país.

Partidos revolucionarios sistematizan tales antagonismos, convocando al proletariado con su específico proceso de configuración, al pueblo trabajador que incluye otras clases -inclusive con ideologías no proletarias-, y al pueblo nacional, que además de las clases articula el problema étnico.

La integración, la igualdad étnica, la liberación nacional, la democracia, el internacionalismo, son problemas

inseparables entre sí, y en el proyecto de construcción nacional se incluyen en el programa e ideología nacionales. Su concreción significa la organización armoniosa del sistema social y una gestión política democrática que construya el campo comunitario con eficiencia económica administrativa. La construcción de la nación es la continuación del proceso objetivo contenido en los rasgos del modo nacional de organización. Las luchas espontáneas o políticas para realizarla, el desarrollo de la autoconciencia y la extensión de la soberanía popular implican la lucha por el poder político.

La desintegración nacional obedece a la coexistencia, bloqueada entre sí, entre un modo de producción dominante -capitalista- y los modos precapitalistas; además porque la acción política no llega a absorber los cambios en la base económica.

Compatibilizar la afirmación de varias comunidades nacionales a las que pertenece una persona hace entrar en crisis al Estado. El proyecto aprista afianzando a las clases dominantes, trata de superar estas contradicciones por un lento camino evolutivo, como ocurrió en Europa al oprimir a las minorías nacionales. Como afirma Mariátegui: "la nación vive en los precursores del porvenir mucho más que en los superstites del pasado" (66).

Para él sin el indio no hay peruanidad posible,

(66) José Carlos Mariátegui, Peruanicemos el Perú, pp.72 y 55.

en tanto es el problema primario del país. El campesinado es la base de la cuestión nacional al concentrar el problema del indio y el agrario, dominando todas las otras cuestiones del problema nacional. Mariátegui rechaza colonialismo, hispanismo, perricholismo, pasadismo, calificándolos de lacras hispanistas.

La Independencia y la República, que no anulan la realidad social feudal ni el espíritu hispanista, están en nuestra tradición más liberal que democrática. Su proyecto socialista incorpora la nación de indios en un frente indigenista y clasista antihispanista, sintetizando economía e historia cultural.

Mariátegui se opuso al hispanismo que afirmaba la superioridad de la cultura hispánica y valoraba lo indígena de forma histórico abstracta, en algunas formas mestizas concretas -en cuanto provienen de lo hispánico- y en la práctica cotidiana en el etnocidio.

Si bien es cierto que la población nativa asimiló elementos de la cultura española, también lo es que defendió su integridad, eligiendo elementos de aquella cultura con gran flexibilidad.

El indigenismo es la puesta del indio en escena, como problema social y no político. Intelectuales progresistas y literatos abandonan la idea del indio como ser degenerado, lastre y origen del atraso del país, humanizándolo. Y Mariátegui es la superación de todos

ellos, haciendo resurgir de la historia un proyecto democrático nacional.

Las ideas acerca del indio provienen de la ideología colonialista hispánica acerca del pueblo nativo. Desde los conquistadores se busca destruir, desintegrar a partir de las contradicciones internas del mundo andino, para facilitar la fragmentación reparto y explotación genocida. La colonización establece una ruptura con la vieja economía, un recorte de la influencia de los curacas medios, la proliferación de los yanaconas -intermediarios del poder nativo-, con el objeto de crear el nuevo sistema colonial (67). Empero la resistencia duró siglos.

En un primer momento, la castellanización fue acompañada del uso de lenguas americanas y la persuasión evangélica; luego, en 1562, se inician las "visitas de idolatrías", que coinciden con la campaña contra el "Taki Oncoy".

En 1575, el quechua, el puquina y el aymara fueron declarados por la corona "lenguas habladas" por los indios. Se permitía en las reducciones, para imponerles tributos y forzarlos al trabajo en minas y obrajes, mientras la unidad social trataba de ser reconstruida por los "dogmatizadores".

La extirpación de idolatrías, dirigida contra los indígenas que no entraron en reducciones, era parte de la

(67) Alfredo Torero, El quechua y la historia social andina. Universidad Ricardo Palma, Lima, 1974, pp. 55 y 182.

destrucción de símbolos y otros elementos visibles de unidad social como la proscricción de tradiciones y la obstaculización de la comunicación colectiva.

Elementos como las huacas, momias, quipus, danzas, cantares, instrumentos de sonido convocatorio -cornetas, tambores, pututos-, medicina tradicional y otras prácticas unitarias trataron de ser desterrados. (68)

En el siglo XVII ya se había extendido el castellano y el quechua general, más no el puquina. Alguaciles y fiscales indígenas se adhirieron a los extirpadores en su labor colonial. Apareció la resistencia indígena y la protección de su concepción del mundo, bajo la forma de defensa de sus sacerdotes, purificación, reconstrucción de objetos sagrados, reemplazos jerárquicos en caso de prisión, ocultamiento de nacimientos. Desarrollaron una política "entrista" con la Iglesia católica, actuando en sus rituales, festividades, mitos y actos mágicos. A fines del siglo XVII se había constituido la "nación de indios", o conjunto de ayllus diseminados bajo explotación y dominación colonial. Los movimientos indígenas recomienzan con fuerza en el siglo XVIII y culminan en el movimiento de Tupac Amaru.

Después de la Independencia (1821) se configura un Estado neocolonial en cuanto a sus aspectos etnocidas y semicoloniales respecto a la política colonial de los países capitalistas de Europa. Como señala Jean Piel, fue una

(68) Ibid., p. 194.

continuación de la política colonial, "...durante tres siglos de colonización española. Toda la política de la corona y de la Iglesia consistió en negar jurídica y políticamente esta diversidad étnica, resultado de evoluciones históricas diversas en los andes y en tratar de unificar a fuerza y por leyes, la inquisición o coerción, a la masa de la población andina, subordinándola, necesaria al funcionamiento de la economía y de la finalidad coloniales" (69).

La violencia ilimitada se perpetuará a través de toda la historia posterior y afectará la totalidad de la vida colectiva del país. Esta prolongación también fue ideológica, cada vez más racista y agresiva.

El término "indio" terminó identificando al sujeto cuyos rasgos culturales, para los hispanos o hispanoamericanos, eran idolatría, herejía, infidelidad, estupidez, torpeza, ingratitud, suciedad, alcoholismo, pereza, culto a rituales primitivos... apariencias que en el fondo escondían la resistencia indígena a la servidumbre y a la evangelización.

El blanco se parapeta y vigila desde la ciudad, el indio vive en el campo. Las ciudades, medios de control y vinculación de la vida política y económica, son el reducto de las autoridades, mientras que el campo provee de

(69) Jean Piel, "Aspectos etnocidarios del Estado Neocolonial Peruano, después de la Independencia del Perú" en El etnocidio a través de las Américas, siglo XXI, Editores, México, p. 95.

alimentos y productos primarios y artesanales a la ciudad. En este espacio colonial existe una jerarquizaciónétnico-económica que abarca la apariencia física, la cultura y la división social del trabajo.

La categoría "indio" sólo puede ser entendida bajo el contexto de la dominación colonial, donde el colonizado es ubicado como inferior y diferente en una dimensión totalizante, lo que permite racionalizar y justificar la dominación, aunque aparezca como empresa redentora y civilizadora, incluso para los españoles o sus descendientes (70).

La política indígena liberal postemancipatoria continuará negando la realidad jurídica indígena al tiempo que mantiene o profundiza la dominación neocolonial. La abstracta igualdad civil es lo opuesto a esta realidad. El Estado neocolonial debilita las bases territoriales económicas y culturales del mundo andino, arruina la pequeña producción campesina independiente y comunal.

En la segunda mitad del siglo pasado, el Perú se convierte en una semicolonias inglesa y la violencia mercantil, acompañada de la agresión monetaria, obliga a la economía campesina a salir de la autocracia y el autoconsumo, a la vez que aparece la diferenciación y las desigualdades entre ellos, y con éstas una nueva resistencia campesina en defensa de la reciprocidad.

Terratenientes, indio-caciques y blanco-mestizos

comerciantes y autoridades políticas construyen el gamonalismo.

Los campesinos endeudados, sin tierra, explotados, optan por la subversión o la migración. Entre 1890 y 1930 se acrecienta el latifundio al ritmo de la demanda externa.

El etnocidio se centra en el sur, entre las etnias quechua y aymara -en menor medida en el medio centenar de pueblos selváticos-, y tiene como motivo la constitución del sistema latifundista mercantilizado y semicolonizado por Inglaterra.

Tres son los proyectos indigenistas que comienzan a enfrentarse, dos de ellos etnocidas: el gamonalista provinciano, el centralista-modernizante y el socialista. El último será sistematizado, sintetizado y transformado por José Carlos Mariátegui en un proyecto democrático-nacional integral.

Los centralistas -al igual que las otras corrientes indigenistas- tuvieron distintas vertientes y tendencia: a) el indigenismo oficial impuesto por el gobierno de Leguía, que apenas trascendió una retórica que destacaba las virtudes laborales de la población indígena y que se tradujo en una mayor explotación estatal de ésta en obras públicas; b) el pensamiento ilustrado de derecha, catequístico con el indígena y ético respecto al comportamiento terrateniente y c) el proyecto de la

burguesía agroexportadora que propugnaba integrar el campesinado al mercado a través de la educación, el desarrollo tecnológico y la construcción de vías de comunicación.

Entre los gamonales serranos apareció una tendencia progresista modernizante, en particular quienes recibieron la influencia anarquista, indigenista populista o socialista de los intelectuales apristas o socialistas en las universidades. pugnaron por la "redención del indio" a través de la modernización de la producción campesina, de su incorporación a la economía de mercado, de la introducción de tecnología capitalista y la organización de cooperativas. El vocero que expresaba estas ideas fue la revista Sierra, editada entre 1927-1930 por los intelectuales de origen terrateniente: los hermanos Guevara.

Está, por último, el indigenismo populista de la pequeña burguesía provinciana que a través de la literatura, el arte y la cultura condenó el feudalismo aristocratizante y racista, y revaloró las culturas andinas prehispánicas. Manuel González Prada, Abelardo Gamara, Clorinda Matto de Turner, José Uriel García, Dora Mayer, Pedro Zulen, Luis E. Valcárcel, la Asociación Poro-Indígena y los indigenistas revolucionarios -como Ezequiel Urbiola- son los precursores del socialismo de Mariátegui, quien encuadra el indigenismo en un proyecto de revolución de nueva democracia.

Los primeros proponen "nacionalizar" al pueblo

indígena a través de las leyes, política educativa y cultura, reforma agraria, tecnificación y desarrollismo. Los caciques gamonales, regionales o provinciales más tradicionales optan por una lenta modernización (71) Por último el indigenismo que busca expresar la auténtica identidad nacional, como representación de la redefinición del Perú total, como Estado multinacional, multiétnico, es el de Mariátegui. Su proyecto es panindigenista, que busca identidad y liberación del neocolonialismo étnico y del semicolonialismo externo (72).

Coincidimos con Varese cuando sostiene: "la lógica de las relaciones sociales de estas etnias pueden generalizarse a partir de la antinomia permanente que se da entre el valor de uso y el valor de cambio. Es decir entre los principios que rigen la reciprocidad, el intercambio simétrico y no intermediado por el dinero, la autoridad lograda a partir del gasto dispendioso y derrochador y el progresivo cumplimiento de cargas sociales (los "cargos de autoridad"), la nivelación económica forzosa lograda a través del control social de la acumulación y, por otro lado, todo el conjunto de principios opuestos: los de la acumulación y el ahorro, la inversión, la negación y abandono de la reciprocidad, la acumulación de poder por medios económicos, la sustitución del criterio de autoridad fundado sobre la acumulación de servicios escalonados a la

(71) Jean Piel, op. cit., pp. 103 y 55.

(72) José Tamayo, El pensamiento indigenista, Mosca Azul, Lima, p. 18.

comunidad por el poder y la fuerza" (73).

Son estos cambios uno de los factores que permiten el renacimiento del proyecto mariateguista. Varesse estaría subrayando que el modo nacional de organización se ha venido transformando en el presente siglo al influjo de la dominación semicolonial. Frente a la vinculación de la economía con el mercado se incrementa repentinamente el valor de cambio de los productos campesinos y se inicia la subversión indígena y mestiza, contra las nuevas relaciones de explotación y por la defensa territorial.

Para Mariátegui el problema nacional, en la época del imperialismo, está fundado en la cuestión colonial. La estructura de la economía peruana, su dinámica y que formas de acumulación están sometidas a los intereses y necesidades del imperialismo. Siendo así, el desarrollo capitalista sólo podía profundizar la condición semicolonial del país; aún más considerando el carácter antinacional de las clases dominantes. Como sostiene el autor: "lo nacional, para todos nuestros pasadistas comienza en lo colonial. Lo indígena es en su sentimiento, aunque no lo sea en u tesis lo prenatal " (Peruanicemos al Perú, 1972, p. 73). "dualidad de raza, de lenguaje y de sentimientos nacido de la invasión y la conquista del Perú autóctona por una raza extranjera

(73) Stefano Varesse, "Límites y posibilidades del desarrollo de las etnias indias en el marco del desarrollo nacional", en América Latina, etnodesarrollo y etnocidio, FLACSO, p. 154

que no ha conseguido fusionarse con la raza indígena, ni eliminarla, ni absorberla" (Siete ensayos de interpretación...).

El desprecio de las clases dominantes por el indígena tiene su correlato en la postración de aquéllas ante la cultura occidental y el capital extranjero. Al quedar en la oscuridad las raíces económicas de la discriminación, las expresiones más patéticas del vilipendio y la opresión étnica y de clase aparecen como contradicciones entre la costa y la sierra, el campo y la ciudad, o entre viejos y nuevos asentamientos urbanos.

"Se constata casi uniformemente -señala Mariátegui- desde hace tiempo que somos una nacionalidad en formación... hasta ahora la palabra 'criollo' no es casi más que un término que nos sirve para designar una pluralidad muy matizada de mestizos... El costeño se diferencia fuertemente del serrano. En tanto que en la sierra la influencia telúrica indigeniza al mestizo, casi hasta su absorción por el espíritu heredado de España. En el Perú el criollismo, aparte de haber sido demasiado esporádico y superficial, ha estado nutrido de sentimiento colonial. No ha constituido afirmación de autonomía" (Siete ensayos..., pp. 353-355).

Sesenta años después los señalamientos de Amauta

aún siguen vigentes. Persiste la frustración histórica del Perú como nación que, como vimos surge de la interacción del problema indígena con el problema de la servidumbre y del colonialismo. No obstante, resulta obvio que en seis décadas hayan cambiado las diversas formas que adopta la servidumbre campesina, las contradicciones étnicas y de la clase, y el espíritu colonial hispanizante de los costeos. El desarrollo capitalista y la andinización del país han transformado las contradicciones históricas del Perú como nación en formación.

Para Mariátegui, la subsistencia de la feudalidad no debía ser buscada en las instituciones y formas políticas medievales en la formalidad del Estado republicano y democrático, sino en las condiciones de la vida agraria y su herencia colonial reflejadas de modo decisivo en la práctica política. Así como los intereses terratenientes y el semicolonialismo impidieron la constitución estatal nacional, las bases reales del racismo y de los conflictos étnicos se hallan en la explotación semifeudal del indígena.

La identidad nacional no existe tras más de cuatro siglos de violencia étnica y de clase, colonial y servil, de las mayorías del país. Es una larga historia de violencia cultural, de destrucción de símbolos y valores andinos, de fragmentación de los patrones de uniformidad, de lealtades culturales y de elementos colectivistas. Como resultado, en Perú los miembros de la sociedad no asumen los

valores, normas y lealtades de pertenencia a una sociedad global e integral. Lo que existe son fragmentos culturales, uno occidentalizado y dominante, y otro oprimido y andinizante. Ni siquiera estamos ante una sociedad mestiza integrada, que asuma en conjunto los valores, normas y lealtades de pertenencia a una sociedad global e integral, que reconozca la formal igualdad ciudadana de la política burguesa.

La cultura oprimida viene a ser producto de múltiples agresiones y la penetración occidental. Esta alienación, mutilada y sin posibilidad de controlar las condiciones materiales y espirituales de funcionamiento de su medio social, no obstante como conjunto ideológico, como agregado conocimientos y prácticas diferenciadas, no institucionalizadas y en conflicto con las dimensiones opresivas y elitistas de la cultura dominante, son el fermento de un cambio social.

Para Mariátegui, el capitalismo está incapacitado de solucionar el problema nacional. El socialismo es único camino posible para superar los obstáculos a la desintegración nacional y a la verdadera democracia. El protagonista y cimiento de la nacionalidad en formación será el propio indio. "Una conciencia revolucionaria tardará quizá en formarse, pero una vez que el indio haya hecho suya la idea socialista le servirá como una disciplina, una tenacidad y una fuerza en pocos proletarios de otros medios

podrán aventajarlo (Siete ensayos...).

Una política socialista que aprecie y utilice los hechos sobre los que actúa, para ser realista, debe "convertir el factor raza en factor revolucionario".

Progresivamente, en el siglo XX y con intensidad desde la década de cincuenta, la revolución demográfica andina desintegra parcialmente a las comunidades y desaparecen elementos "hispano-quechua comunales".

La pobreza comunera conduce a la disgregación de siervos de las haciendas se rebelan y los comuneros luchan por reintegrar su territorio. Las relaciones se hacen violentas, la respuesta gamonal-estatal es cruenta.

Las migraciones trasladan a la ciudad violentas experiencias y conforman "los cinturones de fuego de la renovación, de la resurrección, de la insurgencia del Perú profundo". (74)

El desarrollo de la sociedad semicolonial, donde el ejercicio del poder del Estado está en manos de la oligarquía primero y de la burguesía burocrática despues, ha modificado a través de las reformas la estructura económica y las relaciones de fuerza entre las clases.

La política imperialista neocolonial ha modificado la inserción del país en la economía mundial y con ella las relaciones políticas. Esta desestructuración y reconstitución clasista va acompañada de una profunda transformación que desvirtúa aún más las propuestas de las

(74) M. Arguedas José, El indigenismo en el Perú, en Indios mestizos y señores, Lima, p.23.

corrientes utópicas etnicistas, de vuelta al Tahuantisuyo.

Los comuneros y siervos nunca llegaron a ser plenamente católicos; la fe que tenían la han ido abandonando junto con sus creencias tradicionales y han optado por el escepticismo y -en muchos casos- por la insurgencia.

El desarraigo estructural conlleva cambios ideológicos, sin embargo quedan muchos otros elementos comunitarios, laborales y de vinculación social que no han sido desechados o vienen restableciéndose en las conciencias y en la experiencia.

La música y la danza, las artes populares, la lengua, la tecnología, las tradiciones orales, recuerdos de lucha... se vienen integrando a lo valioso de las culturas mestiza y criolla a través de la insurgencia y la fraternidad comunal (75).

CAPITULO II

El desarrollo mundial de las fuerzas productivas ha globalizado ampliamente e intensificado la violencia, destrucción y horror de los mecanismos de recuperación del capitalismo.

R. LOTTA.

PROCESO DE INSERCIÓN DE LA ECONOMÍA PERUANA EN LA ECONOMÍA CAPITALISTA MUNDIAL Y SUS CONFLICTIVAS CONSECUENCIAS.

I. Semicolonialismo y entrabamiento del desarrollo.

En los siguientes dos capítulos veremos cómo los cambios en la dominación colonial, las cíclicas modificaciones del régimen de acumulación y los mecanismos de reproducción del Capitalismo, vienen acompañados de violencia. En el presente capítulo examinaremos los dos primeros procesos y en el próximo los ciclos de expansión y crisis.

La extracción de un máximo de ganancias y rentas por el capital imperialista a través de la inversión directa y empréstitos, las variaciones en el uso de la capacidad instalada industrial, la compulsión a la exportación de materias primas entre otros bienes para que la economía disponga de divisas, las formas de producción semifeudales y la permanente separación del productor de sus medios de producción, son procesos que van preñados de violencia

social e institucional. Y esto se expresa en que el régimen de acumulación semicolonial no ofrece estabilidad en ninguna dimensión de su existencia a tres cuartas partes de la población peruana: 2 100 barriados, 5 000 comunidades campesinas, 1 000 comunidades nativas y millones de desempleados.

Para todos ellos las condiciones de acumulación no permiten alguna certidumbre en el futuro y si indefinición en su absorción urbana o rural, etnocidio, segregación, coerción, hambre y miseria: su identidad se basa en la violencia histórica cotidiana.

Partimos de la idea que supone que los límites de funcionamiento de lo social no son los de la reproducción del capital o del Estado, sino que surgen de la iteracción entre ambos. De acuerdo con esta lógica, la transformación en marcha estaría condicionada por múltiples elementos.

La reproducción del capital depende de las contradicciones de la economía mundial y de las relaciones de producción internas, así como de la intervención del Estado. Esta acumulación a escala mundial es producto y productora de la articulación de estados a nivel internacional y de una codificación particular de las relaciones sociales en el seno de la economía y la sociedad internas.

A a finales de la década del setenta se acelera

el nuevo tipo de inserción de Perú en la economía mundial, cuyo aspecto predominante es la internacionalización del financiamiento que reduce la autonomía de los aparatos productivos y de los sistemas monetarios hasta el punto de que las instituciones financieras internacionales someten las políticas interiores del país, impidiendo que el Estado pueda responder a los procesos de codificación y mediación en los conflictos sociales. La violencia aparece como una constante entre los mecanismos de recuperación capitalista.

La pérdida de autonomía financiera y monetaria es desindustrializante y deslegitimante. A tal punto que el Estado no puede dar una salida a la crisis en función de los grupos sociales que dinamicen la acumulación y al mismo tiempo legitimen al régimen político. La imposibilidad de institucionalizar los intereses hegemónicos internos estará en función tanto de la fortaleza o debilidad estatal, como de la subordinación de la economía interna a los centros imperialistas de acumulación, empezando por el sector más moderno y más asociado al capital financiero.

1. La integración de las trasnacionales a la estructura productiva es constitutiva de la industrialización desde los años cincuenta. Es resultado del desarrollo de la economía mundial en las décadas subsiguientes y de la capacidad de reacción de la economía peruana. Estas empresas no sólo obtienen tasas de beneficio superiores a las empresas nativas, sino que los nuevos

flujos de capital son menores que la salida de capital declarada y oculta. Pero además definen la estructura de importaciones y las modalidades de inversión y financiamiento creando los problemas de endeudamiento y tensiones en la balanza de pagos.

2. Siendo el Estado el lugar en que se cristaliza la necesidad de reproducción del capital en escala internacional, éste determinó que el primero intervenga en la economía creando las condiciones para que se inicien los ciclos del capital en la explotación de materia prima, en condiciones inadecuadas al medio en que se valoran.

La configuración de clases y de los compromisos previos con la economía internacional, así como la coacción de la economía mundial y del propio régimen de acumulación, presionan para invitar al capital extranjero a ocuparse de lo más dinámico de la industria, de las materias primas y para realizar transformaciones agrarias que favorezcan el desarrollo industrial.

En el análisis de la industria, la explotación de materias primas y de los cambios agrarios nos encontraremos con la subordinación de todos y cada uno al capital financiero de los países centrales y la reproducción de las contradicciones que las reformas pretendieron mitigar.

Es así que en el siglo XIX la producción y uso de excedente, que depende y adquiere determinado carácter por

el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y el conjunto de relaciones de producción, tuvo efectos ruinosos en Perú debido a la naturaleza expoliadora del capital mercantil. Con el flujo internacional de mercancías y las exigencias de los centros del capitalismo se reinicia la violencia colonial en todas las esferas sociales. Con la aparición del imperialismo a principios del siglo XX se internacionaliza la producción y las relaciones capitalistas unifican la economía mundial. La acumulación prosigue en un complejo mundial de reproducción, donde la exportación de capital se dirige a la búsqueda de ganancias, imponiendo nuevas normas productivas. La economía peruana aparece envuelta y penetrada por la acumulación imperialista. El tipo de competencia, la especialización desigual y la concentración de poder obligan a que las necesidades y perspectivas de la acumulación imperialista determinen en gran parte los modos de producción y su conservación o disolución.

En este contexto, la existencia de mercados imperialistas, financieros y de capital pueden permitir altas tasas de crecimiento relativo, extendiéndose el capitalismo en una dinámica de expansión y crisis. El capitalismo mundial, por tendencia, socava y transforma las relaciones precapitalistas mediante la capitalización de los factores de producción, al mismo tiempo que refuerza y crea formas híbridas al ser atraídas y penetradas por el

capitalismo. Ello ocurre debido a que tales formas son concordantes con las exigencias del capital, vinculadas a menores costos y a la superexplotación imperialista de la fuerza de trabajo. Asimismo, puede estar asociada a la fuerza que tengan las viejas relaciones o a la mayor adecuación de esas relaciones para una más rápida extracción de valores de uso.

Estos últimos dos casos generalmente se articulan a factores políticos, a las alianzas de la oligarquía o sectores de ella con el imperialismo. Al ser superada su funcionalidad económica o política se convierten en límites para la acumulación, afectando la necesidad objetiva de ampliar y profundizar la base y nivel de producción de plusvalía (cuando se producen movimientos políticos o sociales significativos, estas contradicciones se hacen evidentes).

La capacidad imperialista de transformar, ampliar y racionalizar está conectada a dos factores básicos, la rentabilidad global del capital en escala mundial y a la diversidad de fuerzas a nivel internacional. Dada una significativa redivisión del mundo, el imperialismo puede transformar las relaciones agrarias aunque de un modo desigual dentro de un país y entre países sobre la base de la subordinación y deformación de esas economías. De este modo el imperialismo se opondrá al derrocamiento de relaciones y sus soportes sociales donde no sea previsible o

rentable en la nueva división internacional del trabajo.

En el Perú -como después veremos- existen grandes áreas andinas donde la semifeudalidad tiene considerable importancia, a pesar de que por las exigencias de la acumulación imperialista y de la lucha de clases ha sido atenuada, conduciendo a una agudización de las contradicciones y al surgimiento de movimientos étnico-clasistas cada vez más radicales. Una década de reforma (1963-1973) no logró acabar con la semifeudalidad.

El desarrollo capitalista en Perú se da sobre una base imperialista, con modos precapitalistas involucrados, permeado por los imperativos técnico-económicos del capital y extracción de valor.

El imperialismo es definido por Lotta como "un modo de producción internacionalizado que incluye otros... regido por relaciones de valor reales y dinámicas, cuya expansión exige asignaciones específicas de capital y transformaciones concretas de las relaciones de producción que se convierten en su opuesto, extendiendo las desigualdades y desequilibrios" (76).

Es en esta textura donde se ubica el desarrollo industrial, que desde los años cincuenta avanza, entra en crisis y se estanca, en función de la dinámica del capital y las necesidades imperialistas cuando la economía mundial se

(76) Raymond Lotta, "Sobre el dinamismo del imperialismo y el entramamiento del desarrollo social", en la revista Un mundo que ganar, núm. 2, Londres, 1985, pp. 68-76.

expande. La configuración interna de recursos y la inserción en el sistema financiero así lo exigen. El Perú, mientras no cambie de naturaleza, debe funcionar de acuerdo a las necesidades del capital financiero. De este modo el desarrollo de las fuerzas productivas se da sobre la base de la ampliación y agudización de la división entre nación opresora y oprimida.

La comercialización de la agricultura y la expansión monetaria imponen aplastantes cargas sobre los productores provocando violentas respuestas sociales; y al mismo tiempo el capital extranjero "no genera el tipo de vínculos globales esenciales para el establecimiento de una base industrial relativamente independiente e interdependiente, gran parte de la tecnología adoptada en los sectores avanzados no puede difundirse por toda la economía" (77).

Estas relaciones conducen al desempleo masivo, capacidad industrial ociosa, crecimiento desproporcionado del sector terciario, vías y sistemas de almacenamiento y distribución que crean asentamientos efimeros, parasitismo estatal y militar, rezago agrario y grandes deudas. Precisamente la fuerza del precapitalismo ha impedido la constitución de un régimen político burgués y de la nación.

De este tipo de desarrollo surgen las crisis, en el marco de la estructura global y la rentabilidad del capital, cuando aparecen barreras en la reproducción

rentable del capital. Las relaciones de producción, al deformar la economía, conducen a crisis y estancamiento, dependiendo su gravedad de la estructura del capital, el desarrollo previo de las fuerzas productivas y la correlación de fuerzas. El mismo dinamismo de la década del sesenta conduce al surgimiento de obstáculos para la autoexpansión y el reformismo. La recuperación del capital exige violencia.

La destrucción y adaptación de las relaciones feudales o semif feudales es un proceso de violenta desestructuración, mientras avanza el dominio de la mercancía, la moneda y la valoración del capital. El Estado oscilará entre la regeneración del capital y la legitimación en un campo abigarrado, complejo y caótico de clases sociales en formación. La contradicción regeneración-legitimación se resuelve por el dominio de la primera función, instaurándose en relación a ella regímenes policíacos y/o populistas.

La reestructuración de las relaciones capital-trabajo, y entre capitales, ante un proceso de crisis, puede conducir a la desintegración social, por tanto el Estado intervendría cada vez más en su función legitimadora. Esto sucede por la ambivalencia estatal al actuar entre las tendencias y contratendencias a la baja de la tasa de ganancias, que establece límites estructurales al avance capitalista y su legitimación.

Precisamente el periodo inaugurado en 1968 con Velasco Alvarado significó la intervención del Estado en la producción de relaciones capitalistas ante la semifeudalidad, el atraso de las fuerzas productivas, la ausencia de una burguesía consolidada y el tipo de inserción semicolonial en el capitalismo mundial. Esta intervención es producto de un largo proceso.

Paralelamente al avance imperialista, se produce la intervención del Estado en la valoración del capital dirigida a la creación de infraestructura económica encaminada a la adaptación gradual a la división internacional del trabajo como economía primario exportadora. Incluso cuando la crisis de los treinta y la segunda guerra propiciaron una coyuntura favorable, ni el capital imperialista ni los grupos de poder tenían agresivos propósitos industrializantes.

Desde fines de la década de los sesenta el Estado será el elemento coadyuvante en la nueva modalidad de inserción en la economía mundial. La inclusión de subsectores de la sección I (materias primas, petróleo...) significó desconcentración del gasto público y después despresupuestación, pues ella estaba vinculada al crecimiento del aparato estatal y a su incorporación como productor. Completaba el Proyecto, una política industrial que apoyó a la burguesía y a las transnacionales convirtiéndose en el centro de la política económica.

Muy pronto, en la década de los setenta, el régimen de acumulación entra en crisis y con él las modalidades de intervención estatal, hasta el punto de hacerse indispensable el Estado en la valoración del capital y en el enfrentamiento a las crisis.

La necesidad del capital en una gestión permanente de la fuerza de trabajo proviene de que existe exterioridad de la fuerza de trabajo frente al capital, lo cual requiere la reproducción de los trabajadores fuera del ciclo del capital. Asimismo, el Estado debe asegurar la inscripción de los trabajadores en las relaciones mercantil-capitalistas en forma efectiva y disciplinada. Por último, el Estado debe cubrir las necesidades que no cubre el salario. Toda esta intervención estatal se complementa de modo conflictivo con la socialización doméstica de la fuerza de trabajo, más importante en el Perú que la forma típicamente capitalista. Al lado de ambas se conforma un sector "informal" también importante en esta reproducción de la fuerza de trabajo y del capitalismo.

El sector doméstico, la comunidad campesina y la economía semifeudal coexisten -aunque mutilados y transfigurados por las mercancías y su circulación- produciéndose un proceso de pauperización que restringe su capacidad en la reproducción de la fuerza de trabajo. Lo que, sumado a la debilidad del gasto público, provoca la emergencia de migrantes descampesinizados y en general

desclasados, de los cuales muchos ingresan a nuevos sectores de subsistencia semiasalariada. Empobrecimiento que evita la difusión del salario indirecto.

El Estado se ve obligado a actuar violentamente para inscribir o separar a los trabajadores en las relaciones capitalistas y fijar las condiciones de su explotación. Al no existir relaciones de cambio generalizadas y la correspondiente fetichización como base de la legitimización del poder, se hace necesaria la integración laboral represiva, asociada a modalidades extensivas de la explotación de la fuerza de trabajo, a bajos salarios y a una pauperización creciente.

Inclusive el recurso del consenso "cultural" (nacionalismo, religión, tradiciones...) no puede impedir el uso de la violencia para quebrar una resistencia de clase permanente y someter a los trabajadores. Este recurso debe ser complementado con medidas de bienestar social y la redefinición de mecanismos integrativos (que otra vez incluyen la violencia.)

De esta manera las dos funciones estatales anunciadas más arriba: la valoración del capital y la gestión de la fuerza de trabajo, al ser penetradas por la lucha de clases y el mercado mundial, conducen a intentos industrialistas y a propósitos corporativistas de la sociedad. El Estado resulta de la reproducción del capital, las necesidades internas de la acumulación y las nuevas

necesidades de dominación. Este forzado carácter capitalista deviene contradictorio con el poder social y económico oligárquico, y se resuelve mediante la asunción de las fuerzas armadas -como vehículo estatal- del aparato del poder en sustitución de una burguesía industrial no consolidada como clase que permita la transformación oligárquica en burguesía burocrática.

La pretensión de reemplazar la violencia por la corporativización corresponde a las ambiciones hegemónicas del imperialismo por mantener las economías exportadoras en su papel de devaluadoras de la fuerza de trabajo y del capital constante del centro. Pero este proyecto tenía en su seno la contradicción entre legitimización y regeneración, para optar desde 1976 por lo segundo.

Las fuerzas armadas cumplen con su labor contrainsurgente logrando un crecimiento industrial artificial. La legitimización basada en el fetichismo tuvo un incipiente y efímero éxito con la incorporación -en parte- de las fuerzas políticas de oposición al Estado, en donde predominan finalmente los intentos no capitalistas de legitimación (patriarcalismo caudillista, religiosidad, tradiciones...).

La dominación absoluta del capital se expresa en la autonomía relativa del régimen político. Esto ocurre mientras el Estado necesite legitimarse a través de métodos representativos y la usurpación de la soberanía. Asimismo,

la inserción en el ámbito capitalista mundial exige la presencia de un Estado moderno. Desde 1974-1975, con el reinicio de la crisis, el régimen político aparece cada vez más como apéndice imperialista, hasta que la pérdida de legitimidad conduce nuevamente a la "democracia parlamentaria".

Entre 1968-1975 la imposición de una política legitimante de corte distributivo chocó con la regeneración concentradora de capital e ingresos, hasta entrar en contradicción ambas tendencias, que de consuno con la tradición autonomista de movimiento popular intensificó los conflictos sociales. Fortalecer a la burguesía, cumplir con los requerimientos financieros y los provocados por la mayor inserción en la economía mundial en crisis impidió la legitimación pasiva y verticalista del poder militar.

Con la ausencia de divisas entre 1975-1978 aparecieron los desequilibrios sectoriales; el aumento de la capacidad instalada ociosa, restricciones de oferta y desempleo. Ello ocurrió así porque la obtención de divisas dependía de las exportaciones sujetas a las oscilaciones del mercado mundial y porque la industria productora de bienes suntuarios y con tecnología de capital intensivo siguió orientada a un reducido mercado interno.

En efecto, la Junta Militar de 1968-1975 mermó el poder de las transnacionales en las actividades extractivas y no en las industriales que más bien crecían articuladas al

capital financiero y, juntas, al Estado. La crisis y la consiguiente recesión aumentaron la influencia del capital financiero imperialista en la política económica hasta hacerle perder totalmente la autonomía relativa.

Conseguir capital y divisas para industrializar al país orientaron al Estado a propiciar la expansión minero-petrolera, abandonando la agricultura y frustrando el desarrollo del mercado interno. Como señala Laura Guasti, no se puede desafiar a las transnacionales y solicitar los recursos que les ha conferido su fuerza y poder (78). Ello lo demostró -en la crisis de 1975-1978- el Plan Económico de Morales Bermudez, que al priorizar las demandas del capital extranjero eliminó cualquier rastro de autonomía.

El proyecto de legitimación de las Fuerzas Armadas no tolera la autonomía gremial y popular y se sustenta -como dice Mc Lintock- en el "tráfico de reformas con alianzas cambiantes", que le otorgan una efímera credibilidad (79). Su incoherencia también radicaba en proponer una movilización social que abriría nuevos campos de enfrentamiento en un superficial marco corporativista. Al llegar las reformas a sus límites y angostarse la legitimación distributiva, desaparece el "espacio consensual" y aparece el desborde popular con plena nitidez. Es así como el gobierno militar de 1968-1975 se orientó a la conformación de una estructura industrial de importación intensiva; intervino como productor en varios

(78) Laura Guasti, El gobierno militar: una experiencia peruana 1968-1976, Ed. IEP, Lima, 1985, p. 230.

(79) Cynthia Mc Lintock, Ibid., p. 330.

proyectos e incrementó los gastos militar-burocráticos. Al mismo tiempo subsidiaba al sector trasnacional y privado en general, lo cual trajo grandes desequilibrios rurales y urbanos que pronto rompieron con la legitimidad.

La escasa redistribución del ingreso, la mayor participación en el poder de la tecnocracia, la organización masiva de gremios de trabajadores, la ampliación del electorado y la readecuación de las fuentes de poder oligárquico, incrementaron la desestabilización en marcha iniciada por los campesinos desempleados.

II. SEMICOLONIALISMO Y REFORMISMO CONTRAINSURGENTE.

El flujo internacional de mercancías y las exigencias de los principales centros capitalistas crece por todo el mundo en el nivel familiar, étnico, cultural, regional y clasista.

En el primer periodo semicolonial, las manufacturas eran artesanales, el dominio inglés era básica y principalmente económico-mercantil y no se comprometió en inversiones directas. El capital británico bancario efectuaba préstamos y después de la primera mitad del siglo XIX apareció en el transporte y servicios públicos. La economía, en cuanto al tipo de producción era hasta ese momento de naturaleza agro-minera.

Perú tuvo en el siglo pasado -periodo del guano- mejores perspectivas de acumulación. Pero en ese entonces la deuda era ya un problema; pasaba de 16 millones de pesos. El sector privado afrontaba el desorden monetario, las importaciones se cancelaban en gran parte con plata-piña. La moneda boliviana -de menor valor que la de Perú- complicó aún más el intercambio al desarrollarse la especulación monetaria en el mercado negro. En efecto, "entre 1830-1861 Potosí acuñó 37b millones de pesos con una liga inferior a la que la moneda peruana. De esa cantidad

fue internada aproximadamente el 35%, ocasionando el ocultamiento de la moneda nacional y serios trastornos en las operaciones comerciales" (Pablo Macera, Visión histórica del Perú, p. 194, Milla Batres, Lima, 1978). No había ahorro interno y el estancamiento se dio. Si bien se rompió con esta situación, la economía ya dependía, hacia 1862, totalmente del guano.

Los negocios económico-financieros se intensificaron al iniciar su expansión la ley de la acumulación y la reproducción propiamente capitalista. Las obras públicas hacían una economía más dependiente, el financiamiento era demasiado oneroso, aparte de su reducida rentabilidad. La burguesía se consolidó como simple intermediaria. Los excesivos préstamos condujeron a la bancarrota de antes de la guerra, desarrollándose únicamente la agricultura de exportación.

Ante la ausencia de empresas, Dreyffus y el salitre resolvieron los problemas fiscales.

A principios de siglo se inicia, consiguiendo mayores ganancias, la intervención directa de la inversión extranjera en el transporte, agricultura, minería. Los intereses de los grandes monopolios eran infimos. La monopolización de cada sector productivo estaba en dos o tres empresas extranjeras. La burguesía se retrajo al control del presupuesto y parte de la agricultura de la sierra y la costa (ligada al capital extranjero), la

compañía recaudadora de impuestos y la administración del guano.

La guerra del Pacífico retrasó unos veinte o más años el desarrollo del capitalismo, por tanto de la burguesía y del Estado. Al mismo tiempo posibilitó que con la primera guerra se consolidara el imperialismo. En la década de los veinte, Leguía endeudó al país para desarrollar la infraestructura y los servicios, y atraer la inversión imperialista. La intermitencia de gobiernos militares y civiles tienen desde esa época homogeneidad cronológica en América Latina.

El Estado no sólo se dedicaba a la infraestructura económica sino también promovía, jurídicamente y a través de medidas de política económica, la inversión extranjera. Las cuotas de divisas y pagos, el tipo de cambio, el movimiento incesante de las mercancías, etc., y las leyes correspondientes promovían la exportación de materias primas.

Desde 1940 hasta los años sesenta la libertad para el capital era total. Las dificultades cambiarias de la época de Bustamante dieron inicio al control de cambios, y con Odría vino la devaluación (1949), lo cual significó un reimpulso al liberalismo.

Con la Guerra de Corea, al reactivarse la empresa privada, las balanzas mejoraron. El imperialismo se consolidó en el sector minero. La industria de bienes de /

consumo se desarrolló con base en el ahorro interno. Poco después la pesca irracional iniciaba la depredación del litoral en forma excesiva. Mientras la inversión pública se centró en la construcción, aunque en gran medida fue destinada a transferencias. Invierte en lo menos rentable con financiamiento externo.

Se comenzó a producir en forma automatizada, con ello se profundizaba cada vez más el desempleo y la miseria. Esta dinámica capitalista procede de un grupo burgués y de los monopolios. Todo el impulso es externo. x

En este contexto el proletariado propiamente dicho (obreros manufactureros) estuvo ausente de la vida política, incluso se constituyó en un grupo relativamente "privilegiado" al decir de Gerrit Huizer (80).

El tipo de acumulación no varió, su naturaleza sufrió algunos cambios pero continuó básicamente siendo el mismo. La exportación de capital por el imperialismo y la producción de materias primas estratégicas marcaban así el desarrollo de los modos de producción, de las clases sociales y del Estado.

Empero, el crecimiento de la inversión extranjera y de la gran burguesía en la industria obligaba al Estado a una actuación reformista que posibilitara un desarrollo capitalista contrainsurgente.

(80) Gerrit Huizer, El potencial revolucionario del campesinado en América Latina, Siglo XXI, Editores, México, 1976. p. 334.

A. LAS BASES FINANCIERAS DE LA RECOMPOSICIÓN DEL SEMICOLONIALISMO.

En el siglo XX la internacionalización de la producción y de las relaciones capitalistas establecieron una nueva unidad de la economía mundial. La acumulación se dio sobre la base del complejo global de reproducción y la exportación de capital fue la punta de lanza para buscar rentabilidad y creación de nuevas normas productivas.

El Perú se ve envuelto y penetrado por la acumulación imperialista, cuyas necesidades y perspectivas de expansión determinan formas desarticuladoras y desintegrantes de las regiones y de los sectores, respectivamente, así como las formas de vinculación y combinación con los modos de producción específicos: conservándolos o disolviéndolos. Asimismo, el proceso de endeudamiento es un elemento integral y necesario de la dinámica de crecimiento dada la estructura de acumulación y de clases.

La expansión imperialista en el Perú se inicia a comienzos del siglo XX como producto de la transición del capitalismo de libre concurrencia a nivel mundial, a su forma monopólica. En su desarrollo se distinguen tres periodos bien definidos.

1) El que se extiende entre 1900 y 1930, donde se establecen y desarrollan los grandes monopolios dedicados a la producción de materias primas agrominerales. Las

principales empresas que hacen su aparición son la Grace, la Cerro de Pasco Cooper Corporation, la International Petroleum Company y la Peruvian Corporation, configurándose así una economía de enclaves agromineros sobre una estructura socioeconómica de carácter semicolonial. Este periodo se caracteriza también por el desplazamiento de la hegemonía inglesa por parte de la norteamericana, reflejado éste en el aumento de la inversión norteamericana en el país (que pasa de 2 millones en 1927 a 124 en 1929).

2) En el periodo que va de 1930 a 1950 se produce una disminución de la inversión extranjera por efecto de la crisis mundial de los años treinta y por la Segunda Guerra Mundial. La inversión norteamericana desciende a 71 millones de dólares en 1943

3) El periodo transcurrido entre 1950 y 1968 se caracteriza por el auge de la inversión extranjera y al recuperarse la rentabilidad en el nuevo dinamismo de la economía mundial. El valor de la inversión norteamericana pasa de 143 millones de dólares en 1950 a 692 en 1968.

Desde los años cincuenta comienza a modificarse la forma de acumulación y se expande el mercado interno y la "industrialización sustitutiva" como parte de la ampliación de esferas de la economía impulsada por el imperialismo.

Las ganancias se sustentan en el monto relativamente bajo de los salarios pagados en relación a los países imperialistas. Estas ganancias no son afectadas por

una severa presión fiscal; al contrario, las empresas extranjeras reciben de parte del Estado peruano toda suerte de franquicias arancelarias y tributarias para que logren sobreganancias. Asimismo, durante estos años podemos observar: 1) los sectores de mayor crecimiento en dicho periodo son minería, manufactura y comercio; 2) el sector manufacturero es el que tiene el crecimiento más significativo: de 1959 a 1968 las inversiones se triplicaron, pasando de 31 millones de dólares a 96; mientras, en el mismo periodo, las inversiones en la minería y fundición sólo se duplicaron.

Este aspecto es importante porque la estrategia del imperialismo apunta hacia el control de toda la economía privilegiando el sector industrial por ser el eje más dinámico y rentable frente a los recursos primarios monopolizados (81). A partir de 1950, al modificarse las formas de acumulación de capital por parte del imperialismo, principalmente de Estados Unidos, se desarrolla en extensión el semicolonialismo en el Perú y se profundiza con la estrategia de "seguridad y desarrollo" desde 1968.

La inversión extranjera por su origen y valor entre 1965-1968 creció en 47.4 millones de dólares, la norteamericana desciende y la de Europa, Japón y Panamá crece. La internacionalización del capital explica este hecho, ya que los Estados Unidos invierten desde otras bases. Cinco países concentraban el 82.3% de la inversión

(81) Luis Roca, Imperialismo en el Perú: viejas ataduras con nuevos nudos, FCP, Lima, 1974.

meta, a Estados Unidos sólo correspondía el 52.2% del total. Se hacían necesarias las reformas que impulsen el ingreso de capitales al país.

Lo anterior explica algunos rasgos que nos muestran los lineamientos principales que guiaron la gestión económica de la Junta Militar.

1. En el aparato económico existente en el país se presenta una nueva división de tareas debido al desarrollo industrial referida a la intervención de la burguesía monopólica imperialista, la gran burguesía, los terratenientes y el Estado. El capital extranjero es el factor dinámico de la industrialización.

2. La reinserción imperialista se concreta a través de los siguientes mecanismos: empréstitos, inversión directa y empresas mixtas. Se consolida la dominación externa tecnológica y en servicios, asociada a nuevas modalidades y mecanismos de articulación del sistema financiero internacional con el aparato productivo interno.

La mayoría de los proyectos se subordina al financiamiento imperialista. La empresa mixta es punto de convergencia del ahorro interno y el financiamiento externo. La empresa privada utiliza los fondos bancarios internos donde las entidades financieras estatales están estrechamente ligadas a la banca internacional. En el país se registra un proceso de diversificación de las fuentes de financiamiento externo.

Esta última situación alude al creciente endeudamiento y la necesidad de orientar su rápido crecimiento, cuya espiral se inicia con la Alianza para el Progreso. En efecto, haciendo un resumen de la "ayuda" recibida por el Perú en forma de préstamos entre 1961-1970 realmente desembolsados, se tendría el siguiente cuadro:

Préstamos del BID al 31/12/72	141.471.274
BIRF a 1970	118.200.000
AID y CIF	7.000.000
Estados Unidos	211.500.000

T O T A L 478.171.274 Dlls

De tales préstamos, a Estados Unidos le corresponde el 44.23% (82). Pero además, por donaciones y gastos de asistencia, un total de 130,8 millones de dólares, de los cuales el 43.43% se recibió en forma de excedente agrícola. Por parte, de la Agencia Internacional de Desarrollo, 54.3 millones de dólares, así como 19.7 de parte de diversos programas.

Las inversiones netas acumuladas fueron negativas, es decir que durante estos años no se llegó a cubrir el total de las depreciaciones sufridas. Además, resulta que el monto de los préstamos recibidos de entidades oficiales del Perú, en el transcurso de diez años, fueron del orden de 1.531 millones. El cambio es sumamente elocuente y demuestra la creciente importancia de los

(82) Carlos Malpica, Alianza para el Progreso, una década de esperanzas y fracasos, Horizonte, Lima.

préstamos de origen externo.

El capital extranjero continúa enraizándose, y entre 1968 y 1975, el ingreso de capital bajo la forma de inversión extranjera es inferior a la evolución del aumento real del stock de capitales que se explica por las reinversiones. El crecimiento del capital financiero prestado es varias veces más grande que el stock y el flujo de capitales bajo la forma de inversión directa.

Entre 1968 y 1975 afluyeron al país 425.5 millones de dólares y salieron como renta 745.2, deducidas las remisiones en efectivo fuera de los ingresos reales, mientras que el flujo neto por endeudamiento fue de más del doble: 1644.4 millones de dólares. El costo de las reformas e industrialización se cargó a la deuda. Las inversiones entre 1971 y 1976 pasaron de 724 millones de dólares a 1367, y la deuda llegó a 3 568 millones. En correspondencia con ello las rentas y servicios tendieron a crecer. Es obvio que el estatismo no reduce la importancia relativa de Estados Unidos:

a) Del total de stock estimado de capital radicado en el Perú por países capitalistas en 1975, el 71% correspondía a E.U. comparado con el 39% de 1968.

b) La inversión extranjera en su conjunto, por sectores, se encontraba en 1974 en minería (46%), petróleo (27%), Industria (17%) y comercio (6%). Esta situación se reproduce en la inversión norteamericana.

c) E.U. era el primer socio en el comercio exterior del Perú, pues compró en 1974 el 36% de las exportaciones peruanas y proveyó el 31% de sus importaciones.

d) El principal proveedor de créditos para el Perú es E.U.

e) En 1967 Estados Unidos invirtió 712 millones y en 1976 ascendió su monto a 1.367 en los siguientes sectores: minería y petróleo, 80%; industria, 12%, y otros, 8% (83).

Comprobamos las tesis leninistas sobre el colonialismo: al capital le interesa la exportación de capitales a través de transacciones financieras lucrativas y el control de las materias primas estratégicas, para obtener sobre ganancias y ganar cada vez mayores esferas de influencia.

Es importante el rol de extractor de divisas de la banca internacional.

De acuerdo con la ley de la máxima participación en la Banca estatal y privada, la del capital extranjero era del 25%, dejando que actúen las sucursales de los bancos extranjeros. Pero aún más importante es la explotación y dominación a través de organismos financieros controlados por el imperialismo: BIRF, BID, FMI, CFI, etc, que utilizan su gran capacidad financiera para enlazar y subordinar el aparato financiero interno, monopolizando la economía a

través del control del ahorro interno que formalmente están en manos de la banca estatal o asociada.

Según Roca (84), del total de proyectos de inversión 1972-1974, aproximadamente las dos terceras partes (1,464.629 de dólares) eran financiados por el imperialismo, dando prioridad a los sectores productivos. La banca estatal se mueve con capitales extranjeros, se diversifican las fuentes de financiamiento y se crean empresas financieras, además se unen al capital financiero estatal e imperialista. Las consecuencias de este hecho son la creciente deuda externa, las continuas refinanciaciones y la reproducción de estas relaciones en el sistema.

La estatización de bancos, cuyo objetivo fue impulsar el proyecto estatal y como tal una necesidad del sistema, fue conciliadora, en bancos tales como el Popular, el Internacional, el Continental, etc. se efectuó pagando el doble y en algunos casos el triple de su valor (v.gr. el Continental, que tenía un valor de 250 millones de soles, se "compensó" pagando 700 millones). Se hicieron "farsas judiciales" como el caso Prado, en el que se permitió que esta familia sacara tres mil millones de soles al exterior. Uno de los principales bancos, el Banco de Crédito, no fue afectado por la Junta Militar de Gobierno, ya que esta era cristiana y el banco del Vaticano, debía evitarse el choque de intereses "ideológicos" de estos poderes. Con criterio parecido no fue afectada la banca regional, donde se asienta

la naciente gran burguesía regional de raigambre oligárquica provinciana (Banco de los Andes del Sur, Oriente, Norte, etc.).

El papel principal del Estado es de intermediación entre las transnacionales, la burguesía burocrática y los centros financieros imperialistas. Después de él, en importancia para la rearticulación del capital bancario respecto al desarrollo industrial, está la banca privada extranjera y la banca asociada que sirven al capital monopolista y burocrático, y que integran también a la acumulación imperialista.

Las altas tasas de interés y la creación del mercado único de cambios (oct. de 1977) favorecieron ampliamente al sector financiero.

Los recursos financieros que demandan los planes de inversión del sector público se logran con la movilización de los ahorros internos y la captación de recursos externos, realizados mediante las medidas de regulación monetaria y crediticia dictadas por el Banco Central de Reserva.

Los sectores productivos y la inversión bruta fija, especialmente pública, se financian mediante el crédito proporcionado por el sistema bancario. El crédito neto obtenido por el gobierno central en 1972 llega a 6.285 millones de soles, que registra con ello un promedio anual entre 1968 y 1972 de 3.240 millones de soles. Mientras, el

sector privado recibe nuevos recursos financieros por 11.025 millones de soles en 1972, lo cual da un promedio anual de 6.958 millones en dichos años.

Entre 1970 y 1974, la estructura del financiamiento de las inversiones del sector público había cambiado. Al caer el ahorro, la parte financiada con préstamos creció. Los préstamos del extranjero aumentan más que las inversiones, no sólo porque la mayor parte de los costos de proyectos se financian desde exterior, sino también por la necesidad de refinanciar los fuertes pagos de amortización del gobierno central.

Por otra parte, sabemos que las principales causas de la caída del ahorro del sector público durante 1970-1974 son la inflexibilidad del sistema de impuestos y la inadecuada política de precios de algunas empresas del sector público.

Entre 1968 y 1970, los ingresos y ahorros del gobierno aumentan más que el PBI. En 1971-1973, el crecimiento del ingreso permanece por debajo del PBI. En 1974, los ingresos del gobierno crecen algo más rápido que el PBI por el impacto de los altos precios de exportación de 1973-1974, los ingresos por impuesto a la renta y sobre la transferencia de utilidades a empresas públicas. Con la exclusión de estos factores excepcionales, la inflexibilidad de los otros ingresos es evidente. Los precios de importación son más del doble para alimentos y del triple

para el petróleo, en tanto que los precios de venta permanecen invariables por las deliberadas políticas del gobierno. Más aun, el sector exportador aportaba al PBI menos que la Industria, abriendo una brecha en la lógica de acumulación.

En este sentido, el comportamiento del sistema tributario estaba sujeto a:

a) Dependencia del comercio exterior, no sólo por derechos de aduanas sino también por la cobranza del impuesto a la renta (se estima que un 75% de los cobros por impuesto a la renta se derivan de la imposición sobre utilidades de negocios, y muchos de los impuestos a la renta son pagados por exportadores mineros, que están sujetos a las fluctuaciones del mercado mundial).

b) La base fiscal para varios impuestos decrece gradualmente (tenemos, por ejemplo, vía incentivos fiscales, exoneración de impuestos para acciones de CODIFE, bonos, etc.).

c) Una administración tributaria deficiente.

La reforma tributaria solo sirvió para que el pueblo peruano esté "al día" en sus tributos y mantenga la frondosa y creciente burocracia civil-militar que vive improductiva y a expensas de los trabajadores. Una estructura tributaria de este tipo obligará al Estado a recurrir al endeudamiento.

El sector financiero se encontraba bajo los

intereses del FMI, que obligaba al gobierno a utilizar políticas económicas que favorecieran sus intereses y la reproducción del capital, afectando a las mayorías poblacionales. Sobre este aspecto, V. Roel sentenció:

"Como consecuencia de la política financiera seguida en todos estos años, la capacidad de endeudamiento del Perú esta sobresaturada en proporciones que superan largamente el 30% de las exportaciones, puesto que los servicios de la deuda en esa proporción no la podemos soportar. Resultado: nos hallamos totalmente a merced del FMI y de los grandes bancos imperialistas, que de esta forma pueden imponernos sus condiciones y obligar al gobierno a que siga cualquier política económica así sea antipopular y antinacional"
(85).

De esta manera, se cierra el círculo del acrecentado dominio imperialista que, ahora comprende todos los aspectos de la vida económica del país, haciéndose global y totalizante.

(85) V. Roel, op. cit.

B. EL CAPITAL EXTRANJERO Y LA RECOLONIZACION DE LA INDUSTRIA.

A pesar del tipo de competencia, especialización desigual y concentración del poder político-militar oligárquico, los mercados imperialistas financieros y de capital hacen posible más altas tasas de crecimiento industrial.

Antes de 1930 se produce un periodo inicial en el que diversos factores convergen de manera combinada para un importante desarrollo industrial, aunque luego se conjuntan nuevas circunstancias en contra. Hubo posibilidades de industrialización.

En la década de 1890, en plena expansión de las exportaciones, se veía con más claridad esta posibilidad. Mariátegui afirmaba en 1928 (86) que faltaba una burguesía independiente de los comerciantes y terratenientes que impulsase la industria.

Thorp y Bertram (87), al precisar las condiciones internas y su eslabonamiento con las externas -priorizando las primeras y criticando la teoría de la dependencia-, contribuyen a tener una explicación de la transición del semicolonialismo al neo-colonialismo industrial que deja opciones abiertas a su desarrollo autónomo, lo que se comprueba en algunos países de América Latina.

En Perú los obstáculos a este proceso fueron los siguientes:

(86) J.C. Mariátegui, 7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana, Alfa, 1970

(87) R. Thorp y A. Bertram, Industrialización de una economía abierta: el caso del Perú en el periodo 1890-1840, Ed. PUC, Lima

1. Los flujos de inversión extranjera en los años 1900, responsables de una inflación que socavó la posición de la industria.

2. La evolución del mercado internacional que produjo un cambio de signo de las ventajas comparativas en la década de la primera guerra mundial.

3. El poder de la burguesía intermediaria y los terratenientes, así como la preponderancia de propietarios extranjeros en el sector exportador, responsable del estancamiento del "valor de retorno" de las exportaciones en los años veinte.

4. El triple papel de algunas empresas extranjeras: como comerciantes importadores, como exportadores y como productores locales, que fue un importante ingrediente en la carencia de presiones proteccionistas.

5. Quizá lo más importante fue el uso improductivo de la oleada de préstamos extranjeros provenientes de los E.U. en la década de los veinte.

Sin menospreciar estos obstáculos "coyunturales", los estructurales fueron los fundamentales (v.g., el escaso desarrollo del mercado interno, basado en la división social del trabajo y en la separación del productor de sus medios de producción). La sociedad era semifeudal, sin condiciones para invertir.

Es generalizada la creencia de que sólo en este

siglo E.U. tiene presencia en nuestra economía. Esto no se ajusta a la realidad, pues esto ocurre desde mediados del siglo XIX. Entre 1851 y 1970, exportan bienes de consumo, y como vía hegemónica tienen a los ferrocarriles. El control es principalmente comercial; luego aparecerán los "enclaves" mineros y agropecuarios.

Con la primera guerra -hasta la crisis del 29-, la IPC y la Cerro Corp. eran las principales empresas exportadoras. La banca reducía sus funciones hasta ser solamente un agente comercial (National City Bank) que liquidó las consignaciones y agencias. El 50% de las exportaciones peruanas hasta 1930 eran de Lobitos Oil Fields, Duncan Fox, Lampa Mining Company, Suyapullo Syndicate: empresas para la exportación.

El desarrollo industrial es de la segunda postguerra y nace renco.

La cada vez mayor demanda de créditos y los cambios en el comercio subordinan el sector industrial al sector financiero.

Trasnacionales y oligarquía invierten, inicialmente por las ventajas comparativas en la producción de materias primas de exportación, condiciones monopólicas de inversión en otros sectores, mercados internos protegidos, garantía de la inversión, mano de obra y materias primas baratas, volumen de inversión lo más pequeño posible minimizando riesgos, intervención en la provisión

de bienes de producción e insumos, control de la inversión, intercambio y distribución o de manera combinada.

Todas estas condiciones apuntan a la principal -que las resume-, y es la obtención de sobreganancias como ley del imperialismo, que hasta hoy es el requisito básico de inversión.

La llamada sustitución de importaciones de bienes de consumo en la década de los cincuenta fue mayor que en la siguiente.

Ante el progresivo agotamiento de la dependencia en bienes de consumo, los bienes de capital importados participan en 1965 con el 71.8%. El 60% del valor bruto de la producción (VBP) en el mismo año eran bienes de consumo tradicional, y la artesanía dentro del sector industrial absorbió el 58.1% de la PEA (la calidad de la fuerza de trabajo en 1964 era sólo del 0.4% de profesionales).

Precisamente E.U. al necesitar una industria complementaria que superara las restricciones y utilizara mano de obra barata -ya que Europa igualaba sus costos internos-, determinó el desarrollo industrial. También fue condicionante el corte de relaciones con el mercado europeo y la necesidad de productos manufacturados de consumo. Principalmente desde 1968, el capital de E.U. penetra en la industria metal-mecánica, de bienes de capital y de consumo duradero.

Los monopolios pueden penetrar estableciendo

directamente una subsidiaria o filial en el país, apoderándose de una empresa ya montada y que se apoya principalmente en el financiamiento interno estatal o privado.

Primero, la subsidiaria actúa autónomamente. Luego buscará la asociación con empresas privadas aportando patentes, procesos, diseños y técnicas. Por último se integrará en el plano internacional, en los procesos de integración regional y el financiamiento externo.

La inversión anual en stock proviene de las ganancias reinvertidas y la entrada neta de capitales y préstamos. Entre 1966 y 1974, las ganancias reinvertidas fueron de 77 millones (56% en la industria) y los capitales de las matrices llegaron a 323 millones (8% en la industria).

La entrada neta de capitales se da más por nuevas inversiones, mientras que las reinversiones tienen un menor aporte. Para el Perú, la entrada neta de capitales representa el 74% del total del financiamiento, mientras que en América Latina sólo el 28.9%. En la industria sus reinversiones son del 84% y en América Latina del 50.8%. Esto se debe a la industrialización tardía derivada del gran atraso relativo en las fuerzas productivas, de la incipiente división del trabajo y desarrollo del mercado interno, que concluyen rápidamente el modelo de "sustitución". Entre 1971-1973 aumentó la inversión extranjera en cifras

absolutas, pero no en relativas. Esta inversión se centró en metales básicos, química y productos de papel, ramas con incentivos crediticios y tributarios, concentrando así la producción, el capital y la propiedad. De esta manera, E.U. tiene una participación decisiva en la producción de bienes intermedios con 77%, en los de consumo un 19.8% y 32% en los de capital.

Los cambios posteriores fueron insignificantes y su crecimiento fue mínimo: la mitad de la tasa promedio de América Latina. Entre 1966 y 1974 creció el stock de capitales de las empresas monopólicas de 128 a 155 millones de dólares, y la industria en su conjunto de 651 a 895. La distribución de la inversión en 1974 era así: 46% para minería, petróleo 27%, industria 17% y otros 10%. La industria crecía muy lentamente.

De las ventas monopólicas a los E.U. entre 1966 y 1974, 7.669 millones de dólares, el 50.79% fue del sector minero y el 28.6% del industrial (alimentos y química). En la rama alimenticia su participación tendió a disminuir y en la química a aumentar por el escaso desarrollo de la primera y la competitividad en la segunda. En alimentos, el 59.8% -por la saturación del mercado- es para la exportación.

El sector minero destina el 50.8% de las ventas a E.U. por el costo relativo de factores y la competencia internacional. Por el contrario, en la industria, y debido a la naturaleza de la producción y del mercado el 74% es

para el mercado local.

En cuanto a la salida de capital, debido a las relaciones matriz-filial, sobrefacturación, sobreprecios, valoraciones, transferencias y otras modalidades, los monopolios evaden ganancias que la estadística no refleja.

Entre 1966 y 1974 aparecen como tales 617 millones de dólares, 50 de ellos en la industria. Se remiten utilidades o se reinvierten de acuerdo a los intereses monopólicos.

La entrada neta de capitales fue de 323 millones de dólares y la salida en el mismo periodo de 729 millones. En el sector industrial la relación fue 27-81.

Lo principal de la producción en 1976 era de bienes de consumo esencial y no esencial, de consumo duradero, insumos fundamentales de industrias básicas, insumos de apoyo sectorial y vehículos. Esos insumos están concebidos para un mercado establecido -interno o externo- de recursos naturales y básicos, e inserto en la lógica del capitalismo mundial, que condiciona el aparato productivo.

Las ramas donde más penetra el capital extranjero son: minería extractiva, metal-mecánica, química y caucho, alimentos y bebidas.

En conclusión, la producción para el mercado interno y externo está controlada hegemónicamente por el imperialismo de E.U. (y muchas industrias son ramificaciones de otras). La distribución de las ganancias entre la

burguesía opera en favor del núcleo oligopólico y los sectores comerciales y financieros asociados o ligados a él.

Un rasgo que caracteriza al neocolonialismo es la integración de empresas exportadoras e industriales, productoras de materias primas, de insumos básicos y de transformación; mientras el Estado le garantiza al capital extranjero inversión, mercado y sobreganancias. Y al no producirse maquinarias, el desarrollo capitalista tiene una perspectiva sumamente limitada y trunca.

La concentración avanzaba; en 1969, las diez mayores empresas del sector sobre un total de cerca de seis mil, controlaban el 21.5% del valor bruto de la producción, bajando al 18.8% en 1973 sobre más de 6.500 empresas.

Además, en 1968 las 200 mayores empresas del sector concentraban el 52% del valor bruto de la producción y el 52.3% en 1973. Respecto al empleo, estos ocupaban el 10.7% de los trabajadores en 1969 y el 12.5% en 1973.

Por el lado de la estructura de la propiedad tenemos que, en 1969, el capital extranjero controlaba el 67.4% del VBP de las 200 mayores empresas de la industria, mientras que el Estado sólo lo hacía en el 9.9% y el capital privado nacional en el 22.7%. Luego, en 1973, el capital extranjero había bajado su participación en la generación del VBP al 52.7% mientras que el Estado la había incrementado hasta el 14.9% y el capital nacional hasta el 27.5%. Aparece además un sector cooperativo que controla el

14.3% del VBP de la producción (88).

En ramas más específicas tenemos que la industria metal-mecánica sufre un proceso de "desnacionalización" aunque poco significativo. El Estado tuvo la participación más importante en las ramas de la industria intermedia básica, sin embargo el capital extranjero era el dominante.

En otras ramas:

a) Las ramas de caucho y muebles siguen siendo controladas íntegramente por el capital extranjero.

b) En la industria de maquinaria no eléctrica y en la de material de transporte la participación del capital extranjero se ha incrementado.

c) En la industria textil ese capital extranjero ha bajado su participación. De igual manera en el sector de industrias diversas.

d) Por último, una retirada importante de este capital en los sectores productores de industria intermedia no básica y de bienes de consumo (89).

Cómo fue el crecimiento de este sector? Analicemos el periodo 1971-1978.

(88) Javier Iguíñez, Perú-Estados Unidos: evolución de algunos indicadores económicos, 1968-1972, PUC, Lima. Ministerio de Industria y Turismo, El capital extranjero en el sector industrial, 1971-1973, Lima, 1975. Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Revised data series on US direct Investment Abroad 1966-1974, Washington, 1976. Otero Cabezas H., Economía peruana, un ensayo de interpretación, Desco, 1978

(89) Ibid., p. 67.

EL FBI DE LA MANUFACTURA Y CONSTRUCCION

AÑOS	MANUFACTURA	CONSTRUCCION
1971	8.6	10.5
1972	7.3	12.4
1973	7.4	5.0
1974	7.5	2.0
1975	4.7	16.8
1976	4.2	-2.8
1977	-6.1	-7.7
1978	-4.6	-6.0

En el cuadro se observa un crecimiento más o menos alto de los años 1971 a 1974, para luego decrecer en los años 1975 y 1976, aunque finalmente se torne negativo para los años 1977 y 1978.

Esto para la manufactura, mientras para la construcción las tasas negativas aparecen a partir del año 1976, que presentan para los años anteriores un crecimiento bastante irregular.

Entre los límites puestos al sector manufacturero hay que señalar la estructura excesivamente dependiente de insumos y bienes de capital importados; la sobreprotección que goza hace que tienda a ser ineficiente, y cree presiones inflacionarias y desequilibrios en la balanza de pagos.

El dinamismo de la producción industrial se basa en el sector de bienes de capital y de consumo duradero, cuya principal producción en el país son los artefactos eléctricos y electrodomésticos, automóviles, etc., dirigidos a satisfacer la demanda de la burguesía y sectores medios. Su crecimiento como veremos se debe al ingreso masivo de transnacionales entre 1965-1970.

El subsector de bienes de capital (90) tuvo un crecimiento de 57% en 1968, de un 95% en 1973 y un 110% en 1974. Esto lo hace definitivamente el subsector industrial más dinámico. A continuación le siguen las industrias productoras de bienes de consumo, con un crecimiento de 39%, 53% y 65% correspondientes a los años 1972, 1973 y 1974. Por último tenemos a las industrias productoras de bienes intermedios, las cuales crecieron en los mismos años anotados en 33.37 y 48% respectivamente.

Es importante señalar que las industrias productoras de transporte y maquinaria eléctrica son muy dinámicas, pues presentan una expansión en el primer semestre de 1973 de 29.9%, y para todo ese mismo año 31.3% mientras que para 1974 el promedio de expansión será de 33.74% y 31.9% aproximadamente (91).

Las industrias menos dinámicas donde se encuentran las industrias de alimentos sólo crecen en un 2.2% en 1973 y un 2.6% en 1974, lo cual prueba que estas industrias, que satisfacen necesidades populares, son las

(90) Banco Central de Reserva: Cuentas Nacionales.

(91) En Apuntes, Lima, Núm. 7, p. 70.

menos dinámicas.

Por otro lado, no se ven cristalizadas las metas del gobierno respecto a la producción industrial, que llega a un crecimiento de 7% y no al 12.4% propuesto por el gobierno para el quinquenio 1971-1975.

Como vemos, el capital norteamericano tendió a orientarse de manera especial hacia la industria manufacturera, y dentro de ésta se dedicó más intensamente a los sectores de bienes de consumo duradero o de vanguardia tecnológica. En el periodo 1950-1975, aquél creció de 15 a 92 millones de dólares, que significa un incremento del 593%, habiéndose duplicado en el periodo 1950-1960 y triplicado de 1961 a 1971.

Ahora veamos cómo se distribuyen en los diferentes sectores de la economía las empresas de origen extranjero en el año 1969 (92):

Sector Minero	26
Sector petrolero	9
Sector industrial	242
Sector comercial	79
Sector servicios	18
TOTAL	437

El 63.7% de las empresas y el 64.6% de los establecimientos industriales proceden de América del Norte y Europa occidental. La distribución de las 242 empresas

(92) Eduardo Anaya, Imperialismo, industrialización y transferencia de tecnología, Horizonte, Lima, 1971, p.34

industriales extranjeras según el tipo de bien que producen es la siguiente: Productores de bienes de consumo, 98 empresas con 150 establecimientos; productoras de bienes intermedios, 92 empresas con 131 establecimientos; productoras de bienes de capital, 52 empresas con 67 establecimientos.

De las 242 empresas industriales extranjeras, catorce ingresan antes de 1940, siete entre 1940 y 1944, 75 entre 1960 y 1964, 89 entre 1965 y 1969.

Comparado el VBP de las 242 empresas y el PBN para el año de 1969, vemos que el 54.18% del PBN corresponde a las empresas extranjeras (93).

En las industrias extranjeras dedicadas a los bienes de consumo con un Sol de activo fijo se obtenían 2.46 soles de VBP, en la producción de bienes intermedios con un Sol de activo fijo 1.16% de VBP, y para los productores de bienes de capital con un Sol activo fijo 5.17 soles de VBP. De esto inferimos que las industrias extranjeras más productivas son las dedicadas a la producción de bienes de consumo y bienes de capital.

Por este motivo es clara la acción del gobierno de intervenir con las empresas extranjeras en la producción de bienes intermedios (madera, papel, petróleo y derivados, metales básicos, etc.), pues éstas son las menos rentables para el capital extranjero, además la intervención estatal favorece este factor necesario.

Las empresas extranjeras productoras de bienes de capital son las más rentables y se dedican a las actividades más dinámicas dentro del sector industrial. Principalmente productos metálicos, maquinaria, material de transporte, electricidad, etc. actividades que con menores activos fijos obtienen un mayor VBP.

La gran afluencia de empresas extranjeras en la producción de bienes de consumo y de capital se debe además a las grandes posibilidades de expansión que tienen estas industrias como a las perspectivas de establecer estructuras monopólicas y oligopólicas. Asimismo, eludir barreras arancelarias y ensanchar, fundamentalmente sus mercados a través de la ALALC y el Mercado Andino. A esto habría que añadir la mano de obra barata y materias primas abundantes, que permiten aumentar más aún la tasa de ganancias de estas empresas.

El imperialismo ha penetrado en forma mayoritaria a través de la instalación de nuevas empresas. Así, el capital se asegura la exclusividad de la tecnología. La adquisición de empresas ya existentes ocupa el segundo lugar en las formas de penetración de las empresas extranjeras, prefiere comprar empresas instaladas, evitando problemas legales de constitución de nuevas sociedades y de creación de mercados puesto que ya están formados. Este modo de penetración es menor que el anterior, porque las empresas "nacionales" son pequeñas y medianas y por consiguiente

incapaces de generar altas tasas de ganancias.

Para el año 1969, el 52.9% de las empresas extranjeras tenían el control absoluto de sus acciones (o sea que poseían entre el 100 y el 75% de las mismas) (94). Este dato es suficiente para afirmar que la mayoría de estas empresas eran "autónomas". Además en el 19% el sector extranjero poseía control mayoritario; por tanto el 71.9% era dominado ampliamente por este capital.

La mayoría de las empresas extranjeras se encuentra ubicada en Lima y Callao, Arequipa, Ica y Ancash, y no contribuye a la descentralización de la industria, pues los mercados condicionan su desarrollo.

Las 242 empresas extranjeras obtuvieron el 44% del VBP del sector manufacturero. El VBP del sector manufacturero en el año 1969 (95) fue de 81 millones de soles, de los cuales 37.6 fueron producidos por empresas de origen extranjero.

Si comparamos estos resultados con las cuentas nacionales, veremos que el PNB del sector industrial para ese año fue de 29.419 millones de soles. O sea que 36.3% del VBP del sector industrial se incorporó como valor agregado.

Si tomamos el supuesto de que en el mismo porcentaje hayan participado las empresas extranjeras, entonces tenemos que ellas obtuvieron en valor agregado la suma de 1,366 de soles lo cual viene a ser el 21.5% del PNB

(94) Ibid., p.10

(95) Ibid., pp. 46, 50, 54.

(PNB-VA), que es ya una cifra significativa e implica una inmensa dependencia del sector industrial respecto a los primeros.

El Estado tiene en propiedad alrededor del 18% del capital manufacturero, mientras que el capital imperialista y el de la gran burguesía más del 80%. La diferencia queda en la burguesía media y en las cooperativas. En correspondencia con ello, más del 95% de los trabajadores se encuentran en las empresas privadas.

El imperialismo promueve el desarrollo de la gran burguesía: es así como Chrysler, en dos años, desarrolló 87 empresas de esa capa burguesa. Estas empresas que crecen en torno al núcleo oligopólico, lo mismo que la pequeña y mediana industria, neutralizan sus desventajas con la protección estatal, y una mayor explotación del trabajo asalariado.

Todas las grandes inversiones del Estado han sido hechas con crédito imperialista, lo cual constituye el factor más importante de endeudamiento. En las empresas públicas no financieras, entre el 1 de enero de 1975 y el 30 de julio de 1976, las pérdidas fueron de 17.000 millones de soles y se estimaba que al finalizar ese año llegarían a 23.000. Luego el ministro Piazza informó que el déficit ascendía a más de 30.000 millones, destacando Petro-Perú.

La mayor incidencia estaría en los subsidios al petróleo y derivados, a productos alimenticios importados

como fertilizantes, electricidad y ferrocarriles. Consecuentemente Aeroperú, Petroperú, siderperú, Mineroperú, Enata, Enci, Enafer y Epsep son las empresas con más pérdidas. Casi todas ubicadas en los sectores de servicios y producción de materias primas e industria básica que sirven al imperialismo y la gran burguesía aunque sea irracional y antieconómico hacerlo.

La industrialización fue un vehículo para internacionalizar la producción. Su estructura y ritmo estuvieron determinados por las trasnacionales y la máxima rentabilidad. La recomposición de las relaciones del capital renovó las formas de acumulación, pero en última instancia creo los límites a su autoexpansión. Una expresión patética es el bloqueo tecnológico.

EL BLOQUEO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL.

Como proceso internacionalizado de acumulación se desarrolla la economía peruana sobre una base imperialista con sus propios rasgos: empobrecimiento, desarticulación regional, desintegración y desarrollo de las fuerzas productivas asociadas a una mayor división entre naciones opresoras.

El desarrollo de las fuerzas productivas en el campo es muy atrasado. Se expresa, por ejemplo, en el número de tractores de 1972: de 8 352 en total para 1,400.000 unidades agropecuarias registradas en el mismo

año. Lo que significa que el 0.5% del total de unidades agropecuarias utilizaba este fundamental medio de producción. Este hecho va acompañado de un tremendo desarrollo desigual: la costa tenía 6 332 tractores, la sierra 1 514, y la selva 506. Falta saber cuántos se utilizaban, porque muchos estaban fuera de uso.

En el lado urbano, la Población Económicamente Activa (PEA) manufacturera se consideraba en 1972 de 611 000, correspondiendo al sector fabril el 34.8% (cinco o más trabajadores) y al artesanal (de uno a cuatro trabajadores) el 65.2% (menos de 214 000 obreros proletarios propiamente dichos).

Más del 50% de la industria es de bienes de consumo: el 70% se ubica en el sector semifabril (15 a 19 obreros) y cerca del 80% se encuentra en Lima en aproximadamente 6 000 establecimientos industriales. Sólo hay 34 industrias con más de 500 obreros, la mayoría de textiles y alimentos. La industria de maquinaria es inexistente.

El incipiente desarrollo de las fuerzas productivas y tecnológicas es producto de las etapas de dominación y explotación capitalista.

Hasta ahora los monopolios y otras grandes empresas -generalmente subsidiarias- se han circunscrito a la transferencia de tecnología del exterior. La gran burguesía no ha creado, tan sólo ha recibido por la

naturaleza de su acumulación y la capacidad de utilización del capital con este objeto.

De allí la relevancia de la importación de materias primas, de bienes intermedios y de bienes de capital para la producción de bienes de consumo y actividades primarias: agricultura, pesca, minería, etc., resultantes de su ubicación en la división imperialista de la producción.

De otro lado, la tecnología importada es vieja, superada muchas veces, y conque en algunos casos sea automatizada no quiere decir que se adecúe a la estructura semifeudal de la sociedad. Anaya culpa al celo y/o vigilancia del imperialismo y a las empresas nacionales por no haberse esforzado en desarrollar la tecnología. De ser así, -cómo podríamos explicarnos las marcas, patentes, licencias y asistencia técnica de E.U. a Europa occidental y Japón?. En realidad son los intereses imperialistas que buscan obtener el máximo de ganancias bajo determinadas condiciones y no la voluntad del imperialismo o de la burguesía nacional (que él mismo niega) lo que obliga al imperialismo a desarrollar su capacidad de transformar, ampliar y racionalizar la economía, de acuerdo a la rentabilidad global del capital.

Desde luego que pueden aplicar también tecnología de vanguardia en exclusividad cuando les conviene, sea en sus filiales o subsidiarias o en empresas mixtas. De ahí

que los grandes monopolios tengan la punta en las ramas en que invierten, caso de los grupos de líneas o ramas que nos muestra el mismo autor.

De las 366 empresas industriales que pagan royaltys por uso de tecnología, 239 tenían al comenzar los años setenta contratos con una sola empresa extranjera, 61 contrarros con dos, y 66 contratos con 30 o más. En agosto de 1973, de las 758 empresas con contratos vigentes 306 procedían de los Estados Unidos, 54 de Alemania Federal, 38 de Suiza, 17 de Holanda, 5 de Suecia, 46 de Francia, 14 de Japón, 31 de Inglaterra y 247 de diversos países: Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Colombia, Dinamarca, Ecuador, España, Italia, Liechtenstein, Panamá, Puerto Rico, Noruega, Venezuela, entre otros (96). Aunque debe tenerse en cuenta que en muchos de estos países actúan los intereses de empresas multinacionales de origen norteamericano.

El control monopólico que actualmente ejercen los grandes consorcios imperialistas en tecnología ha provocado un efecto negativo sobre la balanza de pagos debido al egreso creciente de divisas (de 1968 a 1972 un gasto de 52,2 millones de dólares).

En el periodo 1964-1972, el 55% de las remesas por royaltys fue enviado a Estados Unidos, el 30% a Europa, y un 2.5% a siete países de América Latina (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Puerto Rico, Panamá), en tanto que Canadá y Japón se beneficiaron con 4.5% cada uno.

La dependencia tecnológica es un proceso de descapitalización que sufre el país en relación a los principales centros de tecnología, siendo Estados Unidos el principal beneficiado por la salida de divisas del Perú hacia los centros productores de tecnología, no sólo debido a la compra o alquiler de patentes, marcas, etc., sino a la importación de materias primas, productos intermedios y bienes de capital. De este modo la dependencia tecnológica se sitúa en la estrategia del capital financiero.

El Banco Central de Reserva del Perú sostiene que el valor de las importaciones realizadas por el país para mantener a la industria manufacturera durante el periodo de 1964 a 1972 ascendió a la suma de 4.052 millones de dólares, de los cuales el 41.4% se destinó a la compra de materias primas y productos intermedios, en tanto que el 22.7% a bienes de capital. Ambos porcentajes representan el 64.1% del total de las importaciones realizadas en ese periodo que equivalen a un ingreso anual de 450 millones de dólares.

El control monopólico que ejercen las grandes empresas y los conglomerados multinacionales sobre la tecnología que se utiliza en el Perú ha posibilitado muchas veces la imposición de cláusulas restrictivas en los contratos sobre las empresas receptoras de tecnología. Las patentes son la forma tradicional de reconocimiento de las inversiones o descubrimientos, a la vez que imponen un límite artificial a su uso.

Vaistos considera que los complejos motivos de la inversión directa extranjera indican que la causa clave -particularmente en los países en desarrollo- para emprender inversiones extranjeras nace de una estrategia defensiva, de conservar mercados que fueron alguna vez capturados mediante las exportaciones (después éstos fueron amenazados por competidores y por las estrategias de sustitución de importaciones de los países receptores).

Las firmas han declarado abiertamente que ellas toman patentes de otros países y las suprimen como una manera de detener la competencia en su origen. Estas exportan los productos patentados a mercados donde ni las firmas nacionales ni otras firmas extranjeras pueden producir o exportar. De esta manera preservan su monopolio y se reduce el ritmo de difusión del progreso técnico.

El mismo autor señala que 4 872 patentes fueron concedidas entre 1960 y 1970 en las ramas industriales más importantes que incluyen electrónica, productos farmacéuticos, procesamiento de metales, transporte, etc. De ese total sólo 54 eran explotadas (1.1%) con el objetivo de conservar mercados de importación seguros, sin necesidad de inversión extranjera, e impedir la competencia potencial.

Las marcas son para obtener mayores ganancias generadas en la innovación tecnológica o en las actividades de propaganda, comercialización, publicidad, etc., evitando la competencia. Mientras que las licencias se utilizan no

cuando los monopolios fabrican algo, sino cuando venden directamente la tecnología para su producción o cuando pueden realizar inversiones por su capacidad o restricciones. Si no quieren arriesgar capital, o pretenden controlar empresas, pueden darse en forma combinada.

Entre 1966 y 1974, el 19% del pago de servicios es por regalías y licencias, el 35.7% se obtienen del sector industrial (aproximadamente 40 millones de dólares de un total de 112).

Las cláusulas restrictivas en tecnología -lo mismo que en contratos para lograr capital de organismos- establecen que las empresas receptoras están obligadas a adquirir de una fuente determinada los bienes de capital, productos intermedios, materias primas y otras tecnologías. Además ejercen el control del volumen y la estructura de la producción, lo que repercute en los costos de las empresas y su capacidad de exportar; protegen sus mercados, otorgan al proveedor el derecho a fijar precios de exportación o comercializar los productos con el exterior, establecen la opción de compra parcial o total al proveedor de tecnología, el monopolio del transporte y otra serie de ventajas.

Este tipo de cláusulas también se encuentra en contratos de empresas mixtas y en la misma inversión extranjera de acuerdo a contratos. En este sentido, la inversión directa extanjera se hará cuando haya tecnología exclusiva que le ofrezca ventajas monopólicas, cuando las

posibilidades de inversión de otra empresa con mejor tecnología sean mínimas, o cuando existan los recursos para la inversión y ofrezcan superganancias. Es obvio que cuando ocurra lo contrario no habrá inversiones.

En conclusión:

a) En el análisis sectorial y de conjunto de la economía se comprueba una consolidación en extensión y profundidad del semicolonialismo. Las reformas semicoloniales no han fracasado; en la misma medida en que el imperialismo y las clases dominantes han conseguido sus objetivos, la existencia de contradicciones no nos pueden hacer perder de vista sus perspectivas y tendencias. La preferencia por los empréstitos, sentando así las bases para la inversión imperialista, son formas alternativas de exportación de capital y obedecen a su lógica de acumulación.

b) El imperialismo en la industria monopoliza y absorbe las ramas más dinámicas. Es el caso de los bienes de capital y de consumo a través de nuevas industrias, filiales o subsidiarias (70.2%), que producen gran parte del valor agregado y subordinado al sector en todas las formas y niveles. Lo mismo que a todos los que están articulados a él (minería, energía e insumos), controlados en muchos casos por el

capital financiero y las empresas mixtas. Los complejos extractivos de primera y de segunda transformación, en la práctica son controlados por el imperialismo a través del Estado, el cual es agente del capital financiero. La intensificación de la sustitución de importaciones agudiza las contradicciones.

c) La inversión extranjera tiene un carácter a largo plazo, creciente y ampliado aumentando el monto y el número, en especial en los sectores minero e industrial, mientras que el Estado lo hace en la infraestructura de servicios y en algunas materias primas, a la vez que cede el ahorro interno al primero. El crecimiento ha sido promovido con regímenes deficitarios, la expansión del crédito y la liquidez, complementados con una débil acumulación basada en la importación de bienes de capital, insumos y alimentos. Transfiriéndose así por diversos medios la mayor proporción del excedente, lo que se expresa en la balanza comercial y de pagos.

d) El imperialismo norteamericano ha invertido entre 1969 y 1974 menos de 182 millones de dólares (entrada neta de capitales), y el stock de capitales sólo ha aumentado en 150 millones de dólares (Nickson, pp.26-64); se explica así la

diferencia del capital extranjero y el énfasis en los préstamos del capital financiero internacional. Por ello el endeudamiento ha pasado de 794,4 millones de dólares en 1968 a más de 12.000 millones en 1979.

La penetración del capital extranjero, bajo cualquiera de sus formas, impide la acumulación interna nacional y se realiza sobre una base económica que funciona de acuerdo con los intereses imperialistas como lo demuestra la naturaleza de las importaciones y las exportaciones. En 1974 las importaciones eran: bienes de consumo, 138 millones de dólares; materias primas, 664 millones; bienes de capital, 469 millones; 9 aviones, barcos, ayuda militar y donaciones, 638 millones de dólares. La mayor parte de la producción era para la exportación en agricultura, minería y pesca. Las principales exportaciones en términos relativos por productos eran de 53.3% en minería, 19.2% en agricultura, 16.4% en pesca, y 11.4% en otros. Así tenemos que no existe, como algunos dicen, una acumulación nacional capitalista. La producción, circulación y distribución dependen del imperialismo que expande y entraba al mismo tiempo el desarrollo capitalista.

e) La remisión de utilidades, pago de royalties, patentes, marcas, amortización de intereses y servicios de la deuda, demuestran que es mayor el capital que sale que el que entra. Entre 1966 y 1974 el saldo neto entre entrada y salida de capitales fue de 420 millones de dólares. Y entre 1968 y 1975 el flujo neto de ingreso de capitales por endeudamiento externo fue de 1.908 millones, y la salida por amortizaciones e interes de la deuda 2.473,8. La diferencia negativa -en consecuencia- es de 565.6 millones de dólares.

La acumulación es básicamente externa y se funda en el control monopólico de todos los sectores de la economía. Como lo seguiremos apreciando.

MATERIAS PRIMAS: EL OTRO EJE DE LA ESTRATEGIA ECONOMICA NEOCOLONIAL.

La minería y el agro andinos, estrechamente articulados, se constituyen como estructuras coloniales en el siglo XVI y se expanden en toda la historia "Chorreando sangre por todos sus poros".

En el siglo XIX, la minería no tuvo prácticamente ninguna importancia para la economía Peruana. Es al iniciarse este siglo cuando la riqueza minera de los Andes del centro se empieza a explotar y adquiere significado para

el naciente imperialismo y el país.

La minería en gran escala se debió principalmente a que:

1. Existía una demanda mundial creciente de cobre. A finales del siglo pasado y comienzos del presente, países como E.U. y Alemania había empezado una expansión industrial monopolista acelerada.

2. Durante la última parte del siglo pasado, por la fama que los yacimientos de Cerro de Pasco tuvieron durante la colonia como reservas de plata, un grupo de ingenieros norteamericanos descubrieron que a mayor profundidad existían inmensas reservas de cobre.

3. La facilidad para obtener mano de obra.

4. La acción del Estado expresada en a) la ley del 12 de enero de 1877 sobre la propiedad de las mismas; b) la construcción de parte de las líneas férreas; c) el comercio exterior libre de derechos desde 1890 hasta 1915, año en que se reanudó la gravación de los bienes exportados; d) la promulgación del nuevo código de minería que empezó a regir desde 1921.

Todos estos elementos se conjugaron de manera tal que en 1901 un grupo de capitalistas monopolistas norteamericanos presididos por James B. Hoggin decidieron invertir algo más de 20 millones de soles para iniciar la explotación de los yacimientos de Cerro de Pasco.

En forma general, éstas han sido las

circunstancias en que nace la gran industria minera, que ha repercutido de manera decisiva en la economía peruana en distintos niveles:

1. Desintegró las zonas campesinas del centro y logró formar con el tiempo una masa de trabajadores mineros ligados a la tierra y sobre-explotados. Las condiciones de trabajo eran muy malas, tanto que en muchos casos se obligaba a trabajar al obrero jornadas de 36 horas continuas, descansar doce para luego integrarse nuevamente al trabajo por un tiempo similar. Eso ocurrió hasta 1915.

2. La estructura del comercio exterior se vió afectada por la participación minera. Estos primeros años fueron de expansión y consolidación de la minería en la economía peruana, que llegaría a constituir en 1912 un poco más del 40% de las exportaciones totales.

3. Hubo una creciente dependencia respecto al imperialismo y al mercado de los Estados Unidos, que reemplaza a la Inglaterra que antes de 1906 tuviera alguna significación para la minería.

En la conformación de la estructura productiva, entre 1903 y 1913, los productos que más se expandieron fueron el cobre, la plata y el petróleo, los cuales logran una alta participación en la estructura productiva minera.

Al estallar la primera Guerra Mundial, el cuadro económico de la minería era el siguiente: a) las exportaciones mineras constituían el 35% de las

exportaciones totales; b) el destino de estas exportaciones se orientaba en un 80% a los Estados Unidos; c) en la estructura productiva, los principales productos se ubicaban en la siguiente proporción del valor: cobre, 36.7%; petróleo, 27.2%, y plata, 23.9%.

Dos años después las exportaciones mineras representan el 48% de las exportaciones totales; de aquéllas, el 93% con destino a Estados Unidos. En la estructura productiva la proporción era la siguiente; cobre, 55.4%; petróleo, 17.6%, y plata 15.3%.

La minería ha sido, y es, una actividad permanente de la población peruana que, por los intereses imperialistas, ha aumentado su relevancia a pesar de su relativa posición minoritaria en relación a otros sectores.

Incorporadas otras actividades como fundición y refinación -industria metal básica-, la participación del conjunto de éstas es más alta puesto que aporta el 10% de la producción industrial manufacturera nacional.

El papel de la economía de exportación explotada por el capital principalmente imperialista es ofrecer divisas para el comercio exterior y cumplir con los compromisos financieros que garanticen el cambio internacional. Hasta 1968 la minería ocupaba el primer lugar en el ingreso de divisas, seguida por la pesca. Como consecuencia, el proletariado de ambos sectores adquiere suma importancia. La producción minera, además de proveer

la mayor parte de las divisas, es el sector de mayor rentabilidad per cápita y alta concentración de capitales, lo cual le da un mayor significado político.

La producción minera es la principal actividad hacia la cual se orienta el capital norteamericano. En 1965, de los 461 millones de dólares invertidos, correspondía el 52.3% a la minería y el 14.1% a la industria, y el resto quedaba en actividades como la agricultura, servicios y transportes. Este capital invertido en la minería se hacía directamente a través de nueve sucursales de monopolios extranjeros mediante empresas mixtas formando compañías "nacionales" que garantizaran una mejor explotación.

Podemos comprobar que el capital imperialista tenía en 1965 el control de la actividad minera. De las nueve sucursales de empresas foráneas, tres de ellas (Cerro de Pasco C.C., Southern Perú C.C. (SPCC), y Marcona Mining Company) poseían el 79.1% del capital invertido total, es decir 24.503 millones de soles. Estas corporaciones controlaban el 75.25% de la capacidad total de concentración de minerales y el 89.78% del total de los productos exportados del sector minero metalúrgico.

La alta composición orgánica del capital y la tecnología avanzada incorporada dan cuenta de una alta productividad de ese sector que se refleja en una creciente rentabilidad empresarial. Calculado el VBP y deducidos los

gastos de operación, alcanzaba en ese año el 34% del valor total. Pero calculada la rentabilidad en relación al capital efectivamente aportado por los capitalistas, el porcentaje aumenta hasta el 38%.

Tres gigantescas empresas con su red de proveedores y subsidiarios acumulaban un inmenso poder: con el 79.1% del capital invertido en minería controlaban el 75.4% de la capacidad total de la concentración de minerales, el 89.78% del total de la capacidad de fundición, y abarcaban el 77% del total de exportación de minerales en todas sus formas. La Cerro de Pasco C.Co. era la más poderosa empresa imperialista en el Perú. Aparte de sus propias concesiones y fábricas, era propietaria del 22.5% de las acciones de la SPCC que explota los yacimientos de Toquepala y Cuajone.

Por otro lado, la Cerro de Pasco C.Co. es propietaria de otras medianas compañías mineras como la Compañía Minera Raura (60% de las acciones), Compañía de Minas Buenaventura, S.A. (con el 33.59% de las acciones). Extendía su poder a las industria metalúrgica y química ya que era propietaria de las siguientes empresas: 1. Cía. Industrial del Centro, S.A. con el total de las acciones; 2. Industrial del Cobre, S.A. (INDECO), con el 76% de las acciones; 3. Cerro de Pasco Petroleum Corp.; 4. Explosivos, S.A., con el 32.45% del capital; 5. Cía. Peruana de Electrodo Oerlikón, S.A. todo el capital; 6.

Metalúrgica Peruana, S.A., Fundición de Acero, con el 28.54% de las acciones; 7. Refractorios Peruanos, S.A. con el 42% de las acciones; 8. Fundición de Metales Bera del Perú, S.A., 50% de las acciones; 9. Metales Industriales del Perú, S.A., 49% de las acciones; y 10. Fertilizantes sintéticos, S.A. (FERTISA).

El 51% de las acciones de la SPCC pertenecían a la American Smelting and Refining Company (ASARCO), el 16% a la Phelps Dodge Corporation, y el 10.2% a la New Mont Mining Corporation.

Hacia fines de la década de los cincuenta, habían entrado en explotación los yacimientos de Toquepala, considerados de los de mayor importancia mundial -descubiertos después de la Segunda Guerra-, y los minerales de hierro de Marcona. En el primer gobierno de Belaúnde Terry se inician las gestiones para la explotación del yacimiento de Cuajone. La ASARCO aprovechaba la circunstancia de que el Estado peruano necesitaba refinanciar su crecida deuda externa para obtener mayores concesiones.

Con esta situación se encontró la Junta Militar de Gobierno al asumir la dirección del Estado en 1968. Creó el Ministerio de Energía y Minas, suprime el antiguo Ministerio de Fomento y otorga así una importancia capital a la actividad minera. Dentro de las principales medidas de este nuevo gobierno está la firma del contrato del Estado

con la SPCC en octubre de 1969, para la explotación de los yacimientos cupríferos de Cujone, con una inversión de 350 millones de dólares.

Otros proyectos aprobados fueron: planta de Amoniaco y Urea en Talara, refinería de Cobre en Ilo, ampliación de Toquepala y de la refinería de la Pampilla en Lima, y la primera etapa de Bayóvar.

A pesar de que la PEA es mínima -menos del 1%-, aproximadamente la mitad del valor total de las exportaciones es producida por este sector. En 1964 era el 51.6% del ingreso de divisas y la agricultura el 30%, mientras que la industria aumentó del 1.7% a cerca del 10%.

En 1974 la participación del capital estadounidense en el Perú era la siguiente: minería, 46%; petróleo, 27%; industria, 10%; y otros, 17%, que corresponde a gran parte del volúmen de exportaciones del país.

Las remesas hacia el exterior son crecientes. Más aún si se considera lo no declarado: rebajas del valor, tasas de depreciación, falsos préstamos, etc.

La producción total acumulada de cobre, plomo, zinc y plata de 1951 a 1977, en volúmen nos permite apreciar con más claridad el control imperialista del sector. Las sucursales de empresas extranjeras en 1977 tenían el 43% de la producción, la empresa nacional privada el 17%, mientras que el 29% y Cerro Verde el 1%.

El primero de enero de 1974, parte de las

propiedades de Cerro de Pasco fueron estatificadas. Empero no fueron afectados los intereses de esta empresa en el capital accionario de la SPCC y en otras propiedades. La fundición de metales Bera, luego de haber pasado al Estado -por industria básica-, revirtió a sus antiguos dueños.

De esta forma un 30% de la minería sigue en manos del capital extranjero, un 46% en manos del Estado y el resto pertenece al capital nacional (97).

El caso de la Cerro de Pasco Cooper Corporation, que controla 26 metal-mecánicas en forma directa y 96 en forma indirecta es demostrativo del antimperialismo retórico.

Su mejor inversión es en Cuajone, con el 26% del capital accionario, de un capital superior a los 600 millones de dólares. Aquí la rentabilidad es muy alta y con vías fáciles de acceso, a tajo abierto, mínimos gastos de transporte, empleo de reducido número de trabajadores (2 000 en comparación con los 15 000 que tenía la Cerro, y otras ventajas más. Además, la tasa de ganancia se había reducido (en 1967 era de 20.4%, y en 1970 de 7.4%), la empresa estaba en crisis, por ello se inicia la oferta de ventas en enero de 1972.

La Cerro dejó sus yacimientos -entre otras causas- al bajar la rentabilidad (hecho determinado por los altos costos de modernización y ampliación: 1.294 millones de dólares en trece proyectos debido a las luchas obreras.

(97) Cabieses y Otero, op. cit., p. 75.

La política antinacional de la JMG se sintetiza en que -por ejemplo- la mina de la Cerro, después de ser saqueada depredatoriamente durante más de 70 años, es estatizada otorgándosele compensación por el saqueo.

Se pagó a la Cerro la suma de 150 millones de dólares prestados por el imperio financiero Morgan Warrent Trust, con un interés del 7%, con indemnización del seguro, y la comercialización se realiza a través del Minero Perú usando los servicios de la Cerro Sales, subsidiaria de la Cerro.

Sin haber tocado sus intereses en la Southern, que controla las minas más importantes de cobre -entre las más grandes del mundo, con una ley superior al 2% de pureza cuprífera y con reservas probadas de 500 millones de toneladas- son entregadas en resarcimiento.

En enero de 1974 se estatizó la Cerro y en junio de 1975 las minas de Marcona, después de que los protestantes mormones (E.U.), propietarios de la mina -entre 1953 y 1972, en 20 años y luego de invertir dos millones de dólares-, se habían capitalizado con más de 200 millones de dólares.

Analicemos otro caso: Toquepala, mina en manos de la Southern Perú Cooper Co. (SPCC), que paga el 7% de impuestos aunque sus utilidades anuales líquidas asciendan a 100 millones de dólares en promedio.

El contrato de Cuajone con la SPCC estableció en

cuanto a tributación, el pago del 45% de impuestos para la etapa de diez años de recuperación de la inversión y 54.5% en la etapa de la estabilización en esa década.

De aproximadamente 2 000 millones de dólares de utilidades, 1 500 quedan libres y el 45% se aplica sobre los 500 restantes. Se dijo que era un contrato especial, pues si se hubiera realizado de acuerdo con la nueva ley de minería 18.225 habrían tenido que pagar 788 millones de impuestos en vez de 225, perdiendo además otras ventajas: exoneraciones por reinversiones factor agotamiento, libre disponibilidad de divisas, revaluación del saldo por depreciar, reservas de amortización, etc.

El financiamiento de la inversión fue de 390 millones de dólares en 1973 por el Chase Manhattan Bank, la Internacional Finance y otras entidades financieras imperialistas como el BID y BM, con un préstamo de 73,4 millones de dólares.

Un aspecto significativo es que en el Plan 1971-1975, mientras la inversión pública era de 20.893 millones de soles, la privada ascendía a 38.352. Por otro lado, es importante el hecho de que sólo se fomenta el desarrollo de la gran minería: de 1962 millones de dólares, únicamente 24 eran para la pequeña minería, y 1.445 para la gran minería.

Minpeco -Comercializadora Estatal de Minerales- tiene como principales compradores de mineral a la ASARCO

-propietaria de la Northern Perú Mining y principal accionista de la Southern Perú Cooper Corp. La Mitsui es inversora en las minas Chapi, Katanga, Sta. Luisa Toyota, Química sol, etc. La Phillips Brotheres Filial de la Engelhard Minerals, en la Marcona y la Nippon Steel.

Debido a la monopolización del mercado internacional -como ocurre con la mayoría de materias primas-, estas empresas son las que dominan la minería y se ocupan de la comercialización mundial de acuerdo a sus necesidades de acumulación.

La minería es el sector económico en donde más invierten las trasnacionales. Las razones por las cuales lo prefieren son su alta rentabilidad y el apoyo que los gobiernos de los países de capitalismo avanzado otorgan a las actividades orientadas a producir lo que no tienen en su territorio o lo que producen en menor proporción a sus necesidades y aquellas materias primas que tenderán a escasear en el futuro.

En lo que se refiere a la energía, después de 1968 se establecieron 78 empresas nuevas para explotar petróleo: 25 millones de Has. en la selva y el zócalo continental de la costa norte. Ya no son concesiones sino contratos con una duración de cinco años en los cuales el 50% se reserva para el Estado (que se reduce al 22% debido a la exoneración de impuestos y al libre ingreso de divisas). (En Venezuela el 60% revierte al Estado). Mientras,

Petro-Perú explota sólo ocho millones de Has. con tendencia a reducirlas.

La duración de los contratos de la OXY y Belco son de 27 y 34 años respectivamente. En el caso de la primera, de 300 millones invertidos, en solo cuatro años recuperó toda la inversión y obtuvo un exceso de doce millones o más. Desde 1979, de todo lo que explota, un 50% es para ella. (Con Belaúde Terry (1980-1985) y Alan García Pérez los contratos sufren cambios que no alteran su naturaleza antinacional.)

El oleoducto trasandino se financió con un préstamo de la Corporación Petrolera del Japón a CODIFE (Irán también participó) que debía ser pagado con petróleo en cuatro años, con otros tantos de gracia cuando ya se hubieran agotado las dos terceras partes de la reserva. Se renunció a la soberanía, y de suscitarse conflictos se recurrirá a tribunales japoneses y, en caso de arbitraje, a cortes londineses.

Debemos recordar la creación del "Día de la Dignidad Nacional"(*). El 3 de Octubre de 1968 la JMC de Velasco intervino las instalaciones de la IPC. No constituyó sino una forma velada de ocultar el hecho concreto de que la IPC, propiedad de Mr. Rockefeller, adeudaba a Perú 690 millones de dólares, parte de los cuales se compensó con la chatarra dejada por esta empresa.

Esta deuda ha quedado como una hiriente muestra

(*) El 3 de octubre de 1968, la JMG de Velasco intervino las instalaciones de la IPC.

de cómo ese monopolio saqueó el país a su antojo. Esto mismo obliga a repensar su historia junto a la del guano, del salitre y de los FF.CC.

Por otra parte, este subsector se encuentra disperso y poco integrado. Las instalaciones para responder a las demandas locales, se han construido independientemente en varias partes del país. El objetivo básico del Gobierno Militar era lograr la integración de numerosos sistemas privados y estatales en una sola red interconectada que diera una base para su explotación y exportación.

En lo referente al sector pesquero, desde la década de los cincuenta se desarrolló un proceso de concentración de la producción pesquera, de las muchas empresas dedicadas a la extracción y transformación de pesca de consumo humano directo. A mediados de esa década adquiere importancia la extracción de anchoveta para la producción de harina de pescado. Al principio era reducido el número de empresas dedicadas a esta industria, pero a finales de la década de los cincuenta y principios de los sesenta comienza el proceso de centralización de capital y concentración de la producción de carácter oligopológico. Más del 50% de la inversión programada en el bienio 1973-1977 lo constituían capitales extranjeros (82 millones).

En 1968 la deuda era de 6.700 millones y se capturaban 10 millones de TM. En 1970 se tiene una deuda de 8.600 millones, las embarcaciones se reducen en número así

como las fábricas. En 1972 sólo se capturan cuatro millones de TM. y en 1973 la deuda asciende a 9.211 millones. La estatización consistía en valorar los bienes de este sector de la gran burguesía en cuatro mil millones de soles, asumiendo el Estado el pago de sus deudas.

De un máximo de producción de doce millones de TM. en 1970, se llegó a dos millones de TM. en los años 1973-1975.

Precisamente la estatización se dio en esas circunstancias, cuando después de algunos quinquenios, la burguesía y el imperialismo habían saqueado y depredado al máximo los recursos marinos, por lo cual se produce la crisis más grande del sector pesquero. Como consecuencia, la gran burguesía pesquera tenía una deuda superior a 9.000 millones de soles.

En 1971 el grupo Banquero y otros oligopolios controlaban el 15.3% del VBP y el 16.3% de capital de la industrial. Por otro lado, catorce grupos controlaban el 56.2% del VBP y el 61% del capital accionario. Malpica al respecto dice: "En cuanto a la industria anchovetera, el número de fábricas llegó a 170 a principios de la década del sesenta, contando con 1.752 bolicheras. En el momento de la estatización eran sólo 108 fábricas y 533 embarcaciones y según la opinión de la Comisión Multisectorial encargada de la racionalización de Pesca Perú sólo se necesitarían 350 embarcaciones y 45 fábricas".

En cuanto al número de empresas, a principios de la década del sesenta, entre dueños de compañías integradas por plantas y embarcaciones superaban los 400, en tanto que en 1973 había sólo 84 empresas integradas y unos 30 a 40 armadores. El 80% de la producción de harina y aceite estaba concentrada en 28 grupos (98).

Con la estatización una estimación aproximada indica que cerca del 78% del sector pesquero está bajo el control del Estado. Empero, para más tarde la flota anchovetera revirtió al sector privado en forma de "pequeñas empresas", mientras que el Estado mantuvo la propiedad de la industria de la transformación. Una huelga general indefinida llevada a cabo por la Federación de Pescadores del Perú se realizó para luchar contra la implementación de esta medida, puesto que en su base estaba el despido de más de 6 000 pescadores anchoveteros.

Respecto a la industria conservera, tenemos que sobre un total de 23 empresas, tres extranjeras controlaban el 21.7% de la producción.

En la industria de congelado de pescado, de un total de seis empresas una de ellas, que era extranjera, controlaba el 91.5% de la producción. Además la industria ballenera era controlada casi en su integridad por una empresa extranjera (99).

La balanza comercial explica el papel de las materias primas en la lógica del entramamiento del

(98) Carlos Malpica, La desnacionalización de la flota pesquera: una medida antihistórica, Labor, Lima, 1975.

(99) Op. cit., pp. 12 y 22.

desarrollo. La expansión y diversificación de las exportaciones se explica por la intensidad con que se fueron incrementando las importaciones. Tenemos, por ejemplo, que en 1975 de toda la inversión bruta fija del sector público, cerca del 67% se destinó a las ramas generadoras de divisas por concepto de exportaciones. Aunque esto se encuentra demasiado ligado a lo que pueda suceder tanto con los volúmenes como con los precios de los principales productos de exportación. Tenemos así que los productos que más divisas generan al país tanto en 1968 como en 1974 son el cobre y el pescado. En el primer año representaron un 27% y un 26.8% respectivamente, mientras que en 1974 representaron un 23.1% y un 16.1% del total de las exportaciones. Donde los Estados Unidos recibieron en promedio, de 1968 a 1974 el 34.2% del total exportado.

Veamos la estructura de las importaciones (F.O.B.):

	1968	1975	1977
Bienes de consumo	15.4%	9.2%	8.5%
Insumos Productivos	51.5%	54.4%	59.2%
Bienes de Capital	32.8%	36.2%	32.1%
Diversos	0.3%	0.2%	0.2%

Las importaciones muestran una tremenda rigidez puesto que en 1977 la economía para poder equiparse y mantener el aparato productivo, precisaba de un 90.6% del total de bienes importados. Pero también aumentan las

importaciones de los principales productos agropecuarios cuya producción nacional resulta marcadamente deficiente, como trigo, arroz, maíz, aceites vegetales, carnes, productos lácteos y ciertos insumos fundamentales para la industria y la agricultura como fertilizantes, papel periódico, alambres de acero, parafina y otros.

En 1968 las importaciones provenientes de E.U. alcanzaron un 34.5% del total y en 1974 un 31.4%, mientras que en promedio alcanzó el 30.3% para los años de 1968 a 1974.

De este modo se ve la gran dependencia del Perú respecto a ese mercado, que también ofrece el capital de crédito para importar.

El Perú como país oprimido posee una estructura económica configurada por fuerzas externas. El imperialismo como elemento interno de la economía peruana esta integrado al conjunto de la economía y a la estructura de clases en todos y cada uno de los sectores, las materias primas son explotadas bajo el impulso de las inyecciones de capital y la demanda de las partes imperialistas, en el contexto de la desigual división internacional del trabajo.

De esta condición de dependencia estructural y de esta lógica de acumulación no puede escapar el sector agrario, que por su importancia merece un acapite aparte.

EL SECTOR AGRARIO.

PROGRAMA Y REFORMA AGRARIA DEL GOBIERNO MILITAR.

La recomposición del bloque en el poder -uno de los objetivos centrales de la Junta Militar- requería la reubicación parcial y gradual de la oligarquía en la base económica, abandonando las plantaciones de la costa y los latifundios andinos; y parcialmente la banca y el comercio de exportación. Ello alteró la naturaleza semicolonial del Estado al reforzar el capital industrial oligopólico y fortalecer el intervencionismo normativo y empresarial del Estado. Se aplicó una nueva concepción de seguridad y desarrollo que posteriormente el gobierno definiría como "Democracia Social de Participación Plena".

La reforma agraria se inscribe en un conjunto de transformaciones que se van definiendo en el camino de forma pragmática y empírica.

La estatización de los campos petrolíferos de Talara en manos de la Standard Oil of New Jersey es la primera medida que busca legitimar el régimen. La segunda será la ley de Reforma Agraria, completada con la Ley de Aguas.

La lucha contra la vieja oligarquía sin distinción de sus fracciones y la reforma de la empresa mediante el establecimiento de la comunidad laboral de modo indiscriminado, permitió que se afectara a la burguesía media, agraria e industrial. Ello expresa el carácter

obtuso y confuso de un reformismo, al que amplios sectores de izquierda, por el enfrentamiento contra viejos estereotipos oligárquicos, le asignaron el carácter de burgués nacional.

El Estado extiende la reforma de la empresa (1970) a los sectores pesquero, minero y de telecomunicaciones. Asume su participación en la banca, estatiza totalmente la actividad pesquera (1972) y dos grandes explotaciones mineras de propiedad extranjera: Marcona Mining Co. y la Cerro de Pasco Cooper Corporation.

Crea o participa en grandes empresas mineras, industriales, comerciales, en energía y comunicaciones; actúa ideológicamente a través de la reforma educativa (1972) y la estatización de los medios de comunicación. Esto moderniza al Estado que basa su legitimidad en una autodefinición antioligarquica, antimperialista y antiaprista y en un apoyo social de fuerzas agrarias, la clase media y los partidos que apoyan el proceso. El sustento financiero es foráneo y llega acompañado de nuevas fracciones del capital que se ubican en la industria, la minería y el petróleo. Las reformas se hacen en una permanente lucha interna, en tanto hay sectores de militares que expresan los intereses de la nueva gran burguesía y otros que son definitivamente pro-oligárquicos y defensores del viejo Estado.

La primera medida notable en materia agraria fue

la afectación de las haciendas ganaderas de la Cerro de Pasco en noviembre de 1968.

El ministro de agricultura, sensible a la presión oligárquica, nombra una comisión integrada por grandes propietarios para revisar el código de aguas. El Comité de Asesoramiento de la Presidencia de la República (COAP), prepara la ley, cuya promulgación se da con un nuevo ministro el 24 de junio de 1969.

La Sociedad Nacional Agraria (SNA) no asume la defensa gamonal -el ineficiente latifundio tradicional-; protege, más bien, a la burguesía agraria más eficiente.

El programa.

Los militares eran plenamente conscientes de la tarea central: seguridad y desarrollo, frenar las luchas campesinas y encauzar su participación política eliminando los obstáculos (terratenientes) para organizar el capitalismo agrario. El modelo se gesta en la práctica lentamente y en medio de conflictos. Responde a los planteamientos de los sectores más reformistas y asesores cristiano-progresistas.

Los aspectos más sustantivos del modelo son:

a) Liquidación de los sectores terratenientes y de la gran burguesía agraria mediante la expropiación para transformarlos en industriales. La burguesía agraria costeña y los terratenientes andinos del gran latifundio estaban excluidos del desarrollo agropecuario, pero había

dudas y vacilaciones respecto a los medianos terratenientes andinos y la mediana burguesía de la costa. En 1972, con el manual de adjudicaciones -y en 1975 con la reducción del límite inafectable-, la cuestión se define desfavorablemente para ellos.

b) Reconocimiento de la propiedad privada y eliminación del mercado de tierras. (100) La tierra se asigna administrativamente y el mercado de tierras es controlado por el Estado, que trata de hacer coincidir posesionario y conductor. Se propone la transformación de la estructura de tenencia y propiedad eliminando la hacienda privada por otra asociativa.

Las afectaciones de las tierras han generado la resistencia de los anteriores propietarios que optaron por descapitalizar completamente los campos y crearle de ese modo graves problemas al gobierno y al campesinado. Es así como en un lapso muy pequeño de tiempo se exterminó el ganado, se descuidó la conservación de los suelos cultivables, se paralizaron las inversiones y se recortaron las áreas para cultivo.

El sector agrario, como componente de la concentración de la producción de la economía peruana hasta antes de la actual ley de reforma agraria, se encontraba altamente concentrado en pocas e inmensas unidades agropecuarias. Así 1961 el 83.2% de las unidades agropecuarias con menos de cinco Has. de extensión

concentraban sólo el 5.5% del área total de la superficie agrícola del campo.

Por su lado, el 16.8% de las unidades agropecuarias restantes concentraba el 94.5% del total de superficie agrícola. En 1972 la situación no había cambiado sustancialmente, pese a la reforma agraria llevada a cabo a partir de 1969. En aquel año, el 77.9% de las unidades agropecuarias concentraban el 6.6% de la superficie. Asimismo, el 22.1% de las unidades agropecuarias de más de cinco Has. concentraba el 93.4%.

En un procedimiento expeditivo, donde la compensación era obligatoria para el terrateniente, se afectaban los fundos y se establecía un periodo de transición bajo administración estatal. En su apoyo se crearon la Oficina Nacional de Desarrollo Cooperativo, el Centro Nacional de Capacitación e Investigación Agraria, el Tribunal Agrario, etc., en una creciente adecuación institucional y tecnoburocratización.

La aplicación de la reforma por áreas se orientaba a la región. De los microproyectos regionales integrales de Asentamiento Rural (PIAR) a los Proyectos Integrales de Desarrollo (PID). La creación de centrales cooperativas incorporan la propiedad y organización asociativa: Cooperativas Agrarias de Producción, Sociedades Agrícolas de Interés Social y Grupos Campesinos (CAP, SAIS, GC); y el área no reformada con adecuación empresarial de

propiedad privada y organización asociativa: comunidad campesina reestructurada, Cooperativas de Servicios (CAS) y Cooperativas de Integración Parcelaria (CAIP).

Estas acciones, aunadas a la reglamentación de la propiedad y organizaciones privadas y a la creación de la Confederación Nacional Agraria como entidad gremial corporativa tenderían a superar la desintegración regional, asegurando así la integración del campesinado indígena -de potencial subversivo- y el fortalecimiento del Estado, para lograr de esta manera la seguridad nacional y el desarrollo.

Privilegio de las formas asociativas que incorporen al campesinado como grupos particulares de interés.

A las grandes unidades productivas de conducción empresarial centralizada se les confiere la responsabilidad de ser el agente y el soporte del desarrollo. No obstante, son una realidad desigual: allí donde la división del trabajo capitalista había logrado socializar el trabajo con base en un desarrollo de las fuerzas productivas, centralización de tierras y otros recursos bajo orientación empresarial, se pretendía mantener tal base como sustento de la empresa. Donde no ocurría esto y la centralización era reducida con mantenimiento de rentas precapitalistas y transicionales, se concentran los esfuerzos en la parte centralizada para implantar núcleos empresariales como base de una expansión hacia el área no centralizada para que

eliminar las relaciones precapitalistas. Es más, se buscaba ampliar los beneficios a sectores mayores, menos ligados a la estructura de la empresa, lo cual compensaría las desigualdades en recursos o ingresos y unificaría fondos en una misma empresa: ricos y pobres, capitalistas o no pero redistribuyendo ingresos en favor de comunidades vecinas. Esto obliga a incluir más socios de los aceptables (Caballero estima que estos "excedentes" llegan al 30%: 107,000 campesinos), asalariados eventuales en la costa o campesinos en la zona andina. Tales relaciones nuevas iban acompañadas de la participación campesina regulada por el Estado. En la empresa localista y corporativa, en apoyo del Estado.

Estas medidas se completan con la acción sobre las comunidades campesinas tratando de reemplazar su organización tradicional por otra empresarial, vinculada a la economía y a la política nacional: se buscaba limar las contradicciones internas en la comunidad mediante la depuración de la población no agropecuaria y la regulación de la extensión de las posesiones de tierra o ganado.

El fuerte control y la intervención estatal se amplían a la comercialización, control de precios, crédito, planificación, representación gremial y política, y regulación directa en la empresa.

La eficiencia tenocrática, tan reclamada por la burguesía agraria, obliga a imponer el autoritarismo en

nombre de la productividad.

LA TIERRA: PROPIEDAD Y OTRAS RELACIONES DE PRODUCCION.

Los avances alcanzados en la redistribución de la propiedad significan también la implantación de un nuevo ordenamiento económico, cambios en las clases y en las relaciones de poder. Pero esencialmente la no superación de los problemas fundamentales del agro.

Se afectaron en diez años de reforma (1969-1979) 10.5 millones de Has. en 15 826 unidades agropecuarias y se adjudicaron 7 789 811 Has. que favorecieron a 337 662 familias campesinas.

También hay que agregar los asentamientos en irrigaciones y colonización. (533 974 Has. a 22 948 familias), además de las realizadas con las Leyes (14 444 y 15 037). La transferencia llega a 8 599 253 Has. para 375,246 trabajadores y campesinos organizados en 1 838 empresas, comunidades campesinas y adjudicaciones individuales.

Se formaron 581 Cooperativas Agrarias de Producción (CAP), 12 CAP con base en los complejos agroindustriales, 60 Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), 11 Empresas de Propiedad Social (EPS), que constituyeron el 62.3% de las tierras y el 15.2% de los beneficiarios. Todo esto significó un 64% de lo propuesto en tierras y un 90.1% en beneficiarios. Pero permanece aún

la pregunta, -cuánto se adjudicó de la diferencia entre tierras afectadas y entregadas? Se estima que a partir de 1979 los avances fueron insignificantes y que alrededor de 2,5 millones de Has. quedaron en gran parte de los actuales medianos terratenientes.

De acuerdo con José Mejía, los avances no involucraban a más del 17% de los 2 176 900 trabajadores agropecuarios considerados como fuerza laboral en 1977, aunque si se incluyera a un solo miembro de cada familia alcanzaría a un tercio del total de campesinos.

Esto significa que más de un millón de familias no modifiquen en nada su situación. De acuerdo con las modalidades de adjudicación -agrega Mejía-, el 45% de los adjudicatarios ha recibido tierras individualmente, un 30% como socios trabajadores de las empresas y un 25% como beneficiarios formales (101). En cuanto a la extensión -siguiendo con Mejía-, se transfirió 43.9% del área bajo riego, 23.5% de la de seco y 23.4% de pastos naturales. Del total de 30 millones de Has. de uso agropecuario, 11 millones de Has. -principalmente de pastos- continúan en manos de las comunidades y diez son de pequeños y medianos propietarios. El resto es lo afectado. Así, la reforma alcanza a la mitad de las extensiones que antes eran propiedad privada, y quedan la otra mitad no reformada como base de la nueva reconcentración que se viene dando, la cual

(101) José M. Mejía, y José Matos Mar, Reforma agraria, logros y contradicciones, Ed. IEP, Lima. pp. 68-69. Fernando Eguren, Política agraria y estructura agraria, en Estado y política agraria, Desco, Lima, 1977.

se suma a la procesada por la Reforma donde 1 000 nuevas unidades asociativas monopolizan lo que antes tenían 10 000 haciendas.

La contradicción "latifundio-minifundio" continúa siendo, bajo nuevas formas, la fundamental en el agro. Se mantienen además las relaciones capitalistas y no capitalistas, precapitalistas y señoriales como el arrendamiento feudal y la exacción de trabajo gratuito. En la mayoría de las CAP y algunas SAIS se enfrenta el capital-trabajo y en el resto predomina la organización semifeudal.

Muchas empresas no se ajustarian a las modalidades inicialmente definidas por lo abigarrado del campo peruano. v.gr. Muchas CAP seguirían el modelo de las primeras SAIS asociando comunidades. Las SAIS incluyeron comités campesinos, personas, CAS, comunidades campesinas de modo complementario o alternativo. Si las empresas denominadas grupos campesinos aún son precooperativas es por la fuerza de las relaciones precapitalistas y de la posesión individual. Las CAS y CAIP no prosperaron en el sector no reformado y las 5 000 comunidades campesinas quedaron intocadas.

En última instancia la reforma funcionó en las empresas donde el capitalismo ya era un hecho, sin lograr desarrollar esta tendencia en otras zonas donde era incipiente o no existía.

La atención estatal siempre se centró en las CAP y SAIS, para el resto no hubo una alternativa empresarial. La economía en transición era tan heterogénea y compleja que un mismo modelo se aplicó a situaciones muy diferentes. Es así que muchas CAP y SAIS andinas no llegaron a consolidarse como empresas. Donde las comunidades eran socias, éstas participaban orgánicamente y en parte de los beneficios. En otras, los exfeudatarios continúan con sus parcelas e incluso las vienen extendiendo. El salario es incierto y generalmente secundario en relación a otros ingresos.

La CAS, núcleo de trabajadores de las SAIS, incluye a los ex-asalariados y feudatarios, que trabajan en un 25% de las tierras de las SAIS. Sin embargo, de las 40 SAIS en 1974, en 24 no habían trabajadores asalariados como socios y el trabajo lo realizaban sólo conductores exfeudatarios, que eran quienes se encontraban en la mayoría de SAIS.

Las posibilidades de estas empresas para desarrollarse de manera capitalista encuentran sus limitaciones en su incapacidad de asalariar, debido a la inexistencia de acumulación y el predominio de la explotación extensiva.

En síntesis, "En 1961, el 4% de las unidades agropecuarias (UA) censadas de 500 y más Has. concentraban el 75.9% de la superficie agrícola". En 1972, tres años después de aplicarse el D.L. 17.716 de Reforma Agraria, el

3% de U A del mismo tamaño concentraba el 66.7% de las tierras. Asimismo, "dentro de las tierras de cultivo más concentradas estaban las de riego. Las U A de 100 y más Has. (el 1.1% de las U A) incorporan el 29% de aquéllas.

En el otro extremo, el 83.2% de las U A de menos de cinco Has. disponían en 1961 del 5.5% de las tierras. En 1972 las proporciones eran de 77.9% y 6.09% respectivamente.

En definitiva, 1 100 000 unidades de menos de cinco Has. de economía parcelaria, con 1.5 millones de Has. sobre un total de 23.5 millones de Has. se combinan relaciones precapitalistas que no tienen acceso a la tierra distribuida ni otros recursos productivos; tampoco gozan de mejores precios o empleo para los excedentes.

Para Caballero (102), el término beneficiario es ambiguo y sobre-estima a los beneficiarios en tanto se clasifican como tales a muchos que no reciben ni tierra suficiente para su subsistencia, ni trabajo estable -como ocurre en las SAIS-, y se clasifican como familias a los individuos adjudicatarios.

Por su parte, Héctor Martínez considera que al no tomarse en cuenta factores diferenciadores se fusionaron grandes haciendas y fundos que consolidaban la expansión latifundista anterior a la reforma, puesta de manifiesto en:

- a) la estructura autoritario-paternalista, la función de la tierra como bien de renta y no capitalista;
- b) las relaciones comunitarias en su

(102) José María Caballero, Reformismo y reestructuración agraria en el Perú, 1976, p.13.

significación exclusivamente económica;

c) un sistema de autoridad y liderazgo paralelo al de la hacienda;

d) la identificación de los trabajadores o campesinos con el complejo territorial, económico y social, y el trabajo gratuito de colonos como relación de explotación fundamental (103).

Asimismo, la ley propuso lograr economías de escala sin tener en cuenta las variaciones ecológicas, las dificultades de comunicación, la dispersión poblacional y de las parcelas centralizadas destinadas a un uso empresarial que traería dificultades en el manejo y en la necesaria identificación con la empresa. Pero además las decisiones de organización eran verticales y prescindían de la opinión campesina, y al ignorar los conflictos entre ellos incluían predios sin solución de continuidad. Esto proviene del olvido de aspectos históricos como que a) la hacienda marchaba articulada a la comunidad; b) la ausencia de manejo empresarial en la práctica campesina; c) la existencia de una fuerte diferenciación en las empresas; e) el hecho de que muchos de los que antes actuaban en cargos patronales fueran los actuales dirigentes; f) la apropiación individual familiar de la tierra y/o pastos de la empresa; g) la imposibilidad de las empresas para igualar -siquiera- la dotación de adecuadas condiciones de vida y trabajo; h) el endeudamiento acumulativo en fundos

que estaban descapitalizados en su gran mayoría; i) el fortalecimiento de la economía familiar como producto de la liberación de las relaciones de subordinación personal con el "señor":

Esto conduce a que las empresas desarrollen principalmente la economía campesina.

Además de las 1 316 empresas surgidas en el último proceso (Ley 17.716), se han constituido 42 centrales de empresas en 87 Proyectos Integrales de Asentamiento Rural (PIAR), del total de empresas 483 (36.7%) se agrupan en centrales. Esta insuficiente centralización expresa la imposibilidad de planificar, considerando más aún que los que lo hicieron estaban forzados por el ordenamiento legal. Es así que la anarquía y el desarrollo desigual continúan con sus tendencias anteriores al proceso.

La presencia estatal y la expansión de la economía campesina generan nuevas contradicciones. En las CAP hay oposición entre el manejo tecnocrático y los trabajadores de base, que ha conducido a estas últimas a organizarse en sindicatos y a expulsar a los técnicos, así como a luchar por mejorar los salarios y el trabajo.

En las SAIS hay contradicción entre los comuneros y asalariados, entre estos dos grupos sociales y la empresa, y entre feudatarios y la empresa.

Aquí, tanto como en las CAP ganaderas serrenas andinas, las empresas intentan racionalizar el uso de pastos y los campesinos y asalariados prefieren ampliar ese viejo derecho.

En todas las empresas se dan otros conflictos entre el Estado y los socios por la apropiación del excedente: los socios pretenden mejores salarios, el Estado impone una mayor carga tributaria, y en muchos casos el control de precios.

Estas relaciones generan la reducción de horarios e intensidad de trabajo, elevan además los costos de producción y rentabilidad al tener que contratar eventuales -aunque con menor salario- para realizar las tareas que se dejan de hacer.

El asedio es interno y externo a las empresas. El primero ya ha sido expuesto; el segundo se concreta en la "toma de tierras" por parte de los campesinos comuneros que cuestionan la estructura creada por la Reforma.

b. LA SEMIFEUDALIDAD Y LA REFORMA AGRARIA

Objetivo Político: El Campesinado

Los conceptos de modo de producción y formación económico-social se basan en la reiteración de las relaciones, en su regularidad y subordinación a leyes (nexos internos permanentes) que fundan la periodicidad historiográfica. Las leyes del desarrollo de la sociedad

tienen un carácter histórico, entre ellas unas se dan en todas las formaciones, otras son propias de las antagónicas y otras más son específicas de determinadas formaciones.

Por estas consideraciones, no podemos conceptuar como modo de producción o formación económico-social a la semifeudalidad, puesto que carece de leyes y características históricas propias y originales que correspondan a un modo de producción con sus fuerzas productivas y relaciones sociales que cualitativamente las diferencien del resto. Sin embargo, sí es posible referirnos a relaciones de producción transicionales de un modo de producción a otro, como las que se dan al desintegrarse paulativamente la feudalidad por el desarrollo del capitalismo.

La semifeudalidad es un sistema de relaciones sociales de producción que coexisten articuladas, en interconexión mutua y dialéctica, donde predominan las relaciones de producción semifeudales. En el Perú coexisten relaciones feudales y otras precapitalistas, y relaciones capitalistas interconexas a su vez con diversas relaciones de transición; son progresivas sin seguir necesariamente las etapas de orden secuencial histórico. De todas estas relaciones sociales de producción predominan en el área andina las de transición del feudalismo al capitalismo. Tal fenómeno determina en parte, pero principalmente, el carácter de la sociedad peruana.

La precisión de las relaciones de propiedad para

el análisis de una sociedad tiene gran importancia puesto que es la base que determina el carácter de un modo de producción y la fisonomía de una sociedad. Estas relaciones determinan las demás relaciones vigentes, la situación de los distintos grupos sociales en el campo de la producción, sus relaciones mutuas y las formas de distribución.

En la particularidad del Perú (*), las relaciones agrarias de propiedad se presentan principalmente bajo la forma de latifundio y de economía parcelaria y/o comunal. Como caparazones que contienen en su seno un abigarrado conjunto de relaciones sociales de producción, dentro de las cuales predominan las de transición del feudalismo al capitalismo, se reproducen los rasgos de la economía de prestación personal y del pago en trabajo, imbuidas de trabajo gratuito, en interconexión con relaciones capitalistas sobre la base de la división territorial en tierras del terrateniente y campesinos.

El campesino se mantiene dentro de sus viejas relaciones patriarcales conservando sus contradicciones fundamentales, en su condición de siervos y semisiervos, con respecto a los terratenientes. En este sentido, la política agraria del régimen de distribución de tierras entre campesinos parcelarios estaba dirigida a conservar la semifeudalidad.

El Estado, con la reforma agraria, se había transformado en terrateniente de nuevo tipo, coexistiendo

(*) El análisis que sigue resume ocho años de trabajo e investigación agraria (1973-198) realizada por el autor en otros tantos departamentos.

los terratenientes de viejo tipo. Su presencia es ostensible a lo largo y ancho de todo el país. De los terratenientes de nuevo tipo, el Estado es el principal, junto a la burocracia tecnodirigencial de las empresas. Asimismo, al consolidar aquél el mediano latifundio, fortalece -como clase dominante en el campo- a los medianos terratenientes.

La existencia de los terratenientes de viejo tipo se funda en que, desde su formación la reforma agraria dejaba intactas 6 000 000 de Has. donde ellos se desarrollan. A esto se suma la no afectación de tres millones de Has. de los doce millones de Has. proyectadas. Tales cifras van en aumento si se considera la no adjudicación de un millón de Has. afectadas.

Por otra parte, esta clase se desarrolló sobre la base del límite de inafectabilidad de 50 Has -que aumentó a 150 Has. en la costa y su equivalente en la sierra. Posteriormente se dio un proceso de devolución de tierras a "exterratenientes" de cientos de haciendas, y el nombramiento, por parte del Estado, de gerentes-administradores y técnicos a "exterratenientes" en las empresas asociativas, bajo contratos gerenciales por diez años con "plenos poderes" y con derechos del 10 al 15% del total de la producción de la empresa.

Las relaciones semif feudales tienen por característica central, en los latifundios, la propiedad

terrateniente del suelo y la división de la tierra en señorial y campesina, articuladas a un débil desarrollo de las fuerzas productivas. Ello trae consigo la existencia de relaciones semiserviles y/o semisalariales en donde los campesinos por el uso de una parcela -tanto para sus actividades agrícolas o ganaderas individuales- pagan una renta en trabajo, o mixta: en productos o dinero, a la vez que se les retribuye como parte del valor de su fuerza de trabajo con un pago de dinero bajo la apariencia de salario (que no es tal debido a que no compensa el precio de la fuerza de trabajo).

En el interior de la economía campesina, tanto en la inmersa en relaciones comunales como en la que se encuentra fuera de ellas, las relaciones semiserviles, el pago de trabajo, así como la renta feudal y semifeudal, se dan con respecto a los terratenientes mediante la conversión de la comunidad campesino de la economía parcelaria en reserva de fuerza de trabajo bajo condiciones de explotación semifeudales que le permiten obligar al campesino a trabajar para ellos. El campesino pobre trabaja por dinero con sus instrumentos de trabajo en la tierra del terrateniente, también lo hace por préstamos de dinero, semillas, etc., o para pagar la deuda o el interés, así como por tierra en aparcería o arriendo.

En la economía de este tipo el intercambio de productos se resume bajo la siguiente norma: vender para

comprar. O sea, el campesino vive en una economía consuntiva, donde sólo hay "reproducción simple" y no existen condiciones para la acumulación capitalista. De allí la proliferación de pequeños mercados eventuales, donde el campesino vende parte de sus excedentes o de productos necesarios a cambio de otras mercancías para su autoconsumo. En síntesis, es una economía seminatural y se rige por la fórmula M-D-M.

En las organizaciones comunales, la propiedad colectiva y las relaciones de cooperación se presentan distorsionadas. Tienen significación en la propiedad sobre las tierras de pastos de secano con tradicionales sistemas de rotación de cultivos y en la supervivencia del trabajo comunal como el Ayni y la Minka. Aquí el trueque se hace extensivo a las mercancías locales.

Dentro del campesinado la diferenciación es lenta. No llega a desintegrarlo como clase a pesar de que persiste y se intensifica la utilización de la fuerza de trabajo semiproletaria temporal, eventual, y aumenta el despojo, la ruina y la pauperización de los campesinos comuneros y parcelarios.

Con la reforma agraria el mercado interno ha crecido limitadamente, ya que tiene por base la división social del trabajo y ésta es mantenida en su antiguo estado. Se ha incrementado el capital constante pero el variable no ha logrado reemplazar las formas mercantiles

tradicionales, que presentan variadas formas de interrelación con la economía seminatural campesina. En la economía campesina, el capital usurero y comercial predomina sobre el industrial; mientras que los capitales comercial, industrial y financiero dominan las empresas semifeudales y capitalistas.

Este lento desarrollo de las fuerzas productivas unido a la sobre-explotación del campesinado por los terratenientes, la gran burguesía y el imperialismo, no permite una acumulación y, en muchos casos, ni siquiera reproducción simple.

En resumen la política económica agraria tiene los siguientes rasgos:

1. Por las necesidades del capital se afectan intereses terratenientes. Estos se manifiestan en el pago de una indemnización muy inferior al valor del mercado de tierras. Aun cuando la ley del valor no tiene vigencia en toda su profundidad y extensión, se les paga en bonos de naturaleza inflacionaria y la transferencia de fondos a la industria sólo se opera en forma muy limitada. Así el Estado se transforma en terrateniente y juega el papel de rentista y empresario. Se solidariza con el gamonalismo que, económicamente, controla la circulación y la usura manteniendo en la producción fuertes lazos de semiservidumbre.

La utilización y distribución de la tierra,

selección de cultivos, prácticas culturales agropecuarias y en general la relación Estado-Empresa da también el carácter terrateniente al Estado. Pero en especial por la permanencia de relaciones de prestación personal.

2. Manteniéndose en la división internacional de la producción, la agroindustria continúa bajo control de la burguesía monopólica y la política agraria se funda en el capital financiero imperialista.

3. La gran burguesía burocrática se beneficia por la no afectación de parte de la agroindustria y toda la industria auxiliar a la agricultura, por la tenue ampliación del mercado interno (de bienes de consumo principalmente) y por la conversión de la tierra en esfera de inversión de capitales (v.gr. La banca regional): en Arequipa donde a través del Banco del Sur monopolizan el cultivo de ajo y cebolla, o en Cuzco a través del Banco de los Andes.

También por el abastecimiento de alimentos y materias primas, por el mayor ingreso de divisas y por el abaratamiento de la canasta de bienes del obrero que significa disminución del capital variable.

Esto ocurre aunque alguno de los objetivos no se haya cumplido cabalmente por la misma naturaleza terrateniente de la vía agraria de desarrollo, como el estancamiento de la producción y la redistribución de ingresos, que sólo se incrementó en un 0.45% en el primer lustro.

4. Como resultado de esta magra ampliación del mercado interno, no hay un incremento del excedente comercializable. La vía agraria, al no alterar la dimensión de las explotaciones de los campesinos ni reformar las relaciones de producción tributarias existentes en el campesinado -donde en parte se han eliminado algunas formas de renta precapitalista-, paradójicamente tiende a disminuir el excedente pues ahora lo autoconsume; tampoco se ha incrementado por la recaudación de impuestos, puesto que la política impositiva no ha cambiado significativamente.

Por otro lado, el destino de los excedentes que salen como renta precapitalista a través del mercado no es productivo. En las empresas, además de la renta (deuda agraria), el excedente sale como impuestos y precios, cuyo monto no alcanza siquiera para financiar la ejecución de la reforma agraria.

5. En cuanto a la división social del trabajo que se expresa en la destrucción de la industria doméstica, la especialización de cultivos comerciales, el desarrollo del capital comercial y la introducción de nuevos bienes, se siguen las anteriores tendencias. Lo mismo ocurre en la incorporación de nuevas áreas semif feudales y otras precapitalistas al mercado como resultado de la construcción de carreteras y, en general, por la mejora del sistema de transporte y comunicaciones, y la introducción de nuevos cultivos comerciales.

Hay un incremento de la agricultura mercantil, pero el capitalismo en su conjunto se desenvuelve y muestra tendencias de lento desarrollo.

6. La proletarianización que se da por el trabajo eventual agrícola y no agrícola, las migraciones en busca de trabajo agrícola, el trabajo doméstico y las migraciones urbanas temporales y definitivas, siguen también en lo fundamental los ritmos anteriores.

Los trabajadores eventuales, semiproletarios, campesinos sin tierra o con poca tierra, o familiares de los socios, perciben un salario mínimo de hambre y trabajan menos de 40 días al año. La división del trabajo atenta contra ellos.

Los obreros agrícolas y campesinos siguen -en la empresa- en la vieja división del trabajo tanto en las tareas como en los aspectos manual e intelectual. La participación en la administración y la gestión es formal. Los antiguos mayordomos, caporales, rodeantes, capataces, etc., continúan en sus funciones. Sólo "beneficia" a un 20% -o como máximo 25%- del campesinado, del semiproletariado y del proletariado agrícola, quedando inmersos en una vía vertical, represiva, corporativa y burocrática.

7. Es un proceso que permanentemente descapitaliza el campo: desmantelamiento técnico, deuda agraria, intereses de la amortización del precio de la

tierra, impuestos, créditos con alto interés (que sólo favorecen a las empresas más rentables), precios que redistribuyen el valor en favor de la industria y el comercio (intercambio inequivalencial). También se descapitaliza el campo con el comercio de insumos, de fertilizantes, tractores, maquinarias agrícolas, vacunas, pesticidas y por el papel que juegan las agroindustrias y las empresas estatales de comercialización.

8. En las empresas, los planes de producción, las decisiones de inversión, la política salarial, los costos de producción, la comercialización y la redistribución del producto están bajo la dirección estatal, que establece un control directo a través de las instituciones, organismos y empresas estatales (v.gr. Ministerio de Agricultura y Alim, SINAMOS, EPSA, etc.), de la tecno-burocracia administrativa de las empresas y los recursos jurídicos.

9. Algunos problemas económicos de las empresas son: aumento sustantivo del capital variable, planes de cultivo impuestos y en desacuerdo con los intereses de la empresa, demora en los créditos utilizados en gran parte para otros fines, creciente endeudamiento, deficiencia administrativa-contable, mayor interés de los socios por sus medios de producción y abandono de los de la empresa, etc.

Las consideraciones anotadas han significado una baja de la producción, con lo cual se acelera la crisis

agraria. En las empresas agrícolas de la sierra se trabaja a pérdida por los altos costos de producción debido a la pobreza de los sueldos (bajo desarrollo de las fuerzas productivas y falta de inversión de capitales), ausencia de racionalización en la producción y bajos precios de productos agrícolas. Muchas veces la ganadería subsidia a una agricultura que persiste únicamente para absorber la fuerza de trabajo de los socios y darles sustento.

La producción de la costa para la exportación (algodón, azúcar, arroz, etc.), depende de los precios internacionales, (puesto que los otros productos son poco rentables: de autoconsumo, frutas, etc.) y son altos sus costos de producción: precio de maquinaria agrícola, equipos, insumos, etc. Por ello, la mayoría de las empresas no producen excedentes ni acumulación, ni reproducción ampliada. A esto se agrega el uso de tecnologías y técnicas inadecuadas, escasez de recursos financieros y de agua para riego, que contribuyen en la baja productividad y la rentabilidad.

10. En las SAIS algunas CAPS se han integrado haciendas y comunidades con diferentes niveles de desarrollo. Distintas contradicciones a nivel interno y una distribución desigual del producto social.

Se ha intensificado la crisis de la economía "señorial". Una crisis de reproducción que se manifiesta en la sobreexplotación del hombre sobre la tierra sin el

correspondiente desarrollo de las fuerzas productivas.

11. La renta de la tierra es predominantemente semifeudal. Las rentas feudales y las formas capitalistas (absoluta y diferencial) nos prueban el carácter rentista de esta economía. Se acrecienta la concentración de la propiedad (en especial territorial) y, por tanto, el desarrollo desigual y la renta diferencial. La renta de la tierra la comparten el Estado terrateniente, los terratenientes, la gran burguesía y el imperialismo.

12. La reforma agraria sólo se pudo realizar como reforma neo-colonial. Tan es así que entre 1971 y 1972, más del 90% de su ejecución, es decir más de mil millones de dólares, fueron financiados por capital foráneo.

Las condiciones internas para que se diera la reforma agraria fueron las siguientes:

1) Fuerte diferenciación en el seno del campesinado (en especial en el campesinado parcelario) y desarrollo de la economía mercantil, sin llegar -generalmente- a la desintegración y la acumulación capitalista.

El deterioro de la artesanía y la pequeña industria -agudizado por la crisis- paralelo a la concentración de recursos. La crisis impulsa la lucha por la tierra, libera fuerza de trabajo y facilita la proletarización como la semiproletarización.

2) El desarrollo de una vía principalmente junker (lenta modernización del latifundio bajo dirección terrateniente estatal y privada) y secundariamente farmer (burguesía: rápida transformación en base al fraccionamiento del latifundio) de algunos latifundios de la costa. La sobreexplotación feudal, semifeudal y capitalista provocaron fuertes movilizaciones campesinas.

En las zonas serranas de mayor desarrollo mercantil se fraccionó la hacienda por ventas, loteo, abandono y destrucción. El sistema hacendario se volvió irracional. El límite puesto al desarrollo capitalista estuvo en las relaciones de producción. Aunque las fuerzas productivas sólo avanzaban en reducidas zonas, en la sierra no había las condiciones para un desarrollo capitalista por las dificultades naturales y ecológicas de los andes, la economía de autosubsistencia, etc.

3) Fuerte crecimiento de la población, con insuficiente expansión de la frontera agrícola y la cada vez mayor concentración de la propiedad ligada a la renovación del transporte, del comercio y de la educación.

4) La crisis de la ideología feudal ante las

dificultades de reproducción de sus economías. La opresión de las etnias quechua y aymara, las relaciones estamentales y la presencia de fuertes relaciones de coacción extraeconómica y clientelar. Los terratenientes dejan de suscribir esa ideología de base cristiano-feudal y no pueden responder al desarrollo económico y a la crisis sino con sobreexplotación.

5) Las luchas campesinas, las movilizaciones y las guerrillas como máxima expresión de las contradicciones de clase.

En este contexto en dos aspectos se pueden sintetizar los "logros" de la reforma agraria.

a) Económicos: mejores condiciones para el capital, lo cual permitiría una creciente acumulación global. En este sentido se ubica la ampliación del mercado de consumo y el mercado de inversión de capitales. Asimismo el aumento de ingresos en los grupos minoritarios y explotadores del campo con la participación y protección estatal y monopolista extranjera y a costa de una mayor explotación de la fuerza de trabajo de los productores directos y de la tierra. Redistribuyendo así la propiedad, los excedentes y la renta entre el Estado, los terratenientes y el imperialismo, "modernizaron" y protegieron el latifundio. En suma, entregaron lo principal y más rentable del agro peruano al saqueo neo-colonial y de

las clases dominantes.

b) **Socio-políticos: Modernización de los viejos terratenientes, consolidación de los terratenientes de nuevo tipo de un grupo minúsculo de campesinos ricos y medios de la capa superior y aristocratización de un grupo minoritario de asalariados agrícolas (generalmente permanentes) mediante la difusión del latifundio de nuevo tipo y la pequeña y mediana propiedad. Difusión del capitalismo popular en el campo, mediante empresas que tratan de hacer prevalecer en el agro por ilusión, persuasión o coerción extra-económica la ideología y la política burguesas a fin de frenar la revolución. Mediatización del ímpetu de sus luchas y aprovechamiento del campesinado como reserva de la contrarrevolución aislando y reprimiendo a las fuerzas revolucionarias, progresistas y patrióticas del país (104).**

La constitución de latifundios de nuevo tipo reconcentrando la propiedad, su ampliación a los sectores adyacentes a las haciendas y la constitución de empresas de grado superior, a la vez que crean los núcleos-ejes del desarrollo tienen al Estado como terrateniente transitorio y empresario encargado de programar el desarrollo agropecuario que garantice los intereses del capital. Más allá los PIAR,

(104) PC del P. Orientaciones preliminares para el trabajo campesino, Lima, 1987.

PID, Centros Contables, CENCIRA, contribuyen a controlar la economía agraria y captar ideológica y políticamente al campesinado.

Los terratenientes mantienen la propiedad de la industria transformativa y la industria conexas a la agricultura, al igual que el control del comercio de insumos y productos al servicio de las grandes empresas. La racionalidad terrateniente, combinada con la mercantil o burguesa, continúa en el uso de la tierra, se manifiesta en la distribución y selección de cultivos, prácticas culturales, e incluso las relaciones Estado-agricultura (crédito, ayuda técnica, entrenamiento, agrónomos, técnicos e investigación).

En muchos casos las grandes empresas han conseguido formar núcleos empresariales más o menos centralizados, pero que coexisten con la posesión campesina de parcelas y tienden a la desintegración y a la crisis. Igual ocurre con la fusión de fundos ricos y pobres, donde debido a la baja productividad de estos últimos no ha habido excedentes. La centralización, integración y planificación es débil y no hay identificación con la empresa.

Como resultado, el sector agrario disminuyó su producción per cápita entre 1970 y 1976, en un 2.2% (105) y la tasa de crecimiento fue sólo de 0.9% y si restamos la producción de aves y huevos quizá sea negativa. Lo que más creció fue el sector privado no reformado. La redistribución

(105) Elena Alvarez, Política agraria y estancamiento de la agricultura, Ed. IEP, Lima, 1980.

del ingreso fue del 14 del ingreso nacional, sin haber variado las relaciones de distribución. El mercado interno no se amplió por esta redistribución, sino en la tecnoburocracia dirigente y entre los campesinos ricos, en la misma medida en que no se ha ampliado la división social del trabajo y la economía mercantil.

Regionalmente, las empresas de la costa muestran relativa solidez, a pesar de sus contradicciones con el Estado terrateniente y ciudad-campo (precios). Se consolidan en su racionalidad capitalista privada, y aunque tienden a su degeneración o destrucción no es la tendencia principal.

La relación capital-trabajo se da con los eventuales. La falta de espíritu empresarial respecto a las decisiones económicas, la ausencia de autoridad empresarial, la reducción de esfuerzos en el trabajo y la utilización privada de los recursos es una situación que buscará ser frenada por el Estado.

En la sierra, los intereses campesinos dentro y fuera de la empresa y la burguesía comercial empujan a las empresas a su destrucción. No pueden funcionar como empresas por sus contradicciones internas, ya que su transformación se basa en capital ajeno y el estancamiento en el flujo frena el desarrollo capitalista. Pero además, la baja inversión pública, la ineficacia del Estado como comerciante, el control de precios y los subsidios

a la importación de alimentos, la inexistente investigación, extensión y capacitación, no favorecen el desarrollo capitalista.

En resumen, la reforma agraria se dio por efecto de las contradicciones basadas en las leyes del desarrollo capitalista entrabado. Los terratenientes eran incapaces de controlar social y políticamente al campesinado, así como las contradicciones que generaba el no desarrollo capitalista manifestado en crisis de la producción y sobreexplotación. Su poder impedía la reforma: no había una burguesía que se le opusiera puesto que estaba coludido con ella. De ahí que los militares apoyasen la rearticulación de la gran burguesía con el resto de sectores económicos.

Al final del proceso reformista (1974), los límites de la agricultura superaban las soluciones planteadas. Estos eran: a) el carácter de la economía campesina, de la hacienda y la comunidad; b) las relaciones semifeudales; c) las reivindicaciones comunales; d) las bases geo-ecológicas; e) las convivencias de diferentes extensiones territoriales y formas de propiedad.

Ante esta situación, los gobiernos de Morales y Belaúnde (1975-1985) aplicaron un programa desarrollista pragmático que planteaba:

- 1) Reestructuración de grandes empresas a partir de su subdivisión, con ello se creaban pequeñas empresas mejor controladas por el Estado y entregaban las peores

tierras a las comunidades y a los campesinos que las conducían. Podría llegarse a la independización de áreas descentralizadas. *

2) Apertura del mercado de tierra al capital, empresarios, empresas ricas, terratenientes, burguesía agraria y campesinos ricos con capacidad de acumulación. Penetración del capital extranjero bajo la forma de inversión directa, en las irrigaciones y colonizaciones (modelo Brasil).

3) Desintegración de empresas semif feudales por invasiones. Reivindicaciones a partir del reconocimiento de que es imposible por ahora transformarse en empresas, debiendo parcelarse en provecho de las comunidades que luchan por la tierra y recreación de empresas más pequeñas en las áreas de mayor potencial.

4) Desarrollo de la burguesía comercial y del capital usurero, de la burguesía ligada a la agroindustria y a los servicios para la agricultura (alquiler de máquinas). Importancia creciente de la industria conexas a la agricultura y subordinación de esta última a la agroindustria.

5) Mayor empobrecimiento campesino y creciente autoritarismo económico y político.

La agricultura en estos últimos años tampoco avanzó debido a la lógica del capital y de la asociación neocolonial entre el capital estatal y el extranjero en los

sectores más dinámicos para el capital. Sectores como la minería y la industria se privilegiaron y tuvieron altas tasas de ganancia, mientras la agricultura -sin cuotas parecidas- redujo la canalización de excedentes para el desarrollo mínimo e indispensable de las fuerzas productivas que modificarán las viejas relaciones semifeudales.

Estos gobiernos establecieron una serie de mecanismos que generaron una transferencia de excedentes de la agricultura a los centros urbanos e industriales: a) La regulación de los precios en los productos agrícolas por parte del Estado, que los mantenía a un nivel por debajo de los costos reales de producción; b) el pago de impuestos; c) el crédito selectivo con altos intereses donde pocos agricultores se beneficiarían; d) altos precios de los bienes de capital e incremento del capital variable; e) la excesiva burocracia del sector; f) ausencia de ayuda técnica y material por parte de los organismos gubernamentales, y g) la fuga de excedentes.

Así, la reforma agraria y una serie de hechos económicos coyunturales como la escasez de semillas y fertilizantes o las alteraciones naturales y ecológicas hicieron que esta problemática se viera agudizada aún más, desechándose metas y planes de inversión y producción.

Al respecto, Brundenius dice:

"En parte, la reforma agraria pudo contribuir negativamente en esto por la ineficiencia y

burocráticas formas de organización implementadas pero, principalmente, el estancamiento de la agricultura peruana se debe a que la producción bajo formas de explotación capitalistas coexiste con rezagos precapitalistas, sobre los que la reforma agraria ha tenido algunos efectos" (106).

Las reflexiones acerca del problema agrario y campesino muestran el alto grado de conflictividad y potencialidad explosivas de las contradicciones existentes en el agro, a nivel tal que llega a constituir la contradicción principal de la sociedad peruana y fuente potencial de violencia.

(106) E. Brundenius, P. Chauca, Los cambios estructurales en la economía peruana, Ed. J.M. Arguedas, Lima, 1977.

CAPITULO III

CRISIS ESTRUCTURAL: UNA ESPIRAL DE EXPANSION Y RUPTURA

En ciertos periodos de crisis económicas y políticas agudas, la lucha de clases -al desenvolverse- se transforma en guerra civil abierta. Es decir, en lucha armada entre dos partes del pueblo.

V.I. Lenin, dos tácticas de la socialdemocracia en la revolución democrática.

La naturaleza de la crisis es estructural y se deriva del carácter de la sociedad visto en el capítulo anterior. Entraña no sólo una ruptura permanente y duradera entre las condiciones de producción y realización de la plusvalía, sino que, paralelamente, implica la ruptura entre las condiciones generales de reproducción económica-social y las condiciones de reproducción del sistema de dominación política. Esa doble ruptura es el resultado de la convergencia de fuerzas derivadas de la dinámica propia de la sociedad peruana y de fuerzas asociadas a la crisis mundial del capitalismo.

La economía peruana se enfrenta en los setenta a una economía mundial en recesión que trastoca las condiciones de crecimiento y pone de manifiesto los graves desequilibrios estructurales (107).

(107) José Luis Solís, Industrialización, crisis y estrategias alternativas de desarrollo en Centroamérica, en Rev. Economía de América Latina, núm. 9, CIDE, México, 1985, p. 89.

Ante el déficit en la balanza comercial y en cuenta corriente entre 1974 y 1975, el Estado tratará de reducir el nivel de actividad económica y equilibrar el sector externo a través de la stangflación (estancamiento e inflación); más tarde, en 1978-1980, se eleva el valor exportado y se expande muy poco la producción, para luego abrirse el mercado interno a la importación. Finalmente, ante la caída de los términos de intercambio iniciada en 1981, el Estado retoma la política de reducir la demanda a través de la inflación acompañada de un liberalismo más abierto. Excluyendo el breve interludio de 1979-1981, la crisis tiene expresiones similares desde 1974.

Las crisis son derivadas del deterioro de la capacidad de importar, gestado en los años sesenta, y de la afluencia de capital a largo plazo desde mediados de la década siguiente. Entre 1972 y 1980 el porcentaje de desembolso destinado a proyectos productivos osciló entre el 21 y el 28% del crédito, y lo demás fue absorbido por defensa, refinanciación de la deuda y pago de servicios, alimentos, combustibles y grandes proyectos (incluyendo a Cuaajone y petróleo). La dinámica de la acumulación se bloqueó más aún si consideramos las exigencias de repago, la débil capacidad exportadora, la baja de los precios de exportación y el alza de los de importación (108).

Desde 1975-1976, las principales variables macroeconómicas (producción, inversión, exportaciones y

(108) Javier Iguíñez, "El proceso de ajuste en el Perú, 1971-1985, en Investigaciones económicas, núm. 178, UNAM, México, 1986.

empleo) se hacen negativas con crecientes desequilibrios monetario-financieros y acelerado endeudamiento externo.

Esta crisis, asociada a las relaciones económicas internacionales, se recrudece en 1980, y afecta nuevamente las tendencias depresivas. Las exportaciones se reducen, se deterioran los términos de intercambio, aumentan las tasas de interés, afectando -todo ello- la balanza de pagos.

La diferencia entre ambas crisis es de grado; radica en que en el último ciclo la crisis se ubica en un nuevo esquema de división internacional del trabajo caracterizado por el redespliegue industrial y formas de transferencia de actividades de los países centrales al llamado "tercer mundo". Las condiciones internacionales actúan como catalizador de las contradicciones internas y muestran su articulación semicolonial.

Sus raíces internas son de larga gestación.

El crecimiento económico -basado en la sustitución de importaciones- no creó estructuras económicas que aseguraran una dinámica propia de desarrollo, y menos aún superó las heterogeneidades económicas, sociales y étnicas.

Por el contrario, dejaron un cúmulo de contradicciones; miseria en amplias capas de la población y concentración del ingreso en el otro extremo, heterogeneidad productiva y desempleo, desintegración del sistema económico y articulación estrecha con el imperialismo.

Las transnacionales dominaron amplias y estratégicas ramas de actividad concentrando el capital productivo y financiero, en contraste con los sectores informales que con una bajísima productividad aportaron reducidas cuotas al producto global.

La escasa producción de bienes de capital e intermedios se expresó en una proyección creciente a importar componentes industriales. Estas relaciones fueron reforzadas y perpetuadas porque la economía agraria e industrial no había variado su dinámica. La crisis es una manifestación externa de estas contradicciones

Aparece entre 1967 y 1968 y se posterga con la expansión del comercio exterior y el crecimiento de los flujos financieros. En 1975 reaparecen sus manifestaciones con mayor virulencia. El coeficiente de importaciones -de comportamiento muy rígido- desciende, se estabiliza el coeficiente de industrialización y la producción agropecuaria oscila al ritmo de las importaciones y de cambios naturales.

La crisis como proceso de largo aliento está contenida en la estructura. La dinámica originada por la creciente desigualdad encuentra su frontera y se transforma en un obstáculo para el crecimiento, precediendo ello al autoritarismo estatal. Un patrón de acumulación que determina la composición del producto y la oferta global recibe exigencia de nuevas formas de distribución del

ingreso.

Esto exige a su vez profundas transformaciones en el aparato productivo que combina la producción para un mercado muy concentrado y delimitado, con otra orientada a los mercados externos. La constitución de esta estructura proviene de los años cincuenta, cuando la mayor inserción en la economía mundial significó aceptar la imposición de un patrón de acumulación derivado de la dinámica de la economía mundial, la cual implicaba una industria de bienes finales que demandaba bienes intermedios importados y la destrucción de la agricultura alimentaria.

Más tarde, con la crisis devaluatoria de 1959-1961, se acrecienta la dependencia financiera, en especial con la Alianza para el Progreso (ALPRO). Como resultado de la adicción al financiamiento imperialista -que ahora incluye el presupuesto público y los gastos del gobierno central- se introducen profundos desequilibrios en la balanza de pagos que culminan con la crisis devaluatoria de 1967-1968.

Desde 1975, cuando la crisis se repite, los ciclos se hacen muy breves: se impulsa la transnacionalización y el estímulo a la producción para la exportación a expensas del resto de la economía, determinando así el empobrecimiento general de la población y la marginación provinciana. La breve pausa de 1979-1980 prepara las condiciones de una nueva crisis.

Con la política económica de Belaúnde Terry (1980-1985) presenciamos una radical opción por el neoliberalismo, que significó la destrucción de la capacidad productiva al favorecer las importaciones, la minimización de la gestión económica estatal, la deliberada inflación para redistribuir ingresos, y el recrudecimiento de la violencia estatal como corolario, que se manifestó en el hambre, desempleo, segregación y frustración populares.

Recapitulemos: entre los años 1951 y 1958 la economía se readecúa a las necesidades de la hegemonía norteamericana y se fortalecen los lazos entre los sectores exportadores en detrimento del crecimiento sostenido del mercado interno, dando inicio así a la dependencia alimentaria, de bienes intermedios y de capital.

La industria de tecnología importada se concentra en Lima bajo el control de las trasnacionales, crecen las importaciones y se vuelve negativo el saldo en la balanza de pagos en cuenta corriente (que fue cubierto con un aumento de la deuda externa y una disminución de las reservas monetarias que concluyeron en la crisis devaluatoria de 1959-1961) (109).

En la primera etapa de la ALPRO (1961-1967), el PNB creció en un 10.5% y la producción industrial en un 61%, que además de ser más aparente que sustancial, propició: 1). creciente dependencia alimentaria que se tradujo en un estancamiento relativo de la economía andina;

(109) Virgilio Roel, Proceso y crisis de las economías Peruana y Norteamérica, El Alba, Lima, s/f.

- 2). crecimiento industrial desequilibrado y dependiente,
- 3). incremento de los gastos sociales a corto plazo; 4). la deuda creció en cerca del 400%; 5). saldo deficitario de la balanza de pagos en cuenta corriente, que se financiaría a costa de la reducción de las reservas monetarias y de crecientes empréstitos; 6). un aumento de las luchas populares.

Este proceso concluye con una devaluación monetaria de 26.8 soles a 38.9 soles por dólar y una inflación y alza del costo de la vida que en 1969 llegaba al 38.88%, lo cual nuevamente acrecentó las luchas populares.

Las Fuerzas Armadas ingresan al gobierno en octubre de 1968 a resolver los problemas de la insurgencia, de la legitimidad y los obstáculos para la acumulación, e impulsan reformas. Ello significó, sin embargo, que entre 1969 y 1971 la deuda creciese en un 34% y más tarde, entre 1972 y 1974, en 2.7 veces. Debido a fenómenos y decisiones extrañas al país, el Grupo Consultivo del Banco Mundial decidió cuando la dinámica sustitutiva caducaba, dar créditos para apoyar las inversiones de los monopolios trasnacionales y la refinanciación de la deuda.

La crisis de 1974 condujo a un creciente déficit en el sector público por la pérdida de reservas, el descenso del PBI del 6.9 en 1974 al 3.3 en 1975, déficit en el saldo de la balanza de pagos de -1.538 millones de dólares, una desocupación de 14.9% y subocupación del 42%. La deuda se

incrementó en un 40%.

Para 1975 ya la pirámide de ingresos mostraba que sólo un 25% de la población concentraba los ingresos: empresarios, propietarios, profesionistas, empleados y obreros de empresas modernas. Mientras, un 40% -formado principalmente por campesinos- eran los más pobres y vivían de la venta de parte de su producción, destinando esos ingresos para alimentos (110). Estos últimos venían acompañados de los subempleados y desempleados de la ciudad, los desclasados y desarraigados que cada día aumentaban más.

Desde 1976 la política económica obedecía a las recetas de ajuste del FMI. La Junta Militar de Gobierno, con sólo seis paquetes de medidas en tres años (1975-1977), provocó un auge sin precedentes en la lucha de clases. Esta política económica significó a su vez la integración de las compañías trasnacionales, el aumento de las inversiones estatales (para favorecer a esas trasnacionales), mayores ganancias para la gran burguesía y acentuación del centralismo.

En 1977 la pérdida de reservas fue de 1.100 millones de dólares, mientras la deuda llegaba a 8.863 millones de dólares, que determinó un aumento de la inflación y del costo de la vida.

Para 1978 la deuda externa era de 9.056 millones de dólares. Crecían las importaciones, y para financiarlas se impulsan las exportaciones creando ilusiones acerca del

(110) Adolfo Figueroa, "Crisis y redistribución (1975-1980)" en Economía peruana. ¿Hacia dónde?, Ed. Universidad del Pacífico, Lima, 1981.

fin de la crisis. Mientras tanto decrecía el PBI y aumentaban los servicios de la deuda así como el control imperialista del presupuesto nacional.

Con una alta población desocupada (3.263.800 familias en el desempleo y subempleo) y la miseria por debajo del mínimo tolerable, quedaban amenazadas las minorías del país.

Con el conflicto económico por el descenso en las remuneraciones de los adecuadamente empleados, más la inflación y la devaluación pendiendo sobre este grupo y el ya citado, se creaban las condiciones del cada vez más radical enfrentamiento de clases. En términos sociopolíticos, se había concentrado el poder en las transnacionales y la burguesía burocrática -a la que paulatinamente se incorporaban otros segmentos de la "oligarquía"- como núcleo hegemónico, en función de una política económica cada vez más liberal.

I. La racionalidad de la crisis.

La principal especificidad de la crisis mundial y de la política económica que de ahí resulta es que, contrariamente a los treinta -cuando se produjo una desarticulación entre centro-periferia-, aparecen nuevas articulaciones financieras entre estos dos eslabones de la economía mundial. Este nuevo tipo de articulación resulta del desarrollo espontáneo y a la vez provocado por la política de firmas multinacionales, grandes bancos

internacionales y los acreedores colectivos FMI-BM-BID-AID.

Si en las crisis de 1930 y de la Segunda Guerra Mundial las situaciones industrializantes pudieron ser transformadas en industrialización más o menos acelerada, ello fue posible gracias a las condiciones internas, a las propias tendencias de la economía mundial y a la intervención pública.

Con Belaúnde Terry (1980-1985), las tendencias a la desindustrialización resultan también de las características propias de la economía interna, la economía mundial y la intervención pública. Aquí la clave es la relación acreedor-deudor, que se convierte en problema institucional y político.

La crisis en las finanzas se deja sentir prioritariamente en el Estado y en la balanza de pagos sobre la que ejercen presión los "motores" de la acumulación. La internacionalización del financiamiento comienza por reducir la autonomía de los aparatos productivos nacionales y de los sistemas monetarios. La valoración del capital financiero aparece sin mediaciones, acelerándose al margen de los flujos reales de la producción. Esto significa que las transacciones monetarias y financieras escapan al control del Estado en la medida en que se establece una nueva solidaridad bancaria que permite a los grandes bancos influir a través del acreedor colectivo en las políticas interiores de los países endeudados.

Contrariamente a los años treinta, no son los activos financieros los desvalorados sino los activos reales. La forma que toman es la devaluación de monedas nacionales. De ahí el estrechamiento de las posibilidades de acción estatal de regulación y de promoción de un nuevo régimen de acumulación. Esta situación ya no responde sólo a los procesos internos de codificación y mediación de los conflictos sociales -que permiten la institucionalización de los intereses hegemónicos-, sino que también se rigen por la economía mundial.

En la segunda fase de la crisis (a mediados de la década de los setenta, los bancos, las empresas y el Estado reaccionaron ante la reducción de flujos reales como si ésta fuera de carácter coyuntural. La inversión continuó y aumentó con ella la tasa de interés de los créditos. Se colocó el primer eslabón del pasaje de la tendencia al endeudamiento al real problema de la deuda. Los flujos reales continuaron reduciéndose y el horizonte económico de inversiones comenzó a reducirse en la medida en que los déficits se generalizaron.

El Estado reaccionó acelerando políticas expansivas.

El aumento de los déficits privados y públicos es el segundo eslabón en el camino al problema de la deuda. Las empresas se comenzaron a endeudar para hacer frente a cargas financieras. La ausencia de un control sobre los

intermediarios financieros permitió llevar al endeudamiento más lejos de que lo que resistían los flujos reales.

En esta crisis financiera -debido al grado de control que alcanzó el capital financiero-, la tasa de interés aumentó conforme aumentó el ciclo; pero a la inversa del ciclo clásico, esa tasa no cayó con la crisis a causa del control del capital financiero sobre el capital en su conjunto y en particular sobre el productivo. Este control fue origen de esa crisis, pero le dio sus contornos y creó las condiciones de su solución en detrimento de los deudores. La intervención pública adoptó políticas de austeridad que implicaron pérdida de autonomía monetaria.

La política de austeridad tuvo como determinante mayor la existencia de cargas financieras. La austeridad fue selectiva y sólo concirnió a los gastos públicos diferentes al servicio de la deuda. La selectividad en las medidas de austeridad reveló el hecho fundamental de que esas políticas respondían más a imperativos financieros que a situaciones productivas. En ese sentido, dichas políticas provocaron desindustrialización y sustituyeron el endeudamiento de reestructuración industrial por el de reestructuración financiera.

De esta forma comprobamos que las políticas de austeridad son las formas que adopta la sanción de la economía mundial sobre las economías periféricas que sufren el peso de la división internacional del trabajo. Pierden

valor los aparatos productivos para valorar el capital financiero.

La formulación de la intervención pública sufre variaciones. Se pasa progresivamente de los mecanismos de codificación y mediación de conflictos internos (Velasco Alvarado) a una intervención pública cuyo único elemento es integrar su política a la tasa de interés, de cambio y de endeudamiento que le permita el contexto económico internacional (Morales).

La caída de Velasco no es sólo producto de la voluntad militar, sino que obedece a una lógica interna donde se imponen las tendencias del mercado internacional y de la política financiera de los bancos acreedores y sus instrumentos de regulación monetaria internacional.

Con Belaúnde Terry (1980-1985), la economía queda sometida a las políticas de austeridad en materia de precios, repartición del ingreso, reconversión de actividades de acuerdo con los mercados internacionales, muchas veces, en contra de las propias fracciones de la burguesía burocrática. Se verifica una pérdida total de autonomía monetaria, incapacidad de enfrentar las evoluciones de la economía mundial e impulsar una regulación nacional de los procesos económicos y políticos.

Con Alan García Pérez, sólo después de un año de gobierno se dan las medidas para definir una intervención pública como salida de la crisis. Sin embargo estas medidas

estarán orientadas en función de la contrainsurgencia, de los intereses de los grupos sociales que dinamicen el régimen de acumulación -incluyendo a las transnacionales- y de la legitimación del régimen político, cuando la insurgencia crezca al ritmo de la insatisfacción de las necesidades sociales.

II. EVOLUCION HISTORICA DE LA CRISIS, DESARROLLISMO Y POLARIZACION SOCIAL.

1. Primer periodo 1967-1979: La gestación de la deuda.

Después de años de sustitución de importaciones, 1968 y 1969 se caracterizan por una austeridad generalizada tanto en el gasto público, el consumo y los salarios, así como el desempleo. Con esta medida se logró estabilizar la economía en crisis, de manera que en 1969 se obtuvieron 429 millones de soles de superávit presupuestario y se incrementó el ahorro de gobierno en cuenta corriente a 2.988 millones. No obstante el crédito sufrió una expansión muy limitada y sólo alcanzó una elevación de 10.6%, cuando la tasa de interés y la inflación para estos años únicamente fue de 12.5% en promedio, cifra relativamente baja si la comparamos con las posteriores.

Estas medidas provocaron -según el Ministerio de economía y Finanzas- la disminución del producto bruto interno por habitante en 1.4%, el descenso de la inversión

en un 7.1% y sólo se logró un incremento del 1.7% del producto bruto interno. A su vez, se redujo la expansión de la industria en un 1.9% y del 3.4% en la construcción.

En 1970, al buscar la reactivación de la economía se hizo uso del gasto deficitario y de la expansión monetaria y crediticia a fin de incrementar la producción (especialmente para promover la asociación entre el capital extranjero y el estatal). Así el Estado participa más en la producción a través de empresas públicas ampliando la infraestructura económica del país y favoreciendo de ese modo la inversión extranjera. Paralelamente, las empresas públicas se expanden en las industrias básicas permitiendo aumentar la producción y rebajar los costos del sector industrial al mejorar las ganancias de las empresas que usan esos insumos. De este modo el Estado interviene en la economía no sólo a través de reformas sino activamente, invirtiendo. Y, para este fin, en 1971 y 1972 provocó un crecimiento deficitario del presupuesto.

Por otro lado, el gobierno reveló insuficiente capacidad de generación e implantación de proyectos. Esta situación determinará que una parte del efecto multiplicador del gasto público -especialmente en la formación de capital- se pierda y no se ejerza el estímulo esperado sobre la economía.

El 30 de junio de 1971, bajo la errónea divisa de "más producción, menos consumo", se tomaron las primeras

medidas de conjunto para enfrentar la crisis. Se decretó la reducción de subsidios en 7.000 millones de soles, -monto transferido a los consumidores aumentando los precios- se dispusieron las primeras alzas de productos y se estableció una "asignación exepcional por variación de precios" y topes salariales (*).

En 1973 el desequilibrio fiscal se agravó tanto por el incremento de los gastos corrientes (subsidios a los alimentos importados, alza de sueldos, etc.) como por la merma relativa de los ingresos fiscales. La baja en la recaudación de 1973 fue el efecto de los incentivos tributarios otorgados por la ley de industrias, ley de cooperativas, ley de propiedad social, etc. Asimismo, la crisis se hizo más notoria por la agravación de la situación en la industria pesquera, el nuevo sistema de tributación, y que enfatiza en los impuestos indirectos, y los problemas propios de su implantación (111).

El financiamiento del déficit fue por endeudamiento externo y sólo una pequeña parte por endeudamiento interno, venta de bonos de inversión pública (que equivalía en muchos casos a la creación de dinero puesto que eran adquiridos por intermediarios financieros). El aumento de la masa monetaria, unido a la expansión del crédito, propicio en 1973 que se abriera una fase de violenta agudización de las presiones inflacionarias y se cerrara un periodo de relativa estabilidad (1969-1972), en

(*). Diario "El Comercio", 10. de julio de 1971, Lima.

(111) Véase Felipe Portocarrero, Folleto mimeo, UNMSM, Lima.

que los precios aumentaron un 6.7% anual. En 1973, éstos experimentaron un alza del 14%, más del doble del aumento previsto por el gobierno, y para 1974 la tasa de inflación fue del 18%.

Estructuralmente esta aceleración de la inflación fue consecuencia del desarrollo de la acumulación monopólica que generaba desequilibrios intersectoriales, estancamiento agrícola y limitaciones en el uso de la capacidad instalada y la importación, la política económica expansionista, que a su vez conllevaba un aumento del déficit presupuestario y crecimiento del crédito y de la liquidez, agravó los desequilibrios.

Asimismo, hubo influencias de la crisis internacional a través de la inflación importada y la escasez de muchos productos.

La agudización de la inflación -como sabemos- erosiona el poder de compra del salario a la vez que estimula una serie de operaciones especulativas de carácter netamente parasitario. De esta manera, nuevamente son los trabajadores los que tienen que pagar las consecuencias del bloqueo a la acumulación a través de un deterioro de sus condiciones de vida.

Por su parte -en lo referente al sector externo-, se trató de controlar y limitar las importaciones de manera más estricta, subsidiando y estimulando la exportación tanto de productos tradicionales como no

tradicionales. Así resulta difícil mantener el crecimiento y controlar la inflación, pues para el crecimiento es necesario aumentar el gasto deficitario y proceder a una expansión crediticia y monetaria. Ello imposibilitaba implantar una política coherente de crecimiento y control de la inflación.

En 1973 el capital extranjero había duplicado sus inversiones directas alcanzando los 80 millones de dólares destinados a proyectos petroleros y mineros que -como sabemos- son los que en ese momento proporcionaban más altas tasas de ganancia (sobre todo el petróleo por la crisis mundial de energía) (112).

Se firman 18 contratos petroleros para explotar yacimientos de la selva, que asocian a PETROPERU con los grandes monopolios petroleros norteamericanos. En el mismo año el gobierno peruano consigue negociar con el Club de París y financiar 1.900 millones de dólares para futuros proyectos.

La política presupuestaria del gobierno obtuvo préstamos por 574 millones de dólares, lo cual hasta ese momento era un récord, pues significaba un incremento del 93% sobre 1972. Los préstamos de 1973 se destinaron en gran parte a equilibrar la balanza de pagos. La deuda resultaba improductiva (FFAA y burocracia, por ejemplo), impagable a corto plazo y con una alta tasa de interés. Sin embargo ese año se inician importantes empresas mixtas entre el capital

estatal y el capital externo, sobre todo en el sector industrial. Asimismo se financian algunas empresas públicas.

En 1973 el Estado adquirió las instalaciones de la firma inglesa Lobitos Petroleum Co. pagando la suma de seis millones de dólares. La Southern Perú Cooper Co. anunció que había obtenido 390 millones de dólares para completar su financiación. Ingresan empresas como la Volvo-Perkins, Massey Ferguson (la primera para producción de motores diésel y la segunda para la fabricación de motores de trabajo agrícola). Al mismo tiempo, Toyota-Perú ganó la licitación para fabricar autos y se comprometió a invertir 50 millones de dólares.

Las amortizaciones, intereses, salidas invisibles y otros egresos mermaron la productividdd, lo que influyó en la balanza de pagos que se volvió deficitaria y hubo que recurrir a los créditos internacionales.

En 1974, ante la debilidad burguesa el gobierno actuó a través de su ya conocida política asociativa entre el capital estatal y el extranjero. Podemos destacar los siguientes proyectos:

En minería se invirtieron 30 millones de dólares para los años 1973-1974, a través de una firma japonesa en refinerías de cobre y zinc ubicadas en Ilo y Lima.

Se pagaron 76 millones de dólares por la

expropiación de la Cerro de Pasco, (explotación no tan rentable como antes) y el Complejo Químico papelerero de la Grace. Todo esto se hizo a través del acuerdo Green. Se autorizó a estas empresas repatriar 74 millones de dólares por concepto de ganancias, para de este modo eliminar todo tipo de fricciones y abrir nuevas puertas al capital norteamericano.

Se firmó el contrato para el proyecto de Majes por un monto de 6.000 millones de soles, contrato realizado con firmas inglesas, suecas, sudafricanas, españolas y canadienses.

Se logró financiar Bayovar a través de un convenio entre Perú y Japón por una suma de 1.208 millones de soles.

Se financió la irrigación de Chira-Piura por 3.440 millones de soles en su primera etapa, de los cuales el 65% fue aportado por el Perú y el 35% por una firma yugoslava.

Se firmó un convenio con la Comunidad Económica Europea por 170 millones de soles para el desarrollo rural.

Se financió la ampliación de la refinería de la Pampilla por medio de un contrato de COFIDE, el gobierno francés, la banca francesa y el gobierno de la URSS.

El hecho económico más importante fue la financiación del oleoducto por 500 millones de dólares con Japón, el cual con un interés del 6% prestó la cantidad de 330 millones de dólares. Para completar el financiamiento, Irán y Venezuela prestaron cada uno 100 millones de dólares, 35.5 millones Argentina y 6.8 la URSS. Perú y la URSS firmaron la financiación del proyecto de Olmos por un monto de 5 888 958 dólares.

Se acordaron aspectos técnicos y financieros con firmas mexicanas y norteamericanas para la fabricación de papel y afines.

Asimismo, a los proyectos automotrices se sumaron el firmado por Perú y Alemania (Mercedes Benz) para fabricar camiones por diez años, concluidos los cuales el ejército se encargará de dicha actividad.

Con estos ejemplos se nota aún más la asociación entre el capital estatal y el externo, que se hace cada vez más grande tanto en cantidad como por el número de países: URSS, Yugoslavia, Polonia, Suecia, Alemania, España y otros.

El proceso de acumulación dependía del capital invertido y de la tasa de ganancia, la disminución de ésta en los años anteriores a 1973 obstaculizaba la acumulación y aparecían movimientos bruscos o crisis. Logran sobrevivir a

la catástrofe únicamente las empresas más grandes y mejor dotadas. De ahí la concentración de capital por los monopolios y la quiebra de las pequeñas y medianas empresas.

Sin embargo, tomando a cada una de las grandes empresas por separado, las dificultades a consecuencia de la caída de la tasa de ganancias había comenzado algunos años antes. Así, por ejemplo, se contaban entre 1968 y 1970, 70 cierres, 176 reducciones y 50 paralizaciones, que hacían un total de 96 empresas temporalmente fuera de la producción, en tanto se fusionaban 51 empresas en diferentes ramas de actividad.

La búsqueda de ganancias en este sistema de producción aumentó la pobreza y la miseria de las masas. Esa miseria se expresó principalmente en una alta tasa de desocupación que hasta 1972 llegaba al 18% de la población activa total y en una tasa de subocupación del 47%.

Se multiplicaron la ola de despidos masivos y paros forzosos que arrojaron a la clase obrera y a sectores populares al ejército de los desocupados: entre 1974 y 1976, sólo en 22 centros laborales estudiados se contaron cerca de 2.000 trabajadores despedidos, sin mencionar el número de trabajadores que "renunciaron" a empresas estatales como Pesca Perú (que contaba entre sus planes la reducción de un total de 10.503 trabajadores).

Los precios iniciaron su alza en forma acentuada desde 1971, y aún más pronunciada a partir de 1973. Para

1975 resultó un incremento de más del 70% en relación a 1968. Tal era la espiral inflacionaria que ya no cesaría.

Como en este periodo los sueldos y salarios no subieron en la misma proporción, sólo en relación a las remuneraciones recibidas en 1972 los salarios de la clase obrera perdieron en 1973 su capacidad adquisitiva en un 40% y más del 53% en 1976.

Es innegable la continuidad Velasco Alvarado-Morales Bermudez.

Con el segundo no obstante, la política de shock golpeó a los sectores populares en forma muy drástica. Midiendo los bienes y servicios mínimos indispensables que el obrero y su familia necesita para sobrevivir y reproducirse (alimentos, casa, vestido, medicina, pasajes y educación, descartando recreación, cultura, suntuarios, etc.), el alza del costo de vida para 1975-1976 es de 13.340 soles mensuales, mientras que el promedio de los salarios para todos los obreros del país incluyendo la "compensación" por alza de precios (840) y el aumento máximo por pliego de reclamos (1.650) llegan a un máximo de 5.370 y a 4.740 soles mensuales para los obreros rurales. Es decir, los salarios del grupo superior apenas sirven para cubrir el 40% del costo de vida, mientras que en el grupo inferior no llegaba al 35%. Los subsidios -en especial a los productos alimenticios- se redujeron cada vez más. Los precios fueron más altos y la escasez más notoria. Los impuestos

diezmaron los exiguos recursos; los sueldos y los salarios redujeron cada día más su capacidad de compra; los aumentos salariales resultaron cada vez menores y -para agravar todavía más la situación- se negó el derecho a la reivindicación económica, a la reclamación por el salario, beneficios y condiciones de trabajo, e incluso se suspendió el derecho de presentar pliegos.

Al negar la estabilidad laboral y normar el despido masivo, la desocupación total aumentó un 5% de la población económicamente activa. En Lima, la desocupación tuvo un porcentaje de 50% mayor que en el promedio nacional, y eso sin contar el subempleo. Sobre este fondo, la pequeña actividad fue golpeada fuertemente, la mediana notoriamente restringida y se desarrolló una mayor concentración, con acentuada disputa entre la propiedad monopólica estatal y no estatal.

En cuanto a la producción de mercancías para exportación, los precios en el mercado exterior permitieron seguir obteniendo elevadas ganancias y contrarrestar la caída de su tasa, dando márgenes de movilidad a toda la economía.

A fines de 1974, como consecuencia de la profundización de la crisis capitalista mundial se retrotrajeron los mercados exteriores y se contrajeron los precios: cerca del 57% para el cobre, 26% para el plomo, 50% para el algodón, 54% para la harina de pescado y 17% en el

café y la plata. Prosiguió la baja en 1975; el azúcar cayó de 60 a 14 dólares el quintal FOB.

En tal sentido, los márgenes de acción que concedían los mercados extranjeros habría dejado de existir para la burguesía productora o intermedia en la comercialización de estos productos. La modificación positiva de precios de algunos productos no alteraba la tendencia.

Las diversas actividades productivas representadas por capital estatal, privado no reformado o reformado, aparecieron como accesorias o auxiliares de la actividad principal dominada por el capital extranjero. En otras palabras, el crecimiento de la producción se supeditó al crecimiento de las empresas extranjeras o la provisión de bienes indispensables para dinamizar la economía.

Las potencias imperialistas, al soportar la presión de sus desequilibrios internos, disminuyeron sus importaciones provenientes del Perú en un 28.5%, mientras que sus exportaciones aumentaron o se mantuvieron estables. Asimismo, se acentuó la desigualdad de los términos de intercambio resultando que mientras los precios de exportación aumentaron, entre 1970 y 1975 en un 43%, los precios de importación lo hacen en un 56%.

Una débil economía inserta en la división internacional imperialista de la producción no puede resistir los efectos de la crisis ni dispone de recursos

para consolidar una economía que permita alguna decisión independiente.

Entre 1973 y 1975 (años en que se agudiza la crisis) ingresaron al país 2.807 millones de dólares por concepto de préstamos, es decir el doble del capital que en los años 1968-1972 (1.099 millones de dólares). Tal endeudamiento permitió al gobierno paliar relativa y momentáneamente la crisis.

Así tenemos que en intereses y amortizaciones salieron del país, entre 1968 y 1975, 2.289 millones de dólares. La deuda externa aumentó de 777 millones de dólares en 1968 a 2 774 en 1975, habiéndose acumulado sólo en estos tres últimos años una deuda de 1.737 millones de dólares.

La exportación del capital es uno de los instrumentos principales para la penetración y expansión monopólica, que permite en épocas de crisis la transferencia de sus propias dificultades a costa de la profundización de la crisis en otros países. En 1976 la deuda externa representaba más de 30% de las exportaciones.

Los créditos son una especie de notas de abono de un banco extranjero, lo cual ocasiona emisiones inorgánicas inflacionarias que provocan la restricción del crédito, recesión y desocupación.

Como señaló el presidente Morales Bermúdez; "En primer lugar tenemos que partir del concepto que un país como el nuestro, con ausencia natural de capitales, no puede

cumplir sus objetivos de desarrollo si no adquiere compromisos de deuda" (113). Por su parte, el Plan 1971-1975 dice:

"Del logro de la inversión directa y de los préstamos al sector público para proyectos mineros depende el equilibrio de la balanza de pagos, y por consiguiente el alcanzar las metas cuantitativas previstas en el Plan. En síntesis, el Plan Nacional de Desarrollo 1971-1975 señala el rumbo que seguirá el desarrollo nacional y postula un óptimo crecimiento económico, para tal supone un adecuado flujo de capitales del exterior" (114).

Un autor sostiene la hipótesis de que el déficit fiscal es un fiel reflejo del fracaso del desarrollismo económico que aspiraba a un alto crecimiento económico con equilibrio en las cuentas nacionales y que descansó en una política a corto plazo, de la cual el presupuesto bienal es un instrumento (115).

Los ingresos corrientes del presupuesto, que en 1970 eran del 86% de origen tributario, en 1975 alcanzaron el 88%. Los impuestos indirectos que en 1968 representaban el 31.5% del total de ingresos aumentaron su participación en 1974 al 40%. El impuesto a la renta y al capital

(113) F.Morales Bermúdez, Declaraciones a la Prensa.

(114) Instituto Nacional de Planificación, Plan 1971-1975, Lima, 1970.

(115) J. Suárez, La política fiscal de la Junta Militar de Gobierno. Ed. IES, Lima, 1978.

disminuyó su participación en el presupuesto de 32.7% al 28% en el mismo periodo. Además, la creación de nuevos impuestos y el aumento de los existentes es un factor que implica el alza del costo de la vida, a lo cual se añade el alza de precios y la reducción de subsidios que tendrían que ser pagados por las masas vía precios. El gasto público había crecido más que los ingresos originando un déficit.

Para aplicar su estrategia de "seguridad y desarrollo", entre 1968 y 1975 el gasto de las Fuerzas Armadas había aumentado nueve veces (559 veces más grande que el sector prioritario de propiedad social), mientras el de agricultura apenas se triplicaba y el de educación bajaba del 31.09% al 17.8%.

El Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS) gastaba más que el Ministerio de Vivienda, que ORDESO y CONPAP juntos. Además del SINAMOS, con un presupuesto 37 veces más grande que CONAP, acaparaba el 51.5% en remuneraciones y financiar el MLR y la "pomada" (grupos anticomunistas como CTRP, JRP, ANTA, Ligas Agrarias, CNA, SERP, FDRP, CPRS).

En 1973 y 1974 el presupuesto de SINAMOS era mayor que el Sistema de Universidad Peruana.

Agrupando los gastos en remuneraciones, intereses, comisiones y amortizaciones de la deuda, alcanzaban en 1975-1976 el 43.1% del gasto del gobierno central. Sólo el Ministerio de Economía destinaba 36

millones (56% de su presupuesto) para pagar la deuda.

El déficit presupuestario en 1968 era de 6 987 millones, mientras que en 1975 lo era de 104 806 millones, es decir quince veces más grande. El déficit acumulado desde 1969 era de 202 747 millones.

En septiembre de 1975 se produjo una devaluación del sol en 16.2%. Fundamentándola, el ministro de economía Barúa Castañeda sostuvo que con tal medida se aseguraba "el normal desenvolvimiento de nuestra economía, tiende a restablecer el equilibrio y permite que el aparato productivo retome sus niveles de eficiencia". Y en enero de 1976 el ministro de economía, luego de exponer la situación crítica de su cartera, vuelve a informar sobre "el plan de reactivamiento". Se tomaron medidas tributarias y se acordó una reducción de subsidios. Con relación a la balanza de pagos, se decretó racionalizar las importaciones mediante la licencia previa para importar y reducir la importación de licores, de papel, de revistas, e incrementó un 5% del reintegro tributario conocido como CERTEX para que los exportadores pudieran tener márgenes de rentabilidad apropiados (116).

Asimismo, se anunció una ley promocional de la pequeña empresa y otra para la pequeña y mediana minería, un aporte crediticio a la producción y perfeccionamiento del sistema de crédito regional, intensificación del programa de extensión agrícola con asistencia técnica e insumos básicos

(116). Ver PC del Perú, Documento sobre la crisis. (folleto), Lima.

subsidiados y apoyo a la propiedad social. Finalmente, mantención del ritmo de inversiones públicas "como elemento propulsor de la economía".

Nuevamente se elevaron los precios: gasolina, petróleo y querosene. Subieron los pasajes y los alimentos. Y para "compensar" el alza de precios se dio otra "asignación especial" y el D.Ley 21.394 para normar salarios y sueldos. En él se disponía que los pliegos de reclamos quedaran reducidos sólo a una asignación por salarios negando la presentación de toda demanda sobre condiciones de trabajo y otros beneficios. Se estableció un tope salarial, una grave disposición que apuntaba contra las reivindicaciones de la clase obrera, de sus pliegos y de su acción sindical.

En mayo de 1976 se dispusieron incentivos para la exportación de productos no tradicionales: un régimen que por diez años exonerara en forma total y automática de los derechos aduaneros e impuestos que afecte a la exportación de productos no incluidos en la lista de productos de exportación tradicional. Además se fijó el reintegro tributario o compensatorio básico sobre el valor de la exportación de nuevos productos o productos elaborados por empresas descentralizadas.

Por otro lado, se limitó la economía sólo a importaciones de bienes indispensables, se elevaron aranceles de importaciones de bienes de capital y los pagos

por placas de rodaje, con lo cual se generalizó el pago de peaje. Y "las grandes medidas salvadoras" del 30 de junio de 1976. El Estado congeló sueldos y salarios, gastos en el sector público y, además, dispuso una reducción de sus inversiones por 14.800 millones de soles. Estas medidas generaron más desempleo y una tendencia mayor a la recesión.

Se dispuso otro aumento en el precio de la gasolina, que según el ministro serviría para enjugar el déficit del gobierno central y de las empresas fiscales buscando restablecer la estabilidad de estas últimas. Un incremento de 100% que repercutió gravemente en la economía encareciendo pasajes, fletes y elevando los precios en general. Una vez más volvieron a reducirse los subsidios, que repercutieron especialmente en los productos alimenticios, situación que acompañada de la medida que autorizaba a las empresas a reajustar los precios de bienes y servicios -con una simple comunicación al Ministro-, y la inflación en desarrollo, generaron una mayor y creciente alza de precios en todos los productos, comenzando por los alimenticios.

Finalmente se dio el D.L. 21.531 por el cual se dispuso un incremento de remuneraciones para compensar el reajuste en el nivel de los precios que las medidas de estabilización económicas generarían. Pero esta medida implicaba a su vez, la suspensión de la presentación de pliegos de reclamos y prórroga de los aprobados por seis

meses a partir de la fecha de vencimiento de los pactos o convenios de negociaciones colectivas de trabajo.

El "Plan Barúa" se dio con el fin de reducir en 19 196 millones el déficit fiscal -que a comienzos de 1976 ascendía a 104 806 millones- a la vez que el financiamiento interno. Al mismo tiempo se aumento el presupuesto en 61 247 millones, de los cuales 44 267 eran para inversión pública (en realidad gran parte para pagar la deuda) y 17.000 millones para aumentos y remuneraciones en el sector público (de éstos 5 300 eran para las Fuerzas Armadas). Esto era en enero de 1976. En junio había un déficit de 81 500 millones, de los cuales estaban financiados 56 200. Quedaban por cubrir 25 300 millones de soles y con ello otro paquete de medidas.

El endeudamiento interno y externo había llegado a límites muy altos y se recurrió a las emisiones inorgánicas de papel moneda. A fines de 1968 el total del medio circulante llegó a 14 715 millones, y en agosto de 1975 no era menor de 60 mil millones de soles. Más de 24 000 millones fueron emitidos en tan solo los últimos 18 meses.

El endeudamiento externo con los organismos financieros internacionales y la banca alemana, japonesa, norteamericana, etc. permitieron explicar las políticas económicas y afirmar que las devaluaciones y la política fiscal eran impuestas por el FMI y el Banco Mundial.

El aumento de gastos corrientes con base en los impuestos indirectos y la reducción de la inversión afectó a los sectores de transporte, salud, educación, alimentación y agricultura.

Las medidas de junio de 1976 mantuvieron la orientación tributaria: impuestos a las exportaciones tradicionales en un 15% al valor FOB, un 15% sobre las ventas internas de productos cuyos precios se cotizaban en el mercado internacional (mayor costo de vida), impuestos a la gasolina (sobre un precio de 50 soles, 22 16 soles de impuestos) y CERTEX a los exportadores. Tales medidas se completan con una reducción presupuestal de 4 500 millones de soles y la reducción de gastos de inversión en 9 666 millones (siderurgia, etc.). Esta política de austeridad no disminuyó un centavo el presupuesto de las Fuerzas Armadas.

Los 4 500 millones de soles eran una ridícula reducción del presupuesto, cuyo déficit llegaba hasta el 12 de enero de 1976 a 105 000 millones agravado por el aumento del gasto en 62 000 millones. Después hubo nuevos aumentos de presupuestos en algunos sectores, sin faltar -claro está- el SINAMOS.

Todo esto iba acompañado de rígidas medidas represivas antilaborales contra la estabilidad, miserables "compensaciones" por alza de precios, y topes a las reclamaciones por pliegos anuales, etc.

En el "Programa de Emergencia", el ministro de

economía Walter Piazza comienza señalando los síntomas de la crisis: inflación, déficit en el gobierno central y empresas públicas, falta de liquidez en el sector privado y déficit en la balanza de pagos.

Las causas se atribuyeron al estancamiento del crecimiento, la falta de ahorro interno, la planificación equivocada y el crecimiento del aparato estatal. Esto significaba que había que apoyar la inversión privada de las transnacionales y la gran burguesía dándoles más confianza: reduciendo los déficits, sin tocar impuestos directos; restando subsidios a las empresas públicas y dándoles libertad de aumentar los precios (la gasolina en 50%) minidevaluaciones; reduciendo la importación de bienes y equipos (se incluye a la defensa nacional, que en ocho años los enormes gastos en armamento habían saturado las necesidades) y, por último, recurriendo al capital financiero.

Según Silva Ruets, las causas de la crisis estarían en la crisis mundial caracterizada por la estagflación. Y sin embargo también habría causas internas: sobreestimación de divisas por exportaciones, incremento del endeudamiento por proyectos de mediana y larga duración, incremento del déficit presupuestal, caída de la producción por conflictos laborales, reducida participación del sector privado y excesivo crecimiento de la demanda interna.

De acuerdo con esta caracterización de la crisis,

las consecuencias se transformarían en causas. De ahí que los objetivos que se plantearan fueran: restablecer el equilibrio de la balanza de pagos -déficitaria en 146 millones de dólares con tendencia al crecimiento- y controlar la tasa de inflación.

Las metas eran reducir el déficit fiscal, ahorrar en cuenta corriente del gobierno central frente al creciente desahorro, y reducir la pérdida de reservas internacionales.

Las acciones a tomarse eran: freno al endeudamiento, incremento de ingresos del tesoro con impuestos excepcionales, reajuste de tasas de servicios, reajuste de impuestos a honorarios y de la tasa a las remuneraciones, impuestos a derivados del petróleo. Además, racionalización de la administración y austeridad fiscal, limitación de subsidios, transferencias de capital a empresas públicas, mejoramiento de la administración de ingresos de gobiernos locales, tipo de cambio regulado por el mercado, estímulo a exportaciones no tradicionales, limitación de asignaciones de divisas, amnistía para repatriar capitales y, por último, lo principal: búsqueda de recursos financieros ante el imperialismo.

Al atacar las consecuencias, estas medidas no solucionan las bases de la crisis. La austeridad y el control del crédito eliminan a la pequeña empresa, que se manifiesta en las quejas y reclamos de los medianos y pequeños mineros, pesqueros y otros.

Por más de 16 veces en forma consecutiva, el FMI dicta las medidas económicas que lo favorecerían. Dentro de ellas la eliminación del control de cambios y la transformación del Banco de Reserva en un agente más en el mercado de cambios, de esta forma se favorecía a los monopolios, a la gran burguesía financiera y a la gran burguesía burocrática. La revaluación del dólar también los favorece por la reducción de costos internos. Así se condicionaba a la economía a exportar materias primas para conseguir divisas, en la misma medida en que el mercado interno se reduce y suben los precios de los productos no tradicionales y tradicionales. Asimismo para exportar se requiere importar bienes y capital, empero la banca privada ha agotado su disposición a seguir prestando, ahora el FMI y otros organismos financieros lo harán a costa de dirigir la economía.

Para 1981 se proyectaba llegar con la economía saneada, más sin embargo -como se verá más adelante- ocurrió todo lo contrario.

ALGUNAS PARTICULARIDADES DE LA CRISIS.

a. CAPITAL FINANCIERO, DESCAPITALIZACION Y ENTRABAMIENTO DEL DESARROLLO

Como se verá en el capítulo cuarto, el lento crecimiento del sector exportador tradicional de comienzos de los años sesenta condicionó la transferencia de rentas y

ganancias -vía la banca- a las ramas industriales productoras de bienes suntuarios o intermedios de aquel sector, asociándose para ello con el capital extranjero.

Al finalizar la década, este nuevo proceso de acumulación entra en crisis cuando la rápida capitalización de la economía podía indicar lo contrario. Parecería extraña esta afirmación si no se repara en la permanente descapitalización trasnacional y en el estancamiento exportador.

Luego del golpe militar de 1968, el sector exportador completaba su función reproductora de plusvalor con la deuda externa cambiando el nudo entrabador. El Estado se constituyó en soporte de la acumulación privada, y el capital financiero en el de ambos.

El Estado modificó la estructura del gasto público y en 1973 el 60% de su inversión estaba asociada a la economía. Un 20% se destinaba a la defensa. El Estado también produjo medios de producción, controló la exportación e incentivó la industrialización. Al acelerar el crecimiento de la producción de bienes de consumo y de servicios, debió endeudarse para favorecer principalmente a los estratos improductivos y a los intereses bélicos y contrainsurgentes. Gasto destructivo e infecundo que provocó efectos depresivos.

Mientras la inversión pública se orientaba a proyectos de larga duración, la inversión privada se estancó

creciendo sólo un 5% entre 1970 y 1974, y dedicando los ahorros privados a empréstitos estatales y capitalización externa. La tardía maduración de los proyectos aumentó de este modo la composición orgánica del capital y al mismo tiempo detuvo la rotación.

Así como la propia dinámica de la acumulación semicolonial basada en el capital financiero entrababa el desarrollo, la crisis se tradujo en países como el Perú a través del comercio exterior, de los flujos financieros, monetarios y tecnológicos, y como crisis de descapitalización expresada en el sector agrario como subproducción y mayor desocupación.

Las condiciones y características de la economía daban a la crisis el carácter de descapitalización, por ser el Perú productor de materias primas y bienes de consumo en manos de monopolios y ser importadores de bienes de capital e insumos con permanente extracción de capitales agravada por el cambiante nivel de exportaciones y el deterioro de los términos de intercambio.

A esto se agregaba la crisis petrolera, los negativos flujos financieros y monetarios y la disminución del ritmo de la economía con una altísima tasa de inflación. Su crecimiento era tan infimo que no llega a sostener el consumo. Es un fenómeno de subproducción agudizado por las reformas.

La extracción de excedentes vía mercado y

explotación directa del campesinado, la inflación importada y el financiamiento hace que los productores más ligados al mercado vendan más y la mayoría -menos ligados- vendan menos recluyéndose en la economía de autoconsumo.

La descapitalización y/o extracción de riquezas por la inminencia de la Reforma Agraria no permitieron que continuara la acumulación o por lo menos la reproducción simple, provocando así la necesidad de importaciones cuando precisamente se elevaban los precios internacionales de alimentos (trigo).

Caso similar a la depredación de la pesca es el petróleo.

El Estado aparece como empresario neocolonizante haciendo crecer el sector público y -con más fuerza- las finanzas del Estado que se caracterizaban por: 1) presupuesto de la República con gastos irracionales, improductivos y militaristas; 2) aumento de los subsidios a los alimentos que con la crisis se buscará reducir; 3) empresas del Estado que se ubican en los sectores o ramas menos rentables y trabajan con pérdidas, burocratizadas y con lujosas instalaciones; 4) grandes proyectos de inversión que tienen largos periodos de maduración.

En 1979 se agudiza la descapitalización estatal, entre otros motivos por el inadecuado e impopular comportamiento tributario, el deterioro de las utilidades de las empresas exportadoras y las obligaciones para captar el

ahorro que los libere de impuestos; las exoneraciones y rebajas impositivas a los monopolios, la remisión de utilidades por las trasnacionales, los intereses de la deuda pública externa y los gastos de defensa (117).

De ahí que los gastos públicos no se financien con los ingresos tributarios sino con el endeudamiento externo e interno. Este último a través del aumento de colocaciones del tesoro (bonos, etc.) comprados por la banca comercial como reservas de ley, que se traducen en transferencia de dinero ocioso. De este modo aumentó la demanda del gobierno y la inflación, más no el ahorro (que era su objetivo).

La industria no realizó nuevas inversiones. Sólo hizo uso de su capacidad instalada e invirtió en stocks. No hubo "exceso de demanda" y las devaluaciones para incentivar las exportaciones chocaron con los intereses de la gran burguesía industrial, que necesitaba importar aumentando la recesión y los precios de producción interna.

Dentro de los préstamos otorgados al Estado peruano se observan dos etapas:

a) la primera -comprendida entre 1968 y 1971-, donde la capacidad del Estado, de captación de recursos externos disminuye por efecto del estancamiento de los desembolsos y el incremento de las amortizaciones; b) la segunda etapa -a partir de 1972-, en que se aprueba un paquete muy vasto de nuevas solicitudes de préstamo,

especialmente dentro del marco de negociaciones del Grupo Consultivo del Banco Mundial, con lo cual se multiplica el endeudamiento. Los préstamos obtenidos fueron de 780 millones de dólares para el periodo de 1972-1974, y luego ampliado a 1 900 millones, con lo que se cubren las necesidades de endeudamiento público para los años 1972-1976. Luego, en abril de 1975, se produce la tercera reunión del grupo consultivo y los compromisos de financiamiento externo se amplían a 3.500 millones de dólares (un incremento del 23.6% en relación al nivel alcanzado en 1973).

Las dificultades económicas hacen necesario un aumento aún mayor que la deuda externa para mantener el equilibrio de la balanza de pagos. De este modo, la dependencia cada vez mayor del régimen frente al capital financiero internacional acrecienta su vulnerabilidad frente a las variaciones de la coyuntura mundial capitalista. Al mismo tiempo, la carga que representa el pago de los cuantiosos intereses y amortizaciones de la deuda ya contraída pesará fuertemente sobre la balanza de pagos, comprometiendo en gran medida las divisas generadas por la ampliación de la base exportadora.

La inversión en bienes de capital, en insumos y el endeudamiento externo para la inversión pública presionan a mayores importaciones para mantener los niveles de ganancia. Esto se contradice con la baja de ingreso y la

demanda interna que, al lado del deterioro de la situación de pagos internacionales, conducen a la crisis.

Se elevan los precios y bajan los salarios reales, se adquieren más bienes de capital, se reducen los ingresos creándose la posibilidad de no realizar las mercancías. Pero ya está creada la presión sobre la balanza de pagos (agregándose al endeudamiento las necesidades de financiamiento, el déficit de la balanza comercial, la balanza de capitales que intensifican esta presión)

El desarrollo del mercado interno, de la economía mercantil y de la industria dependen de la acumulación imperialista, que le otorga una lógica interna a la acumulación y a la crisis.

El crédito externo se orienta básicamente a servicios y refinanciamiento de la deuda, compensación de la balanza de pagos y defensa nacional. Lo adeudado con respecto al FMI en 1975, era del 22% y el servicio con respecto a las exportaciones del 36%. Empero, las exportaciones no tradicionales (manufacturas) no llegaban al 10% del total y el crédito interno se orientaba a proyectos de inversión del gobierno central.

La gran burguesía, los terratenientes y los monopolios mantienen su demanda, pagan menos impuestos e incentivan la producción de bienes de exportación e indispensables.

La incorrecta alternativa estatal frente a su

incapacidad de reactivar la economía por la inversión fue una política económica recesiva que buscaba contraer la demanda para restablecer los equilibrios financieros a través de la devaluación, elevación y ordenamiento de la tasa de interés, eliminación de subsidios, liberación del sistema de precios y del mercado cambiario, más exportaciones y persistencia en los préstamos, reduciendo el consumo de las masas y hambreado más al pueblo.

El periodo denominado "sustitución de importaciones" o "crecimiento hacia adentro" tiene una fase expansiva que corresponde a la expansión interna del capital extranjero, donde se incrementan los precios y salarios, aumentando las importaciones, hasta que llegan al tope y a desarrollar la contradicción con las "restricciones externas", que corresponden a las dificultades de reproducción del capitalismo mundial (*). En este momento las fracciones de la gran burguesía burocrática industrial, aprovechando las contradicciones dentro del imperialismo-monopolios, fuerzan la devaluación que deprime los salarios y frena el desarrollo industrial.

De allí que el desarrollismo y la política de ajuste sean dos fases de un mismo proceso, ambas preñadas de los condicionantes de la violencia, como lo analizaremos en el último capítulo.

(*) Véase Pedro Vuskovic, Debates actuales sobre el desarrollo industrial de América Latina, en Rev. Economía de América Latina No. 12, CIDE 1984, México.

b. UNA CRISIS DE BASE AGRARIA

El problema de la crisis y el señalamiento de sus rasgos fundamentales dependen del carácter de la sociedad. Las condiciones de existencia de la fuerza de trabajo —→

otorgan un carácter muy particular a la crisis económica en Perú ya que su actividad fundamental es agrícola.

Si partimos del análisis de las condiciones internas, encontramos que la actividad productiva básica es la agraria y no la industrial.

Consideramos que esta crisis afecta principalmente a la mayoría, al proletariado, semiproletariado agrícola y a la población campesina que, con más de ocho millones, en gran proporción se encuentra inmersa en relaciones mercantiles y sometida a las contradicciones campo-ciudad.

Los cálculos del PBI (14.6% en 1968 al 12.7% en 1975) nos indican que el segundo lugar de la agricultura en la generación del producto bruto interno ocurre por una disminución de su productividad -debida al lento desarrollo de las fuerzas productivas agrarias- y no por un desarrollo industrial importante. Es más, la industria sólo contribuye con el 10.4% en el PBI, lo cual indica que el mayor porcentaje proviene de sectores no productivos como el transporte, servicios, etc.

Lenin anotaba lo siguiente: "No es posible

imaginarse el capitalismo sin ningún aumento de la población comercial e industrial a cuenta de la agrícola, y todos saben que ese fenómeno se pone de relieve de la manera más visible en todos los países capitalistas" (118). El crecimiento capitalista está unido a la revolución de la industria y al aumento de centros industriales.

La agricultura mercantil se desarrolla aunque la capitalista avanza de manera insignificante. Existe una disminución de la PEA de la industria manufacturera del 15.4% en 1940 y del 12.8% en 1972. Mientras el sector que realmente crece es el terciario (de servicio y comercio), disminuye la PEA agropecuaria del 62.1% en 1940 al 44.3% en 1972. Precisamente esta ambigüedad en la estructuración de la sociedad burguesa desarrolla sectores sociales potencialmente revolucionarios.

La crisis tiene las siguientes manifestaciones en el sector agrario:

1. Reducción de las áreas productivas y cultivadas (1 423 675 Has. entre 1961-1971) que se transformaron en pastos o se dejaron de cultivar, convirtiéndose en improductivas, bosques, etc.
2. Estancamiento y disminución de la producción y bajos rendimientos.
3. Desabastecimiento del agro en favor de la industria y la ciudad, que si bien es un proceso congénito a la transición, en épocas de crisis se profundiza.

(118) V.I. Lenin, El desarrollo del capitalismo en Rusia. Progreso, Moscú, 1967.

4. Reducción de la demanda solvente a las masas campesinas, del semiproletariado y el proletariado rural, por los bajos ingresos y su creciente estratificación interna.

5. Empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo para el conjunto de trabajadores del campo, excepto reducidos núcleos empresariales, medianos agricultores y terratenientes.

6. Aumento de la desocupación, despoblación creciente del agro y migraciones campesinas a las ciudades.

7. Sobre-explotación del campesinado y de la mayoría de trabajadores agrícolas, propietarios y no propietarios, especialmente jornaleros y trabajadores eventuales.

8. Corporativización del campo y mayor represión frente a la respuesta del campesinado a la vía agraria terrateniente de nuevo tipo.

Estos rasgos son algunos del conjunto de fenómenos que le dan fisonomía a la crisis básicamente agraria. El agro no produce siquiera para generar suficientes divisas que impulsen la industria, lo que hace que repercuta violentamente en toda la economía en forma de desabastecimiento de productos agrícolas, y presentándose como un factor más que generaliza la crisis al resto del país.

1. El Estado se transforma en terrateniente de

nuevo tipo y no desaparecen los terratenientes como clase.

2. Conserva el latifundio del nuevo y viejo tipo, con las relaciones feudales y de transición que trae en su interior.

3. El campesinado parcelario mantiene y sigue las tendencias de desarrollo de las viejas relaciones patriarcales y sus contradicciones.

4. Amplía limitadamente el mercado interno y, por tanto, su base, la división social del trabajo.

5. La diferenciación es lenta y no llega a desintegrar a la población campesina.

6. Las categorías económicas predominantes son de transición: renta semifeudal, semiproletariado, débil desarrollo de los mercados, trabajo a jornal, etc.

7. Intensificación de la crisis de la economía señorial, obligando a que la oligarquía prosiga su diversificación.

8. Persistencia de la vieja división del trabajo dentro de las empresas, reproduciéndose viejas formas de dominación y explotación señorial.

9. Sólo beneficia a una parte de la población rural desatando el potencial revolucionario de la comunidad campesina y el campesinado pobre en general.

10. Es una vía gran burguesa vertical, represiva, corporativa y burocrática que desarrolla a los terratenientes de nuevo tipo (el estado y los socios de las

empresas) y profundiza las relaciones neocoloniales.

11. El sector agrario prosigue en la división imperialista de la producción donde gran parte de ésta es para la exportación o favorece a la gran burguesía industrial y a las transnacionales. La política agraria se funda en el capital financiero imperialista.

12. El capital usurero y comercial continúa predominando en el campo.

13. Se vive un proceso permanente de descapitalización y salida de la riqueza acumulada.

14. Como resultado de todo lo anterior, hay una disminución de la producción y productividad.

15. No hay un incremento sustancial del excedente comercializable, ni destruye la industria doméstica, sin embargo se aprecia un débil desarrollo artesanal.

16. La proletarianización es poco acentuada, así como el desarrollo de la burguesía agraria.

Por otro lado, la lógica del capital financiero y de los monopolios lleva a las empresas agrarias a emplear mano de obra barata con lo que se acentúa la salida de capital del campo a la ciudad y la industria a través del capital comercial.

La política colonial está orientada a favorecer la inversión en materias primas baratas, con el objetivo final de conseguir sobreganancias en la industrialización.

En última instancia es un factor "regresivo", no desarrolla coherentemente la acumulación interna ni las fuerzas productivas.

Si por un lado el capitalismo central extrae excedentes y transfiere su exceso de liquidez a otros países, por el otro las monedas subsidiarias del dólar sufren la depreciación que se agrega a las pérdidas de valor que aquellas tienen periódicamente con respecto a dicha moneda, deteriorando el poder adquisitivo de los salarios en los mercados internos.

La política del Estado permite la penetración imperialista y su extensión en el Perú con mayor fluidez. En esta estrategia el mercado interno no es el eje central de la expansión capitalista. El Banco Mundial facilita y promueve el apoyo a los grandes monopolios en producción primaria. Mientras, el FMI es la gran autoridad internacional que uniforma las políticas económicas e internas en general, en función de los requerimientos neocoloniales.

Innegablemente, la parte más importante de la economía en cuanto al valor está en los sectores donde las relaciones mercantiles y/o capitalistas son más densas. Y ellas están bajo el control del imperialismo. Al respecto veamos algunos datos. La plusvalía o ganancia apropiada por las empresas capitalistas creció de 38 mil millones de soles en 1968 a más de 76 mil millones en 1973: un

incremento del 100%. Sin embargo, de la masa de plusvalía o ganancia producida anualmente sólo un 15 o 16% se revirtió al Estado por concepto de impuestos a las utilidades (de 6,509 millones en 1968 a 12 560 millones de soles en 1973). Lo que significa que más del 80% de la plusvalía o ganancia generada se la apropió la clase capitalista.

El mercado interno, compuesto por aproximadamente el 10% de las familias peruanas (algo más de 400 000 familias) con el 44% del ingreso total, es la condición de existencia de la industria y por tanto de la capacidad de compra. El moderno aparato productivo industrial con el uso del 50% menos de su capacidad instalada copa la demanda de bienes y servicios. Las 750 grandes empresas monopolizadas por el imperialismo representan a dos terceras partes de la producción nacional y alrededor del 60% del capital.

Son el capital industrial, el comercial y el invertido en servicios los que controlan y utilizan el 50% de las divisas. En estas circunstancias, entre 1970 y 1976 crecen sus ganancias en más de 20 000 millones de soles, las importaciones en un 50% y el producto bruto interno en un 5%. Al aumentar las exportaciones de materias primas, crece la concentración de capital por el Estado, contraponiéndose al capital privado. Faltan divisas y se inicia la espiral del endeudamiento.

Por otra parte, el fuerte aumento de las importaciones y la carga de los subsidios sobre rentas

fiscales ilustran la traba que el estancamiento agrícola representa para el desarrollo del país. La falta de alimentos y su consecuente encarecimiento en las ciudades exigen al Estado recurrir a la importación de aquéllos.

El incremento considerable del volumen de productos alimenticios importados y su alza de valor respectivo en los mercados internacionales elevaron las importaciones de alimentos de 149 millones de dólares en 1972 a 177 millones de dólares en 1973. Hasta hoy es imposible frenar tal tendencia.

No sólo no se han podido mantener constantes los volúmenes de los alimentos importados con el fin de no ejercer presión sobre la disponibilidad de divisas necesarias para la realización de los planes industriales y mineros, sino que el alza de los precios internacionales ha implicado el rápido aumento de los subsidios que el gobierno otorga a la importación de alimentos para impedir las presiones inflacionarias.

El estancamiento de la producción y la regulación de los precios agrícolas ha significado el deterioro del nivel de vida de los campesinos agravando el problema del subempleo y el desempleo en el agro (que ya en 1971 afectaba el 63.9% de la población agrícola económicamente activa).

Para mayores males, factores aleatorios como las lluvias torrenciales, aluviones, inundaciones y heladas, afectaron regularmente la producción agraria. El

imperialismo consiguió sobreganancias a través del control de los circuitos de comercialización, tanto directamente de esta actividad económica como porque de este modo se aseguraba el suministro de algunos productos básicos. (por ejemplo la industria del azúcar: el azúcar peruana es distribuido por nueve empresas imperialistas, y una sola de ellas comercializa el 44% del volumen total que el país vende en el mercado mundial.)

Para una mayor fluidez de ambos sectores (agro e industrial), es necesario adecuar parte del aparato productivo manufacturero a las necesidades del campo y a la inversa: el tipo de producción agrícola a las necesidades del consumo interno. Al no ser así se ampliaron ineluctablemente los lazos de ambos sectores por separado con el mercado exterior, dadas las condiciones de producción en los países imperialistas.

La ampliación del mercado interno agrario tiene que ver básicamente con dos canales:

1) aumento del consumo del sector agrícola; 2) aumento de la producción de insumos para la industria alimenticia. Una parte sustancial del consumo proviene del mercado exterior importando insumos y bienes de capital.

Entre 1968 y 1973 el crecimiento total de las importaciones fue de 61% con la tasa acumulativa anual de 10%, y en el rubro de bienes de capital la importación con destino agrícola creció en 130%. No obstante el aumento de

la potencialidad de consumo no está directamente ligada al desarrollo de la capacidad adquisitiva de salarios y sueldos existentes en el sector rural.

Y además la casi totalidad del crédito para ejecutar la Reforma Agraria y financiar las empresas creadas por ella provienen de fuentes externas, otorgándole un carácter artificial al mercado interno.

Los créditos destinados por la banca comercial al sector agropecuario aumentan sólo el 3% durante el periodo 1968-1973, mientras las correspondientes al conjunto de los sectores tuvieron un incremento de 18.8% anual. En resumen, la banca privada ha reducido sustancialmente los créditos al sector agropecuario. Los grandes beneficiados de este crédito son la industria manufacturera que de 32% (1968) paso a 39.3% (1973), y la industria de construcción que de 8.5% aumentó a 12.3%.

Una consecuencia la crisis agraria permanente con su violenta secuela: las migraciones, que en los últimos años ha creado cinturones de barriadas en todas las ciudades importantes y especialmente en Lima. Sólo en la década de los sesenta llegaron a ocho ciudades importantes más de 350,000 personas procedentes del campo. La Reforma Agraria no disminuyó la masa migrantes, que por el contrario la aumentó.

c. CRISIS EN LA BALANZA DE PAGOS

El saldo de la balanza comercial fue favorable desde 1968 hasta 1973 y deficitario en 426 millones de dólares en 1974, arrojando saldos aún más desfavorables en 1975 y 1976, con lo que creaba una tendencia duradera (119).

Naturalmente que los efectos de este déficit dependen de la utilización y orientación de los bienes importados así como del desarrollo de las exportaciones necesarias para financiar las mayores importaciones. En el Perú, las mayores importaciones están orientadas a la defensa, al desarrollo del aparato productivo del sector industrial, a la ampliación de la capacidad instalada para la producción exportable y a la complementación de alimentos.

Por otra parte, si bien las importaciones aumentaron un 94% en 1974, llegando a 1 990 millones de dólares, y las exportaciones llegaron a sólo 1 550 millones, tanto el déficit de 449 millones en la balanza comercial como 458 millones de dólares en la balanza de servicios, han sido financiados con créditos a largo y mediano plazo.

No obstante ser un factor negativo en las cuentas externas, los pagos netos subieron en 1973-1974 por la duplicación de los pagos por interés de la deuda pública externa. Esto debió al gran aumento en desembolsos de préstamos extranjeros en 1972-1973 (gran parte fue de bancos comerciales a tasas de interés variable) y la fuerte subida

de las tasas de interés por préstamos comerciales.

Esta balanza muestra déficits rápidamente crecientes, principalmente por cuenta de los elevados pagos de intereses sobre la deuda acumulada durante 1973-1976.

La incidencia de la balanza de servicios en la balanza de pagos en cuenta corriente muestra, a partir de 1971, saldos negativos a pesar de que las transferencias se muestran positivas. Dentro de los componentes de la balanza de servicios, el de mayor importancia es el rubro de renta de inversiones, el cual nos muestra los intereses percibidos por las inversiones financieras y por la cartera de los capitales extranjeros. Así, también se registran en este rubro los intereses de la deuda pública como las utilidades cobradas efectivamente por las inversiones directas de las corporaciones transnacionales. De los saldos de balanza de servicios, la renta de inversiones representa una alta proporción. Tenemos, por ejemplo, que en 1970 ésta representaba el 64.2%, en 1972 el 59.2%, en 1976 el 71.9% y en 1977 el 80.6%.

La evolución de ese saldo negativo de la balanza de servicios está representado como sigue: 231.4 millones de dólares en 1970, 203.8 millones en 1972, 509 millones en 1976, y 541 millones en 1977, de lo cual concluimos que los intereses y las utilidades del capital extranjero invertido en el país son un importante factor negativo que ha contribuido al desencadenamiento y a la persistencia del

desequilibrio adverso en el sector externo.

Por el lado de las inversiones directas privadas en el Perú, tenemos que E.U. es siempre el país que muestra mayor participación. Dentro de las inversiones totales directas, participa con un 74.5% en 1973. Además, el stock de capitales de las empresas transnacionales de origen norteamericano en el Perú muestra como tendencia general sin crecimiento.

Las inversiones de estas empresas han ido aumentando desde 651 millones de dólares en 1966 hasta 1 367 millones de dólares en 1976 con su más alto incremento en 1975 respecto a 1974 (35.7%). Es decir, de 1967 a 1976 las inversiones directas de empresas norteamericanas habían incrementado su stock de capitales en un 92%.

Por otro lado, también se debe indicar que dichos capitales muestran bastante concentración: dentro de las inversiones totales la minería y el petróleo representan el 80% para 1976. Mientras, la industria representa el 12% para ese mismo año. Cabe mencionar que esas mismas empresas en América Latina sólo destinan a la explotación de petróleo el 19% del total. Consiguientemente, el capital imperialista se volcó en Perú al reforzamiento de las actividades productivas dedicadas a las exportaciones de carácter primario, con lo que se obtuvo el doble efecto negativo de acrecentar nuestra dependencia del exterior y acentuar la naturaleza primaria de las exportaciones peruanas, eje de la

estrategia económica neocolonial. Además, la rentas que perciben las empresas extranjeras y exportan como divisas en efectivo superan en valor a la entrada real de inversión directa externa.

Esto puede apreciarse de 1968 a 1973. Si en 1974 y 1975 los flujos de inversión directa extranjera superaron a la renta de inversiones privadas, se debió principalmente a que los primeros años presentaban altos incrementos. En general, y tomando los años de 1968 a 1975, los flujos de inversión directa alcanzaron 425.5 millones de dólares y la renta de inversiones privadas alcanzó la cifra de 745.2 millones de dólares, resultando un flujo total negativo para este periodo de 319.9 millones, lo cual tuvo obviamente incidencia en la balanza de pagos.

Ahora veamos el otro componente de la balanza de servicios: los capitales a largo plazo, o sea los préstamos oficiales del exterior. En el contexto internacional, para los países de capitalismo avanzado las entidades financieras y los grandes bancos privados, la deuda externa y su reembolso es algo que atañe exclusivamente a la economía de los países neocoloniales, evitando alterar el equilibrio financiero mundial.

La reducción del déficit en cuenta corriente y del gasto gubernamental disminuyeron el ritmo de crecimiento de la economía por la contracción de las importaciones y de la inversión pública. Esta última muchas veces sólo

sustituyó a una renuente inversión privada que no siempre contribuye en la medida de sus posibilidades al crecimiento económico, gracias estrechos objetivos de sobreganancias o a consideraciones de riesgo que son también una consecuencia del neocolonialismo.

El sector externo mostraba un déficit en cuenta corriente que hizo creciente desde 1971. Tal desequilibrio se cubrió con créditos contraídos con la banca internacional y el endeudamiento público externo se acrecentó en forma verdaderamente espectacular. Mientras en 1968 fue de 737.4 millones de dólares, en 1970 alcanzó los 945.4 millones de dólares, luego al final de 1977 llegó a 8.273.6 millones de dólares, descomponiéndose como sigue: largo plazo: 6 139,7 millones, de los cuales al sector público le correspondieron 4 813 millones y al sector privado 1 235; a corto plazo: 2.133 millones, que comprendía créditos de importaciones, de exportaciones, financieros y sistema bancario.

La relación de la deuda pública externa con el PBI: para 1968 el coeficiente fue de 15.4%, para 1973 de 16.3%, para 1975 de 22.5%, para 1976 de 25.9% y para 1977 de 30.3%

El servicio de la deuda externa también se ha ido incrementando: en 1968 fue de 140,4 millones de dólares mientras que en 1975 fue por 494,2 millones. Y en 1977 alcanzó y a 617,8 millones de dólares.

Finalmente, en la Balanza de Capitales 1966-1974

se puede apreciar que por inversión directa norteamericana y flujo neto de entradas por endeudamiento público externo ingresaron 1.638.4 millones de dólares. Pero las salidas de capitales por ganancias, regalías, interés y amortizaciones fueron por 2.722,6 millones de dólares más que los que entraron.

Ahora bien, tomando como base el coeficiente "servicio de la deuda externa-exportaciones" tenemos que mientras en 1970 la suma alcanzaba 16.2% iba en aumento, en 1973 era ya de 38.9%, en 1975 de 36.7%, en 1977 de 35.8% y para 1979 superaba el 70%. Con una proporción tan alta, ningún país puede atender los servicios de su deuda sin buscar desesperadamente nuevos préstamos. Esta es la crisis de la balanza de pagos.

2. SEGUNDO PERIODO 1980-1985.

ESTABILIZACION AJUSTE Y NEOLIBERALISMO: PRODUCTOS DEL DESARROLLISMO.

La estrategia "desarrollista" se vincula a un régimen de acumulación industrializante que en los sesenta -incluso hasta mediados de los setenta- se transnacionaliza cada vez más, llegando a un punto en que las estructuras productivas son internamente desarticuladas con patrones tecnológicos dependientes, desequilibrios en el sector externo y estructuras distributivas y de consumo no equitativas y polarizadas.

Fracasado el reformismo corporativo (1968-1975), la transnacionalización del capital impone nuevas orientaciones buscando eliminar los desequilibrios heredados.

Desde 1976 la economía peruana se abre a las fuerzas de la economía mundial en pos de la especialización y la mayor competitividad. Empero, este tipo de política económica fue incapaz de eliminar los desequilibrios macroeconómicos y estructurales provocados por el desarrollismo corporativo; más bien se agudizaron mostrando continuidad en sus efectos sobre las relaciones sociales. La vinculación de sectores políticos surge de su específica relación con la dinámica del capital.

En la década del sesenta, el Estado semicolonial y la burguesía intermediaria impulsaron la inversión extranjera con el objeto de dinamizar la valoración del capital transnacionalizando la industria e incorporando capital productivo obsoleto y ramas productoras de bienes de consumo durable favorecido por una reconcentración del ingreso.

El deterioro agrario como sector generador de divisas, la necesidad de importar bienes de capital e insumos, los requerimientos de financiamiento del déficit público, la creciente repatriación de ganancias por las transnacionales, así como agudos desequilibrios de la balanza de pagos, desarrollaron la tendencia al endeudamiento. De

este modo el desarrollismo agudizó problemas y tendencias que pretendió resolver: la contradicción entre los nuevos requerimientos de importación de las nuevas empresas manufactureras y la disminución de la capacidad exportadora.

Entre la remesa de beneficios cada vez mayores y la creciente demanda suntuaria, y entre la ineficiente estructura tributaria y las necesidades estatales, se constituyeron los límites a la solución de los desequilibrios externos.

Finalmente, el carácter excluyente de los patrones distributivos y de consumo, la desintegración de la economía y la heterogeneidad productiva apuntaron a desequilibrios internos entre clases, entre sectores y ramas, así como a la marginación de vastos sectores de la población que ante la difícil generación de empleos crean nuevas estrategias de sobrevivencia y de lucha.

El mayor control de los procesos productivos y las estructuras del mercado por el capital extranjero, la compensación de desequilibrios externos y la cobertura de déficit público aceleraron el endeudamiento que se conformó en el principal límite a un crecimiento con dinámica propia.

El neoliberalismo apareció como estrategia salvadora, en la que se combinó una prescripción normativa inherente al libre mercado con el neoconservadurismo (que preserva las desigualdades de clase) y el monetarismo ortodoxo se presentaron como mecanismo privilegiados para

corregir desequilibrios. Sin embargo la reorientación del aparato productivo y de los circuitos comerciales y financieros sólo benefició al capital transnacional y a los capitales nativos asociados a éste en detrimento de la estructuración interna y la pérdida de su capacidad de crecimiento profundizando las limitaciones del desarrollismo. Las consecuencias fueron coincidentes y aparecieron nuevos desequilibrios y rigideces como obstáculos suplementarios.

Las políticas de ajuste fueron una expresión de la no viabilidad de la política económica precedente: el desarrollismo. La recesión económica, presiones inflacionarias, desequilibrio en la balanza de pagos, creciente endeudamiento y dificultades en su refinanciamiento eran algunas expresiones de los límites a aquellas estrategias de desarrollo, puestas en evidencia por la crisis.

En la década de 1975 a 1985 se dio la búsqueda de nuevos modos de la relación entre el Estado y la economía, así como una redefinición de las posibilidades de acumulación que legitimaran los sectores sociales derivados de la implementación de las políticas de ajuste.

Si entre 1975 y 1980 el gobierno militar de Morales Bermúdez enfatizó en la corrección de los desequilibrios internos a través de una política antiinflacionaria y de reducción del déficit fiscal,

paulatinamente se transformó en ortodoxia monetarista aplicando medidas que deprimieran la demanda interna agregada, adaptándola a la disponibilidad de recursos, reducción del déficit fiscal, modificación de precios relativos de bienes y factores productivos y restricción monetaria.

En el siguiente lustro (1980-1985), neoliberalismo y monetarismo coincidieron en la instrumentación de políticas correctoras de desequilibrios monetarios financieros estabilizando la capacidad financiera para enfrentar el endeudamiento y la crisis. Empero, asociados a cambios en la oferta: magnitudes menores de financiamiento, más duras condiciones y rearticulación de variables macroeconómicas que reactivarán el mercado.

Entre 1975 y 1980 se privilegió el equilibrio interno y la ambigüedad de la "política económica" parecía orientarse al corto plazo.

Entre 1980-1985 se va definiendo un proyecto estratégico al deprimir las finanzas públicas y los salarios, y al acentuar los efectos de la crisis sobre la producción y el consumo, que por un lado reimpulsó la recesión e inflación y por el otro favoreció el desarrollo del capital trasnacional.

Este tipo de diseño estratégico significó el aumento de los productos exportables, la disminución de los niveles de importación, la instalación de industrias de

exportación, el debilitamiento de ramas orientadas al mercado interno, la concentración del capital y mayor desarticulación intra e intersectorial.

En la esfera distributiva y del empleo se polarizaron las desigualdades sociales. A la caída de los salarios reales como producto de la liberación de precios, restricciones salariales y regresiva política fiscal se suma el desempleo y subempleo derivados de las tendencias recesivas y la contracción del gasto público. De este modo la contracción del mercado interno y la suspensión de estímulos a la producción agudizan la crisis agrícola, disminuyendo con ello drásticamente los niveles de ingresos y consumo en el medio rural, así como las migraciones, la "marginalidad", la terciarización y el desarrollo del sector informal.

Todo esto llevó a un "colapso" del proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, al desarrollo de conflictos sociales y a su polarización.

La política de ajuste fue una consecuencia del fracaso de la política de estabilización que tuvo sus inicios en 1974 en los últimos meses del régimen de Velasco Alvarado, adquiriendo durante su desarrollo -en 1977- rasgos recesivos cuya profundidad es sólo comparable con el

periodo postconflicto del Pacífico hace un siglo. Sus primeras manifestaciones fueron el deterioro del aparato productivo y fuertes desajustes financieros. El ahorro interno no sufragaba la creciente inversión bruta fija, a la vez que el déficit del gobierno central aumenta peligrosamente la deuda pública.

Estas manifestaciones no deben permitir que olvidemos los orígenes de la crisis, que se encuentran en el carácter rigidamente limitado y contradictorio de la reproducción del capital, fundado en la desigual penetración del capital -principalmente extranjero- en la economía y sus consecuencias en la productividad y el ingreso, como en la imposibilidad de mantener una capacidad de gasto superior a los ingresos logrados con las exportaciones. Sin embargo la incapacidad del aparato productivo para satisfacer las necesidades de la población -fuente de subversión y violencia cotidiana- se encontraría en la política económica del gobierno de Velasco Alvarado.

En este periodo el aparato estatal condujo la acumulación sin los recursos necesarios para impulsarla al no controlar las ganancias del sector privado (que en manos de capital principalmente norteamericano concentra la propiedad en el sector más moderno de la economía, controla el excedente y evita desarrollar la industria de bienes de capital, dejando en su estrechez al mercado

interno).

El sector privado fue reducido por el nivel de ingresos de las masas, por el estancamiento agrario, la actividad informal principalmente autosubsistente y por la ausencia de formación de capital. El movimiento del capital monopólico dinamizó únicamente los sectores que le interesaban, estancándose el resto de la economía que se agravaría por su crecimiento desbalanceado, la ausencia de divisas y de liquidez interna.

Estos fenómenos son significativos para el desarrollo de la violencia, ya que la recesión acelera el desempleo y subempleo al ritmo de la subutilización de la capacidad productiva. El estancamiento agrario va acompañado de una masiva migración a las urbes, casi duplicándose las actividades marginales que entre 1968 y 1978 pasaron del 28% al 36% de la fuerza laboral urbana.

Al aumentar la inversión pública también lo hacen -como vimos- los problemas financieros, por no corresponderle mayores ingresos fiscales. Consecuentemente se recurrió al endeudamiento. Al mismo tiempo la inversión privada (5% entre 1970-1974) era menor que el crecimiento del PBI (6%) al estimularse la fuga de capitales. En 1974 la balanza comercial tenía un déficit de 400 millones de dólares y en 1975 las reservas internacionales eran negativas en 577 millones.

La desconfianza en las empresas públicas -la mayoría descapitalizadas- y la evasión fiscal, más el congelamiento de los precios de los productos básicos, crearon una difícil situación que se agravó por la caída de los precios de exportación, la disminución de la producción de petróleo y cobre (que no fue la esperada) y por la inflación.

Todo ello se expresa en la disminución de los salarios, en el menor ingreso nacional y el aumento de las utilidades a pesar de la pobre rentabilidad del capital, afectada por las restricciones crediticias.

Inclusive la rentabilidad bancaria cayó en 1976 un 3% respecto al año anterior.

Los intentos de estabilización iniciados en 1975 se mostraban ineficaces y en 1977 la inflación creció hasta el 40%, al mismo ritmo en que los salarios caían desde 1973. El subempleo se encontraba más allá del 50%, junto a la recesión de la producción industrial.

A pesar de este panorama desolador se incrementaba el gasto público, que llegó a representar el 7.5% del producto. El crecimiento del crédito público, la contracción de la liquidez y el mayor endeudamiento eran una constante.

Por la presión de las masas se produjo una huelga general después de 20 años. A fines de 1977 las reservas estaban agotadas y la balanza de pagos era desfavorable.

La devaluación y la inflación afectaron gravemente el sistema financiero, y en 1978 el país estaba frente al cese de pagos que mostraban el fracaso de la política de estabilización aconsejada por el FMI. La coyuntura pretendía ajustar la balanza de pagos restringiendo las importaciones cuyo mayor componente eran los insumos industriales, acelerando la inflación pero sin afectar el déficit fiscal.

Con el ministro de Economía Silva Ruete se inicia un nuevo plan de estabilización en mayo de 1978 que logra -por la favorable evolución de las exportaciones- mejorar la situación fiscal y la balanza de pagos, pero no frenar la inflación. Otros factores de la recuperación fueron la congelación de sueldos y salarios y la represión.

Quienes se beneficiaron en aquel breve interludio fueron la gran burguesía financiera -nativa y extranjera- y la exportadora, fracción de la burocrática. Entre los primeros se encuentran los banqueros y financistas, y entre los últimos los exportadores mineros y "no tradicionales" (que duplicaron sus capitales), y los comerciantes, en muchos casos vinculados al narcotráfico.

Estos sectores sociales vivieron su mejor momento de la década concentrando capital a expensas de los pequeños empresarios-mineros e industriales, y especulando.

Podemos apreciar que la política de estabilización contribuyó a profundizar la crisis y

posibilitar una creciente inestabilidad política. Y es que una crisis estructural y profunda no puede ser atacada simplemente con instrumentos cortoplacistas o neoliberales.

La liberación del mercado, la desactivación de la economía estatal, la apertura del comercio exterior, la excesiva confianza en la empresa privada y en la inversión extranjera, el apoyo irrestricto a la economía exportadora para reactivar la economía son todas ellas medidas que se inician en 1976 y se acentúan en 1980. No hacen sino crear nuevos problemas y mostrar en toda su desnudez una economía llena de contradicciones y limitaciones para desarrollar el capitalismo.

Esta política sólo provocó un fuerte proceso redistributivo del ingreso en determinados sectores de la gran burguesía o en favor de las transnacionales. La política era de desestatización, desnacionalización, descapitalización y empobrecimiento del país. Los más afectados serían obviamente los que tuvieran ingresos menos constantes y con mayor riesgo: los subempleados de la economía informal y el campesinado pobre, quienes volvieron a formas de autosubsistencia.

La miseria, la desnutrición, la mortalidad infantil, la vejez prematura, la prostitución infantil y la delincuencia, -formas de violencia social- se hicieron parte constitutiva de la vida cotidiana, fácilmente transformable en violencia política.

Las políticas de estabilización estaban imposibilitadas de resolver los desequilibrios económicos y financieros, cuyo origen se encuentra en la subordinación cada vez mayor de la economía a los ciclos de la economía de los países imperialistas. Provocan distorsiones sectoriales, desintegración regional, inadecuada asignación de recursos, concentración del ingreso y un reducido mercado interno. Tales problemas necesariamente implican el cambio radical de la economía del país y que el APRA o IU -juntos o separados- difícilmente podrán superar.

Las devaluaciones no pudieron estimular las exportaciones debido al proteccionismo y a la inestabilidad de los productos primarios en el tipo de cambio. Esta en julio de 1980 era de 292 soles por dólar y en diciembre de 1983 subió a 2.235 soles, con una tasa de devaluación entre diciembre de 1982 y diciembre de 1983 del 135%. La devaluación logró encarecer las importaciones y acelerar la inflación, que de 60.8% en 1980 pasó al 130% en 1983.

Tampoco se generaron o liberaron divisas para estimular el crecimiento económico. La exportación de materias primas como fundamento para salir de la crisis no aumentó como se esperaba y el déficit de la balanza en cuenta corriente mostró, por el contrario, la caída de las cotizaciones de esos productos.

Esta situación, aunada a la elevación de la tasa de interés y al crecimiento de los servicios de la deuda,

aceleraron la recesión. El decrecimiento del PBI llegó a -12% (con exportaciones menores en 3 000 millones de dólares al estimado de 5 204 millones). Las exportaciones no tradicionales también fueron desastrosas. Si en 1981 el déficit en cuenta corriente era de 1 654 millones, en 1983 fue de 1 102 millones provenientes de servicios financieros- que debían contrarrestarse con préstamos e inversiones directas, (los cuales por su insuficiencia condujeron a preocuparse más por refinanciar la deuda y a luchar por resolver la brecha de la balanza de pagos desplazando la lucha contra la inflación).

Con la contracción del gasto público sin afectar la debilidad fiscal, y en un marco de inestabilidad de las transacciones internacionales, no se pudieron superar los problemas presupuestales caracterizados por rígidos gastos de operación y abultada deuda.

Se estimuló de nuevo la recesión que, junto a la devaluación y el déficit fiscal, incentivó la inflación. La liberalización de la economía contribuyó a acelerar la inflación y al cierre de numerosas empresas.

En 1983 el déficit fiscal del gobierno central en relación al PBI fue del 9.8%. Ello muestra el desajuste contable del sector público y se explica por la reducción de ingresos con rígidos gastos que en sólo dos rubros -amortización e intereses de la deuda y las FF AA- superaron el 51% en el presupuesto proyectado para 1984.

Los cambios en la imposición tributaria a los bienes de servicios, exoneraciones tributarias, los menores gastos arancelarios y la renegociación de contratos petroleros, no sólo acentuaron la dependencia externa de los ingresos, sino que hicieron más irracionales los ingresos tributarios. Para 1984 el déficit fiscal fue del 8.9%.

El crédito para el sector privado en 1983 sufrió una reducción del 12.4% en relación al que se le destinó al sector público (-4.7%). Al mismo tiempo que se produjo una crisis en los sectores industrial, construcción y pesca, como consecuencia de la liberalización de importaciones, reducción de la demanda agregada y los aranceles. A estos factores se agregaron las sequías en el sur andino y las inundaciones en el norte, que explicarían el 5.5% del decrecimiento del PBI (-12%).

Las restricciones monetarias también tuvieron efectos negativos en los sectores básicos de la economía: la industria y la agricultura. Asimismo, la estructura oligopólica del primero y el incremento de la liquidez contribuyeron al aumento de precios.

Para Richard Webb, la decontrolada devaluación se debió a la pérdida de capitales a corto plazo, que provocó la pérdida de reservas.

Las exportaciones continuaron su tendencia a la baja y el pago por intereses y la compra de armamentos se elevaron ante el avance de la lucha armada. Las divisas se

hicieron insuficientes, mientras la banca extranjera se mostraba renuente a nuevos créditos. Las reservas se agotaron y los retrasos en el pago de intereses y a contratistas ya no pudieron quedar ocultos.

Las exigencias del FMI fueron cada vez más difíciles de cumplir: aumento de la devaluación, menores gastos de inversión pública y elevación de los precios de la gasolina. Al mismo tiempo, la recurrencia del tesoro al Banco Central de Reserva condujo a la emisión de dinero sin respaldo y, por tanto, a una hiperinflación. Esta crítica situación económica -que no pudo ser enfrentada con éxito por las distintas formulas de las corrientes de la economía burguesa- tendrán que superar el APRA e IU, que comparten el poder estatal desde julio de 1985. Y deberán hacerlo sin afectar las remuneraciones de los obreros que perdieron su capacidad de compra en sólo tres años (1980-1983) en un 23%, mientras el salario mínimo lo hacia en más del 54%. Tampoco deberá afectar los intereses de las amplias masas que vieron incrementarse el índice de precios al consumidor entre 1973 y 1983 de 100 a 11.346,3 más aún en timpos de violencia política.

III. LÍMITES DE LA POLÍTICA ECONÓMICA Y BLOQUEO DE LA ACUMULACION

Es pertinente partir del concepto de economía mundial que provoca una separación, que asigna leyes específicas a cada polo, aceptando que en la interacción e internalización existe determinación de las economías centrales hacia las periféricas.

En general, la política económica en Perú buscará adaptarse y sufrir las coacciones impuestas por la división internacional del trabajo y el sistema monetario internacional, o modificar ciertos resquicios en su beneficio. El juego de coacciones que determina la política económica se ejerce por la balanza de pagos. En efecto, esta separación entre "centro-periferie" significa la existencia de brechas entre ambas economías, en particular en el desarrollo de las fuerzas productivas en cada polo, lo cual plantea problemas de intercambios comerciales que dan lugar a un déficit permanente, estructural, en la cuenta corriente de los países periféricos.

Puesto que la balanza de pagos es la suma cero, el déficit será compensado con el excedente en cuenta de capital. Este es el rasgo más general de carácter estructural de la acumulación en la economía peruana. En el plano de lo concreto, la principal característica estructural de la economía peruana es la lógica subyacente de endeudamiento (120), y el determinante de esta lógica es

(120) Rafael Paniagua, Prolegómenos para una teoría de los límites financieros del Estado: Problema de la deuda y crisis financiera. UAM, México, 1985.

el carácter excluyente del régimen de acumulación, que da lugar a políticas económicas específicas traducidas en tres tipos de exclusión: 1) los gastos públicos privilegian la infraestructura industrial en detrimento de la agricultura; 2) En el sector industrial se favorece la industria de bienes de consumo durable y de materias primas elaboradas (insumos) con exclusión de la industria pesada; 3) el resultado es la concentración del ingreso en favor de sectores que pueden consumir aquellos bienes duraderos, motor de la acumulación.

Estas exclusiones significan que, para el capital, la masa salarial aparece fundamentalmente como un costo de producción y no como un elemento de la demanda efectiva que dinamice la acumulación, de lo cual resulta un tipo de política económica que podríamos denominar política keynesiana selectiva de apoyo al consumo de bienes durables. Por otro lado, estas exclusiones fundamentan la reproducción de la lógica subyacente de endeudamiento.

Hay una triseccionalización de la economía, donde existen ciertos elementos motores de la acumulación (121): las empresas nativas que producen bienes de consumo durables, las multinacionales que producen ciertos medios de producción y bienes de consumo durables, y el sector paraestatal que provee otros medios de producción y materias primas. Cada uno es portador de ciertas contradicciones que alimentan la lógica subyacente de endeudamiento.

(121) Ibidem.

En efecto, el predominio de la industria de bienes de consumo durable, sin un soporte industrial en insumos, creó una estructura de importaciones de bienes de capital inflexible a la baja, salvo provocar una recesión profunda, lo cual plantearía financiamiento externo de bienes de capital.

Desde el punto de vista de las firmas multinacionales, refuerzan la tendencia a la producción para el mercado interno dependiendo de insumos importados.

Si en los años cincuenta las multinacionales significaron entrada de divisas a través de la inversión extranjera directa, en los sesenta las firmas multinacionales serían elementos de salida neta de divisas a través de la sobrefacturación, subfacturación y la repatriación de dividendos.

Por último, la estructura de la política fiscal se tradujo en un aumento más que proporcional de egresos con respecto a los ingresos del Estado. Los egresos aumentaron porque debían apoyar la industrialización, mientras que los ingresos no lo pudieron hacer porque la masa salarial se restringió y los impuestos sobre los beneficios eran reinvertibles. Además estos beneficios no pudieron ser gravados ya que ello reduciría la demanda de bienes industriales que dinamizaran acumulación. Finalmente, la tercera fuente -el sector paraestatal- funcionaba realizando transferencias de valor al sector privado y no al

gobierno central a través de política de precios de bienes y servicios. En consecuencia, las tres fuentes posibles de ingresos del sector público estaban bloqueadas y la única posibilidad de financiar la brecha entre ingresos y egresos era el endeudamiento.

Los tres factores combinados caracterizan y aseguran la reproducción del endeudamiento, de lo cual resulta que la regulación macro -por endeudamiento- es un elemento fundamental, constitutivo y autoreproducible de la política económica peruana. En la formulación de esta política económica a través del endeudamiento, el análisis keynesiano jugó un papel importante contra la idea de que había que desarrollar primero el ahorro interno para financiar inversiones. Keynes propone un circuito original que parte de la inversión financiera con endeudamiento que origina mayor empleo, mayor ingreso, incremento del ahorro y donde la inversión crea su propio ahorro (122).

En esta perspectiva, el determinante principal de la política económica -en particular en el periodo "velasquista"- será la nueva liquidez acumulada para inversión, pero en la economía esta demanda de nueva liquidez se vio sobredeterminada por la coacción de la balanza de pagos que resultaba de la brecha en las fuerzas productivas, dando lugar a la implementación de políticas estabilizadoras.

(122) Ibid. p.124.

La economía -en particular el sector productivo- no pudo crecer más rápido de lo que le permitía la economía mundial o la economía hegemónica (léase E.U.) La economía peruana debió adoptar su ritmo de crecimiento al de la economía estadounidense.

Los grupos financieros e industrialmente dominantes empujaron a la instrumentación de políticas promotoras de crecimiento acelerado desde el punto de vista del crecimiento de grupos estratégicos que determinaron la existencia de políticas reactivadoras.

Los determinantes externos de la política económica en la economía son la economía externa empujando al bloqueo y el régimen de acumulación y legitimación empujando la reactivación.

La política económica resultaba determinada, más que en la economía política central, por el efecto que tenía la dinámica de la economía hegemónica sobre la división internacional del trabajo y sobre el sistema monetario internacional.

Con el desarrollo de la crisis, la política económica recibiría cada vez menos la influencia de determinantes internos y la contradicción entre políticas de bloqueo-reactivación se transformará y aparecerá, por un lado, brutalmente como la contradicción entre soberanía estatal, y, por el otro, como los límites a esta soberanía impuesta por la economía mundial. Aparece inmediatamente la

pérdida de legitimidad de la propia política económica, ya que lo que estaba en cuestión para salir de la crisis eran las alianzas de clases y las codificaciones internas de sus luchas.

Ahora bien, en la inserción en la economía mundial se produce el neocolonialismo como una política colonial de las potencias hegemónicas, surge del propio desarrollo industrial impulsado por el capitalismo en expansión y es aprovechado por el capital financiero: es una política que corresponde al desmoronamiento del sistema colonial que se va desintegrando por las luchas de liberación nacional de los pueblos y que consiste en nuevas y más sofisticadas formas de dominación. Es un fenómeno integral paralelo a la mayor articulación de la economía, a la división internacional del trabajo a la internacionalización del capital y al sistema monetario internacional. Además es implementado por los regímenes políticos comprometidos con la política hegemónica, asumiendo un papel en la defensa y aplicación de los objetivos, planes y medidas neocoloniales. Es, finalmente, la orientación estratégica principal de la política hegemónica cuando las grandes potencias se coluden y se enfrentan por consolidar y acrecentar sus dominios territoriales, económicos y militares entrando en contradicciones por el reparto del beneficio.

Con el afán de detener el avance revolucionario

de la lucha de los pueblos o desviarlos de su camino hacia la destrucción del Estado, la política neocolonial fomentó e impulsó la intelectualidad pequeño-burguesa para que difundiera entre las masas teorías seudonacionalistas, socialdemócratas, desarrollistas, y alentaran el reformismo para atenuar los conflictos sociales y garantizar la "paz social" mediante concertaciones entre clases. Con el mismo fin remozó al Estado, reformando la administración pública, garantizando la organización corporativa y regimentada de las masas.

El imperialismo preparó y promovió a sus cuadros y agentes que le servirían en los puestos claves del aparato estatal y el régimen político, especialmente altos funcionarios gubernamentales, técnicos de alto nivel y altos mandos de las Fuerzas Armadas, que son cuidadosamente formados no sólo en el terreno militar y sobre sofisticadas armas y técnicas contrainsurgentes, sino en los aspectos ideológicos, políticos, teóricos y sociales para conducir los objetivos estadounidenses.

Tecnócratas, burócratas, Fuerzas Armadas y representantes de las clases dominantes en el control estatal al margen o no de su voluntad, pusieron en práctica las necesarias reformas para una mejor reproducción del capital que generalmente representaba una mayor y mejor penetración y consolidación del capital trasnacional.

Legitimación y acumulación van

contradictoriamente juntas adecuando la estructura económica y social -como las organizaciones sociales y políticas- a los requerimientos del capitalismo mundial.

El neocolonialismo es una relación social y una manifestación política que expresa la relación entre el Estado y la gran burguesía hegemónica sobre la base de los regímenes semicoloniales y las clases que lo sustentan.

El capital financiero es la palanca con la que el Estado hegemónico aspira a conservar el control sobre países, pueblos y naciones, imponiendo como impulso de las leyes objetivas un régimen económico que se constituya en base de sus planes estratégicos y que crezca vinculado a relaciones precapitalistas, conservándolas, modificándolas o destruyéndolas, si con ello la reproducción del capital es coherente.

La introducción de elementos capitalistas -en particular con la inversión directa extranjera y el estímulo a la inversión privada-, muchas veces chocaba con la fortaleza de las viejas relaciones, que en lo fundamental frenaban el desarrollo capitalista.

Los países sometidos a estas formas de dominio conservaban su especialización dentro de la división internacional de la producción, fuente de materias primas, mano de obra barata, mercados de bienes y de dinero, esferas de inversión de capitales y -más recientemente- de exportación neta de los mismos.

La parte más sustantiva de la producción minera, pesquera o forestal, se destina a la exportación así como las tierras más rentables son destinadas al cultivo de productos exportables. Con la crisis se acrecienta tal tendencia.

Desde la década del cincuenta se constata la producción de mercancías semielaboradas, la penetración de las multinacionales con la correspondiente tendencia a la centralización y concentración del capital, la diversificación paulatina de la inversión e incremento de los mecanismos de control vía "cooperación financiera" Esto es una expresión de que la economía imperialista mundial en expansión cohesionada al mundo en un complejo de producción e intercambio.

El Estado va convirtiéndose en inversionista en infraestructura, servicios productivos, actividades productivas de exportación, a la vez que fomenta una industria de bienes de consumo (marginal y por ello limitada en perspectivas). Aún para producir bienes de consumo e intermedios se debe comprar bienes de capital, insumos y materias primas, incluso bienes de consumo no producidos internamente.

Todos los sectores y parte de la canasta de bienes de la fuerza de trabajo se reproducen con mercancías crecientemente importadas a precios fuera del control interno, en la lógica de vender para comprar y poder

producir. En esta actividad juegan un papel importante las firmas multinacionales lo producido -materia prima y productos semielaborados- es vendido para conseguir divisas.

Dos hechos que debemos destacar son los siguientes: 1) la inversión directa extranjera y su contraparte, la salida de capitales por remisión de utilidades (royalties, patentes, etc.); 2) el endeudamiento externo y su contrapartida, las amortizaciones, servicios e intereses de la deuda.

Desde la década de los setenta se hizo ostensible una disminución de la inversión directa extranjera y su paulatino reemplazo por el capital de préstamo, que se constituye en un elemento inherente a la dinámica de crecimiento, y se explica por los cambios en la dinámica de la acumulación y del capital financiero a nivel mundial que internalizan su lógica en el proceso de industrialización.

Además, la existencia de la gran propiedad terrateniente en manos de unas cuantas familias frenaba la ampliación del mercado interno que a su vez determinaba la ausencia de mano de obra calificada. Frente a una situación así, al capital extranjero le interesaba conseguir mejores condiciones para la explotación de las materias primas y la mayor explotación de la fuerza de trabajo usando insumos internos e importados a través del desarrollo de la industria ligera y de bienes de consumo, para lo cual

empleaba toda la potencia del Estado que a través de reformas económicas conserva y amplía los canales de penetración del capital privado monopolista.

Se aseguraba así el control más eficaz del conjunto de la economía y en particular de los sectores estratégicos. Se formaron firmas y compañías mixtas con participación del capital nativo estatal y/o privado, asociando el capital extranjero a empresas nuevas o ya existentes.

El crecimiento de la importación de capitales bajo la forma de créditos tuvo su correlato en la supeditación de la política económica a los intereses hegemónicos del capital, al mismo tiempo que el control del mercado financiero permitía a los países centrales solucionar su crisis de sobreproducción monetaria, que se sumaba al mercado de otras mercancías.

A la exportación de capitales de los países centrales se agregaron los programas de ayuda, que condujeron a intensificar los vínculos económicos y comerciales entre países, sosteniendo y consolidando las formas de relación y la orientación del mercado tradicional, el apego a determinados proveedores de instalaciones y consumidores de materias primas. Los préstamos se hicieron con base en convenios que garantizaban la sujeción de la economía al imperialismo, asegurando mercados para la adquisición de los bienes producidos, en muchos casos

cíclicamente, e importando inflación. Todo esto refrendado por programas de desarrollo, pactos militares y organismos multinacionales.

El capital financiero promovió la gran empresa subsidiaria que transformaba internamente las materias primas y rebajaba el costo mediante la utilización de mano de obra barata, asegurando así la permanente obtención de tecnología extranjera.

Los convenios, programas, pactos y la gran empresa subsidiaria, exigieron que se crearan y organizaran, para su ejecución o inversión, instituciones como las "corporaciones" y "comités de desarrollo", la creación o modificación de organismos administrativos estatales, cambios en la legislación, regionalización administrativa, protección militar, etc.

El capital financiero, por otra parte, afianzó y fortaleció a las clases dominantes convirtiéndolas en un apéndice suyo como mediación del imperialismo. Además la economía interna puso a disposición de la empresa multinacional el ahorro interno reduciendo el monto de la inversión directa y garantizando su existencia

La burguesía estadounidense estaba tan interesada en aumentar las exportaciones y abaratar las importaciones, así como en las exportaciones de capital y mercancías.

La tendencia de los países centrales era hacia una sobreproducción de capital, y su solución estaba en la

movilización de la fuerza de trabajo y la creación de nuevo valor fuera del país, sustituyendo la producción que antes se importaba y promoviendo las exportaciones "no tradicionales".

El capital extranjero se reprodujo en una escala mayor. Se creó más valor que la remisión de utilidades y éste sirvió para las reinversiones cuando existían condiciones favorables.

El significado de la remisión de utilidades respecto al fondo de divisas fue que pudo realizarse en capital fijo importado para proseguir sustituyendo importaciones y exportar utilidades en especie.

Las medidas de política económica a fines de los sesenta impusieron límites a la salida de capital, condicionando la inversión extranjera al consumo de mayor producción local. De esta manera la escasez del fondo de divisas se resolvió por la mayor asociación al capital extranjero. Hoy la exportación de capitales privados y públicos es el fundamento de la política colonial y la base material de una alianza, que se resquebraja, entre la gran burguesía financiera y sectores de la gran burguesía nativa.

El incremento del capital variable y constante significó oferta y demanda para nuevos burgueses y encadenamientos de una producción cada vez más compleja. Asimismo, el progresivo aumento del fondo de divisas disponibles garantizó las condiciones de realización del

capital fijo, importado por la gran burguesía y las multinacionales.

En etapas de prosperidad, la disponibilidad de divisas aumentará con el flujo de capitales, beneficiando a la gran burguesía. En el caso contrario -que va acompañado de una contracción del valor exportado- sigue una recesión que hace caer la tasa de ganancia y de inversión.

El imperialismo impone condiciones más duras de negociación para nuevamente hacer positivo el flujo de capitales.

La acumulación procede a través del monopolio y el predominio del capital financiero internacional es el principal factor activador del proceso de reproducción.

El Perú se integró al circuito imperialista del capital en una matriz de acumulación que sacaba ganancias de la exportación del capital mediante distintos métodos. La dinámica del capital permitió que los préstamos -y en general la actividad financiera- fueran los más rentables, seguidos por la venta de tecnología y servicios. Empero, la consecuencia de ésta dinámica, que fue el endeudamiento, desindustrializó al país, redujo el mercado interno y entrabó el desarrollo, con todas sus conflictivas consecuencias al aparcar la crisis de la deuda (1982) los teóricos empezaron a darse cuenta que aquella es parte de la dinámica de acumulación del sistema capitalista mundial.

La inversión extranjera directa se redujo ante el

crítico tamaño de mercado, el difícil acceso al mercado de divisas y la inestabilidad de la política económica y de la propia Política, dando origen a una insalvable contradicción que evidentemente el nuevo régimen no podrá resolver. Más aún si todo esto se da en el contexto de una violencia política creciente.

CAPITULO IV. LA BURGUESIA BUROCRATICA Y LOS LIMITES DEL ESTADO

...una institución es engendrada por una polarización del conflicto social, después apacigua el conflicto y lo mediatiza. La institución es el modo de expresión de lo colectivo, de lo social en oposición a los agentes privados.

Michel Aglietta.

En el presente capítulo examinamos las posibilidades y límites del Estado y sus instituciones, como elementos que constituyen el espacio interno de explotación y dominación. Veremos que el proceso reformista de reinserción en la economía mundial por un lado escinde a las clases dominantes y desarticula su poder, y por otro crea nuevas formas de mediación corporativa de los conflictos y de codificación de las contradicciones del régimen de acumulación y del sistema político. Estas últimas fueron incapaces de institucionalizar el conflicto y dar legitimidad al Estado, pues la insuficiencia del desarrollo capitalista y del proceso de reformas permitieron la reaparición de los problemas centrales del país, de los intereses colectivos y de estrategias populares de supervivencia.

Asimismo, el liberalismo no trascendió lo doctrinario; su fragilidad es resultado de la permanencia de una extensa estructura semifeudal y, con ella, de la

tradición despótico-conservadora de convivencia y gobierno.

Transcurrido un siglo, el impulso de las clases dominantes aún proviene del exterior. Los ya desaparecidos decimonónicos primeros partidos políticos del país se prolongan bajo nuevo ropaje ideológico y con el mismo estilo de hacer política populista y caudillista. El finisecular Partido Civilista, que surge del sector oligárquico capitalino vinculado a las finanzas y al capitalismo inglés, tiene su símil en los "modernos" partidos Popular Cristiano y Acción Popular, que crecen asociados al capital norteamericano; el Partido Demócrata -aristócrata, afrancesado y regional- también se transfigura en un APRA e Izquierda Unida arribistas y europeistas. Finalmente, el Partido Constitucional, paradójicamente constituido por las Fuerzas Armadas, que como tales son hasta hoy el centro de la vida política nacional.

Hoy como ayer podemos preguntarnos con González Prada: -qué fueron, por lo general, nuestros partidos en los últimos años? "Sindicatos de ambiciones malsanas, clubs electoreros o sociedades mercantiles" (123).

El quehacer político hasta 1968 estuvo en tres o cuatro grandes ciudades costeñas articuladas a las grandes haciendas, plantaciones y minas. En otras ciudades y en todo el espacio andino la presencia estatal no trascendía lo coercitivo, como respaldo permanente del poder gamonalista, que combinaba un racismo brutal con la dominación

patriarcal. La hacienda como centro del dominio político real tenía su extensión en los clubes sociales y en las sociedades mercantiles urbanas.

Los cambios que se produjeron en el periodo de 1968-1975 no sólo trasladaron y concentraron el poder en la capital y las grandes ciudades, si no que, al distraer a la oligarquía en su accionar político estabilizador y abocarse a su reinserción económica en el nuevo modelo de acumulación, desarticularon el viejo poder político y lo dejaron sin proyecto capaz de oponerse al de las modernizantes Fuerzas Armadas. En 1980 postularon a Belaúnde Terry y en 1985 al APRA.

No obstante, los más trascendentales cambios socio-políticos residían en las consecuencias que traían consigo las reformas en las regiones, provincias y en el campo. Allí se reconstituyeron las clases sociales proyectando sus reagrupaciones a la capital, apareciendo nuevos poderes políticos. La recomposición clasista del sector terrateniente de la oligarquía en torno al comercio, al transporte y a los servicios agrarios, por un lado; y la rearticulación política en formas neogamonalistas, por el otro, crearon condiciones de mayor opresión campesina-popular y al mismo tiempo aparecieron posibilidades de libertad (*).

(*) En el feudalismo prevalecían los privilegios señoriales sobre individuos despersonalizados y marginados de la vida política; con el capitalismo surgen individuos privados y con libertades civiles "formalmente emancipados en lo político y lo social", que no tienen coartada su voluntad de decidir y hacer" (Véase Uvalle Berrones Ricardo, El Gobierno en Acción, p. 93 y ss, Ed. FCE. 1984).

Aún en el presente siglo, en el Perú nos hallamos en presencia de un Estado puramente formal, en el que la Constitución va dejando de ser un mero acuerdo entre grandes familias oligárquicas, moderadora de sus diferencias e instrumento clientelar de los grupos de poder regional y comienzan a formalizar el avance y expansión capitalista.

En su formación como Estado moderno y centralizador del poder, la Iglesia y el Ejército siempre estuvieron en el centro de las decisiones frente a la debilidad de la sociedad civil. El conflicto entre liberales y conservadores, federalistas y centralistas, es una constante que no llega a expresarse en partidos. El liberalismo es aceptado únicamente en el plano económico, mientras en lo político el sistema electoral no pasaba de ser un mecanismo de dominación.

La democracia no existió, el sistema político se caracterizó más bien por la coacción institucionalizada. El patriarcalismo y el caudillismo ocultaban la presencia de la violencia. Perú era el símil de una inmensa hacienda.

El capital norteamericano, que se afianzó en la estructura financiera-comercial de dominio desarrollada por el capital inglés, desnacionalizó no sólo los recursos naturales, sino a la propia oligarquía, la cual aunque al principio resistió la ofensiva diversificando sus actividades, después se subordinó al ritmo de su incorporación a las finanzas y a la industria. Del mismo modo, la oligarquía controlaba a las clases medias a través

de alianzas que las subordinaban a parcelas de poder y las aislaban del proletariado y el campesinado (el APRA al principio resistió, pero su eclecticismo y ambigüedad no pudieron evitar su lenta absorción).

Como sostiene Marx: "es el Estado quien se halla mantenido en cohesión por la vida burguesa". En Perú, la no dominancia de la sociedad burguesa impide la cohesión estatal y adopta más bien tal forma como exigencia de las necesidades derivadas de la inserción de la economía en el capitalismo mundial, así como de las irreconciliables contradicciones que ella genera. El Estado llega a modernizarse hasta los límites de asegurar la reorganización de las relaciones sociales en favor de un tipo de acumulación de capital que padece de infranqueables barreras.

I. ESCENARIO GEOGRAFICO Y LA FRUSTRACION ESTATAL

El Estado peruano en su evolución ha encontrado adversas condiciones espaciales para consolidar un sistema de dominación e institucionalizarlo. El control y organización de los hombres en el territorio peruano por un poder centralizado y monopolizador de la fuerza se vió limitado por el carácter de la sociedad, el gamonalismo y la geografía.

La ausencia de una efectiva unidad política, administrativa y territorial corresponde a la desintegración

étnica y nacional y a la dispersión del incipiente mercado interior.- El Estado aunque débil, durante el Gobierno de Velasco contradictoriamente contribuye a la destrucción terrateniente como clase y del caciquismo que colectiva pero aisladamente eran el sustento del Estado.

Perú es un país relativamente extenso con 1,285,000 Km2., dividido en 24 departamentos y una Provincia Constitucional y, dentro de estos, 178 provincias y miles de distritos y pueblos; las prefecturas, subprefecturas y gobiernos locales ejercían y ejercen su poder a través de su función central en la dominación: La Fuerza. No existía una administración pública pues las Corporaciones de Desarrollo nacen en los sesenta y varias veces hasta hoy van cambiando de nombre.

Lima-Callao concentra la tercera parte de los más de 20 millones de habitantes que conforman la población total del país, mientras que por lo menos el 40% reside en áreas rurales. A esta heterogeneidad demográfica se agrega la étnica y social: 49% de la población es indígena principalmente quechua, 33% mestiza 12% de procedencia europea y 6% de origen africano o asiático. Las ocupaciones, niveles de ingreso, expectativa de vida, índices demográficos de mortalidad, natalidad, etc. son sumamente diversos y aceptan las más variadas combinaciones. Este conjunto de relaciones sociales se presentan sobre una profunda heterogeneidad ecológica que

podemos simplificar en tres regiones:

a) La Costa.- Es una faja desértica a lo largo del litoral del pacífico con un máximo de 200 Km. de ancho. Comprende el 11% del territorio, encerrando más de 50 valles con 650,000 Has. aprovechables para la agricultura. La producción básicamente bajo riego, esta constituida por algodón, azúcar, arroz, maíz, frijol y frutas. La ganadería aunque escasa es de tipo intensivo. La gran mayoría de explotaciones son capitalistas, usan tecnología avanzada, tienen altos rendimientos y esta destinada al mercado o a la agroindustria, ocupan el 43% de la superficie activa, producen el 45% del VBP agrícola y ocupan el 19.2% de la mano de obra agrícola.

Mientras que el poder político en las fronteras norte y sur se especializan en la defensa del territorio, en cuatro ciudades del norte y sur Trujillo y Chiclayo Arequipa e Ica, se constituyen los núcleos del poder económico y político regional, extendiendo su dominio hacia las otras ciudades y pueblos circunvecinos y particularmente a los andes de manera transversal. El neocolonialismo, la modernización económica y política surgen en la costa pero no logran trascenderla y quedan bloqueados por los andes. Antes bien la explotación y opresión de la sierra por la costa revierte en grandes olas migratorias y en las nuevas áreas conflictivas que traen consigo. El norte -sede de la aristocracia- y -junto a Lima- cultores de tradición más

hispanista ha sufrido en las últimas décadas un desplazamiento de su parcela de poder por el centro político del país: la capital.

Los inmigrantes europeos y asiáticos han logrado constituirse en mediadores de las transnacionales o llenado los espacios no ocupados por ellos. Los provenientes de Italia en un siglo lograron tener la dirección de la burguesía y de las fuerzas armadas, mientras que mestizos y negros aspiran a ser reclutados en los estamentos inferiores de las fuerzas armadas y policiales. En las últimas cuatro décadas la andinización de la costa modifica todo el espectro étnico y de clases hasta volverse irreconocible.

Las clases medias de la costa heredadas del hispanismo son las que pretenden constituir el sistema político, la clase política y la élite pública; no obstante sólo logran una caricatura de ellas. La transformación del APRA en socialdemócrata y de Izquierda Unida en eurocomunista culmina en una convivencia liberal triangular con la burguesía modernizante en los límites que implica tal aberración.

b) La Sierra.- Conformada por los valles y mesetas occidentales de la cordillera de los Andes (macizo altiplánico) y parte de los valles andinos orientados al litoral del Pacífico. Comprende praderas alto-andinas, praderas onduladas más bajas (jalcas) y los valles o

cañones inter-andinos. Mientras que la vertiente occidental de la cordillera es inapropiada para la agricultura, la oriental favorece tal actividad. La heterogeneidad ecológica es grande, existen 62 de las 103 zonas de vida identificadas en el planeta, lo que contribuye a la desintegración política y la diversidad de formas de producción y de organización social y cultural; por otra parte impone restricciones al desarrollo de la actividad agropecuaria, que superadas por la sociedad andina precolonial, hoy por los cambios coloniales las ventajas se convierten en desventajas. Se encuentra localizada sobre 2,000 metros de altitud y cuenta con 340,000 Km². (25% del territorio). De esta superficie 1,700,000 Has. son de cultivo y 9 millones de pastos naturales.

La mayor parte de cultivos son de secano (posee el 21.5% de la agricultura bajo riego). Es importante la ganadería extensiva. En este ámbito predomina la unidad latifundio-comunidad (hoy, principalmente empresas reformadas-comunidad) y la economía campesina y en ellas las relaciones transicionales semi-feudales. El capitalismo aparece como un régimen aislado débil.

La agricultura de valles es comercial y de autoconsumo; pocos productos son exportables, la tecnología es tradicional y el crédito es escaso. Lo principal de la producción está compuesta por: papas, maíz, trigo, cebada. Comprende el 43% de la superficie activa, el 40% de la

producción bruta agrícola y el 61.7% de la PEA agrícola.

En este complejo ecológico, étnico, económico y social el poder residía en el gamonalismo y después de 1970 en el neogamonalismo. Los Centros subsidiarios del poder político de la costa y la población blanca son: Arequipa y Cusco en el sur, Huancayo en el Centro y Cajamarca en el norte.

La penetración institucional es apenas visible en los centros regionales de poder y en las capitales de departamento. La administración pública es aún más centralista que en la Costa favoreciendo la extracción de excedentes. Se modifica con cada cambio de Gobierno y los escasos recursos son malgastados o desfalcados ante las pobres posibilidades de acumulación.

El estancamiento regional se traduce en conflictos sociales y el uso permanente de la fuerza estatal para controlar al movimiento popular. No obstante entre las capas media y rica del campesinado existen múltiples jerarquías heredadas de la colonia, la hacienda y una cultura política servil; entre ellos se reproduce el poder gamonalista, el racismo, la marginación y la opresión de los más débiles. Sus frustraciones se expresan en conflictos endógenos y -muchas veces- su vulnerabilidad en traición. De ahí que en la juventud radiquen los gérmenes plausibles de adquirir conciencia transformadora y más aún en los que se atreven a migrar y no han sido víctimas de la

aculturación.

c. La Selva.- Ocupa 800,000 Km2. que representan el 63% del territorio. Del total, 62 millones de hectáreas tienen poco valor, 5 millones mal drenaje y 12 millones son aluviales con fertilidad. La agricultura es comercial y cada vez más capitalista. Aquí se encuentra el 14% de la superficie activa, el 15% del VBP y el 20% de la PEA agropecuaria. La producción es tropical: café, coca, cacao, achiote, té y frutas.

Esta región, de espacio receptor de la expansión demográfica andina se ha convertido en uno de los más conflictivos debido al vacío institucional y a la brutal explotación y opresión campesina productora de coca y café, de los obreros petroleros y extractores de oro y de los nuevos inmigrantes. Las transnacionales, la nueva burguesía agraria y minera y los terratenientes ejercen su dominio con el respaldo de la fuerza estatal, única expresión del poder público.

II. RECOMPOSICION OLIGARQUICA, BURGUESIA BUROCRATICA Y ESTADO.

Hemos visto en el capítulo anterior que el capitalismo burocrático en Perú surge de su subordinación e integración dependiente en la economía y política mundial, como resultado de la internacionalización del capital en la fase imperialista de este régimen económico

transnacionalizado.

Es así que el capital imperialista directamente o mediado por el capital burocrático ejerce control definitivo sobre la parte central y los poderes regionales dominantes de la economía peruana. El capital estatal y el de los monopolios "nativos" configuran el capitalismo burocrático. Los propietarios de estas empresas y capitales, los administradores del capital extranjero y sectores de la élite pública conforman la burguesía burocrática. Como subproducto de la oligarquía y engarzados a la burguesía por múltiples lazos controlan los sectores y ramas de la economía más tradicionales como también los más dinámicos y modernos, en asociación subordinada a las transnacionales y subordinante con los terratenientes.

El Estado peruano en su dimensión económica defiende y reproduce las relaciones de producción dominantes y no puede ser de otro modo, pues forma parte esencial de la estructura de dominación imperialista y de la coexistencia bloqueada entre el capitalismo transnacional y los modos precapitalistas. Estas relaciones son las que provocan el estancamiento institucional y la desintegración nacional. Más aún si consideramos que el régimen político en ciernes tiene cierta autonomía del Estado: constituido por las fuerzas armadas e instituciones burocráticas, empresariales y eclesiásticas...

En otros términos, el Estado es el centro del

poder en la sociedad y como tal no es más que expresión de las relaciones sociales dominantes. De esta reflexión se deriva que aquel es resultado de aquella lógica de acumulación capitalista que adopta, modifica o destruye relaciones económicas y políticas no capitalistas, así como de la correlación de fuerzas sociales. Cuando el Estado logra cierta autonomía se interpenetra con la acumulación y las contradicciones de clase, interactuando en su ordenamiento, no obstante nunca deja de ser en último análisis y a largo plazo instrumento de las clases dominantes.

El Estado "republicano" post-1821 se construye sin destruir el orden tradicional básico de corte hispánico heterogéneo y precapitalista, desequilibrado y conflictivo y más bien el nuevo poder político reafirma o renueva viejas instituciones y formas de explotación. El caudillismo y el militarismo son expresión del atraso y las dificultades para constituir nuevas relaciones de poder, de la permanente reconstitución de clases, del sistema de opresión racial y la inserción del país en la división internacional del trabajo.

El XIX será un siglo de arcaísmo político, resultado de la extensión de la economía al Estado, de la jerarquización y rigidez étnicas y de las relaciones coloniales.

El oncenio de Leguía inicia la modernidad y

corresponde a la consolidación de la inserción subordinada del país a los Estados Unidos de Norteamérica y a la crisis del capitalismo mundial; responde a la reconstitución de clases y a los nuevos conflictos sociales, culturales e ideológicos.

El Estado logra estructurar un mínimo de instituciones, la formación de una escuálida élite pública y la militarización del poder, ejerciendo su acción protectora del capital y ordenadora del conflicto social en función a las nuevas formas de inserción al capitalismo mundial. Empero la industrialización y las repercusiones de la revolución cubana pondrán a prueba las tradicionales y aún arcaicos modos de dominación, intensificando la crisis de "hegemonía" provocada por las huelgas obreras y las luchas campesinas, así como por las contradicciones intraoligárquicas.

El Estado se va haciendo derivación del capital -sin dejar de ser premisa del mismo y producto de la escisión clasista de la sociedad- a pesar de que continúa produciendo relaciones sociales de poder tradicional junto a las nuevas, limitando su potencial de autonomía y legitimación, como de "extrañamiento" para actuar respecto a los espacios nacionales e internacionales de valorización.

En lo que sigue trataremos de mostrar que: a) los intereses imperialistas de las trasnacionales y del capital financiero son los dominantes; b) se da una fusión

de la nueva burguesía de origen europeo y sectores de la oligarquía bajo la hegemonía de la fracción burocrática; c) con el gobierno de la JMG 1968-1975 ni la oligarquía desaparece; ni el Estado oligárquico es totalmente sustituido con la modernización de las formas de dominación; la incorporación de mediaciones clasemedieras no pueden alterar la sustancialidad del Estado como conjunto.

Lenin, en sus estudios sobre la cuestión colonial y nacional, esclarece la naturaleza de las burguesías de los países dependientes desenmascarando su carácter contrarrevolucionario y de doble faz: "La burguesía de los países oprimidos pese a prestar su apoyo a los movimientos nacionales, lucha al mismo tiempo de acuerdo a la burguesía imperialista, es decir, al lado de ella, contra los movimientos revolucionarios y las clases revolucionarias" (125).

Lenin planteaba que la exportación de capitales acelera el capitalismo: "la exportación de capitales repercute en el desarrollo del capitalismo dentro de los países en que ellos son invertidos, acelerándose extraordinariamente (126).

Esto es cierto ubicado en el contexto concreto dependiendo de las condiciones estructurales y las alianzas de clase con que se encuentre el capital. Las luchas intraburguesas se dan algunas pocas veces respecto al control extranjero de las industrias extractivas -enclaves- y en menor medida en relación a la distribución

(125) V.I. Lenin, Informe de la comisión para la cuestión nacional y colonial, Progreso, Moscú, p. 390.

(126) V.I. Lenin, Ibid.

de la plusvalía y del mercado.

Como dice Mariátegui:

"se forma en el Perú una burguesía confundida y enlazada en su origen y en su estructura con la aristocracia, formada principalmente por los sucesores de los encomenderos y terratenientes de la colonia, pero obligada por su función a adoptar los principios fundamentales de la economía y la política liberales" (127).

De allí que Lenin considerara que debía darse la lucha "contra los movimientos democráticos burgueses dentro de sus respectivas naciones" (128).

La comprensión de la naturaleza de la burguesía se aclara si establecemos algunas definiciones. Cuando se habla de burguesía nacional en la literatura político-social, en términos marxistas se admite bajo esta denominación a aquella parte de la burguesía que no está enlazada al capital extranjero directamente, que no está comprometida con el imperialismo y se opone a él, ya que tiene un proyecto alternativo dentro de la estrategia colonial.

Se considera gran burguesía -intermediaria o burocrática- a los grandes capitalistas asociados de modo subordinado al capital extranjero y que tienen compromisos con el imperialismo y el Estado. Se desarrolla desde que se implementan las primeras

(127) J.C. Mariátegui, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, Amauta, Lima, 1967.

(128) V.I. Lenin, Op. cit., p. 378.

incursiones neocoloniales tras la Segunda Guerra mundial ante el resquebrajamiento del sistema colonial y la competencia interimperialista. En particular se inicia desde la década de los treinta con la política de Nelson Rockefeller. Esta gran burguesía es hechura e instrumento del imperialismo. A éste le conviene su crecimiento hasta cierto punto, pero nunca puede llegar al grado de dejarla convertirse en rival en el mercado mundial -o incluso en el mercado interior-, ni alterar la condición del país, de ser fuente de materia prima, mercado de productos manufacturados y de capital dinero.

La gran burguesía puede elegir -en condiciones normales- entre luchar o asociarse al imperialismo, optando generalmente por la segunda alternativa al permitirsele sobrevivir y participar de las ganancias con mayor eficacia. Esta burguesía surge en el transcurso de la segunda conflagración mundial con rasgos definidos, vinculada a bancos, al comercio exterior, a empresas especulativas y a la industria sustitutiva.

En esta capa se enlazan grandes comerciantes y grandes terratenientes que pasan a gravitar en ella junto con los antiguos propietarios de la banca y la industria. A su vez, industriales y banqueros convocan a los primeros a una asociación que permita el uso del ahorro interno e incluso penetrar ellos mismos en su campo.

El imperialismo se enlaza a la burguesía

comercial lo mismo que a los agroexportadores a través de la división internacional de trabajo, y parte de las divisas serán reinvertidas en la industria manufacturera de bienes de consumo. Así nace una burguesía industrial no por voluntad del imperialismo, sino muy a su pesar y sin perjuicio de que le sirva. Lenin decía -con razón, en sus observaciones críticas a la obra de Rosa Luxemburgo- que el capital emigra a los países salvajes no para la realización de la Merhwert, sino a causa de la facilidad de la explotación (peitschen), trabajo gratuito, etc. Más intereses, robo (gratuito) de las tierras, empréstitos al 12, 13%, etc.

La gran depresión de 1929 afectó importante capital norteamericano. Su debilitamiento significó el fortalecimiento de las burguesías nativas en parte de América Latina. No así en el Perú, donde hacia 1950 estaba lista para ser completada por el capital extranjero y luego fácilmente subordinada.

La industria sustitutiva de importaciones llegó rápido a sus primeros límites. La cada vez más frecuente escasez de divisas para reponer el capital constante en maquinarias y equipos o bienes intermedios se presentó ante el capital extranjero muy favorable, mientras que lo hacía en forma desfavorable a la gran burguesía naciente, que poco a poco se convertía en complementaria de la primera.

La exportación de capitales (créditos o inversiones), de tecnología, "ayuda militar", su colaboración política (estrategia de seguridad y desarrollo, reformista o liberal), la penetración ideológica y cultural, promueven la acumulación y legitimación de la gran burguesía y el imperialismo.

En el contexto del desarrollo industrial, la nacionalización de la banca, de industrias básicas de servicios públicos, de infraestructura, el retiro de enclaves, las inversiones mixtas, la reforma estatal, la integración andina, aparecieron ante los ojos de la pequeña burguesía como "conquistas" y no como nuevas bases de acumulación y legitimación basadas en la remoción de los obstáculos precapitalistas.

El componente político en la definición de las clases, siempre importante lo es más aún ante la política mercantil del imperialismo.

La polémica respecto a la naturaleza de la oligarquía se produjo entre los años 1964-1968, interrumpiéndose con el golpe militar que al autodefinirse como antioligárquico y actuar en ese sentido hizo pensar a la mayoría de intelectuales en el fin de la oligarquía.

Las implicaciones teóricas y políticas del término oligarquía -como se ha venido utilizando- obligan a repensarlo, pues una forma de conceptuar puede conducirnos a negar o a aceptar su liquidación con las reformas de

1968-1975, o quizás a hablar de una aceleración de la recomposición oligárquica al interior de una burguesía burocrática cohesionada y solidaria con la lógica de la acumulación capitalista mundial (129).

En un segundo momento (1978-82...85), ante un cambio en el patrón de acumulación que afectaba a determinadas fracciones burguesas, se acrecienta el interés por el tema de la burguesía entre los investigadores sociales y los políticos.

Las aproximaciones parten de cinco criterios generalmente excluyente: 1. La diferenciación sectorial; 2. la propiedad del capital; 3. la orientación de los mercados; 4. la estratificación burguesa, y 5. la diferenciación política (130).

La discusión con enfoques unilaterales, sean éstos sectoriales y privilegien los nexos entre los distintos tipos de capital por su origen, o enfatizan en el peso o grado de control económico o su comportamiento social y político, impiden ver cómo se constituye una clase. Vistos como elementos complementarios, podremos examinar la configuración de una clase.

Nuestra hipótesis respecto a estos dos conjuntos de interpretaciones es que son incompletas y adolecen de errores teóricos y/o preferencias ideológicas burguesas que

(129) Valderrama León Mariano, Oligarquía terrateniente ayer y hoy. PUC, Lima, 1979, A. Favre, F. Bourricaud, La oligarquía en el Perú, Amorrortu, Buenos Aires, 1969.
 (130) Francisco Durán, "Notas sobre el problema de la burguesía en el Perú", sobretiro de la revista Debates en Sociología, núm. 7, PUC, Lima.

dificultan un acercamiento al conocimiento integral e histórico de las clases dominantes como parte de la estructura social.

Consideramos que el gobierno de las Fuerzas Armadas bajo la conducción de Velasco Alvarado adopta una racionalidad burguesa modernizante que impulsa en política lo que en la economía ya se venía produciendo: el desplazamiento de los sectores conservadores de la oligarquía, la burguesía intermediaria y un gran sector terrateniente, para impulsar en su lugar a los más dinámicos (la burguesía burocrática) y propiciar la integración de la nueva burguesía urbano-industrial a aquella oligarquía modernizante (130a).

El golpe de Estado tampoco es inteligible sin ubicarlo en la lucha de clases, que en los diversos ámbitos de la vida social no sólo debilita a los grupos tradicionales de la oligarquía, sino que prepara las condiciones para la emergencia de un gobierno impulsor de la seguridad nacional y el desarrollo.

Los obstáculos que el capital extranjero opone al desarrollo del capitalismo y de la burguesía son los mismos que impiden la consolidación del proletariado como clase. En otras palabras, la destrucción de formas no capitalistas de relaciones de producción no va acompañada de un ritmo similar de acumulación interna y construcción del capitalismo debido a la permanente salida de excedentes que

se acumulan en el ámbito internacional por acción del capital extranjero. Hasta 1968 el Estado era conducido por la llamada oligarquía, que algunos la denominaron "Intermediaria", "compradora" y otros llamaron feudal burguesía, la cual articulaba una alianza de agroexportadores, terratenientes y financieros, muchas veces mediados por las FFAA y subordinados en su conjunto al capital extranjero y a la política imperialista (principalmente norteamericana).

El capital extranjero y la oligarquía llegaron a controlar el capital bancario, usurero, comercial, parte del industrial, pesquero, minero y agrario, produciendo conflictos internos entre las fracciones que encarnaban dichas formas de capital o renta.

La burguesía industrial que se venía constituyendo con muchas dificultades desde la segunda mitad del siglo XIX se fortalece significativamente en la década de los sesenta del presente siglo; se encontraba subordinada y sufría las limitaciones impuestas por su propia alianza bajo diversas medidas de política económica como la retención de créditos.

La crisis de reproducción de 1967-1968 empuja a las Fuerzas Armadas a resolver dichos antagonismos, impulsando el desarrollo industrial y convirtiéndolo al Estado, para lograr mayor eficacia, en terrateniente, industrial y financiero en aras del desarrollismo como

proyecto hegemónico de las Fuerzas Armadas. Mientras, las rentas agrarias y las sobreganancias descendían peligrosamente en unos sectores, a la vez las inversiones de los monopolios extranjeros en los sectores industrial y minero -en muchos casos asociados al capital interno- crecían ininterrumpidamente. Los establecimientos industriales en 1960 sumaban 3.255 y en 1970 llegaban a 6.488 (131).

Este desarrollo industrial -sostienen estudiosos como Torres, Malpica o Anaya- es de ensamblaje, de artículos de consumo y primera transformación de materias primas. Su incipiente articulación al mercado interno y su estrecha conexión con parte del sector primario se expresará en la inexistencia de un proyecto político coherente.

Es incuestionable el predominio del capital extranjero en la industria. Entre 1960 y 1969 ingresaron al Perú 164 empresas trasnacionales en ese sector de la actividad económica. Del 68% de 242 empresas registradas hasta 1969 (132), el 53% eran de propiedad del capital extranjero en una proporción del 100 al 75%, mientras un 47% tenía un control extranjero del 75 al 25%. Estas cifras denotan la existencia de una capa empresarial asociada a las trasnacionales que progresivamente hegemoniza el capital industrial.

En dicho periodo, aún cuando la burguesía agroexportadora y la burguesía industrial nativa tuvieran

(131) Ministerio de Industria, Informe 1978.

(132) Eduardo Anaya, Imperialismo, industrialización y transferencia de tecnología en el Perú, Horizonte, Lima, 1974.

inusuales inversiones, el capital extranjero avanzaba con mayor rapidez. La tasa promedio de crecimiento entre 1963 y 1968 fue del 7.9%, pero alrededor de ese año el mercado interno estaba saturado e iniciaba un ciclo negativo de capital.

De este modo se va configurando una burguesía que algunos han denominado burocrática y otros gran burguesía neocolonial (Quijano), que impone junto con las Fuerzas Armadas un nuevo patrón de acumulación industrial que ahora incluye la producción de bienes intermedios y en menor medida de capital, beneficiándose de las divisas generadas por los sectores primarios -raíz a la vez de su debilidad- junto al reducido mercado interno. La permanente descapitalización del país condujo a la economía a una nueva crisis en 1974.

Ante la crisis de 1967-1968 -como en las de 1974-1975 y 1977-1978-, el Estado y los industriales trataron de solucionarla acudiendo al mercado mundial para generar su propia reserva de divisas, lo que provocará una transitoria y relativa escisión entre los industriales -expresada en la aparición de la Asociación de Exportadores (ADEX)- en 1973. Paralelamente, otros sectores oligárquicos venían incorporándose a la burguesía.

El distanciamiento o acercamiento entre ambos sectores mediado por los monopolios extranjeros y el Estado -que alteran la política económica coyunturalmente- no puede

modificar el hecho sintomático de su tendencia a la unidad y de su rearticulación política, cuando en la lucha de clases aparece el peligro de la huelga general o de la violencia política. Como la huelga general de julio de 1977, frente a la que se organiza la Union de Empresarios Privados del Perú (UEPP), o cuando en 1985 dan su preferencia por el APRA ante la amenaza del PC del P. maoísta-mariateguista y el frente político-militar Tupac Amaru.

Trataremos de examinar cómo se constituye una burguesía inscrita en el proceso de reorganización oligárquica y en correspondencia con la modernización estatal, que hasta hoy parece estar en proceso de definición.

1. LA RECOMPOSICION OLIGARQUICA

Sólo se pueden explicar las clases sociales a partir de la estructura económica, de su inserción en la economía mundial en sus dos eslabones fundamentales: la división internacional del trabajo y el sistema monetario internacional, que se presentan como las mediaciones a través de las cuales actúa la política económica de las economías centrales; por último la importancia de la estrategia política neocolonial en relación a los patrones de acumulación y la política económica interna. Es en este marco que se dan los dos ya aludidos debates sobre las clases dominantes que han adquirido relevancia y trascendencia.

En el primero, dos estudiosos franceses exageraban la autonomía oligárquica, mientras que los peruanos establecían las relaciones coloniales de esta clase con el imperialismo.

Evaluable la polémica, Valderrama muestra los estrechos vínculos entre los agroexportadores y la dinámica del capital extranjero. Asimismo, presenta la diversificación oligárquica desde el punto de vista de la estructura empresarial, señalando que la lucha de clases es el proceso que elimina al sector exportador y terrateniente más conservador y precapitalista de la oligarquía, culminando en el gobierno militar de 1968 y el reimpulso a la sustitución de importaciones.

Esta situación habría empujado a la oligarquía a otros sectores, como lo demuestra Malpica (133).

El segundo debate importante es sobre la burguesía y se produce en torno a diversas variables:

1. Mercados. Unos centran la atención en la oposición entre industriales y oligarquía, respecto a los mercados, sin considerar el proceso de renovación oligárquica, producto de su diversificación e incorporación a la burguesía urbano industrial. Otros exageran la capacidad del sector industrial exportador para constituir una fracción definida de clases.

2. La estratificación burguesa en capital extranjero imperialista, oligarquía y fracciones nativas y

nacionales.

3. Por último la división politicista que impide ver la articulación de clase de la burguesía, subestima la relación Estado-imperialismo-classes medias, olvida la heterogeneidad oligárquica y los conflictos sociales privilegiando la política económica, o sólo se preocupa de los enfrentamientos políticos.

El primer debate: Francois Bourricaud define a la oligarquía como una camarilla rigurosamente cerrada y parasitaria, cuyo núcleo son 40 familias agro-exportadoras o diez grandes clanes que imponen su dominio a través de la imposición de gobiernos.

Henri Favre denomina así a un reducido grupo de personas vinculadas entre sí por relaciones personales o intereses económicos superpuestos y que ejercen un poder omnimodo basado en las plantaciones. Son 181 familias con propiedades de más de 500 Has. que concentraban más de la mitad del área cultivada de la costa; 33 familias controlaban su comercialización y habían constituido imperios económicos fusionándose con la burguesía trasnacional.

Jorge Bravo Bresani responde a Bourricaud señalando que la oligarquía es "un conjunto heterogéneo y variable de intermediarios, capaz de negociar condiciones en

el cumplimiento de decisiones extranjeras".

Posteriormente (1970), Carlos Malpica en Los dueños del Perú estudia las relaciones sociales de propiedad abonando a las tesis de Bravo Bresani (134).

Veamos las conclusiones a las que llega Valderrama luego de estudiar 233 empresas agropecuarias:

1. La burguesía agraria controlaba la propiedad de la tierra. 181 familias poseían -en haciendas de más de 500 Has.- más de la mitad de la propiedad de la tierra cultivada de la costa. Contaba con un alto nivel de capitalización, recursos tecnológicos y crediticios, y beneficiaba de la mayor parte de las exportaciones agropecuarias.

2. El 65% del capital de las empresas azucareras era extranjero. En Lambayeque, La Libertad y Ancash el 55.3% del capital social de las empresas agropecuarias era foráneo. En muchos casos bancos y entidades del exterior administraban empresas de propietarios nativos.

3. Los accionistas de las empresas agropecuarias eran un conjunto de grupos familiares interrelacionados entre sí: varias empresas de diversas familias y varias familias en distintas empresas y lugares.

4. Ni la burguesía agraria ni los terratenientes señoriales de la sierra, ni los exportadores, tenían el control de la vida económica del país, ella estaba en manos

(134) F. Bourricaud, H. Fravre, B. Bravo, y otros, La oligarquía en el Perú, Amorrortu, Buenos Aires, 1969, C. Malpica, Los dueños del Perú, Peisa, 1970.

del capital extranjero (135). Este capital controlaba los sectores extractivo e industrial, con inversiones estratégicas en cada rama.

Con el desarrollo industrial se instalan empresas extranjeras y empresarios, emigrantes o descendientes de ellos (europeos y judíos). Los agroexportadores concentran sus inversiones en áreas urbanas: industria, finanzas, seguros y urbanizaciones. El auge de alguna producción sectorial (v.gr. pesca) incorpora nuevos elementos a la burguesía.

5. Al ascender la Junta Militar en 1968 el sector tradicional de la oligarquía no ejercía el control de la economía nacional, pero sí del espacio regional andino y de ceja de selva en muchos casos a partir de la agroindustria costeña. La burguesía agraria controlaba sólo catorce de 588 empresas no agrarias del país y participaba en 113 (aunque cerca del 50% con menos del 20% de las acciones). En 56 de ellas asociadas al capital, tenía en aquel momento un mayor control de empresas en actividades especulativas (comercio, urbanizaciones, inmuebles, banca) que de industrias manufacturera, minera y seguros, donde preferían ser socios menores.

6. Los agroexportadores eran los que más habían diversificado sus inversiones en la industria. Los extranjeros lo hacían controlando totalmente las empresas y los nativos como socios rentistas en múltiples empresas.

(135) M. Valderrama, La oligarquía terrateniente ayer y hoy, PUC, 1979, pp. 31-32. J. Torres, Análisis de la estructura económica de la economía peruana, Horizonte, Lima, 1975.

De las 60 empresas en que el autor encuentra presencia de la burguesía agraria dentro del sector industrial, en la mitad su participación no pasaba del 20%. En seis casos el capital nativo era el socio principal y en once era el capital extranjero. En 32 de las 60 empresas existía participación extranjera. Las ramas preferidas por la naciente burguesía nativa eran la de alimentos, la metalmecánica, la metálica, la textil y la de materiales de construcción. Su aprecio por la construcción se basaba en su naturaleza rentista, mientras que por la producción textil y de alimentos generalmente por ser una extensión de la actividad agropecuaria.

7. En otros sectores como la minería, su acercamiento se daba a través de la mediana minería o asociados a la gran minería (v.gr. Cerro de Pasco Co. Corp.). En la banca y los seguros, la burguesía agraria participaba en cinco bancos, cuatro de los cuales estaban bajo control extranjero (Banco de Lima, 41.7%; Banco de Crédito, 14.7%, y Wiese, 2%). En seguros de cinco compañías, cuatro estaban bajo hegemonía extranjera. A diferencia de este tipo de participación, en comercio y finanzas la burguesía intermediaria tenía gran parte de las empresas bajo su control directo.

Estas conclusiones de Valderrama discrepan con las de Bourricaud y Favre, quienes afirman que este grupo social controlaba la economía. Quizás al concentrar las

mejores tierras del país, la disponibilidad de divisas, la participación en un quinto de las grandes empresas, la delegación de intereses por el capital extranjero, su fuerte cohesión interna, influencia social e ideológica y hegemonía política con la mediación de las Fuerzas Armadas, garantizaban su poder político. La identidad entre Estado y sistema político los definía como oligárquicos.

El desarrollo industrial en la década de los cincuenta -y con mayor intensidad en la siguiente- impulsa la transformación capitalista de la economía. La expansión del nuevo régimen se multiplica en todos los sectores, se acrecienta la burguesía en las áreas urbano y rural, crece la economía monetaria y mercantil, y se expande la economía campesina en la hacienda. Sin embargo el régimen político mantiene su relativa fortaleza.

De este modo, la década de los sesenta se inaugura con crecientes movilizaciones políticas y el inicio de la lucha política en el campo. Elemento que será definitivo en el cambio político y la renovación oligárquica al propiciar el cuestionamiento de la legitimidad del régimen y empujar a la crisis a los poderes locales.

El capital financiero empieza a cobrar importancia decisiva: invierte en nuevas ramas de la industria y, con ello, transfiere tecnología. La sociedad y la política se hacen más complejas; crece la diferenciación social y aparecen nuevas organizaciones políticas. El

Estado se amplía creciendo las Fuerzas Armadas y la empleocracia.

La nueva economía nace desintegrada y paradigmáticamente concentrada por la presencia del capital extranjero; al ser así, los intereses burgueses no se expresan en un proyecto nacional. Esto obliga a las Fuerzas Armadas a buscar la instauración de un nuevo régimen político para dirigir el proceso de consolidación burguesa.

La oligarquía era una clase intermediaria -lo mismo que el Estado- y como tal se sostenía en la agroexportación, la importación y posteriormente en la industria sustitutiva de aquélla. Como Estado, en las relaciones precapitalistas, en la concesión de enclaves y en la violencia concentrada de las Fuerzas Armadas.

Como sostiene Pease, su presencia y su capacidad de movimiento se extendían al conjunto de la sociedad civil y la política.

"No se puede, en estas condiciones semicoloniales, hablar de "bloque en el poder" dejando de lado el poder imperialista. Este juega en la lucha política, contradicciones diversas que potencian o traban la acción de las clases y fracciones en pugna. A su vez, y a distancia el imperialismo actúa con varias opciones dentro de la lucha política interna y en función de sus posibilidades de hegemonía" (136).

El problema del imperialismo y la semicolonialidad no podría ser comprendido si no aceptamos la diferenciación de intereses monopólicos, los cambios de patrón de acumulación y la política estadounidense de garante de las inversiones de las multinacionales.

La política intervencionista de la JMG fue vista por muchos como la destrucción de la oligarquía y del Estado semicolonial. Por el contrario, creemos que la oligarquía no fue destruida ni el Estado oligárquico totalmente cancelado. La constitución de una burguesía homogenizada por impulso estatal arrastraba tras de sí los restos de la oligarquía.

Si bien el cambio de la composición de las clases dominantes y la adopción de nuevas características expresa la eliminación de una buena parte de los sectores más tradicionales de la oligarquía y la homogenización del poder de la burguesía, el núcleo dominante de ésta será la propia oligarquía renovada alrededor de la cual se integran la nueva burguesía industrial y bancaria y sectores de las capas medias altas.

La lucha de clases da paso a las tendencias liberales frente al intervencionismo externo, al mismo tiempo que se abre un espacio político para las clases subalternas que se movilizan de manera constante pero sin articulación, despertando la lucha regional popular. Esto es así porque oligarcas como los llamados "barones del

azúcar" habían diversificado sus intereses, lo mismo que la burguesía agraria costeña, asentándose en granjas, servicios y comercio agropecuarios. La burguesía agraria media se robustece por el aumento de la demanda de alimentos y productos exportables. Y aunque también es afectada, la burguesía financiera se recompone progresivamente con base en los bancos no expropiados y las nuevas entidades financieras.

Los gamonales de la sierra incursionan, cuando ya no lo habían hecho -con más éxito del que tenían en sus señoríos-, en la intermediación regional e internacional gracias al tiempo que tuvieron para descapitalizar y extraer riqueza en pleno periodo de la reforma agraria.

De la reconstitución gamonal en los poderes locales, el fortalecimiento de la burguesía agraria media en la costa y la renovación de los agroexportadores y financista, resurge la oligarquía y el régimen oligárquico con la posibilidad de entrar en pugna con el nuevo proyecto estatal. Para corroborar estas afirmaciones con información real, nos servimos de un artículo escrito por Carlos Malpica y aparecido en la revista Caretas "Los nuevos dueños". Allí sostiene el autor que los nuevos dueños son:

1. Neoexportadores. Paralelamente al debilitamiento del sector comercial estatal, se reconstituye el grupo exportador de minerales y productos agrícolas y pesqueros, y aparece uno nuevo orientado a la intermediación

de productos no tradicionales con subvención estatal (Certex). Con el tiempo, este último grupo diversifica sus intereses en la comercialización de productos agropecuarios, pesqueros, industriales, etc.

2. Banqueros. El grupo en el poder prerformas que no había sido expropiado se fortaleció paulatinamente, en especial desde los inicios de la política liberal en 1977. El Banco de Crédito pasó a manos oligarcas (Romero, Raffo, Brescia, Verme) y a viejos industriales (Nicolini) que a través de contactos como Onrubia se asociaron al grupo Rockefeller. La vinculación del grupo Romero a las industrias del aceite y textil muestran como los bancos siempre se extienden al resto de la economía, o son una ramificación de ella.

El grupo Wiese -a través de su mediador el oligarca García Sayan- consiguió el apoyo norteamericano del Hemisphere Management Corporation. El grupo Bertello-Aspillaga Delgado -que incluye a los Dogny Larco, Calda Cavana, Verme- posee el Banco Comercial. En el Banco de Lima los Olachea, Gildemeister y Berckemeyer se asocian al banco francés Credit Lyonnais. Este último grupo, en unión con los Romero, controla la industria cervecera. En los últimos años se crearían nuevos Bancos como Bandesco, Latino y Mercantil, que agrupan a nuevos grupos de poder.

A la asociación de burgueses para garantizar la provisión de créditos y la fusión de grupos intersectoriales

para captar capital y extenderse, se agrega la asociación de grupos nativos a formas para obtener recursos y proyectarse juntos en el conjunto de la economía.

3. Grandes comerciantes. Las grandes empresas importadoras son las mismas de antes: Sears, Oechsle, Tía, Monterrey, Ferreyros, etc. "Scala" pasó a manos oligarcas (Brescia) y Supermercados "Todos" pasó al grupo Galax (del grupo Izaga).

4. Medianos Mineros. En este sector no hubo cambios significativos en el tipo de propiedad. Dionisio Romero asociado a Alberto Benavides es el principal accionista de la empresa Brocal. Socio también de Centromin y la International Finance Conference del Banco Mundial, controla Buenaventura. Baertl Montoro es miembro de los directorios de Milpo, Castrovirreyna, Pacocha, Volcan, Atacocha y Sayapullo. Beltrán Espantoso es presidente de los directorios de Castrovirreyna y Volcan. Pedro Brescia y hermano son accionistas importantes de Atacocha -propiedad de MINSUR-, Alianza y otras, y con el grupo Castrovirreyna adquieren Tejidos Unión. Picasso Peratta es además presidente de Milpo y accionista principal de Minera Castrovirreyna, socio del grupo Baertl Montoro.

Francisco Gallo, socio de Brescia y presidente de Atacocha, es copropietario de Huarón. Letts, accionista principal de Río Pallanga, es director de Castrovirreyna y Volcan. Alberto Brazzini, propietario de Puquicocha y

accionista de Arcata, tiene un hijo como gerente de Buenaventura. Felipe Zacarías es propietario de Milotingo.

Estos son los principales accionistas y propietarios de la mediana minería, miembros de la oligarquía pero organizados además en grupos interrelacionados en éste y otros sectores.

Muchos provienen del sector agrario.

La gran minería y el petróleo se encuentran en manos del capital trasnacional y del Estado.

5. Los industriales. Llegó a ser el sector más importante de la economía al aportar el 26% del PBI, aunque en 1983 había descendido en 6% aportando no más del 20% del PBI.

Con la política liberal, la banca nativa redujo sus utilidades del 87.1% al 62% en relación a la banca extranjera. Paralelo a ello, ramas de la industria como la metal-mecánica y las urbanizadoras, entre otras, tuvieron gran número de quiebras y cierres.

En el concepto de oligarquía que utiliza Pease se "hace referencia a su carácter cerrado, a la fuerte integración entre los diversos planos del poder, a los rasgos aristocratizantes de su forma de dominación y a otros aspectos que configuran un capitalismo retrasado con fuertes rasgos preburgueses en su forma de dominación" (137).

El mismo autor llama al conjunto de las clases dominantes "bloque en el poder", en el que la burguesía (137) Ibid. p.18

agroexportadora posee hegemonía (capacidad de imponer sus intereses) sobre la burguesía industrial. Es el Estado oligarca, cerrado, antidemocrático, de pocos, dictatorial.

Existen varios problemas. La anterior definición de oligarquía no es un concepto de clase, sino una connotación política atribuida a un grupo social, pero además identifica régimen político con Estado. Esto le permite hablar de la desaparición de una clase y un tipo de Estado, cuando lo que ocurre es la absorción de sectores de las clases medias al Estado, sin lograr la consolidación del Estado moderno.

La "clase" oligarca -como hemos visto- se renueva y adquiere un carácter definitivamente burgués -o mejor, gran burgués-, ocurriendo lo mismo con el Estado que se transforma de la mano con las relaciones de producción.

La desintegración de los planos de poder es a la vez una reintegración, y la ruptura de su carácter cerrado y aristocrático se convierte en incorporación de nuevos elementos bajo la hegemonía oligarca y la politicidad criolla.

Cuando Norberto Bobbio estudia la oligarquía en los regímenes del "tercer mundo", cita a Shils, para quien los sistemas oligarcas "se caracterizan por un grupo de poder reducido, homogéneo, estable, con una buena organización en su interior y con fuertes vínculos entre sus miembros, sospechoso de la lealtad de quienes pertenecen al

mismo y contemporaneamente muy recelosos en la admisión de nuevos miembros, que gobierna de una modo autoritario, reforzando al ejecutivo, controlando al poder judicial, marginando o excluyendo al parlamento, discriminando o eliminando a la oposición" (138).

Bobbio agrega otros rasgos: la oligarquía gobierna para los gobernantes, está sostenida por la inercia de las mayorías, su unidad responde a la comunidad de intereses, (con lo cual se diferencia de la aristocracia). Y, sin embargo, pudieran existir oligarquías democráticas que basan su legitimidad en el voto, reconocen una oposición legal y pueden asumir la tarea de la modernización.

De este modo el sistema oligarca tiene dos acepciones en correspondencia con la sociedad histórica concreta. Si aceptamos los rasgos del primero -centrales y más o menos permanente, el carácter cerrado, integrado, reducido y autoritario-, podemos pensar en los regimenes prereformistas.

En el periodo de postreformas se verifican cambios en algunos de los rasgos, como la politicidad criolla, que permitirían hablar de una renovación del Estado oligarca. Esto es así porque a pesar de la introducción de nuevas formas de mediación en la dominación política, se conservan en extensos espacios regionales relaciones de producción y de poder precapitalistas.

El Estado cobra mayor autonomía relativa -sin

abandonar sus rasgos de ser excluyente, autoritario y genocida- respecto a la población campesina-indígena, componente esencial y mayoritario de la estructura social.

La oligarquía en su acepción de clase social se acerca más a la definición de Sergio Bagú, quien afirma que aunque oligarquía es un término poco preciso, sirve para designar a un conjunto de familias de origen colonial, de rasgos aristocráticos, cuyo poder empieza en la propiedad de la tierra, y en la propiedad en general, que hace la diferencia con el empresariado moderno.

Al asentarse en diversos sectores económicos, minería, agricultura, ganadería, urbanización, comercio y especulación financiera, puede hablarse de una o varias clases que comparten el poder económico y político (139).

Con este concepto bien podríamos hablar de una oligarquía tradicional que al renovarse se convierte en moderna, y cuyo componente central es una nueva alianza y/o fusión de la oligarquía tradicional con el empresariado moderno, y que capta en su desarrollo sectores de las clases medias.

Siendo así, podemos adoptar también el concepto de oligarquía de Alonso Aguilar, cuyos criterios de definición son los siguientes:

1. La oligarquía expresa las modalidades concretas del desarrollo capitalista y su integración al sistema capitalista mundial.

2. Es una categoría económica que engloba elementos aislados de la burguesía o las empresas y los trasciende.

3. Absorbe buena parte del excedente, controla medios de producción y riqueza.

4. Ejerce decisiva influencia en la burguesía, la pequeña burguesía y el pueblo, en particular en los planos económico-político e ideológico.

5. Mantiene vínculos estrechos o depende directamente del capital monopolista extranjero, pero incluso pueda no tener relaciones directas y depender del imperialismo.

6. Se configura y sostiene en un complejo entrelazamiento de la producción y el capital, que por su diversificación rebasa la simple articulación banca-industria.

7. Además de su base normal de acumulación en la empresa privada, se apoya en el capital estatal.

8. Su influencia en la esfera económica se extiende a la política oficial, aunque no participa directamente en el aparato del Estado, lo cual se debe a que la preservación del sistema capitalista conlleva la propia preservación de la clase.

Estos mismos fenómenos se verifican en Perú: la articulación de actividades económicas diversas, el ensamblaje en consorcios o grupos de familias de funciones

productivas o financieras, el control compartido del aparato de intermediación financiera entre el Estado, la oligarquía y la banca multinacional, su relación subordinada con los grandes monopolios, se conforma la oligarquía renovada, que otros llaman gran burguesía burocrática.

Los elementos formativos de la clase, la propiedad y el control de instrumental productivo, así como de los recursos naturales, las interrelaciones familiares de origen colonial o postcolonial, sus vinculaciones o no al capital extranjero, la ideología etnocida-genocida con condicionamientos étnico-aristocráticos, sus bases de poder intersectorial, su identidad católica conservadora, son rasgos que trascienden las funciones económicas y políticas y configuran un nítido universo social que define a la oligarquía.

2. La burguesía.- A diferencia de la oligarquía no llega a ser un macrogrupo con historia única, aunque las normas de reproducción en la división social del trabajo que delimitan sus fronteras conflictivas en la estructura social tengan linderos cada vez más definidos. Más bien se incorporan a la subcultura que enfrenta a las mayorías, prehispanicas en su origen, que hoy conforman las clases subalternas.

El debate acerca de la burguesía muestra que ésta es una clase en formación, dentro y fuera de la oligarquía. Aún no es una clase homogénea y requiere de dirección. Siguiendo a Francisco Durand, los enfoques sobre la

burguesía serían los siguientes (140).

1. Sectorial-deductivista. Aceptando que las condiciones comunes de acumulación exigen la unidad sectorial y agremiación para garantizar y consolidar sus bases materiales de acumulación, no se pueden deducir de aquí prioridades entre fracciones, menos aún por sus aportes parciales al PNB, como se ha pretendido hacer al hablar de "hegemonía de la gran burguesía industrial y/o financiera".

2. La propiedad del capital. Otro punto de partida que atraviesa al anterior si se separa la simple descripción de la propiedad.

Por su precisión y porque logra expresar la complejidad del fenómeno, el autor muestra su preferencia por la noción de capital imperialista frente a la de capital extranjero.

Alude a una fracción de clase que juega en el plano interno y externo, integrándolos adecuadamente en función a intereses de clase que se ubican en el plano de la dominación mundial. Se expresa en corporaciones multinacionales con presencia interna, como una expresión de un complejo empresarial mayor cuya cabeza articula las partes en función a una estrategia de acumulación a escala mundial (141).

(140) Francisco Durand, "Estado, capital y trabajo" en Análisis, Lima, abril 1982, pp. 48 y ss.

(141) Ibid. p.49. Véase también J.Graciarena, Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina, Paidós, Bs.As., 1979; H.Pease, "La reforma agraria peruana en la crisis del Estado oligárquico", en Estado y política agraria, Lima, 1971.

La unidad del capital imperialista expresada en distintos planos (en el capital transnacional, las organizaciones financieras y los estados imperialistas), marca y encarna el patrón de acumulación y sus variaciones, y no puede esconder la especificidad de la relación con los capitales nativos y nacionales, así como la particularidad de la mediación estatal.

Las contradicciones que surgen a cada momento por la existencia de un interés nacional, difícilmente pueden conducirnos a hablar de la existencia de una burguesía nacional. El desarrollo de una fracción nativa asociada al capital imperialista por relaciones financieras, tecnológicas, e inversión, posibilitan y limitan su desarrollo. El capital nacional queda subordinado a los anteriores como simple proveedor o un mecanismo menor en la reproducción del capital.

3. Los mercados. La oposición burguesía urbano-industrial y oligarquía agroexportadora incide, en la transición que se produce en la década de los sesenta, en la política económica, fiscal y monetaria. Ahora debe incorporar la renovación oligárquica que se inserta en la industria y nuevas actividades extractivas. Las oposiciones no son estáticas.

Otro elemento que se destaca con exageración es el capital manufacturero exportador, que en realidad es excepcional encontrarlo puro, el cual algunos lo definen como

fracción. Sin embargo su readecuación coyuntural es problemática, coincidiendo en muchos casos en medidas de política económica con los intereses de la renovada oligarquía.

4. La estratificación burguesa. -Debemos o no relacionar el tamaño con el carácter monopolista, para establecer el peso y control de la economía? Una aproximación la clasificaría así:

a) El capital imperialista: diversificado y predominante a la vez en el sector extractivo (minero-energético) y en las actividades financiera y comercial. Su hegemonía en el sector industrial, afectada en su rentabilidad por la crisis, permanece por el apoyo de organismos financieros, sus matrices y el propio Estado.

b) La gran burguesía: cada vez más depurada al ritmo de la crisis y de los mecanismos bolsísticos. Su consolidación parte de la interrelación de actividades económicas y del control bancario. Aunque sus empresas no sean siempre grandes, su vinculación al capital extranjero y su proyección internacional las protege de las variaciones de la política económica. Se diferencia internamente por grupos de poder, que de acuerdo con la rentabilidad que ofrezca el régimen político modificarán sus comportamientos. A la burguesía la hegemoniza la oligarquía.

c) Fracciones nativas y nacionales: su estrecha

visión sectorial las hace actuar táctica pero no estratégicamente a través de sus gremios. En ellas el pequeño capital es un sector amplio, disperso y heterogéneo. Existe un grupo que utiliza fuerza de trabajo, tecnología moderna y recurre al mercado financiero, distinguiéndose nitidamente de la explotación familiar y del artesanado. Su integración al capital en su conjunto y al mercado interno la hace cada vez menos marginal y a la vez propensa al estancamiento o a la extinción. En la CONACO estaban asociadas 20 000 de ellos en 1973.

III. LA BURGUESIA, LAS CAPAS MEDIAS Y LA POLÍTICA

1. Burguesía y política económica.

En este punto los estudios políticos de Cotler, Quijano y Caravedo se hacen merecedores de un comentario crítico. Cotler sobrestima la relación Estado-imperialismo y clases medias, asumiendo la liquidación oligárquica, para luego definir a la burguesía como satélite (142). Quijano (143) divide a la burguesía en neocolonial, mediana y pequeña, dejando de lado a la oligarquía y la vinculación de las fracciones burguesas con el poder.

Adscribe además apresuradamente una y otra fracción a los gremios (ADEX-SNI) sin considerar la heterogeneidad burguesa.

Pease habla de fracción burguesa sin definir ni explicar el problema de la representación; su historicismo deja de lado a la oligarquía.

Caravedo pone excesivo énfasis en la diferenciación burguesa, el enfrentamiento a través de una política económica racionalista, sin examinar a su vez los rasgos de unidad (144).

La inexistencia de una burguesía plenamente constituida y la fuerza del capital imperialista otorga complejidad a las relaciones de estos grupos burgueses con el Estado y el imperialismo.

(142) J. Cotler, Clases, Estado y Nación, UNAM, 1978.

(143) A. Quijano, "Las condiciones del enfrentamiento", en Sociedad y Política, Lima, 1980.

(144) B. Caravedo, Desarrollo desigual y lucha política en el Perú, 1948-1956 y La burguesía arequipeña y el Estado peruano, IEP, Lima, 1978.

Nuevamente en 1985, como en 1968, la crisis económica y política, y el movimiento de los actores políticos ante los movimientos revolucionarios de masas, obliga a estabilizar la economía del país como condición de una estabilización general, aunque con ello se afecten las relaciones del Estado con los organismos financieros internacionales y con fracciones del capital oligárquico.

La sustitución de importaciones, el proteccionismo del mercado interno y la promoción de exportaciones tienden a la unificación del sector industrial.

La acumulación interna en la ciudad y el campo es apoyada, como programa general, por el capital monopólico, la burguesía industrial, la pequeña burguesía e incluso sectores obreros.

La vanguardia capitalista articulada alrededor de las empresas transnacionales debe apoyar al régimen político para salvar la reproducción del capital y el mercado más grande del país.

Lima, en 1973, concentraba al 81% de las comunidades industriales, en 1970 el 70%. De 6 533 pequeñas empresas registradas (de 5 a 19 trabajadores), ocupaba al 21% de ellos (42 033 obreros). Según Sulmont (145), en 19 años (1956-1975) se formaron 1 550 sindicatos (el 86% del total de la industria).

El capital financiero en los países centrales, constituido por la unión del capital de los monopolios

bancarios e industriales en los países imperialistas, es consecuencia de la alta concentración de capitales en la industria y la banca. Tiene su correlato en la aparición de la oligarquía financiera, que luego de dominar la economía determina la política de los estados imperialistas y los países bajo su influencia. La potencia del capital financiero imperialista ejerce significativa influencia sobre la raquitica oligarquía peruana.

Según Cabieses (146), el sistema financiero peruano es uno de los más atrasados de América Latina, a tal extremo que el Banco de Crédito -primero en el país- ocupa el puesto 86 después de bancos de Chile y Ecuador. Causas históricas y la concentración de capital lo explican.

Del total de capital y reservas de las instituciones financieras del país, el Estado alcanzó en 1979 el 71%, lo que le permitió participar en el 74% de los depósitos, 82% de las colocaciones y 64% de las utilidades registradas. En la banca comercial y de ahorro el capital nacional tuvo mayor peso cubriendo el Banco de Crédito alrededor del 25% de sus indicadores más representativos.

El Estado también es significativo con su presencia en la banca asociada (40%). Por su lado, las sucursales de entidades bancarias privadas extranjeras, con el 5% del capital y reservas y el 3% de las colocaciones y depósitos, tuvieron el 12% de las utilidades (147).

(146) F. Cabieses, en Actualidad económica, núm. 4.

(147) L. Gutiérrez Aparicio, El Diario de Marka, 23 de diciembre de 1981.

Respecto a la actividad del Estado en el llamado sector financiero, no es realmente importante en cuanto maneja capital sobre todo extranjero, lo cual lo convierte en administrador.

El aparato bancario estatal se asimila a la dinámica de la banca privada, apoyada por poderosos empresarios en la gestión y como soportes del desarrollo de la burguesía en otros sectores.

La gran burguesía es multifacética, como la oligarquía. No es industrial o financiera, agraria o intermediaria, sino que está en diversos sectores articulados entre sí. Depende de su asociación con el capital extranjero y en parte importante continúa siendo especulativa, rentista y comercial. Como sostiene Durand, (148) es débil e ineficiente.

Un ejemplo de la interrelación sectorial está en el sector de la burguesía ligada a los bancos, articulada a urbanizadoras, inmobiliarias e industria de materiales de construcción.

La propiedad de las urbanizadoras -generalmente oligárquica- no se modificó en el periodo reformista de la última JMG. Por el contrario, en los dos primeros años de Belaúnde Terry tuvo un crecimiento inusitado.

Al mismo tiempo, en la industria del cemento, al comenzar el régimen de Belaúnde Terry, se devolvió un 51%

(148) F. Durand, El Diario de Marka, 27 de Julio de 1980.

del capital a los accionista prereformas, y en 1984 se aumentó su participación. De este modo los movimientos coyunturales favorecen o afectan a unos u otros sectores, pero muy restringidamente a la gran burguesía por sus actividades multilaterales.

En periodos de crisis, además de las utilidades normales basadas en altos intereses a plazos cortos, el gran negocio se encuentra en la bolsa de valores sobre diversas ramas y especulando con ellas. Asimismo, su incorporación al sector exportador y al Certex les ofrece nuevas perspectivas.

El grupo bancario e industrial, así como el exportador, apoyados en el sector exportador-extractivo, benefician a la industria moderna exportadora.

Los sectores bancario e industrial permanecen unidos o separados coyuntural y provisionalmente por la política económica, en especial en momentos de crisis económica o financiera donde se aplican muchas veces políticas exclusivistas.

Los industriales se ven obligados a ser comerciantes para tener capacidad de competencia. Sin embargo cuando ocurren situaciones como las creadas por el grupo Dinamo en oposición al Cosmos (industrializante), que colocaron como eje de la dinámica económica a los sectores petrolero y minero, unifican al sector industrial en oposición incluso a los organismos financieros que dictan la

política económica. Antes, frente a otras circunstancias, el pequeño y mediano capital se convirtió en antiestatista y liberal.

Existen 492 grandes empresas (100 o más trabajadores) que controlan el 75.9% del valor de la maquinaria y equipo, y el 62% del valor agregado industrial (Minkker). Mientras que, según Alcorta y Tabini, existen 16 824 industrias de 4 hasta 19 trabajadores que no tienen un proyecto propio y deben optar entre las alternativas de los sectores de la burguesía del primer grupo.

La mediana burguesía industrial cuenta con mayor autonomía, aunque en gran parte prosigue el comportamiento de la gran burguesía. Está formada por 2 347 empresas y sus plantas cuentan de entre 15 a 99 trabajadores. La importancia de este sector en la vida política es muy significativa en determinadas coyunturas y esta dada en su base por el control del 28% del valor agregado y el 19.6% del valor de la maquinaria y equipo. Tuvo cierta representatividad entre los tecnócratas del Cosmos y sectores militares por su vinculación a la banca, a la exportación y a la empresa estatal.

Para algunos estudiosos, la Junta Militar de Gobierno se supone que representaba -en su primera fase- a la burguesía media, a las empresas de mediano tamaño y de baja productividad relativa frente a las importaciones. Se pronuncia por el control de las importaciones y contra las

discriminaciones bancarias y cambiarias. Las contracciones de la demanda afectan seriamente a aquéllas frente a la amenaza de la gran empresa, por ello les interesa la promoción de exportaciones, el apoyo financiero, tecnológico e insumos por parte del Estado y el capital financiero. Exigen Certex y la reserva del mercado interno (148a).

La segunda fase habría significado la satisfacción de todos los sectores de la industria.

En realidad ambas fases contribuyeron al fortalecimiento del sector industrial en su conjunto, aunque en la primera se pusiera énfasis en algunas ramas y agrupaciones otorgándoles mayores beneficios con unas medidas y afectándolas con otras. (Como la comunidad industrial, que desfavoreció a la mediana y pequeña industria.)

Los sectores burgueses multinacionales con altos grados de concentración de la actividad económica, con formas de integración vertical y horizontal, en el interior y exterior del país, dominan al mercado, la tecnología, los recursos financieros, abastecimientos externos e internos, planteando una política de libre movimiento del sistema, la dotación de infraestructura para su funcionamiento expansivo y de servicios más eficientes.

La oligarquía y la gran burguesía, que en muchos planos se identifican, tienen dos sectores. Uno -el más alto- se caracteriza por su relación con el capital

extranjero, asociado con él en empresas mixtas. Mientras que depende del capital foráneo en capital financiero, tecnología e insumos, y lo apoya en la exportación y otros insumos; es un sector abierto al capital extranjero, reclama una política más o menos liberal de acuerdo a las circunstancias: no intervención del Estado en el comercio externo, irrestricto mercado de divisas, política cambiaria simplificada, estabilización de la política monetaria y fiscal. Amplios sectores de estos grupos proponen la libre importación. A éstos y a la burguesía imperialista multinacional representó eficientemente Acción Popular.

El incremento del endeudamiento externo afectó directamente a la soberanía e hizo más eficiente la política neocolonial, al mismo tiempo que fue limitante de la acumulación debido a los costos de transferencia de ingresos, la composición del comercio exterior, los servicios de la deuda y las consecuencias en la estructura productiva, etc. Es más, su articulación con problemas internos como patrones de consumo y de vida, la concentración del ingreso o la desocupación, hicieron que la acumulación fuera acompañada de una mayor explotación, abriendo paso a la lucha de clases.

Las contradicciones de clase se acentuaron por los requerimientos de importación, el poco dinamismo de las exportaciones, la transferencia creciente de excedentes (ganancia de trasnacionales), intereses de préstamos, pago

de tecnología, etc. Y también por la amortización del endeudamiento acumulado, el militarismo, el aumento de la inflación, la presión del gasto fiscal, la insuficiencia de la producción agrícola, los nuevos préstamos para el pago de refinanciaciones, etc.

Las nuevas formas de desarrollo y reproducción del neocolonialismo como lógica económica internalizada englobaron a los estados y a los organismos multilaterales, ofreciendo las condiciones de funcionamiento y logro de los objetivos de reproducción como despolitizantes de los procesos políticos y económicos. O sea, como factor de legitimidad de regimenes políticos aparentemente antiimperialistas.

En conclusión, lo que antes era una relación de cambio entre la burguesía intermediaria y la burguesía imperialista se ha transformado en una relación financiera y productiva, donde el Estado ha entrado a compartir la explotación del proletariado y campesinado suministrándole al capital toda la protección que, a su vez, es la protección de la economía "nacional".

Este proceso no es totalmente nuevo. Desde 1920 se expresa en los índices de producción, población explotada por el capital, división del trabajo campo-ciudad, disminución relativa de la población legada a la agricultura, disolución de haciendas, descomposición del artesanado y del campesinado parcelario que disminuye su

participación en el producto social, etc. Sin embargo la valoración aún no es una relación hegemónica.

La transición al capitalismo fue por vía reaccionaria, con la participación de terratenientes parasitarios en el producto social y en la política represiva. Fue una acumulación sanguinaria y etnocida que destruyó la economía natural sin reemplazarla por otra, que no tuvo capacidad de explotar a la población producto de esa descomposición social por la "racionalidad" de su forma social. Su fortaleza minó esta fuerza al entrar en convivencia o combinación y porque las relaciones de cambio internacionales limitaron, el flujo de capital constante. Cuando aumentó el capital constante, lo hizo en detrimento, contradictoriamente, de la población.

En la fase de consolidación del capital extranjero en el país, fue el Estado quien funcionó como productor de fuerzas productivas y relaciones de producción burguesas, sin que esto significara la superación total y definitiva de la semifeudalidad sino, más bien, la recreación de condiciones de la base material para el desarrollo del capital. La retardada industrialización del país -década de los cincuenta- trajo aparejada la crisis en el agro, la hiperurbanización, los cambios en las clases, etc.

La destrucción parcial del precapitalismo, la acumulación y la rentabilidad del capital venían acompañadas

de frecuentes crisis políticas paralelas al desarrollo de las funciones del Estado. El Estado actuaba en profundidad y extensión en la economía, movilizaba recursos, creaba nuevas empresas, participaba en el intercambio y la distribución, contribuía a la formación del capital, regulaba la demanda, la oferta y el comercio en su conjunto; mantenía la ocupación, servicios y mecanismos de transferencia; administraba el crédito; protegía a la empresa y a los exportadores, la política fiscal y monetarias favorecían a la industria, etc. Lo que significaba únicamente desarrollismo, crecimiento y productivismo sin lograr una acumulación autosostenida, convirtiendo en más frágil y contradictoria la economía.

La actual crisis monetario financiera, acompañada de estancamiento e inflación constantemente reedita la desestabilización de los precios para mantener la relación salarios-ganancias.

El Estado estimula la actividad económica, que a la vez significa concentración del capital. Esto ha hecho pensar en un Estado peruano neocolonial. Sin embargo el Estado no se inserta de manera abierta y exclusiva en el campo imperialista.

El mercado mundial, el sistema monetario internacional y la división internacional del trabajo permiten mediatizar la relación, haciendo que las contradicciones internas de clase jueguen un papel importante en la definición del carácter del Estado.

2. LA POLITICIDAD CRIOLLA

La politicidad, o estilo de hacer política está marcada por las relaciones de subordinación colonial del Perú con el exterior.

El neocolonialismo etnocida de las clases dominantes en relación con el mundo andino está también, íntimamente engarzado en una unidad coercitiva.

La violencia político-institucional expresada en el caudillismo, las incipientes formas demoliberales republicanas y los recurrentes regímenes militares son una constante en la historia.

El Estado y los organismos políticos giraban en torno al etnocidio (149) y la violencia, mientras la semifeudalidad predominaba en el campo. El caudillismo y el clientelismo criollos se convertían en factores de poder.

La politicidad criolla está inscrita en "Lo Criollo". Es el estilo costumbrista de hacer política: tradicional, costeño y limeño. En sus relaciones verticales, su naturaleza es etnocida. Y horizontalmente es antiindígena. Abarca el lenguaje, la cultura, el arte (la música, la danza y la literatura), la religión, la arquitectura-urbanismo, cocina, modernizados a través del tiempo y manteniendo su carácter de naciolismo limeño.

En el político criollo caudillista se concentran variadas formas hispanistas de conciencia social. Busca el consentimiento adaptando la conciencia social a la vida

(149) Entre los Estudios Antropológicos que sustentan el etnocidio destaca el de Jean Piel y Wankar.

cotidiana, al discurso retórico, a los rituales y símbolos de la sociedad tradicional. Es un estilo político que nace del sentido común y retoma de él lo ruin y perverso si eso le sirve para sus fines oportunistas.

En el político criollo cultivado, la "viveza criolla" armoniza con el arribismo de las capas medias y se afianza en el derecho, la manipulación de masas. Se apoya en el conocimiento de la realidad.

Al decir de Salazar Bondy, el buen político criollo sabe combinar la concupiscencia con la fe, el fariseísmo con la moral, el cinismo con la decencia, la inescrupulosidad con el respeto. Configura así una suma de contradicciones con que "un hombre deja su bandera y se alinea en la contraria, y el provecho material que saca aunque defraude a los suyos con el cambio" (150) Gimiendo a cada momento, la causa pública juega picaramente con las masas en función a sus fines particulares.

Este estilo político fue antes monopolio de las capas aristocráticas, de la oligarquía y de las Fuerzas Armadas, cuando toda la sociedad era semifeudal y se imponía el patrimonialismo como política y el gamonismo como su base social.

Con las reformas de 1968-1975 va adaptándose a la modernidad y a las capas medias. Estas adoptan con fines electorales, tal política desde la derecha hasta la izquierda. Las capas medias de derecha -como el APRA-

(150) Sebastián Salazar Bondy, Lima la horrible, Era, México.

acogen el estilo criollo como fuerzas auxiliares de la burguesía burocrática reclamando las regalías en la construcción de esa politicidad.

Utilizando una envoltura patrioterá coinciden fácilmente con las Fuerzas Armadas, empleando otra, esta vez indigenista y folclórica, se incorporan al código cultural del pueblo. Se relacionan con otras instituciones, organizaciones y con el mundo a través de la maniobra elocuente, de la silente complicidad, la adulación y la intriga, en busca del liderazgo internacional.

La izquierda legal más intelectual y racional adopta un indigenismo radical en sus vínculos verticales. Grandes concededores del problema agrario y campesino proponen frentes políticos con hegemonía campesina. Predican la autonomía de las nacionalidades oprimidas y esperan su destino histórico con poses no menos caudillistas que las capas medias de derecha.

En las relaciones horizontales, a través de los centros de investigación, universidades y partidos, -los partidos de izquierda institucional- desarrollan una política clientelar que más tarde se extiende a los municipios y el parlamento. Sus relaciones son de competencia intelectual y en su europeísta racionalidad procuran deslindarse de la "irracional" violencia popular. Admiran la música mestiza indígena criolla y respetan la arcadía colonial. Su ambigüedad y oportunismo vergonzante

les impiden adoptar plenamente la clásica politicidad criolla, lo cual les resta posibilidades en la competencia.

Las capas medias de derecha saben tejer las formas de participación política de la dependencia personal, como también la democracia liberal, la politicidad transicional híbrida y compleja, que resultan de las relaciones sociales de producción. Comprenden que viven en la transición hacia la institucionalización del poder en todo el país. El patrimonialismo tradicional se conjunta con el caudillismo militar, donde las Fuerzas Armadas se resisten a dejar de ser una fuerza corporativa por encima de la sociedad.

Adaptan con más facilidad -por su falta de escrúpulos- la política personal caudillista y la política del cacique y clientelar con una cubierta partidaria.

Sin embargo no todo es color de rosa para ellos. La sensualidad de la beatitud, que en un primer momento acerca a humildes creyentes y la simpatía femenina, más tarde aparecerá con farisea hipocresía.

Del mismo modo, para conseguir a como de lugar sus objetivos, son permeables a un acercamiento con la delincuencia y la ejecución permanentemente de actos de corrupción pública.

La politicidad criolla tiene una "marca colonial que devalúa todo lo propio para sobrevalorar lo extranjero", con ello modernizan la politicidad retomando los modelos

europeo y norteamericano. Ortega habla de subculturas y anota:

En nuestro país la subcultura de la clase dominante basó su hegemonía en la ideología de un Estado ilegítimo, identificó, por lo mismo, su jerarquía dependiente con la subcultura nacional dominante. Para ello requería negar a las subculturas nativas, todo proyecto social que no fuera el de una integración etnocida (151).

3. PARTICIPACION ELECTORAL E IDEOLOGIA DE LA VIOLENCIA EN PERU.

Parece innegable que las elecciones 1) se instrumentan con el objetivo fundamental de legitimar el sistema político, el régimen de acumulación y la gestión gubernamental 2) no expresan la soberanía popular, sino la de las clases dominantes y 3) son un instrumento de alineación política, que oscurece las relaciones sociales y particularmente la lucha de clases y 4) sirven para ordenar el conflicto permanente e irreconciliable y encausar la vida política de las masas; no obstante debemos partir de reconocer que la consolidación del capitalismo y de la

(151) Julio Ortega, La cultura peruana, FCE, México.

ciudadanía son requisitos para atomizar la sociedad mediante el proceso electoral a través del voto, como acto político supremo en la concepción ideológica liberal. Al no contar el Perú con esta tradición por la ausencia de condiciones -dominio de la ley del valor y la ciudadanía- y más bien aparecer como un espacio donde lo dominante es el ejercicio de la coerción, el proceso electoral no tuvo -ni tiene- alguna significación general.

Los protagonistas, desde los años sesenta, son los sectores medios de la sociedad, que al igual como en 1961 definieron las elecciones presidenciales por el APRA, en 1963 lo hicieron por AP, tres lustros después se repite como comedia: en la constituyente de 1978 por el APRA y en 1980 por AP.

En 1985, -esta vez como tragedia- dieron nuevamente su preferencia por el APRA (48%), con expectativas en el mejoramiento de sus niveles de ingreso y estabilidad política.

La historia del Perú en su dimensión estatal es la historia de la violencia, de las fuerzas armadas y de la oligarquía, de sus formas exclusivistas y coactivas de gobernar. El ingreso de la burguesía y los sectores medios no altera sino refrenda este comportamiento. La profundidad histórica del autoritarismo y de la ideología oligárquica: liberal y racista, han penetrado hasta las entrañas de la sociedad y los sectores medios no han podido quedar fuera de

ello, incluyendo -obviamente- a "izquierda unida".

La fuerza es la función estatal que ha predominado en la opresión y subordinación de las mayorías nacionales que hoy pretenden "peruanizar el Perú". La exclusión de las masas populares de la participación representativa tiene su origen en la "semifeudalidad", la discriminación étnica y la ausencia popular y campesina en los partidos.

La historia de la exclusión de las masas de la democracia liberal, tampoco puede ser solucionada por su inclusión segmentaria en el sufragio.

Las elecciones en el Perú de este último cuarto de siglo sólo se pueden contextualizar en la estrategia contrainsurgente establecida en 1961 por las fuerzas armadas contra el FIR-ELN y en 1965 en oposición al FIR y al MIR.

Este tipo de "democracia" no es nuevo, es producto de la historia política de las estructuras económico sociales y del desarrollo cultural y étnico del Perú, en los que la coerción y la fuerza son los instrumentos básicos del dominio y poder de las clases hegemónicas.

Desde 1821 has 1895, en que se instaura el régimen oligárquico, el Estado semifeudal y semicolonial estuvo la mayor parte del periodo bajo la dirección omnimoda de las fuerzas armadas. Posteriormente entre 1895-1968 sólo dos regimenes son elegidos al modo representativo:

Bustamante (1945-1948) y Belaunde en su primer Gobierno (1963-1968), 9 regimenes fueron oligárquicos "elegidos" en condiciones autoritarias y seis fueron impuestos por Golpes de Estado.

Los fundamentos y cimientos del orden establecido son la violencia y el autoritarismo del Estado por un lado y la espontaneidad, la concepción mítica del Estado y el sentido común de las masas, por el otro. Mientras que en las clases hegemónicas hay intereses comunes en torno a proyectos de contenido antinacional entre las masas subalternas los intereses son disimiles y sin proyecto de unidad. Esto es consecuencia del reducido intercambio -por la escasa división social del trabajo- que se expresa en la ausencia de medios de comunicación y el consenso pasivo (152).

Los intelectuales orgánicos de la oligarquía contribuyen a desintegrar la base material y la conciencia de la sociedad, con su ideología colonial, clerical, conservadora y racista.

No pueden ofrecer participación del excedente a las masas populares sin alterar sus inestables beneficios. De este modo el Estado se circunscribe a reproducir el mismo viejo orden social patriarcal corporativo.

Algunos datos de López ilustran el carácter básicamente coactivo del Estado, en detrimento de sus funciones administrativas y el consenso: a) En 1905 en

(152) Sinesio López, Revista de Sociología ed. UNAM, México, 1978.

Lima -capital del país- sólo habían 500 empleados públicos, b) En 1920, el único ministerio administrativo es el de fomento, c) Desde 1902 hasta 1956, el presupuesto militar no bajó del 17.59%, d) Recién en 1930 se crea el Ministerio de Educación, e) En 1963 el 22.44% de la población total tiene derecho a voto; antes, en 1931 el porcentaje ascendía al 7.4% (153).

El desarrollo del capitalismo, la ampliación de crecimiento de las clases medias y los correspondientes enfrentamientos políticos democráticos los que en la capital ampliaron la ciudadanía mientras que en las áreas donde estos fenómenos no se verifican el sufragio es insignificante e intrascendente, v.gr.: En 1963 en Apurímac la población votante fue el 6.4%, en Ayacucho el 8.3% y en Huancavelica 8% (Lissa North, citada por López (154)).

Asimismo, la subordinación real del parlamento al ejecutivo es el otro elemento que permite el predominio de la violencia sobre el consenso. Como sostiene Tocqueville acerca del antiguo régimen francés, la burguesía urbana se asocia a la aristocracia para privar al pueblo del ejercicio de sus derechos políticos. Para la izquierda, como para la derecha, la democracia se reduce a las elecciones competitivas donde participa la población ciudadana.

Las elecciones en Perú, conservan el orden jerárquico feudal que ofrece a los más instruidos o poderosos un segmento de la dirección política del Estado a

(153) Ibid., pp. 1000-1001.

(154) Ibid., p. 1006.

través de la manipulación de la voluntad popular. La supremacía ideológica del momento define las simpatías por los políticos profesionales que se hacen elegir en los cánones jurídico-institucionales de una democracia semiliberal y pluralista sustentada en la opresión cultural y económica, donde en ningún caso el sufragio compromete el poder del Estado que está por encima de la ciudadanía o de los partidos representativos.

4. LAS CAPAS MEDIAS Y LA POLITICA.

La capa intermedia -blanca o semiblanca- decidió incorporarse a la causa de quienes por el origen y el tono de la piel se le ocurrieron sus semejantes, para conseguir lo cual lo único que le hacía falta era el dinero. Y el dinero, en este caso más que en ningún otro, sólo podía otorgarlo la explotación. Entonces, como ahora, la delgada capa media eligió la función de auxiliar de la burguesía aristocrática.

Sebastian Salazar Bondy, Lima la Horrible.

Desde los años treinta, las capas medias de la sociedad ingresaron a la política. Empero, sólo tres décadas después -cuando el proletariado y el campesinado también lo hacen junto a ellas-, en relevantes y masivos movimientos sociales y con perfiles de proyectos políticos más claros, aquellos sectores ubicados entre las clases dominantes y las clases productoras adquieren verdadera

importancia como mediadores de unas a otras.

El entrabamiento del desarrollo, la larga transición y la transnacionalización de la economía generan un amplio sector terciario (comercio y servicios) y subsecundario (informal, artesanía y pequeña industria), con proclividad a las crisis y al empobrecimiento de la mayoría de ellos.

De acuerdo con un sociólogo peruano, constituyen aproximadamente el 40% de la PEA de 1972 y el 25% del ingreso nacional de 1976 (155).

Este autor recoge tres rasgos que caracterizan a las capas medias:

1) Dentro de los pequeños propietarios existe la diferenciación entre los sectores urbanos y rurales, donde los últimos, por inclinación se empobrecen más. Entre ellos se puede distinguir tres capas: a) los acomodados, que explotando fuerza de trabajo logran tal excedente que se convierten en medianos propietarios; b) una capa media que no acumula excedentes por su fragilidad ante los ciclos de la crisis, y c) los pequeños propietarios pobres que por sus ingresos insuficientes deben vender su fuerza de trabajo.

2. La expansión de la educación superior y el desarrollo capitalista otorgan más peso a los profesionales y técnicos, y dentro del primer grupo a las profesiones técnicas. Surgen nuevas profesiones y crecen los

profesionales asalariados, que son afectados -como todos los asalariados- por la crisis y la desocupación. Aparece una capa tecnoburocrática dentro del aparato estatal que crece considerablemente con la implementación de programas desarrollistas. Formados en la universidad privada o en el extranjero, algunas veces se convierten en opositores al Estado con una perspectiva democrática; igual que entre los pequeños propietarios, un grupo minoritario sirve directamente a las clases dominantes.

Otro sector -en gran medida producido por la universidad estatal o privada masificada, por normales o academias y otros centros de educación de masas- ante un futuro incierto cobra mayor radicalidad.

3. Los asalariados no productivos se ubican en la burocracia, el comercio y los servicios. Su proletarianización está en relación al trabajador productivo, con él se pauperizan cada vez más y adquieren mayor independencia del Estado en cuanto avanza la crisis.

Desde sus inicios -fines de los años veinte-, el APRA se asienta en la desintegración de los terratenientes, en las viejas profesiones liberales, la empleocracia y los pequeños propietarios.

Después de 30 años, ante la diferenciación de estos sectores, el empobrecimiento de los productores, los cambios en el programa aprista y la inserción del APRA en el sistema oligárquico, grupos de militantes y simpatizantes retornan a las posiciones democratistas anteriores (e

incluso algunos sectores optan por seguir la experiencia cubana).

En ese mismo periodo el Partido Comunista surge de los intelectuales más avanzados de las capas medias y de los sectores más avanzados de las clases productoras, con la pretensión de organizar autónomamente a los trabajadores indentificados tanto étnica como clasistamente.

La excesiva centralización de la Tercera Internacional y sus negativas consecuencias sobre la dirección comunista, los cambios ideológicos internos, las modificaciones en la correlación de clases y las mutaciones en las capas medias favorecerán el desarrollo del oportunismo y las desviaciones.

Treinta años después, el auge de la lucha de clases actualiza el debate acerca del problema del poder asociado a la violencia y el Estado. Y las nuevas capas medias tecnoburocráticas profesionales promueven desde la segunda mitad de los años cincuenta, la necesidad de empujar el desarrollo capitalista, organizándose para ello en partidos como Acción Popular, la Democracia Cristiana y el Partido Social Progresista, que siguen los paradigmas políticos de los países centrales y bajo la influencia de la naciente aristocracia industrial.

La orientación reformista atraviesa al conjunto de la sociedad incluyendo sectores de la Iglesia y de las Fuerzas Armadas. En el golpe militar del 1961 confluyen

estas tendencias frente a un APRA oligárquico. Las Fuerzas Armadas optan por Acción Popular y los dejan gobernar entre 1963-1968. Cuando constatan su fracaso frente a la oligarquía reaparecen mediante un "golpe de Estado".

Al impulsar el capitalismo y la modernización estatal el Gobierno Militar de 1968-1975, no sólo crea a sus propios sepultureros, sino que posibilita la reaparición de las grandes contradicciones históricas del país.

Al promediar la siguiente década se cierra la opción industrialista al ritmo de avance de la crisis mundial capitalista y la reconversión económica.

Con Velasco Alvarado las clases trabajadoras y las capas medias se fragmentan: las marginadas y empobrecidas mantienen su autonomía, mientras que otro sector se desliza a la derecha mediante su articulación con el Estado. Pero estas tendencias, opciones y deslizamientos sociales tienen una base más profunda de la que surgen las clases con una determinada marca.

Se trata de la sociedad de castas que no ha desaparecido y que define, por un lado, a la modernizada aristocracia que domina la política criolla de derecha e izquierda; por el otro, los indios despojados y "mestizos" sin esperanza que emergen a la política de los trabajadores, el "cholo de mierda", el "serrano sucio", el "negro bruto", el "chino tísico" (Salazar Bondy). Sin embargo la división no es lineal: la aristocracia, mediante la politicidad

criolla, se ha acercado al pueblo desde diversos ángulos y las masas alienadas han hecho lo propio como mecanismo de sobrevivencia y escalamiento social.

En este contexto, la marginación y el empobrecimiento están vinculados a la proletarización vía salario de los sectores técnico-profesionales, el estancamiento del pequeño comercio cada vez más extenso, la inestabilidad cíclica de los pequeños propietarios y el desempleo, que proveen de clientela y militancia a la izquierda reformista integrada al sistema y, en parte, a los más radicales sectores anticapitalistas (Comandos Revolucionarios del Pueblo, CRP, MRTA, PC-SL y P.LL).

Las capas medias propietarias, técnicos y profesionales de altos ingresos estabilizados en los sectores público y privado, se orientan y oscilan en la tecnoburocracia liberal sin actividad política partidaria: son sostenes políticos de la burguesía y el sistema o gestores de los intereses burgueses. Posiciones ultraliberales como AP-PPC, liberales estatistas como el APRA, o estatistas-parlamentaristas como IU, son variaciones de un mismo proyecto burgués cuya viabilidad está en función de la estructura económica y la lucha de clases.

La izquierda se define más por su origen étnico y por su relación con la sociedad de castas, que propiamente por su asociación con las capas medias. Existe una izquierda de "mistis" (blancos), descendientes de

terratenientes, grandes burgueses costeños, funcionarios y militares que por su educación se han intelectualizado y viven de sus rentas, utilidades y conocimientos. Coptándolos, ellos han atraído tras sí a los intelectuales vinculados por su origen a las capas medias y que no tienen otra posibilidad laboral que la que les permite su capacidad intelectual o cultural.

Otro sector -mestizo y más vinculado a las capas medias conocidas como pequeña burguesía: estudiantes, maestros, comerciantes, pequeños productores campesinos y artesanos, policía...- sin posibilidades de mejor status inmediato, e indefinido en su relación con las clases básicas, está cada vez más cerca del proletariado. Los grupos radicales de izquierda de ambos sectores en la década de los setenta se vuelcan sobre los trabajadores del campo y la ciudad.

Ricardo Letts (156) sostiene que las 20 organizaciones con posibilidades políticas por su presencia, que comparten a Marx, Engels, Lenin y Mariátegui -diferenciándose por su adscripción a Trotski, a la URSS, a Cuba y Stalin-Mao-, a fines de 1975 tienen cuatro troncos básicos: el PCP, Vanguardia Revolucionaria (que proviene de Acción Popular), el MIR (de origen Aprista) y el Frente de Izquierda Revolucionario, de orientación trotskista.

El PCP reinicia sus divisiones en 1963 cuando surge el Frente de Liberación Nacional, continúa en 1964 con

(156) Ricardo Letts Colmenares, La izquierda peruana, organizaciones y tendencias, Mosca Azul, Editores, Lima.

el PCP-Bandera Roja, en 1969 el PCP-Patria Roja (PR), en 1970 el PCP-SL y en 1971 el PCP-Estrella Roja. Vanguardia Revolucionaria, que nace en 1965, sufre escisiones desde 1970 con la Tendencia Obrera Revolucionaria (TOR), en 1971 VR-Político Militar y el Partido Obrero Marxista Revolucionario (POMR), en 1974 el Partido Comunista Revolucionario y en 1975 Vanguardia Revolucionaria el Proletario Comunista. El MIR y el FIR también se atomizan y en sucesivas reapariciones y redefiniciones buelven a la vida política.

Estas son las divisiones más relevantes de las que surgen agrupaciones con alguna o bastante significación política en la vida del Perú de hoy.

En 1980 E. Muñoz G. (157) comprueba la existencia de 46 organizaciones políticas de izquierda que pertenecen al lustro 1970-1980, la mayoría de las cuales derivan de las 20 primeras o son aquellas que por su pequeñez no aparecieron en el primer listado de Letts.

Por su parte, la derecha contaba con 16 partidos, de los cuales sólo tres tenían participación destacada en la vida política: APRA, AP y PPC.

Antes de este recuento de Muñoz, en 1978 Letts había tomado en cuenta 34 organizaciones políticas de la izquierda organizada agrupadas en cuatro "constelaciones": la del PC, cinco; VR, ocho; MIR, ocho; y el trotskismo, siete. El cuadro se completa con "otros cuerpos celestes",

(157) E. Muñoz G., Los partidos políticos en el Perú, (folleto), Lima, 1980.

que contaban con seis, varios de ellos de origen definitivamente burgués: dos provenían de AP, una de la Democracia Cristiana y una del velasquismo.

En 1980 este universo de la izquierda se había reagrupado en ocho fuerzas políticas:

1. La Unidad de Izquierda, que integra a las fuerzas prosoviéticas (PSR, PC-U, MIR, COR, MCP).

2. El Partido Revolucionario de los Trabajadores, frente trotskista que agrupa al PRT, PST y al POM-R.

3. La Unión Democrática Popular (UDP), que aglutina lo que se denominó la "nueva izquierda" de acelerado acercamiento al euro-comunismo y a la socialdemocracia, pero que alberga tendencias prosoviéticas, prochinas y radicales de izquierda. En ella están representados el MIR, VR-EP, PCP-M, PSR-ML, VR-PM, el PCR-TR y el PVR.

4. La Unidad de Izquierda Revolucionaria (UNIR), hegemonizada por el PC del P-Patria Roja, cuya dirección del maoísmo deviene social-demócrata y asimila al FLN y al MIR-Perú.

5. El FOCEP, frente reformista de origen aprista y de la izquierda provinciana del centro del Perú.

Por último las fuerzas nacionalistas burguesas como APS, FNTC y PSP.

Esta es la superficie de la izquierda. Su

contraparte se sumerge en las profundidades de la vida política y su origen deriva del mismo tronco común de donde destacan los maoístas del PC, VR y el MIR.

En la década 1968-1979 la lucha de las masas va definiendo un espacio político que se puede dividir en dos. Uno, asociado al sistema político y al Estado, y otro a la violencia política revolucionaria. Uno surge de las agrupaciones sociales más estables y normadas, y el otro de la desestructuración social. Es lo que veremos en el siguiente capítulo.

CAPITULO V. CONFORMACION DEL ESPACIO POLITICO DE LA VIOLENCIA Y APERTURA DE LA LUCHA ETNICO-CLASISTA.

I. REFORMISMO Y LUCHA DE CLASES 1968-1975

Tiene que empezar por crearse el punto de partida revolucionario, la situación, las relaciones, las condiciones, sin las cuales no adquiere un carácter serio la Revolución moderna.

K. Marx. El 18 brumario de Luis Bonaparte.

Los movimientos sociales vistos como instrumentos de mediación entre los poderes actuales y emergentes son fundamentalmente populares. La lucha de clases se expresa bajo diversas formas, complicando las relaciones sociales y las diversas formas de enfrentamiento contra la opresión y la explotación, y por la sobrevivencia y la identidad.

Los movimientos sociales reflejan la complejidad de la sociedad peruana y sus procesos económicos, sociales, políticos y culturales. Se traslapan con la etnicidad y le otorgan fuerza e identidad, atravesando varias clases sociales. Tienen un contenido a la vez solidario y conflictivo, cooperativista y competitivo. Localidad, comunidad, región, residencia, ocupación, estratificación, raza lenguaje, etnicidad, sexo, generación, son elementos de dominación y liberación. La economía y sus crisis agudizan todas las contradicciones de modo aislado o combinado,

colocando en primer plano la lucha por la protección y defensa, por la sobrevivencia.

Las fuerzas económicas incontrolables por parte del Estado y sus instituciones, por el proceso político o el régimen, imponen su implacable lógica sobre el pueblo, que percibe la necesidad de independizarse del Estado y del sistema político, aún cuando cada vez son mayores sus reivindicaciones contra el Estado.

Contra la tendencia natural al aislamiento entre movimientos sociales, y el propiciado por el Estado y las fuerzas políticas, el PC del P impulsó los distintos movimientos: de mujeres, intelectuales, obreros, campesinos, regional, magistral... tras un proyecto global de poder.

La heterogeneidad de una abigarrada sociedad como el Perú producirá diversas y complejas prácticas sociales.

En los movimientos sociales, muchas de ellas se ocultan al observador más atento, excepto cuando se trata de procesos político-coyunturales. Es el caso de la resistencia étnico-clasista, cuya predisposición a la lucha como parte de una oposición permanente surge de la historia real y potencial y como posibilidad concreta.

Un proceso revolucionario despierta inmensas energías y conciencia revolucionarias. Se expresa en levantamientos y rebeliones que hacen aparecer un fondo acumulativo de cultura política, la cual se ha ido adquiriendo por sucesivas filtraciones como emanaciones

étnicas y campesinas y se opone a la politicidad criolla que surge de la aristocracia.

Sabemos que la concreción de un proyecto revolucionario requiere de la configuración de una organización política con independencia del Estado, sustentada en autonomía ideológica, cultural teórica y material. La independencia del Estado depende de una fuerza social estable que responde a una dirección al margen de ese Estado, de ahí que el logro de la autonomía material esté asociado a la clase y a una teoría que logre explicar la especificidad de la realidad a transformarse.

Combinar estos elementos en un nuevo "sentido común" y en renovados espacios de enfrentamiento presupone acumulación y sistematización de experiencias unitarias. Ellas comienzan a forjarse en el periodo reformista de 1968-1975, al reaparecer los problemas históricos sustanciales del país y despertar en las clases progresistas recuerdos e iniciativas en torno al problema nacional.

Ocurre que los ejes de generación del excedente no corresponden a los viejos y nuevos núcleos potencialmente revolucionarios. Estructurables sobre la alianza obrero-campesina, las masas de hoy no son asimilables a lo gremial, ni a aquellos sectores sociales. Las clases subalternas traen consigo una historia dispersa en el tiempo y el espacio por el carácter de sus luchas, sin embargo todas tienen un pasado lleno de experiencias recuperables.

Nacionalmente el campesinado (40% de la población de acuerdo con García Sayán -1978-) (158) y los pobladores de las "barriadas", como fuerzas del pasado y del momento presente, son parte de una misma tradición popular a pesar de sus diferencias y divergencias culturales.

Antes de las reformas de 1968-1975 la población migrante había ya sobrepasado el modelo de acumulación y emergencia con su sola presencia como una amenaza para el orden social: 50% adecuadamente empleado (Dir. de Empleo, 1968) y el 34% empleado en los sectores comercio y servicios (Dir. de Empleo, 1972). De la historia surgen y se concretan bajo nuevas formas los mismos sujetos contendientes.

La década de 1956 a 1965 ve ingresar el campesinado a la escena política; acompañando primero al proletariado y después solo. También lo hacen los trabajadores del Estado y los pobladores. Desde un inicio enarbolan la "independencia política" como principio de la lucha de clases.

El fracaso de las guerrillas de 1965 es educativo y deja las puertas abiertas a nuevos combates, en parte encabezados por los maoístas-mariateguistas, quienes emprenden una ruptura ideológica que durará más de una década.

Las diversas condiciones de vida y de producción, el control del Estado y de la sociedad por las Fuerzas Armadas, y la constitución de clases sociales, determinan la

(158) Diego García Sayán, Las tomas de tierras en el Perú, Desco, Lima, 1978.

naturaleza de los movimientos sociales.

En 1972 las clases trabajadoras se distribuían aproximadamente así como se muestra en el cuadro.

Trabajadores	número	% de la PEA
Obreros	889.507	23,1
Agrícolas	311.529	8,2
No agrícolas	568.978	15,0
Campesinos	1.200.000	37,6
Empleados	750.000	19,8
Trabajadores Independientes		
no agrícolas	600.791	15,8
Trabajadores domésticos	122.246	3,7

Fuente: Censo de Población, 1972.

Desde 1968 el Estado se va centralizando: no sólo ordena y articula la sociedad, sino que modifica las condiciones clasistas de enfrentamiento. Los campesinos, obreros, pobladores, desempleados, empleocracia y burguesía reabsorben el problema nacional y modifican sus organizaciones y expectativas en el marco del reformismo y sus conflictivos límites.

Lo económico corporativo y la neutralización economicista dejan paso al accionar político y, con él, a la imaginación popular del poder. El movimiento popular se colectiviza y se identifica en el propio movimiento social

como proceso objetivo y al margen de las propias direcciones y del movimiento obrero liderado por la pequeña burguesía y la burguesía.

Al inicio (1968-1969), y ante el impacto del desconcertante reformismo militar, surgen movimientos espontáneos: en 1972 se reactiva el movimiento sindical, los campesinos presionan por la tierra y el movimiento popular muestra su ambigüedad.

En los años 1973-1974, con la crisis económica y el agotamiento de las reformas, surgen corrientes autonomistas animadas por la imposición corporativa. De las masacres de Huanta y Cospán de 1969 irrumpen los movimientos independientes estudiantil y magisterial. De la represión y derrota de Andahuaylas (1974) nace la radicalización del campesinado.

La cultura nacional popular y sus formas de expresión en la prensa, lengua, arte, las nuevas formas de lucha colectiva y frentista, la resignificación de los espacios conflictivos, eran aspectos de la lucha de clases conducidos al copamiento de la sociedad y a su lenta legitimación.

La izquierda y la violencia entran a conformar parte de la historia "clasista" del movimiento popular.

Desde 1971 el movimiento social comienza a sobrepasar los límites del conflicto y a suscitar una

respuesta corporativa. En menos de dos años se crean el Sistema Nacional de Movilización Social (SINAMOS, julio de 1971), la Confederación Nacional Agraria (CNA, 1972), la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP, diciembre de 1972) y la Confederación Nacional de Comunidades Industriales (CNCI, febrero de 1973).

Los sindicatos, comunidades y partidos progresistas cumplen la responsabilidad contestataria, fortaleciendo indirectamente al clasismo. Mientras, el reformismo de izquierda castra el potencial de lucha y aliena a los trabajadores en su sentido de creación revolucionaria. La apertura de la crisis económica rasga las vestiduras estatales, impulsa a los trabajadores al movimiento huelguístico, expande las tomas de tierras, generaliza el conflicto regional-popular, integra las luchas sectoriales y lo nacional-popular se convierte en el hecho protagónico incluso dentro de lo corporativo y bajo la égida de la izquierda reformista, destacando el movimiento magisterial y estudiantil por su radicalización).

Los sectores prosoviéticos dentro del Estado y los filo-norteamericanos -incluyendo al APRA- expresan su conflicto en los marcos del reformismo participativo y del corporativismo. Los primeros, con los objetivos más definidos de vincular el gobierno a la URSS, deciden los espacios de enfrentamiento: la Confederación Nacional de Comunidades Industriales, el Movimiento Laboral

Revolucionario y la CNA (tomas de tierras tan coyunturales que despues no trascienden por la ausencia de un real sentido politizador).

La disgregación social tenia otro eje histórico de articulación. Se perfilan cuatro tendencias en el movimiento social: a) la "clasista", expresada en el Comité de Centralización y Unificación Sindical Clasista (CCUSC) y la Confederación Campesina del Perú (CCP); b) la Confederación General de Trabajadores del Perú, que obedeciendo a las aspiraciones soviéticas buscan un equilibrio que beneficie a la URSS; c) las que apoyan al Estado corporativista, y d) las revolucionarias.

Esta última corriente aparentemente presenciaba los cambios sociales y las luchas acusando al régimen de fascista. Su participación obrera, campesina, magistral, estudiantil y barrial aparecía soterrada por una superficie reformista. Sin embargo asimilaban críticamente el proceso y los elementos que surgían del proceso reformista como: nuevos sectores movilizables, la rearticulación urbano-rural, revaloración étnica, aspiraciones colectivas y la violencia. Se preocupaban por la ruptura con el pasado y su parcial recuperación con legitimidad a través de la reafirmación de su concepción del problema nacional y sus aspectos étnico-clasistas; también por la necesaria autonomía ideológica, teórica y material, y la reinserción de las masas en lo político. No sólo recobran prácticas

sino también identidad popular, desalienación, autorreflexión, capacidad de crítica, identificación de enemigos y descubrimiento de sus capacidades de alcanzar el poder.

El "clasismo", con su prédica de tomar distancia del gobierno y del obrerismo reformistas de la CGTP, no salió del marco económico corporativo y logró transformarse en vanguardia del radicalismo obrero entre 1976-1980.

La clase gremialmente organizada -que entre 1977-1979 participa en cinco paros nacionales- vota en 1978-1980 por la izquierda, asimilando nuevamente el "clasismo" al proyecto político evolucionista electoral.

El reformismo se subordinaba a lo ocasional y espontáneo, al movimiento de masas indiferenciadas por su perfil político, desaprovechando políticamente las coyunturas de crisis y los avances del movimiento popular en la escena política, así como de las clases que se convierten en sujetos políticos.

Hasta 1980 la historia social popular no traspasa la protesta, la consigna pragmática, la conciencia espontánea. Son hechos coyunturales de huelgas, tomas de tierras, enfrentamientos, levantamientos, motines, revueltas disgregados y sin continuidad. No había un proyecto político encarnado en sujetos que se confrontaran; solo eran idearios y discursos subversivos sin la fuerza de una praxis que le diera el carácter de posibilidad concreta.

II. CRISIS ORGANICA Y MOVIMIENTO SOCIAL

La renovación ideológica y gremial de los sectores populares va asociada al recrudecimiento de las contradicciones campo-ciudad, agricultura-industria, costa-sierra que tienen su base en la conflictividad interna del campo y de la ciudad. En el centro de estas contradicciones está el problema agrario, del indio y de la tierra, que se sintetizan en el problema campesino. Mediados por la desintegración y las migraciones aparecen otros problemas no menos centrales: el desempleo, la pobreza y la crisis social en las ciudades.

Las clases dominantes se ven imposibilitadas de resolver ambos nudos problemáticos y aparecen situaciones de ingobernabilidad. Su naturaleza de clase y el carácter colonial de su politicidad facilitan el rápido desborde de la institucionalidad urbana y rural. Más grave todavía si consideramos que ni en las barriadas ni en el campo existen formas institucionales de control y consenso políticos.

Están sentadas las bases para una crisis revolucionaria cuyo desarrollo depende del accionar de las fuerzas insurgentes. Es una crisis en el régimen de acumulación y en el régimen político, incluyéndo aspectos sociales, étnicos, ideológicos, nacionales y culturales conformando un inmenso y multifacético paralelogramo de fuerzas en conflicto.

Los cambios socio-políticos que se inscriben en

las reformas de 1968-1975 contribuyen al despertar de la conciencia revolucionaria, a la agudización de la crisis, a la andinización del país y al aumento del desempleo y pauperización, marcando así las posibilidades y límites del desarrollo de una ideología transformadora.

Las reformas y las crisis se desenvuelven reconstituyendo las agrupaciones sociales en torno al problema de la tierra, a la hiperurbanización, el desempleo y la pauperización. Elementos estructurales y coyunturales coinciden en el despertar de la lucha étnico-clasista (*) y en la definición de una situación revolucionaria. Los movimientos sociales abarcan las grandes esferas de la vida social, que encuentran una base de unificación en el proyecto étnico-nacional (**) interpretado y violentamente concretado en la lucha por el poder que impulsa el Partido Comunista del Perú.

(*) Aludimos ambas categorías. Esto es, la direccionalidad de intereses clasistas (que se diferencian por el lugar que ocupan en las relaciones de producción y la forma de mediación de la sociedad con el Estado) está permeada por un sustrato étnico no necesariamente explícito. En la lucha popular se expresa la solidaridad comunitaria y los intereses colectivos de diferentes sectores del pueblo que pugnan por el derecho a sobrevivir, a su identidad, a su organización política y a la soberanía popular. El escaso desarrollo permite que importantes agrupaciones clasistas contengan directamente como clases políticas oponiéndose a las mediaciones.

(**) Proyecto político que expresa la vocación a la libre determinación -decidir su propio destino- de pueblos, naciones, etnias y grupos nacionales, de características heterogéneas. La construcción de la nación tiene como elemento esencial el problema étnico -más aún si se trata de comunidades mayoritarias- e incluye la lucha por la independencia económica, la democratización de la sociedad, el ejercicio de la soberanía popular y las demandas de las mayorías populares.

No obstante, son 25 años de efervescencia social, de agudización de la lucha de clases.

En un contexto de crisis estructural se dan importantes pero insuficientes cambios sociopolíticos.

Los años que van de 1956 a 1968 son de ascenso del movimiento social de masas, que lo hace al ritmo del crecimiento del capitalismo y de las crisis económicas (en especial las de 1958 y 1967-1968).

Beltrán y la oligarquía en su conjunto exigen la vuelta al Estado de derecho y se producen las elecciones de 1956 con ausencia de las candidaturas aprista y comunista, pero con el apoyo de los primeros a Prado, cuyo triunfo da inicio a la convivencia APRA-Oligarquía.

Esta colusión de fuerzas políticas con la oligarquía impulsa la aparición de nuevas posiciones reformistas: Acción Popular, Democracia Cristiana y Movimiento Social Progresista. Frente al conservadurismo de La Prensa aparece El Comercio con planteamientos de reforma, que también se incubaban en el ejército y la iglesia.

La convivencia con la oligarquía le costó al APRA la pérdida de su hegemonía sobre el movimiento obrero y la disidencia.

El PC que le seguía los pasos al APRA sufre también una importante escisión.

El campo y la ciudad entran en ebullición; en la ciudad porque en 1959 se promulga la ley de Promoción

Industrial que liberaba el paso de importación de equipos, iniciándose la segunda etapa de sustitución de importaciones: bienes duraderos, insumos intermedios no duraderos con tecnología compleja. Crece el proletariado y sus luchas.

En este periodo se encuentran los gérmenes de reconstrucción del movimiento clasista. En 1966 se conforma el Comité de Defensa y Unificación Sindical (CDUS) que en 1968 se transforma en la CGTP.

En la década del cincuenta los gamonales en el campo comienzan a modernizarse, al tiempo que los campesinos se movilizan teniendo su punto más alto -como ya lo vimos- entre 1958 y 1965.

Se inicia la autonomización del poder indigena. Esto es así porque los hacendados usaron la racionalidad del sistema de organización del poder político andino para conformar su dominio utilizando los "varas" o "varayoc" (alcaldes indígenas) para institucionalizar la dominación política gamonalista (estructura patriarcal que inmovilizaba el campesinado).

Estos hechos expresan la tendencia evolutiva hacia el cambio de la hacienda, donde en muchos casos los campesinos prefieren transformarla en comunidad.

Crece las relaciones de reciprocidad entre feudatarios de hacienda y los comuneros. En la hacienda coexisten la estructura jerárquica de la hacienda y la

estructura de reciprocidad de la comunidad.

El sistema político evolucionaba al margen de la lucha de masas y en 1961, de los tres candidatos "ninguno obtuvo la mayoría necesaria", produciéndose el primer golpe de Estado institucional de las Fuerzas Armadas ante la inminente alianza APRA-UNO (Odría).

El movimiento campesino es reprimido y se hace la reforma agraria en las zonas convulsivas. Las diferencias dentro de las Fuerzas Armadas llevan a nuevas elecciones en 1963, en las que triunfan, con el consentimiento de las Fuerzas Armadas, las fuerzas reformistas representadas por Acción Popular.

El parlamento en manos de la convivencia APRA-UNO pro-oligárquica se opondrá a toda reforma propuesta por la alianza AP-DC (coalición que se mostraba inoperante). Todas las fuerzas políticas se escinden, mientras que el APRA, después de conseguir cinco cambios de gabinete por presión permanente, logra participar en él. Las Fuerzas Armadas, ante la estabilización oligárquica y aprovechando la corrupción con consignas de reforma agraria y estatización del petróleo, dan el segundo golpe de Estado institucional.

Este nuevo gobierno significó el debilitamiento del neogamonalismo, mayor centralización estatal, integración territorial, intensificación del control estatal, participación en la economía y otros hechos que no logran resolver el problema de la tierra y menos el

nacional.

La contradicción entre regionalismo y centralismo, que estaba bloqueada, reaparece como movimiento popular regional.

La gran burguesía cumple la función intermediaria entre el imperialismo y la sociedad, reemplazando las formas oligárquicas de base agraria. Pero esto no significaba que los terratenientes o exterratenientes dejaran de usufructuar la renta agraria.

Se establece un régimen de seguridad nacional y desarrollo que fortalece el Estado, pretendiendo hacer de él un organismo moderno de base social en el campo y la ciudad. Se divide el proletariado en varias organizaciones gremiales: el gobierno en 1968 reconoce a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP); en 1970 auspicia la Confederación Nacional de Trabajadores demócrata cristiana (CNT), y en 1972 la Central de Trabajadores de la Revolución Peruana (CTRP).

En el campo se permite la reconstitución de la Confederación Campesina del Perú (CCP) y el Estado crea directamente la Confederación Nacional Agraria (CNA).

En 1973 confluyen los movimientos obrero, popular y magisterial con el movimiento campesino por la profundización de la reforma agraria.

En 1974, con el desarrollo de la crisis y el consecuente auge de la lucha de masas, se crea el Comité de

Coordinación y Unificación Sindical Clasista (CCUSC) como intento de centralización clasista que poco más tarde es liquidado por el grupo pro-chino conocido como "Patria Roja".

Según Dennis Sulmont, en 1975 entran en huelga 600 000 trabajadores (el equivalente al total de obreros sindicalizados en la fecha (159)). El 5 de febrero de 1975 la huelga de la Guardia Civil muestra la fragilidad estatal y la potencialidad de las masas pauperizadas de la capital.

En agosto de 1975 la política económica deja de ser orientada por el coporativismo reformista para ser dirigida por el FMI. La crisis económica, la declinación del corporativismo y la creciente represión, las luchas intraburguesas y el ascenso del movimiento independiente son algunos de los motivos para la caída de Velasco Alvarado.

Reactivar la acumulación y equilibrar las variables macro-económicas significaba incrementar el ingreso de divisas, reducir el costo de la mano de obra a través de la inflación y favorecer una política laboral empresarial. Asimismo impulsar la exportación tradicional y subsidiar la no tradicional, devaluar y reestructurar la industria. El "exceso de demanda" es contrarrestado por la comprensión del mercado interno y la reducción de los gastos públicos, con lo cual se logra una ecuación favorable de las cuentas externas.

La lucha popular se desenvuelve en medio de una

(159) Dennis Sulmont, El movimiento obrero peruano, 1890-1980, Tarea, Lima, 1980.

política económica que incrementa el hambre, la mortalidad, la desnutrición, la ausencia de servicios básicos, el desempleo y la reducción de los salarios reales, que se derivan de un patrón de acumulación en crisis. Al atraso y estancamiento agrario, concentración empresarial del capital, desarrollo desigual, neogamonalismo y Estado semicolonial, se le suma el mayor entramamiento del desarrollo industrial propiciado por el neocolonialismo financiero.

En 1979 los desempleados eran el 8% y los subempleados el 47% (160). Estos se concentraban principalmente en Lima-Callao, como consecuencia de un patrón de acumulación que vive el campo; de destrucción y descapitalización por la ciudad. Ya en 1972 la población de Lima representaba el 28% del total nacional, captaba el 44% del ingreso nacional, concentraba el 70% de los establecimientos industriales, 70% de la burocracia y 60% de los médicos del país.

Más de dos terceras partes de la fuerza laboral estaban en empresas de menos de cinco trabajadores. En el mismo 1975 el resto se encontraba organizado en algo más de 2 600 sindicatos obreros y 760 de empleados. El 85% de sindicatos reconocidos estaban en las ciudades y un 65% con base en la capital. Es así que tenemos una gran población laboral dispersa y sólo unificable en sus lugares de residencia: las barradas, frente a un 8% del total de la

PEA en 1976 que ejercía sus reclamos legales por negociación colectiva. Hasta 1968 los obreros estaban organizados en una central; después en los años siguientes, en otras tres.

En 1976, siguiendo las tendencias de la economía, la lucha se centraba en la estabilidad laboral, la defensa de los centros de trabajo, la defensa del sindicato y sus dirigentes. Como consecuencia, en 1977 se constituyó el Comité Unitario de Lucha (CUL), que el 19 de julio de 1977 realizaría uno de los paros más grandes de la historia obrera.

En 1978 se dan dos paros generales -en febrero y mayo- que coadyuvan a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, sufragio que favorece al APRA, con valioso apoyo del Presidente Morales Bermudez, y las elecciones generales (donde triunfa AP y la izquierda, que unida consigue por primera vez un tercio de los votos. Este resultado después les permitirá aspirar a una significativa presencia en el parlamento.

Para fines de los 70, se calculaba que el 85% de los sindicatos serían urbanos, con el 65% en Lima. Esto es así porque la clase obrera (2 900 000) integra el 25% de la PEA del país, y el 75% de la industria se encuentra en Lima-Callao.

De un total aproximado de 4 330 sindicatos, la CGTP (central obrera controlada por el PC y considerada la más radical tiene en su seno a 1 700 de ellos con 500 000

trabajadores organizados, (161) sin incluir la Confederación Intersectorial de Trabajadores del Estado (CITE) y el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTEP) que cuenta con 600 000 trabajadores. Entre 1975 y 1982 surgen 2,013 nuevos sindicatos, 7% de ellos en la manufactura.

Ante la supeditación de los trabajadores a los intereses del Estado, a la oligárquica APRA o a las fuerzas políticas católicas o prosoviéticas, los maestros, estudiantes, mineros -y después otros sectores- se organizan independientemente en el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP, en la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) y la Federación de Mineros y Metalúrgicos del Centro, etc.

En 1974 -como vimos- surge el CCUSC y después el Comando Unitario de Lucha (CUL), que no prosperan en sus pretensiones autonomistas debido a las dificultades para conjugar una central independiente con las funciones económico-corporativas que las limitan. De modo parecido, las divergencias políticas desde 1976 entre las organizaciones más claramente reformistas como la CGTP, la CNT y la CTRP-Lima... y algunos gremios independientes no permitieron constituir una organización unitaria.

Un aspecto significativo es que el 95% de las huelgas se desarrolla en las ciudades y dos terceras partes en la capital, en su absoluta mayoría protagonizadas por los

(161) Gustavo Espinoza Montesinos y Andrés Paredes Cuyo, "La clase obrera y el proceso peruano", Marcha, núm. 4, México, nov-dic. de 1979, p.94

asalariados industriales. Las que adquieren significación nacional, sin embargo, son las huelgas mineras (1970-1971, 1973, 1978), de maestros 1971, 1973, 1978, 1979) y desde 1978 las protagonizadas por los estamentos de trabajadores universitarios y por el Comité Interministerial de Trabajadores Estatales (CITE).

Estas últimas luchas están estrechamente asociadas a las regional-populares iniciadas por el pueblo de Huanta en 1969, las cuales enfrentó al gobierno en una revuelta popular contra la nulidad de la enseñanza gratuita. Este movimiento, que duró desde febrero hasta junio, tuvo su punto más alto entre el 6 y el 21 de junio y terminó con decenas de muertos y heridos a manos de los "sinchis" (policia antisubersiva).

Los nuevos frentes populares regionales fueron organizados por la izquierda, principalmente en el sur del Perú: Arequipa, Cusco, Puno y después en Moquegua e Ilo. Todos ellos con claro contenido antiestatal y en algunos casos antiimperialista (Ilo, Moquegua y Pucallpa).

Los pobres de la ciudad estaban distribuidos en varias ocupaciones y adoptaban diversas formas de lucha y organización. Son artesanos, obrenos no sindicalizados, semiproletarios, ambulantes, traajadores "informales", pequeños comerciantes, trabajadores domésticos, trabajadores agrícolas, subempleados y otras decenas de categorías laborales. Estaban organizados en asociaciones de

vendedores, clubes provinciales, comunidades barriales, federaciones de pueblos jóvenes.

Sin subestimar las luchas del proletariado agrícola del norte que desarrollaron diez años de enfrentamientos con el régimen militar en más de 180 conflictos, descollan en este periodo por su naturaleza histórica y su transmisión de experiencias los movimientos de los campesinos pobres de las comunidades campesinas, de los parcelarios y de los siervos y semisiervos del sureste del país.

En una década (1969-1978) se registraron 200 tomas de tierras, entre las cuales destacan las de Cajamarca, Andahuaylas, Cusco, Piura y en general las protagonizadas por los campesinos andinos tanto sobre haciendas como sobre empresas constituidas por la reforma agraria.

III. DESINTEGRACION ECONOMICA Y POBREZA RURAL

El entrabamiento de la agricultura peruana puede caracterizarse por: 1) reducida relevancia como esfera de inversión capitalista y de acumulación de capital; 2) imposibilidad de ser incorporada en su conjunto, sino desigualmente como una rama capitalista y manteniendo un amplio sector directamente ligado a la economía nacional; 3) continuación de los problemas de tenencia de la tierra, y 4) estacamiento de la producción agrícola en los últimos

25 años respecto a la economía en su conjunto y al crecimiento de la población.

La agricultura no es muy significativa desde el punto de vista de su contribución al producto, a la generación de ingreso y a la inversión. En 1976 contribuía con el 12.7% del PBI (menos que el sector manufacturero con 26% o de servicios con el 48%). La participación de la agricultura en el producto total cayó bruscamente y se expresó en una tasa de crecimiento menor (2.8%) que el producto total (5.4%). Es posible estimar que su contribución al ahorro nacional y a la imposición directa ha sido reducida.

La inversión en la agricultura no era rentable desde hace por lo menos 28 años, ya que según el INP fue del 1.8% en 1960 frente al 33.6% de la industria o el 40.4% de la construcción. En el periodo de las reformas agrarias, el gasto público en el periodo 1956-1972 oscilaba entre el 1.5% y el 6.3% del gasto público total. Todo esto vinculado a la balanza de pagos y al equilibrio externo: si en 1958 el 55% de las exportaciones eran agrícolas, entre 1976-1977 aportó sólo el 20%, lo que indica cambios en los sectores de inversión por mayores ganancias y por la amenaza de la reforma. Al mismo tiempo, la importación de productos agrícolas pasó del 24.5% en 1963 al 29.3% en 1969 como porcentaje del total de importaciones (BCR-1970). El 35.4% de las importaciones totales (2.620 millones) entre

1973-1976 (INP) fueron para la oferta doméstica de alimentos. Esto significó una gran dependencia alimenticia, y si antes el sector era fuente de equilibrio ahora lo es de desequilibrio externo: demandante de divisas y elemento de presión sobre la balanza de pagos.

El Perú es un país heterogéneo y desintegrado en el plano nacional, regional y sectorial; se basa en el desarrollo desigual y en la articulación de variadas relaciones de producción. Las diferencias entre la población son culturales, geográficas, económicas, étnicas, etc., y se traducen en la diversidad de ingresos, recursos, servicios, transporte, etc.

Como dice Caballero, la llamada "mancha india" (Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Cusco) abarcaba en 1972 el 19% de la población con ingresos menores a los 250 dólares, y el 55% mayor de cinco años era analfabeta (162).

En 1972 una encuesta nacional reveló que el ingreso promedio de la familia rural era 5.5 veces menor que el ingreso promedio de la familia de Lima (163). Se calculaba que los obreros manufactureros ganaban 2.2 veces más, los mineros 3.9, los eléctricos 4.1 que el campesinado medio independiente (164).

El mercado interno normalmente se desarrollaba por el aumento de la producción, la redistribución de

(162) Caballero, Op. cit., 1980

(163) Carlos Amat, "La distribución del ingreso familiar en el Perú", en Socialismo y Participación, Lima, 1978.

(164) Claes Brundenius, Remuneraciones y distribución del ingreso, IEP, Lima, 1976.

ingresos y el crecimiento de la división social del trabajo, incrementando el volumen orientado al intercambio.

En el Perú -hemos visto- existe una baja tasa de crecimiento del producto agrícola, que en las tres últimas décadas lo hizo a un ritmo menor que el PBI y que la población. Además hay una disminución de la producción per cápita de los principales productos y estancamiento de los ingresos agrícolas entre 1950 y 1966. En 1975 Webb estimó una tasa cero de crecimiento de los ingresos de los manifundistas tradicionales (fuera de la costa y sierra central), y de 0.8% para el sector de pequeños y medianos propietarios tradicionales..

Las causas del estancamiento agrícola estarían en el crecimiento rápido de la población, la expansión insuficiente de la tierra de cultivo, las políticas de precios desfavorables en función del apoyo a la industria, escasez en los fondos de inversión que se asignan basados en una rentabilidad competitiva y, finalmente, en la crisis de reproducción del orden económico terrateniente por los cambios en la economía en su conjunto, como la industrialización y la urbanización.

El orden y la racionalidad económica agraria se ajustaba antes a la economía poco industrializada y orientada a la exportación, con un vasto sector dedicado al autoconsumo, con una población urbana y proletaria reducida. Aquel orden era compatible con una lenta

industrialización que elaboraba los productos de exportación y sustituía importaciones de bienes de consumo no duradero. Había coherencia interna; hasta que se impuso la industria y la ciudad, se pasó a la segunda fase sustitutiva y el orden económico se hizo obsoleto.

Como resultado de la urbanización aumentaron las importaciones de alimentos, se impulsó una reorientación de los cultivos, se incrementó el cultivo de bienes salariales y de materias primas para la agroindustria. También creció la demanda interna de los bienes exportables.

Sin embargo continuaban las contradicciones entre las fuerzas productivas -desiguales- del campo y las relaciones de producción del conjunto.

El mercado urbano también era reducido por que la capacidad de empleo urbano era muy baja (en 1974 la industria mediana y grande -con más de 20 trabajadores- llegaba sólo a 240 000 trabajadores, es decir 1.5 veces el número de migrantes permanentes en ese año). El desempleo urbano en 1969-1976 (165) estaba entre el 23.3% y el 32.5%.

La reforma agraria, al no alterar el tamaño de las explotaciones campesinas ni sus sistemas de explotación, ni las haciendas de tipo comercial, tampoco incrementaba la división del trabajo y la producción para el mercado. Inclusive la renta que antes pagaban los feudatarios se estima que después la consumen.

El sólido y centralizado sistema empresarial de

la costa nace en crisis. Las empresas creadas -de carácter capitalista- tienen una contradicción entre el interés capitalista de valorar el capital y la función social que deben cumplir. Los trabajadores mismos deben adentrarse en la lógica del capital e imponer esa disciplina, resistiéndose a ello en tanto dueños y trabajadores.

Surge una tendencia a la autodestrucción empresarial, limitada por la condición estatal capitalista. En las empresas andinas, éstas y los campesinos entran en contradicción por el control de los recursos y la mano de obra, cada uno con su propia racionalidad. Las empresas tienen una renta diferencial negativa que les impide acumular, debido tanto al intento de asalariar con pobres recursos y con un régimen externo de precios desfavorables como porque dejan la lógica de la renta y entran en una lógica salarial (en la primera el terrateniente percibe una renta en trabajo, especies o dinero por la parcela que otorga al campesino).

Si al campesinado no se le dan tierras suficientes ni incentivos para acumular, y la política económica le es desfavorable al sector en su conjunto (control de precios y subsidio a los productos importados, escasa inversión pública, escasez de créditos y alto interés, ineficacia de las empresas públicas de comercialización, etc.), la ruina es una tendencia objetiva. Cuando más del 55% de los campesinos

beneficiarios no tiene ingresos "razonables" y continúa luchando por su aumento -los campesinos en general tienen límites a su expansión o luchan por tierra-, entonces -quiénes pueden invertir, producir, aumentar los ingresos y el mercado interno?

La respuesta la dio el nuevo régimen liberando al sector de algunos obstáculos, como son los precios controlados y la falta de créditos, y favoreciendo a los sectores burgueses, a nuevos terratenientes y a algunas empresas que producían productos alimenticios de alta demanda urbana.

No obstante los grandes problemas demográficos recrudecieron. Los conjuntos de población más importantes en el Perú son la Capital (Lima con más del 25% del total del país) y la sierra andina (40%). De ésta última, el 79% es rural.

Esta situación se expresa en que -fuera de la capital- únicamente el 10% de la población urbana habita en ciudades de más de 50 000 habitantes, mientras que el 76% lo hace en lugares de menos de 20 000 habitantes, y el resto en ciudades entre los 20 000 y 50 000.

La población andina está conformada en gran medida por el campesinado, que constituye el 60% de la población rural y el 30% de la población del país. Asimismo de la PEA agropecuaria que representa el 39% de la PEA total. Dentro de la población rural, el subconjunto más

importante está conformado sin duda por las más de 5 000 comunidades campesinas con el 50% de la población económicamente activa rural y el 20.28% de la población del Perú. Las comunidades poseen el 1% de las tierras bajo riego, el 9% de las de secano y el 65% de las de pasto. Sólo 433 (8.66%) recibieron tierras de la reforma agraria: un total de 749.200 Has., que equivalen a 1.730 Has. por comunidad beneficiada.

Muchos comuneros forman parte de las familias minifundistas -más de cinco millones- (166), que concurren con su pobreza a apoyar un tenue desarrollo capitalista anticampesino. Este 30% de la población peruana posee el 33% de las tierras cultivadas, el 46% del ganado vacuno y el 51% de los ovinos. Tal población puede mantenerse y reproducirse en la autosubsistencia, en gran medida debido a que a mayor concentración del ingreso es menor la demanda de alimentos (que pueden sustituirse con alimentos importados).

El Perú pone en oferta insumos y demanda productos alimenticios procesados, destinando un 60% del ingreso agropecuario a la compra de productos con componentes importados que regulan los precios internos, condicionan la estructura del consumo, se constituyen en arma política e impiden el desarrollo agrario.

Los principales problemas agrarios al entrar los años ochenta son: 1) el empobrecimiento del campesinado y

las comunidades; 2) la salida del excedente agrario para el enriquecimiento de la gran burguesía comercial, industrial y financiera; 3) la opresión y la segregación indígena campesina, y 4) el estancamiento agrario (entre 1950 y 1980 el crecimiento de su PBI fue del 1.9 y el de la población del 2.8%).

Sin embargo, la Confederación Campesina del Perú (la cual, según se calcula, agrupa a 250 000 campesinos, o sea un 5% de ellos, propone un programa de defensa de la agricultura nacional de inspiración kautskiana, mientras que hace una década el punto central de su programa era la defensa del campesinado sin tierras y de los pobres del campo, y años después la defensa de las unidades asociativas del agro y de la alimentación popular.

Otra central importante, creada corporativamente por el gobierno de Velasco Alvarado es la CNC (con 180 000 afiliados), que organiza a las empresas asumiendo la dirección de su defensa, más no de la mayoría campesina. En 1978, por sus compromisos con la CCP y su orientación reformista radical, fue disuelta por Morales Bermudez.

Con Belaúnde Terry (1980-1985), el Estado impulsará la creación de nuevas organizaciones que articulen a la mediana burguesía agraria y los terratenientes. El programa liberal de Belaúnde impulsa a los sectores con mayor capacidad de competencia, deja de controlar los

precios o artículos básicos, suprime los subsidios y entrega la comercialización a la empresa privada.

La situación del campo se hace aún más difícil que cuando gobernaba la Junta Militar de Gobierno.

La capacidad de redistribución del ingreso por la reforma fue reducida (167) se estima que era del 1 al 2% del ingreso nacional. Varios autores coinciden en señalar la forma desigual en que se distribuía, puesto que se orientaba a los trabajadores en situación más ventajosa. Siendo así porque se afectó menos de la mitad de la tierra agrícola y se adjudicó desigualmente la tenencia, por la salida del excedente, por fuertes procesos de fuga de riqueza que restaban su capacidad productiva a la hacienda, y por la ausencia de una política agraria de apoyo e incentivo a la actividad agropecuaria.

La pobreza rural genera en gran medida las desigualdades en la distribución del ingreso personal: el 40% de los trabajadores que sólo perciben el 9% del ingreso total está compuesto por trabajadores eventuales, pequeños propietarios y arrendatarios. Estos factores se asocian a la baja productividad de la agricultura: en 1968 los mineros producían 7.5 veces más y los manufactureros 3.5 veces más que los trabajadores agrícolas.

En la región donde actúa la guerrilla (Ayacucho, Apurímac, Huancavelica), la esperanza de vida no llega a los 45 años, la tasa de analfabetismo es del 65%, el consumo de

(167) Hylke Van der Wetering, La reforma agraria: un enfoque dirigido a medir el impacto de la economía provincial, Min. Agrí. Lima, 1970.

proteínas es de ocho gramos y 420 calorías, casi un tercio de los niños muere antes de cumplir el primer año y el ingreso promedio es de 100 dólares al año, la industria no existe y el campo está ocupado por pequeños, medianos propietarios y comunidades campesinas muy pobres.

En la costa se considera que los socios de las empresas cooperativas azucareras han recibido los mayores beneficios. Le siguen las cooperativas de la misma región. Tales beneficios provienen tanto de ingresos monetarios como de otros mecanismos sociales: servicios disminución del tiempo de trabajo excedente, subsidio a productos alimenticios, etc.

En las SAIS, la distribución de beneficios ha sido muy heterogénea y depende tanto de la lucha entre trabajadores permanentes y comuneros, como de la que se da entre el Estado y aquéllos. Además los excedentes son muy limitados para un gran número de beneficiarios.

En las organizaciones no centralizadas, los beneficios van ligados a la reducción de rentas, disminución de obligaciones y el aumento de la producción parcelaria.

En el sector no reformado se encuentra la mayor parte del 50.5% de la población que no tenía ingresos suficientes para la satisfacción de sus necesidades básicas, y el 34.7% de extrema pobreza, lo cual crea las condiciones

para la migración.

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, en 1976 la PEA agropecuaria alcanzaba a 2 150 700 trabajadores (43.3% del total). De este volumen, el 37.9% se encontraba adecuadamente empleado, mientras que el 0.3% estaba desocupado y el 61.8% subempleado.

Si bien existe una sobreestimación derivada de no tomar en consideración la naturaleza temporal del trabajo agrícola, ella es sintomática de bajos ingresos y escasas oportunidades de empleo derivados tanto de la reducida capitalización y las mínimas posibilidades de reinversión productiva, como del insuficiente apoyo estatal. Esto es más comprensible, ya que la reforma se realiza al margen del campesinado minifundista, en el que es aguda la desocupación estructural y de temporada.

En el sector reformado, los nuevos empleos no han sido productivos, sino básicamente administrativos o de servicios. Más bien la disminución del aporte en fuerza de trabajo de los socios ha originado una demanda para compensarlo con trabajo temporal.

El proyecto GEAR (Generación de empleo en el ámbito rural) se proponía crear, entre 1977 y 1981, 62 000 nuevas plazas con una inversión de 10 mil millones de soles. Después de dos años y luego de haberse identificado 500 proyectos factibles, sólo se crearon 22 empresas con 280 nuevas plazas. Esto se debe en parte, al cambio de política

agraria y a la crisis que se expresa en 1978 cuando el Estado sólo cubrió 20 millones de los 925 que necesitaba para cumplir sus metas de empleo rural.

IV LA ANDINIZACION DEL PAIS: HIPERURBANIZACION, DESEMPLEO Y PAUPERIZACION

Las migraciones se originan en aquellas regiones, sub-regiones y microregiones con un desarrollo bloqueado que generalmente no trasciende la semifeudalidad. La población campesina sin tierras o con pocas tierras, y también la urbana, subempleada y sometida a formas serviles de opresión y explotación se ve obligada a migrar, mientras que los campesinos medios y la pequeña burguesía urbana lo hacen voluntariamente.

Paulatinamente la población de Lima y Callao, como de algunas capitales de departamento (Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Piura, Iquitos, Moquegua, Tacna), se andinizan. Inclusive ciudades andinas como Cusco, Arequipa, Huancayo, Abancay, Juliaca, Yauli, Huaraz y Huancavelica, reciben grandes contingentes campesinos de los pequeños pueblos, comunidades y aldeas.

La dinámica de la acumulación semicolonial, con sus extremados desequilibrios económico-sociales, provoca el relativo y efímero crecimiento de algunas actividades, ramas o sectores en correspondencia con el desarrollo del mercado interno o la existencia de materias primas.

Esto es apreciado por el gobierno velazquista bajo la forma de grados de desarrollo (168). De acuerdo con esta clasificación, de las 144 provincias de aquel momento son estudiadas 127, y de ellas 78 (61.4%) tienen muy bajo

(168) Ministerio de Vivienda y Construcción, Grado de desarrollo y grado de organización de las provincias y centros poblados del país, varios volúmenes, Lima, 1973.

grado de desarrollo (86% ubicadas en la sierra del sureste). Del conjunto, únicamente la capital tiene un alto grado de desarrollo. Importantes centros productivos y comerciales determinan la existencia de cinco provincias con alto grado de desarrollo, que en algunos casos coinciden con los ejes articulatorios regionales desde la costa al interior: Arequipa, Huancayo, Trujillo, Chiclayo, Chimbote y Piura. Tres ciudades de origen colonial y tres de relativamente nueva data.

El grado de urbanización (que implica dinámica urbana, porcentaje ocupacional, número de residencias, actividades comerciales y servicios de acceso, concentración) tiene en la sierra un valor muy bajo, por el grado de atraso y dispersión. Sin embargo las bajas cifras no son un privilegio de ese espacio: en el país, el 73% de los centros poblados eran de menos de 5 000 habitantes y el 93.1% menores de 2 000 (censo de 1972). Igual que antes, el modo de producción y la dinámica de la acumulación asignan determinados lugares a los pueblos, aldeas y ciudades.

Entre el campo y la ciudad existe una virtual oposición por el papel que la economía -y después la política colonial y semicolonial- otorga a cada una de ellas. La ciudad succiona recursos del campo en una compleja red de intermediación que incluye diversas formas: desde la transferencia de la riqueza personal de los migrantes hasta la extracción de excedente por las distintas

formas del capital.

A esta contradicción se sobrepone la contradicción costa-sierra, que en su interrelación favorece a las ciudades, puertos y valles de la costa en desmedro del campo y los pueblos andinos.

La creciente migración ha ido creando en el sistema urbano problemas de vivienda y servicios: en la propiedad, renta del suelo y especulación, viviendas escasas, hacinadas y pecarias... Las barriadas son la expresión de los asentamientos de pobladores migrantes y/o empobrecidos.

En Lima las barriadas existen desde 1940, concentrándose hasta 1970 el 50% del total de la población en ese tipo de barrios: 761 000 en 273 barriadas (Ondepjov, Lima 1970).

Según los censos, en 1940 la población migrante como porcentaje de la población total era del 10.9%, en 1972 pasó al 26.4%.

La mayoría del flujo es rural-urbano, que bien pudo haberse modificado con el desplazamiento de los migrantes a nuevos centros dinámicos o internalizándose en el agro, aún así el problema migratorio sigue vigente.

Si en 1957 en Lima 56 barriadas contenían 120 000 habitantes, se estima que para 1978 eran 300 (el 30% de la población).

En los centros poblados rurales y en los

contornos de las ciudades se ubica cada vez mayor cantidad de población. El campo sigue subsidiando a la ciudad y la dinámica de la acumulación favorece esta relación.

En el periodo 1940-1972 la población urbana creció en una tasa anual de 4.25% y la rural en 0.98%. Así, entre 1940 y 1976 los residentes urbanos se cuadruplicaron, hasta llegar al cálculo oficial del 60%.

Entre 1976 y 1981 la población de Lima continuaba incrementándose en 40 000 migrantes por año, cifra que resulta de la diferencia entre 406 000 migrantes y 217 000 emigrantes en el quinquenio. En 1981, el 40% de la población de Lima era nacida en otra provincia (169).

Hasta 1950 los flujos migratorios de población a la capital provenían principalmente de la costa, ciudades cercadas a ella y valles aledaños. Después de ese año, serán grandes grupos de origen andino los que mantienen sus vínculos espirituales y materiales con sus lugares de origen.

Lima -la ciudad-Estado y sede única del poder- empezaba a ser cuestionada por la andinización del país y el crecimiento de los poderes regionales. De modo paralelo al ingreso de las transnacionales, Lima se va transformando en una ciudad de desempleados y trabajadores informales (el trabajo se apropiaba de niños y mujeres, crecía la miseria y mendicidad). Con ellos creaban las bases para la actuación de organizaciones políticas: unas, que ofrecían comedores

populares y desayunos gratuitos, y otras que preferían destruir el orden establecido.

En 1981 el 27% de la población se considera obrera; 39.3% empleados, 21.5% trabajadores independientes y 6.2% empleadas del hogar. Un 1.8% de la población empleaba a todas las categorías mencionadas. Y distribuida por sectores económicos, un 12.7% se ocupaba en la industria, 21.2% en comercio, 50% en servicios y 16.6% en otros.

Estas dos clasificaciones se ven totalmente alteradas y transformadas por otra que muestra un 65% de subempleo y desempleo, de entre ellas un 30 o 40% incorporado a la economía llamada informal. Este sector está constituido por pequeñas unidades económicas ilegales, tecnológicamente atrasadas, con una organización simple del trabajo, muchas veces familiar. En 1981 las personas ocupadas en este nuevo "sector" llegaban a 1 370 000 y se dedicaban al comercio, servicios e industria, que se encontraban muy articulados al resto de la economía.

El sector informal tiene su origen inmediato en el desfase entre el crecimiento de la demanda del sector moderno de la economía y el crecimiento de la fuerza laboral, agudizado por las consecutivas crisis desde 1967. Su crecimiento es correlativo a la evolución del subempleo y al desempleo.

La empresa informal es de tipo no capitalista;

es una forma de empleo creada como estrategia de sobrevivencia, heterogénea y cambiante en el tiempo. La empresa informal puede llegar a un nivel mínimo de acumulación a través de la producción simple de mercancías y absorbiendo la población excedentaria al sector legal y organizado del mercado de trabajo. En este "sector" se incorpora con relativa facilidad la población femenina, la juventud, los viejos, los migrantes y los analfabetos. En esos rasgos radica su importancia política.

En la década del setenta crece el comercio ambulante en todo el país, principalmente en la capital, las grandes ciudades y en las fronteras. En este proceso se va configurando una esfera económico-social propia del migrante.

El proceso de andinización del país tiene su expansión con las migraciones y el crecimiento de la población urbana. Si en 1940 Lima contaba con el 10% de la población del Perú (600 000 habitantes sobre seis millones), hoy en día aproximadamente el 30% vive en la capital y cerca del 60% de la población es urbana.

La primera fase de industrialización (hasta inicios de la década de los cincuenta) tiene como correlato urbanístico los callejones, corralones, casas quinta y barrios obreros. En la segunda fase de sustitución de importaciones crecieron las migraciones y con ellas la formación de barriadas (al inicio fuertemente reprimidas

por Odría, para después ser apoyadas como potenciales sufragantes).

El último periodo de sustitución de importaciones (iniciado en 1968), junto a la ruptura de las barreras feudales para la movilización espacial, presenciara la constitución a corto plazo de una barriada de decenas de miles de habitantes: Villa el Salvador. En 1954 existían 54 barriadas y en 1984 llegan a 598. En ese año en todo el Perú superaron las 2,100.

El 80% de la población de Lima corresponde a los sectores populares (4 800 000 habitantes), que incluye a más de 2 200 000 (37%) habitantes en barriadas. Del resto, el 23% vive en urbanizaciones y el 20% en callejones y tugurios.

Los sectores oligárquicos y la gran burguesía -ambos aristocratizantes- se verán acosados por una población, en su mayoría andina, que pugna cotidianamente por satisfacer sus más elementales necesidades tiñendo todo el ambiente de color andino.

La cultura andina se reintegra a la sociedad, espontánea e incoherentemente, a pesar de su envilecimiento, mientras las clases dominantes se refugian en lugares cada vez más exclusivos. Esta población andina que sostiene a la gran burguesía -como mercado de fuerza de trabajo y de consumo-, simultáneamente se le opone y se encuentra en ebullición y transformación ideológica permanente.

La mayoría ubicada en la izquierda no institucionalizada, emprende un cuestionamiento cotidiano. Pertenece a la iglesia protestante o a la herejía, estudia en academias o en universidades nacionales, vive de la llamada economía informal en un sinúmero de ocupaciones.

A esta población que vive a salto de mata y cada día le es más difícil satisfacer sus necesidades, se agregan generaciones -una tras otra- sin futuro, sin perspectivas en un país en crisis.

Mediante una encuesta la Universidad de Lima encontró que por lo menos hay 300 000 "filo senderistas" entre los habitantes de barriadas. También se puede apreciar el "desborde" en el empobrecimiento absoluto y relativo de la clase obrera, en los niveles de ingreso de los sectores populares, en la alimentación popular, en la salud, la educación, la mortalidad.

El salario mínimo entre enero de 1980 y julio de 1982 se redujo de 18 000 soles a 14 854 (170). En 1940 el comercio representaba el 26% de la PEA de la capital, en 1972 el 48% y en 1981 el 52%. Esta población laboraba en 100 000 unidades de comercio, y otro sector importante lo hacía en 40 000 talleres de servicios.

Obreros, trabajadores asalariados en servicios, vendedores ambulantes, artesanos, cesantes, aspirantes al trabajo y trabajadores del hogar sumaban el 67.4% de la población trabajadora en Lima, de la cual el 40% era subocupada.

(170) Ministerio de Trabajo, Informe, 1982.

Los sectores "informales" se expanden y se proyectan al conjunto de la sociedad. Entre 1981-1983 se calcula en 200 000 los trabajadores expulsados de la economía formal.

El 33% de la PEA trabaja en actividades informales no comprendidas en las actividades señaladas. Las actividades informales incluyen distintos estratos y clases sociales o grupos sociales en formación: basta indicar que el sistema financiero informal mueve 12 000 millones de dólares al año, es decir, tres veces el capital que maneja el sistema financiero formal en 1982.

Dentro de los trabajadores no institucionalizados, sobre todo, aparecen grupos políticos que se oponen al discurso político-ideológico legalizado. La nueva realidad en que viven los hace mutar constantemente. Su expresión electoral en 1984 es significativa: de los votos efectivos, el 27.2% fue para el APRA, el 24% a IU, el 25.9% para AP y el PPC. El 17.5% fue de votos anulados y blancos que representaban el 10.9% del total de sufragantes (7 546 231). Si a este último dato le sumamos el 38% de ausentes, tenemos un 46.9% del total de electores cuya actividad necesita ser explicada.

Hasta 1979, la tasa de desempleo encubierto era del 8% de la PEA (436 000) con aproximadamente el 50% de despedidos que buscaban trabajo. 500 000 personas aptas para el trabajo ya no lo buscaban, y 200 000 por primera vez

se enfrentaban a un mercado de trabajo cerrado y estancado. Los subempleados, que oficialmente ganan menos del mínimo vital, eran 2 575 000. Sin embargo en ese año crearían 77,000 nuevos puestos de trabajo adicionales (171).

En 1979 el 16% de la PEA no percibía ingresos de ningún tipo y 200 000 trabajadores estaban cesantes por motivos políticos y sindicales. Rápidamente se desandaba el trecho laboral ganado en el periodo de Velasco Alvarado cuando se implementaron 34 grandes proyectos en la minería, industria y agricultura con 74 000 nuevos empleos (172).

Tres años después, en 1982, del total estimado de la población del país (17.5 millones), el 14.7% tienen un puesto de trabajo y recibe una remuneración igual o mayor al sueldo mínimo. Los mayores de 64 años y los menores de 15 que no están en edad de trabajar, suman un 45%. El problema reside entonces en el 40% restante: los subempleados, los desocupados que buscan trabajo y los que no han sido incorporados a la estructura económica. En síntesis, de 9.5 millones en edad de trabajar, sólo 2.5 millones tienen un empleo adecuado (173).

Entre 1975 y 1979, y debido a la crisis, se reduce el número de trabajadores adecuadamente empleados, aumentando el desempleo y el subempleo. El capitalismo se retrae, la población industrial disminuye del 16% de la PEA

(171) Actualidad Económica, núm. 26, Lima, Abril de 1980.

(172) Ibid., p.4. Además, en el número 8 de la misma revista, Javier Alvarado rectifica el dato, calculando que en 1978 el 88% era desempleado por ingresos.

(173) Raúl González y Aldo Penfichi, "El largo insomnio del empleo", Que hacer, núm.23, Lima, 1983.

en 1975 al 12.8% en 1982 (174).

Esto también tiene que ver con la política económica estabilizadora que reduce el certex, incrementa la importación, aumenta la tasa de interés... Como bien anota Narda Henríquez, en la década de 1975-1984 se "desmanteló la capacidad productiva" y se "jornalizó la fuerza de trabajo".

La gran empresa emplea aproximadamente el 40.2% de la PEA ocupada en 1981 y la pequeña el 42.1%; la mediana sólo la diferencia.

Con la crisis, éstas (pequeña y mediana) mejoran sus niveles de ocupación en desmedro de la gran empresa.

El empeoramiento de la situación obrera en cuanto a ingresos es sobre una situación permanente de bajos ingresos, que afecta más a los trabajadores independientes, a los domésticos, obreros y familiares no remunerados. En términos generales, obreros e independientes comparten bajos ingresos. La eventualidad obrera, que en 1984 afectaba al 56% de los trabajadores, comprometía a los que tenían negociación colectiva y a los trabajadores públicos (175).

La población continúa urbanizándose y en 1981 más del 38.8% de ella vive en centros poblados con más de 50 000 habitantes, mientras que la población rural en centros de menos de 2 000 habitantes conforma el 41.3% del otro extremo. El 20% restante vive en centros de entre 20 000 y 50 000 habitantes. Esto significa que la población rural abarcaba entre el 41.3% y el 50%. Esta población de 7 a 8

(174) Ibid., p. 47.

(175) Juan Carrión, Actualidad económica, núm. 8 Lima, 1986. p. 25

millones en 1981, tenía un componente asalariado del 20% (entre 1.4 y 1.6 millones), cuando en 1961 era del 32% (176)

El empleo y el ingreso conforman una unidad. En 1972 el 52% de la masa monetaria era controlada por el 14% de familias de más altos ingresos, mientras que el 70% de las familias de menores ingresos controlaba tan sólo el 14% de la masa. Lima captaba el 44% del ingreso familiar del país: 67% de éste provenía del trabajo remunerado y el 20% del trabajo independiente.

En contraste, las familias rurales controlaban el 26% de la masa monetaria, cuando ellos constituían el 54% de las familias, de las que el 73% trabajaban unidades de menos de 5 Has. con bajísima productividad por trabajador y una altísima desnutrición que abarcaba más de la mitad de la población rural (177).

Esta situación de concentración del ingreso tiene que ver con la concentración y centralización del capital en su forma semicolonial, donde el 1% de las empresas explicaban el 50% del ingreso bruto generado y el 80% únicamente el 10% del mismo.

El núcleo dinámico de la economía estaba formado por 750 grandes empresas consumidoras de divisas. 150 de ellas explican el 50% de las importaciones y el mismo porcentaje del impuesto a la renta.

Entre 1967 y 1977 las utilidades de las empresas, después de los impuestos, aumentaron a una tasa acumulativa

(176) Ibid., pp. 26 y 55.

(177) Carlos León Amat en Socialismo y Participación, núm.2, Lima, enero de 1978.

anual del 6.8%, mientras las remuneraciones de los asalariados a una tasa del 1.5% y el 0.7% para el ingreso de los trabajadores independientes (campesinos y trabajadores urbanos) (178).

Esto significa que aun los más radicales proyectos reformistas no podían impedir el desenvolvimiento de las leyes de la acumulación, e incluso su éxito dependía de su capacidad de equilibrar acumulación y reformas.

Esta apreciación se puede verificar con el examen del campesinado andino, que entre 1968 y 1980 fue incorporándose extensivamente al mercado de manera rápida y violenta, actuando sobre él la mercantilización y monetarización, con lo cual lo empujaba a la indigencia. A sus escasas tierras y a la baja productividad, se agrega el papel expoliador del capital comercial y la resistencia del capital productivo a invertir en ellos.

Los precios de los bienes campesinos se deslizan sobre el límite de la sobrevivencia y un mercado de trabajo en declive, mientras los precios industriales y el crédito suben. Estos factores provocaron la disminución de los ingresos campesinos y la vuelta a la economía natural.

Los problemas de empleo e ingresos derivaron en la pobreza y el hambre de amplios sectores sociales. Después de la crisis de 1967-1968 el consumo de proteínas en las barriadas de Lima se redujo de 56 a 26 grs. y el de calorías de 2.251 a 1.560. El 87% de las familias que en

(178) Javier Iguíñez, Redistribución y capitalismo en el Perú, Fenix Impresores, Lima, p.45.

1972 consumían leche, en 1979 ya no lo hacían, y el 100% abandonó o se retrajo en el consumo de carne. En ese mismo año esas familias gastaban en alimentación el 85% de sus ingresos (179).

En el país de cada 1 000 niños nacidos vivos, 90 mueren antes del año y la mitad de éstos son menores de cinco años. La tuberculosis afecta a 80 de cada 1 000 enfermos (1980). Las epidemias son recurrentes: malaria, fiebre amarilla, uta, rabia, bartereiosis, sarampión. Sólo 56 de 100 alumnos que ingresan al primer año concluyen la primaria; en el medio rural, el 83% de las escuelas carecen de agua, luz y desagüe (1981).

En el mismo año se registran 1 892 000 de analfabetos. Hace falta un millón de viviendas para un número similar de familias y dos millones de unidades de habitación se encuentran en mal estado. La desocupación médica es alarmante: de cada 100 médicos desocupados, 30 se dedican al comercio, nueve son taxistas, tres son ambulantes, y tres laboran en centros de estética.

La pobreza y el hambre, que sujetos a las leyes del mercado y con un atraso de cinco décadas en relación a los países avanzados, fueron determinantes para el problema de la salud, con los siguientes rasgos en 1972:

a) la mortalidad, que es del 12.9 por mil, en el sureste alcanza al 44.2. La mortalidad infantil es de 130 por mil. De las defunciones registradas, el 50% ocurre en

niños menores de cinco años;

b) la expectativa de vida es de 55.7 años;

c) el 57% de los niños menores de cinco años fallecidos lo son por desnutrición;

d) los niños menores de seis años de los Andes y la selva son en su totalidad desnutridos;

e) un millón de niños tiene retardo mental diagnosticado;

f) sólo 1.3% de las viviendas en zonas rurales tiene conexiones de agua y el 27.1% servicios higiénicos (180).

Es sobre este marco de crisis, migraciones, desempleo y pobreza que se producen los movimientos sociales. La situación se torna cada vez más intolerable para las masas hambrientas y moribundas del campo y la ciudad.

(180) Roberto Beltrán, "El problema de la salud en el Perú", en Socialismo y Participación, núm. 2, enero de 1978, pp. 51 y ss.

V. LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

1. El movimiento obrero.

Desde la propia constitución de la clase obrera, la violencia será uno de los elementos constitutivos. El Segundo Congreso de la Federación Local de Lima realizado en 1927 fue interrumpido por la policía, que detuvo a 50 congresistas. Dos años después, en el primer plenario de la CGTP y después del Congreso Minero del Centro, se repiten estas prácticas coercitivas del Estado.

Con Sánchez Cerro (1930-1933), dos decretos legalizaron e institucionalizaron la violencia antiobrera al disolver la CGTP y organizaciones similares.

Hasta 1943 el sindicalismo actuaba fuera de la ley (181). En determinadas coyunturas, al APRA también le tocó su parte, como con Odria, que proscribió la CTP y asesina a su dirigente Luis Negreiros. El etnocidio aristocrático se hace extensivo al movimiento obrero de origen mestizo-indígena.

En 1982 había en todo el país 860 700 trabajadores sindicalizados (de ellos 274 600 obreros), que constituían el 67% de los trabajadores sindicalizables y el 17% de la PEA total: 4 918 000. Lima congregaba al 62% de ellos, distribuidos en 132 400 obreros y 329 600 empleados (182).

Las empresas donde se encontraban estos trabajadores producían el 70% del PBI, en contraposición a

(181) Isabel Yépez del Castillo y Jorge Bernedo Alvarado, La sindicalización del Perú, Paz, Lima, 1985, pp.14-15.

(182) Ibid., p.54.

los dos millones de trabajadores agrícolas y un millón y medio de pequeños comerciantes y trabajadores de servicios que aportaban el 15% del PBI. La imposibilidad de conciliar la lucha de clases radicaliza al primer grupo y lo asocia al segundo y a los desocupados que en número de 500 000 (10.9% de la PEA en 1984) hacen una fuerza considerable. Sin embargo, únicamente los trabajadores no sindicalizados de la ciudad, los desocupados y subempleados (57.4%) constituyen una fuerza política inconmensurablemente superior al conjunto de sindicalizados. Más todavía si ejercen una acción debilitante sobre los sindicatos, donde el temor a los despidos los hace más vulnerables a las presiones estatales. Entre 1982 y 1984 fueron despedidos 100 000 de ellos, con lo cual se radicaliza momentáneamente la acción sindical con tomas de fábricas y huelgas de hambre.

Dennis Sulmont (183) llega a tres conclusiones en el estudio de los conflictos laborales producidos entre 1968 y 1976: 1) expansión y fortalecimiento de la organización sindical; 2) resistencia al reformismo y al corporativismo, y 3) dificultad en centralizar las movilizaciones.

El incremento de huelgas intensas (masivas, prolongadas, expansivas y cada vez más violentas) han contribuido a desarrollar la ideología y la conciencia revolucionarias de clase, en radical oposición al sindicalismo libre enarbolado por el APRA asociado a la CIA,

(183) Dennis Sulmont, "Conflictos laborales y movilización sindical" en Revista Mexicana de Sociología, Abril-Junio de 1978, México, p.722 y ss.

a través de la AFL-CIO.

Esta conciencia se expresa en la reiterada reivindicación de la autonomía de clase frente a la manipulación corporativa. El sindicalismo estatal no pudo enraizar a pesar de que logró desautorizar a la izquierda radical y reorganizó sus gremios. Más bien esa izquierda se enfrentó al PCU -con hegemonía sobre la CGTP-, que propició la violencia estatal contra los trabajadores: Cobriza (1971), magisterio (1971), SiderPerú y Cuajone (1972). Al influjo del autonomismo clasista se fue desgajando la CTP aprista, en consecuencia un 53% de los sindicatos afiliados cambiaron de Federación.

La última conclusión es tan significativa como las otras. La convergencia de movimientos reivindicativos de los sectores populares ante la crisis y la depauperación alcanzó a los sectores medios y se favoreció por la articulación de las formas de dominación de clase como por la concentración urbana.

Empero, estos movimientos sociales aún eran espontaneístas, sectorializados, heterogéneos y sin estrategia política, lo que se produce ante la ausencia de conducción revolucionaria.

Con Morales Bermúdez (1975-1980) y el estancamiento económico y las políticas de austeridad ordenadas por el FMI, la movilización popular es enfrentada de modo excluyente, se disuelven sindicatos, se persiguen y

deportan a los líderes y asesores, y se clausura la actividad política, que concluye en 1976 con la declaratoria del "estado de emergencia".

Hacia 1979 se redujeron los salarios reales al 62% de los niveles de 1973, que empujaban a acciones solidarias. Considerando que toda la actividad de la izquierda se orientaba a las elecciones de 1980 se hacía casi imposible un paro general como el de julio de 1977. En aquellas elecciones la izquierda aumentó sus votos doce veces en relación a 1962-1963 frente al APRA, que apenas duplicó, y AP que triplicando su electorado ganó en las elecciones. Esa misma izquierda es la que en agosto de 1977 no supo ni pudo responder ante el despido de 5 000 dirigentes sindicales, lo que se puso de relieve con el fracaso del paro convocado para el 22 y 23 de mayo. Las medidas decretadas por Silva Rueta -Ministro de Economía- ante la bancarrota económica tuvieron relativo éxito gracias al apoyo indirecto de la izquierda. Posteriormente la lógica electoral fue subordinando al movimiento obrero popular, lo cual explica el fracaso total del paro convocado para enero de 1979. Si en julio de ese año el paro no llegó a tan estruendoso revés fue porque confluyeron un nuevo paquete económico y la huelga del SUTEP.

2. El movimiento popular.

El movimiento popular en el Perú se ha caracterizado por ser multiétnico y pluriclasista, comprendiendo diversos aspectos de la lucha nacional y de la lucha de clases. La ideología nacionalista e internacionalista es compartida por el proletariado, el campesinado y las capas medias como problema político que se resuelve mediante una alianza anticapitalista y antiimperialista. La educación política de las masas ha incorporado como medio para lograr una nueva sociedad la lucha por el poder, la destrucción del Estado y la abolición de clases y castas.

En la base de la irresolución del problema étnico-clasista está la semifeudalidad y el entramamiento del desarrollo por la dominación semicolonial. Después de una década en el agro se expresa en una crisis permanente de producción y productividad (asociada a la dependencia alimentaria); en la ciudad, tanto en una industria totalmente dependiente en bienes de capital y tecnología, y parcialmente en insumos, como en la retracción en la exportación de productos manufacturados. Tales antagonismos se sintetizan en la deuda externa que en 1978 ya representaba el 60% del valor de las exportaciones.

Hemos visto que el proceso de desindustrialización comporta una reducción relativa de la PEA industrial, entre 1972 y 1981, del 19.1% al 16.9% y un

creciente desempleo. Hay que agregar que el 62% de la PEA limeña se halla dedicada al comercio y servicios, con lo que cambia la correlación de fuerzas sociales y el contenido de aquella relación social que conocemos como "pueblo".

La redefinición de lo popular incluye al proletariado, vendedores ambulantes, asalariados de servicios, artesanos, trabajadores domésticos y desocupados que hoy representan más del 64% de la población de Lima, de la cual el 40% son subocupados y de ingresos precarios. A fines de 1983, en quince distritos de Lima la población en barriadas -donde vive gran parte de ese 64% de pueblo- (184) oscilaba entre el 50 y el 100%.

En 1984 Lima se acercaba a los seis millones de habitantes distribuidos en 47 distritos. Un 80% de la población de la "Arcadia colonial" vive en asentamientos populares y el 20% en barrios residenciales. De ese 80%, el 37% vive en barriadas, el 23% en urbanizaciones populares y el 20% en tugurios y corralones. En 1983 tenemos 598 pueblos jóvenes o barriadas con 2 184 000 habitantes (185).

Desde su llegada a la capital, los provincianos -campesinos o no- inician una lucha permanente contra la legalidad. La rigidez de una capital señorial les impone la violencia como lenguaje, y ellos la retoman como la única forma de respuesta. Acostumbrados a las formas tradicionales de legitimidad -clientelares y paternalistas-, van cediendo al uso de formas

(184) José Matos Mar, Desborde popular y crisis de Estado, Lima, 1984.

(185) Ibid., pp. 71-72.

contestatarias que después se traducen en fuente de derecho. El mestizaje como forma de defensa se reconvierte en creciente autonomización ofensiva que ahora incorpora "la viveza criolla", rebasando cotidianamente la institucionalidad y al Estado.

Con la crisis se fueron esfumando las ilusiones integracionistas del Estado y de los propios inmigrantes provincianos.

Se van adentrando al espacio urbano por todos los espacios posibles: mercados, plazas, parques, calles, iglesias, cementerios. Se organizan en asociaciones de pobladores y clubes de provincianos (600 000) que les dan seguridad, identidad y vida. Se difunden las organizaciones andinas redefinidas por el impacto urbano.

Se va imponiendo lo andino con su propia matriz cultural, a la vez alienada y subversiva. Lima se andiniza y provincializa.

Las formas y símbolos, rituales y magia, religiosidad y paganismo, reciprocidad y redistribución, fiestas y música, poderes y solidaridad económica y cultural, van homogenizando las ciudades de la costa.

No menos de 100 programas diarios de música andina -en algunos casos concentrados en pocas emisoras dedicadas casi exclusivamente a ella-, como la proliferación de "chichódromos" y "salsodromos", expresan esta invasión sobre la cultura criolla, de la que salen estas formas de

síntesis.

Es el Estado que condensa y expresa las relaciones de dominación del capital trasnacional y financiero, del capitalismo burocrático, de los medianos terratenientes y del narcotráfico, donde el peculado y el soborno son los rasgos endémicos de la política criolla ejercida por los partidos que lucran del Estado. Ese poder, por su propia naturaleza, es incapaz de responder a este desafío y en las grandes ciudades surgen problemas de higiene, salubridad, vivienda, transporte, educación, centros de recreación, instituciones... que son asumidos para su resolución por los pobladores.

La misma tolerancia inicial -e inclusive fomento hasta 1970- del Estado frente a las invasiones mostraba su incapacidad para solucionar el problema de la vivienda. Y sin embargo, era un medio de destugurizar el centro, atraer fuerza de trabajo barata y favorecer políticas caudillistas y clientelistas. De alguna manera también valoraba terrenos colindantes, impulsaba la industria de la construcción y la actividad bancaria, beneficiando a rentistas y nuevos burgueses. Poco más tarse se agotan uno a uno estos beneficios y aparecerá el antagonismo.

En diciembre de 1968 se crea la Oficina Nacional de Desarrollo de Pueblos Jóvenes (ONDEPJOV) para promover la auto-ayuda y el corporativismo. El crecimiento barrial venía sofocando algunas nuevas ciudades como Chimbote e Ilo,

donde más de la mitad de la población vivía en barriadas.

En abril de 1971 se realiza la primera invasión de terrenos en Pamplona. Miles de familias que pretendían probar que el país había ingresado realmente a un nuevo periodo político fueron violentamente reprimidas.

El gobierno los reubica y forman lo que después llegaría a ser la barriada más grande del Perú: "Villa el Salvador". Más adelante, entre 1972 y 1973, la lucha de los "rescatadores" sienta las bases de nuevas formas de lucha: constituyen un bloque de trece barriadas, y articulándose al movimiento obrero pugnan por su independencia política y asimilan prácticas violentas de enfrentamiento.

En principio, las luchas son contra el desalojo. Después por el reconocimiento, la obtención de títulos de propiedad, mejores condiciones de vida, por su autonomía y contra el corporativismo.

Las luchas que emprenden por solidaridad o articuladas al movimiento popular-regional desde 1976 en Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, cumplen con la aspiración de desarrollar la conciencia y los preparan para nuevos combates. Los enfrentamientos contra los "paquetes" de medidas y el "Estado de emergencia" que prontamente acompañan a los primeros, culminan con la formación del Comité de Coordinación y Lucha Barrial (CCLB).

El CCLB identifica al Estado como su directo adversario, en la medida en que éste concentra las punterías

populares y en tanto descarga la crisis en el pueblo. El Estado aumenta los arbitrios, reduce y encarece los servicios, imposibilita la construcción auto-financiada agravando los problemas derivados de la política económica que afecta a todo el pueblo, como el alza del costo de vida, la congelación de salarios y los despidos.

Desde junio de 1977 la violencia represiva se generaliza, principalmente en el sureste (Cusco, Puno, Juliaca, Ilo, Sicuani, Arequipa, Moquegua, Tacna, Huancayo, Cajamarca, Trujillo), obteniendo como respuesta grandes demostraciones de combatividad. El paro de julio de 1977 y el despido de 5 000 dirigentes posibilitaron la fusión del movimiento obrero y barrial. (La mujer también destaca en los combates populares, en las ollas comunes, colectas o marchas).

La articulación étnico-clasista, obrero-popular, popular-nacional, va configurando la barriada como un espacio social donde las mayorías populares constituyen escenarios de combate que vinculan al campo y a la ciudad por la gran cantidad de migrantes que vienen a la ciudad y vuelven a sus pueblos. Inclusive para algunos sectores de pobladores es el único canal integrador que cotidianamente convoca a los trabajadores a enfrentarse al Estado.

A la violencia etnocida anticampesina que han sufrido los migrantes, se agrega ahora la violencia urbana como estilo de vida segregativo de la Lima colonial. La

solidaridad, la reciprocidad, el parentesco y la sencillez se oponen a las aspiraciones aristocráticas del limeño, teñidas de individualismo burgués, y van ocupando violentamente los vacíos estructurales y espirituales cuando no la indiferencia, la coerción o el simple silencio.

El Perú criollo y estatal es hostil y violento contra los migrantes andinos y su comportamiento rebelde. A tal punto que los obliga a crear o recrear su propia economía, religión, derecho, educación, medicina, cultura, de modo multiétnico y pluriregional. El indio "inferior, degenerado, bruto, decadente", culpable de todos los males del país, reaparece rompiendo ideas y valores dominantes, aunque muy lejos de desterrarlos. El viejo hispanismo también reaparece ahora bajo un velo occidentalista, filonorteamericano y a veces democratista.

Los problemas de identidad de clase y su sustrato étnico son vistos por Julio Ortega en los siguientes términos:

"También la identidad es un ámbito de conflicto, jerarquización y "dominio". Como es evidente, la identidad de clase de la burguesía "dominante" (que se basa en el proceso normativo de la conciencia de "clase señorial" suministra los términos de la legitimidad en la sociedad nacional: los roles de casta, poder y dinero; provee al mismo tiempo los términos de la

dominación política (desde el Estado, la fuerza armada, y el sistema de partidos políticos); y por cierto, los términos de valoración cultural (el modelo de la cultura hegemónica, la marginación de las sub-culturas nativas, la negación de la cultura nacional fuera de la dependencia...)" (186).

Para Ortega no existe una autoconciencia étnica, tampoco una aculturación simétrica de síntesis mestiza y menos un horizonte paradigmático andino..., más bien habría una estratificación sociocultural reforzada en su esquema de dominación pero signada por la lucha. La identidad aparece como conflictiva y jerarquizada donde la percepción indígena se opone al sistema institucional de dominación, que le impide el acceso al habla, la cultura, la técnica y a la información.

El potencial revolucionario del campesinado, como el del poblador de barriadas y del "sub-proletariado", en países semicoloniales y extensas zonas semifeudales -como el Perú- está sustentado en el constante empobrecimiento, inseguridad, estancamiento y frustración.

Sin familia, sin vivienda, sin vestido apropiado y con la profundización de la crisis eventualmente sin trabajo, éstos sectores no tienen nada que perder. En cambio si posibilidades de ganar en los límites de la absoluta pobreza y de su ascetismo campesino. Estas

condiciones abren la posibilidad de una múltiple alianza, fundada en identidades étnicas, que abarque al campesinado en desestructuración, al migrante en indefinida estructuración y al proletariado.

Son espacios sociales plausibles de convocar ideológicamente y coptar políticamente hacia utopías y mitos transformadores. Para que este sector social se mantenga con vida, necesita definir audaces estrategias de sobrevivencia aprendidas de la población mestiza que se encargó de sistematizar miles de estas formas.

Cotidianamente deben violar la legalidad alejándose de los sectores altos de las capas medias y núcleos del proletariado que no aceptan determinados moldes de comportamiento, en tanto se alejan de sus pautas étnico-clasistas. Siempre listos para combatir y destruir, requieren ser socializados, ideologizados y "moralizados" en el contexto de las amplias masas para convertirse en sujetos de la futura sociedad. Su espontaneísmo radical antiestatal contra los valores sociales aceptados les evita caer en el legalismo o en análisis estructuralistas.

La comunidad de vida cotidiana, el sentido de identidad, las prácticas de reciprocidad, son la base de la solidaridad y la conciencia comunal y política. En la experiencia china (187) la columna vertebral del EPL, en 1928, estaba constituida por elementos "desclasados".

Desde la revolución cubana, en el movimiento

(187) Peter Worsley, "Frantz Fanon y el lumpen proletariado", en Trimestre Político, núm. 2, FCE, 1975.

popular destaca la presencia de la juventud en todos los aspectos de la vida social, en un proceso de acelerada politización organización y movilización.

En la universidad, el movimiento estudiantil durante la primera mitad de la década de los sesenta vive la violenta confrontación entre el APRA y el Partido Comunista por el control de las federaciones universitarias, cerrando un primer ciclo cuando los frentes de izquierda logran el control de la Federación de Estudiantes del Perú (FEP) antes de concluir la década. Empero, en plena lucha APRA-PC, a partir de 1965 van agudizándose los debates ideológicos y la confrontación política entre maoístas y prosoviéticos, que luego de diez años termina siendo favorable para los primeros, con lo que se extiende el maoísmo a los nuevos partidos de izquierda y a las masas.

El magisterio, el movimiento obrero y el campesino, las fuerzas popular-regionales van "contaminándose" de esta ideología.

Las primeras reivindicaciones universitarias se centran en el repudio a cualquier dispositivo legal proveniente del paradigma norteamericano de enseñanza superior, como el "proyecto Sánchez" elaborado a mediados de los años sesenta por el intelectual aprista Luis A. Sánchez, que entre otras consideraciones pretendía establecer los estudios generales como forma de selección para el nivel especializado.

La universidad peruana continuó gobernada con la Ley 13.417 hasta 1969, momento en que se superponen dispositivos jurídicos como el Estatuto General de la Universidad Peruana y la Ley de Educación, que derogaba al anterior. El caos legal va de la mano con una ausencia total de proyectos académicos y científicos, sin embargo el número de universidades iba en aumento debido a que constituía uno de los pocos instrumentos de movilidad social.

Las exigencias de la economía eran reducidas, pero las de la sociedad crecientes. Primero las universidades de la capital y después las universidades privadas, junto a un reducido segmento de las universidades de provincia, cubrían la demanda de técnicos y profesionales. La universidad se había convertido más en un medio de socialización y politización que de mera profesionalización. El Estado, en su afán de seleccionar y reducir el presupuesto universitario creaba una oposición permanente en las universidades.

Desde el primer lustro de los años setenta en el magisterio escolar se desarrolla un radicalismo ascendente que creará el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), el cual no sólo logra incorporar a la gran mayoría de maestros y desplazar a la dirección aprista y prosoviética, sino convertirse en un elemento motor de la dinámica de las luchas populares y regionales en

la ciudad.

Muy pronto la entronización del reformismo filochino en la dirección del PC-Patria Roja -que logra mantenerse en la dirección del SUTEP gracias a su economicismo- reduce la combatividad e independencia del ya muy prestigiado gremio al ritmo en que se involucraban en la contienda electoral.

Lo mismo ocurrirá en la universidad y el movimiento estudiantil secundario, que frustran su avance global de 1975-1979 en aras del compromiso institucional, pero que poco después es recuperado y potenciado por el arrastre social de la lucha armada. El carácter juvenil de todos estos movimientos recoge la vitalidad, progresismo, frustración y dimensión nacional urbano-rural en función de la reforma o la revolución.

3. El movimiento regional

El capitalismo semicolonial -ya lo hemos visto- subordina y entraba el desarrollo regional en función del patrón de acumulación, condicionando las políticas de desarrollo regional. En la década del veinte Mariategui esclarece desde el punto de vista étnico-clasista, en el contexto de la semicolonialidad y semifeudalidad, el problema regional representando los intereses del proletariado y el campesinado.

Haya de la Torre también lo hace desde una óptica estatista, reivindicando los intereses de las capas medias provincianas, pequeños y medianos terratenientes, empresarios y profesionales.

En 1986 (más de medio siglo después), el Perú no ha dejado de ser desarticulado y desestructurado a pesar de haberse ampliado el proceso de circulación capitalista. La subordinación al capitalismo aún es formal. La extensión de la contradicción capital-trabajo no ha reemplazado ni postergado la oposición región-centro.

La alianza de burguesías locales con sectores populares, el acatamiento de paros regionales, la reivindicación de determinadas necesidades sociales o los avances parlamentarios, no pueden esconder los elementos fundamentales que subyacen a los movimientos: la oposición a la coerción económica y extra-económica y a la depredadora transnacionalización de la economía nacional y regional.

La confrontación con el imperialismo aparece velada por el enfrentamiento popular al Estado, mediador del capital y de su accionar regional. Desde la década de los sesenta crece el mercado interno actuando sobre todos los individuos y grupos sociales de la ciudad y amplios sectores rurales, monetizando sus economías y mercantilizándolas. La sobreexplotación de recursos naturales y la política económica recesiva e inflacionaria desatan la lucha de clases sindical, vecinal y burocrática.

Las rentas terratenientes y las ganancias de las distintas fracciones del capital productivo, comercial y financiero no se revierten en el desarrollo industrial ni en una acumulación ampliada regional, más bien se fugan de localidades y regiones hacia el centro del país, a la costa y al exterior. Esto no sólo no es un beneficio regional sino un perjuicio en tanto estanca, pauperiza, desemplea, deteriora, depreda e incluso destruye la ecología. Es un proceso de desacumulación permanente, de desarrollo regional desequilibrado y una permanente concentración y centralización de capitales.

Los frentes de defensa de los intereses del pueblo han sido fundamentalmente urbanos, despreciando el problema étnico y campesino.

En esta dinámica radica su efímero éxito al quedar a expensas de las frágiles organizaciones sindicales amenazadas por el desempleo. Los frentes tienen un carácter heterogéneo y muchas veces no captan la nueva realidad de la reconcentración urbana del poder.

Las diferencias regionales -y dentro de ellas las intra-regionales- se ahondan con la política neoliberal transnacionalista de Belaúnde Terry (1980-1985). Esta política destruye capital, quiebra empresas, corta lazos interindustriales y altera el mapa de la pobreza del país. Los pobres aumentan, los sectores medios se empobrecen y la capa de ricos se reduce.

No sólo los enclaves son extranjeros, sino también el Estado los constituye. Por otro lado, los privilegios de la costa sobre los Andes se extienden a las áreas selváticas rentables. El campesinado andino queda relegado a la reserva de fuerza de trabajo pluriocupacional para el capitalismo y el neogamonalismo. Asimismo, se le asigna la función de proveedor de alimentos a pueblos y ciudades, aunque subordinada a la transnacionalización del consumo alimentario y el sometimiento al patrón alimentario agro-industrial.

Perder de vista estos cambios regionales impide definir una política regional nacional-popular. Al agravamiento de las desigualdades sociales y de la pobreza regional -principalmente andina- se agrega la agresión a su débil base regional. Los casos de Ayacucho y Huancavelica son ilustrativos: provincias de estos departamentos estaban desarticuladas del valle del Mantaro. Las de Ayacucho con el desembalse del Mantaro quedaron aisladas de ese espacio y se entroncaron a la capital por medio de la carretera de "los libertadores", sin ninguna capacidad para evadir su subordinación al llamado "sur chico". Las provincias de Huancavelica, debido al desembalse de un río, permanecieron unidas a un empobrecido valle del Mantaro. Además de ser víctimas de las fuerzas naturales y sociales, la política económica no hizo nada por revertir tales situaciones. En la década de 1970-1980,

Ayacucho transfirió 75% de los depósitos bancarios y Huancavelica el 91% (188).

Los motivos son más profundos: el secular entramamiento del mercado interno, el gamonalismo rentista, la subordinación a la acumulación metropolitana y la presencia hegemónica en los pueblos andinos de la burguesía comercial, de la burocracia estatal y las Fuerzas Armadas, aliados de los terratenientes.

Las consecuencias se sintetizan en la crisis de la agricultura que intensificaría la movilidad ocupacional y la emigración, estancando las actividades conexas a la agricultura, deprimiendo los niveles de satisfacción de las necesidades básicas en un 70% de la población, favoreciendo la desproletarización y con ello la confluencia del sub-proletariado, campesinado, desempleados y estudiantes (189).

Para otros autores, la pobreza es tal que en la provincia de Víctor Fajardo esta 44 veces debajo de Lima en la escala de desarrollo y la provincia de La Mar 140 en una escala que incluye bajo producto per cápita, altas tasas de mortalidad, graves deficiencias en servicios básicos... (190)

Los primeros movimientos regionales del presente siglo surgen en el periodo 1920-1936 y aparecen como reivindicaciones de los sectores medios provincianos de una

(188) Joel Jurado, "Política económica y condiciones de vida en la región central y surandina", en Mundo Andino y Región. Lima, 1984, p.91 y ss.

(189) Ibid., p. 107.

(190) Alvaro Ortiz y David Robinson "La pobreza en Ayacucho" en Socialismo y Participación, núm.28, Lima, p.16.

descentralización política, económica y administrativa. La respuesta estatal fue un mayor centralismo, reduciéndose entre 1956-1980 se crean las Corporaciones de Desarrollo, y en el periodo 1968-1980 los militares en el poder tradujeron el problema regional a la desconcentración administrativa, creando los Organismos Regionales de Desarrollo y los Comités Departamentales.

Los movimientos sociales en torno a demandas regionales principalmente populares se inauguran en 1966 con la constitución del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho en respuesta al recorte de rentas a la Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga. En el lustro 1976-180 se da un conjunto de combates regionales de carácter fundamentalmente popular primero en el sur (Ayacucho, Puno, Apurimac, Cusco, Moquegua, Tacna) y después en el centro andino (Pasco, Junín) y en el oriente (Pucallpa, Iquitos).

Aquel quinquenio de 1976-1980 expresa la generalización del conflicto social a todas las agrupaciones sociales y a la redefinición de las relaciones políticas. Está precedido por un acelerado proceso de urbanización, por la expansión del Estado y de las relaciones capitalistas a través de reformas, el ingreso de nuevas trasnacionales en la industria y recursos naturales, y el desarrollo de las organizaciones populares y clasistas. El despertar de expectativas de desarrollo regional, de reunificación del mosaico de pueblos y del aislamiento provincial, del

desarrollo del campo y de la agricultura en abandono total, tiene como respuesta estatal la cancelación de inversión regional y una recesiva, ineficaz y antipopular política económica.

La violencia política institucional se hace p_resente en todas las regiones en conflicto, dejando x profundas huellas en la conciencia de los pueblos. El antiestatismo de vieja raigambre renace con las masacres de Huanta, Cobriza, Puno (Velasco) y su generalización con Morales Bermúdez. En la década siguiente se enfrentan dos propuestas: una que prioriza el interés regional y municipal con una perspectiva pluriclasista sobre la popular, y otra que incide en la lucha político-militar en torno al poder x popular.

4. El movimiento femenino

Partimos de la comprobación de que el trabajo doméstico y el trabajo remunerado femeninos son una unidad.

Si bien el mercado de trabajo capitalista -y también el semifeudal- requiere de un tipo devaluado de mano de obra para obtener mayores excedentes -en la forma de plustrabajo, ganancias o rentas-, esta necesidad se ubica en el marco de una sociedad patriarcal donde el trabajo femenino se considera adicional y complementario de las labores domésticas y del servicio personal (190a).

Tras esta relación social e histórica, están el poder y la violencia que la refrenda, mantiene y reproduce,

(190a) Verónica Bennholdt-Thomsen, El trabajo femenino y la violencia contra las mujeres en El Gallo ilustrado, suplemento del diario "El Día", México, 1987.

en la familia y en la sociedad, con el respaldo estatal.

A las relaciones de propiedad deben agregársele dos elementos sin los cuales el problema de la mujer se torna incomprensible: la división social del trabajo y el racismo. La mujer nace con un rol definido, más asociado a la servidumbre patriarcal que al trabajo asalariado. Ser ama de casa es desarrollar un trabajo gratuito e insertar el trabajo remunerado como prolongación adicional y tendencialmente barato, gracias a la división laboral por sexos. Del mismo modo, la valoración de diferencias en provecho de las etnias colonizadoras justifica el incremento de la explotación, los privilegios y las agresiones en la vida cotidiana, actuando como contrapartida subjetiva de una situación objetiva. Su manifestación más contundente es la servidumbre doméstica.

El racismo es producto de la conquista española y sienta las bases de una triple opresión: étnica, clasista y sexual. Durante la colonia la mujer campesina indígena fue sometida a un régimen de virtual esclavismo, utilizándola como fuerza de trabajo servil, tributo y obsequio sexual (incluyendo el derecho de "pernada"). Ello explica que desde aquel periodo se contituya el movimiento de la mujer.

No obstante el carácter esclavista y patriarcal del imperio del Tahuantisuyo, las relaciones sociales de los pueblos quechua y aymara eran equitativas con tal arraigo que muchas de ellas subsisten hasta hoy en las comunidades y

pueblos campesinos. En la división social del trabajo, los miembros de la comunidad son interdependientes, con lo cual resulta una cierta armonía y balance de actividades laborales y sociales favorables al equilibrio entre sexos. Aún el trabajo comunal es conjunto, los niños se cuidan colectivamente, existen tierras de la comunidad, la participación y las decisiones son universales. En la lengua aymara no existe la palabra que designe la primera persona en singular.

El abuso y la violación de la mujer, la separación de la mujer de la tierra, la opresión doméstica, el "derecho de pernada", el dominio patriarcal, fueron relaciones sociales impuestas o potenciadas por los españoles desde la conquista. La privatización de la propiedad y de los bienes comunales afecta principalmente la independencia de la mujer, que es segregada de importantes aspectos de la vida económica. Toda la sociedad colonial se construye sobre la explotación de la mujer y funciona para someterla. El sirvinacuy o matrimonio a prueba, que otorga más libertad de elección de la pareja a la mujer, empieza a desaparecer, aunque hasta hoy no se consuma su fin.

A grandes trazos podemos apreciar el papel de la mujer en la historia colonial y semicolonial. Existe una versión acerca de la conquista -que linda con la leyenda- la cual relata la resistencia de mujeres guerreras -las Amazonas- al conquistador Francisco de Orellana. Es también y

legendaria la figura de Micaela Bastidas, esposa y lugarteniente de Tupac Amaru II, quien en momentos decisivos de la rebelión estuvo por la ocupación del Cusco, que probablemente hubiera modificado su curso y posterior definición: la derrota. Un siglo después se produce la Guerra del Pacífico, y en ella la resistencia a la ocupación chilena por parte del general Caceres y sus guerrillas tuvo en la mujer un elemento protagónico.

El ejercicio de estas prácticas opresivas supone la violencia y la subversión del tradicional equilibrio de poder hombre-mujer en las culturas nativas, de la ayuda mutua entre sexos y la participación igualitaria en los diversos aspectos de la vida social.

Todo el sistema social impuesto por España y renovado por Inglaterra y los Estados Unidos reafirman la propiedad privada patriarcal y la opresión femenina. Las relaciones sociales de propiedad, la economía, la familia, la cultura, la ideología, la política y la religión, -en general el sistema social-, se erigen sobre la opresión de la mujer.

A fines de la década de los sesenta, -visto globalmente- el país va dejando de ser una sociedad de predominio semifeudal, en la que la servidumbre doméstica urbana es un mero correlato de las relaciones servil-patriarcales del medio rural para convertirse en una relación de carácter transicional al capitalismo.

En la capital y en las más grandes ciudades se extienden las relaciones salariales, mientras que en los pueblos y en el campo se mantiene el trabajo doméstico servil. En los años setenta aparece la sindicalización de trabajadores domésticos y nuevas experiencias orgánicas, como las comunidades de trabajadoras domésticas.

El desarrollo de las luchas obreras y campesinas incorporan y propulsan el combate femenino.

Los principales sectores que asimilan el trabajo femenino son "marginales": comercio, servicios, la industria textil, conservera, ensambladora y el magisterio primario. En las ciudades la gran mayoría de mujeres calificadas como PEA son vendedoras ambulantes y servidoras domésticas. Le siguen en terminos cuantitativos las obreras de servicios, maestras y obreras fabriles. En el campo son campesinas y comerciantes.

En su situación obrera (8% en 1982), la mujer generalmente es eventual, percibe la mitad del salario masculino y labora en las peores condiciones. Veamos un caso. En el puerto de Chimbote la industria principal es el enlatado de pescado, y en 1982 el 80% de los trabajadores eran mujeres: 80 mil mujeres, en su mayor parte eventuales y sin beneficios sociales, con jornadas de entre 12 y 24 horas cuando hay pescado, quedan desempleadas cuando no lo hay, como ocurre en los periodos de veda. Esperan en las noches la llegada de las embarcaciones, trabajan en cámaras

refrigeradas y con pescado congelado, y normalmente paradas en el agua. Son comunes entre ellas enfermedades como la TBC, artritis, reumatismo, pulmonía y dolencias musculares (*).

En los años 1978-1979 protagonizaron feroces batallas cuando varias fábricas intentaron cerrar turnos y reemplazar a los obreros estables por trabajo eventual. A principios de los años ochenta se convierten en oleadas de huelgas y en su punto más alto las mujeres ocupaban fábricas. En 1982 se realiza el VII Congreso de la Federación de Obreros de Ancash, donde las mujeres demandan atención a sus reclamos y apoyo a sus luchas.

En la industria textil y electrónica las mujeres han destacado ocupando fábricas y enfrentando a esquirols, soplones y matones. Resalta la combatividad de las trabajadoras de CONEL (Consortio Electrónico), Lolas (fábricas de ropa interior) y Lucy (ropa para niñas). Las obreras textiles a destajo (con jornadas de 10 a 12 horas, siete días a la semana y mal pagadas) se organizaron e integraron a las luchas sindicales de las obreras de fábrica, expresando el alto nivel de conciencia alcanzado: comprende que el trabajo a destajo no sólo reduce los salarios y niega beneficios, sino que anula derechos y conquistas, quiebra las luchas y escinde las organizaciones.

En el Sindicato Unido de Trabajadores de la

(*). Carol Andreas, When women rebel, Lawrence Hill Co. Westport, USA. 1986. pp.26 y 55.

Educación (SUTE[]) las maestras organizadas desde 1972 -año en que se constituye- han desarrollado una corriente revolucionaria que descolló por su presencia combativa en los años 1978-1979. En las barriadas, como madres maestras, organizaron a los pobladores para la lucha y junto a las madres preparaban las huelgas, retiraban a los niños de las escuelas, establecían comedores colectivos y desarrollaban una significativa movilización política. En 1980 se unen a otros gremios e inician protestas en oposición al día de la madre, y desde 1982 frente a los concursos de Miss Perú y Miss Universo.

Rechazando celebrar su propia explotación, las movilizaciones de 1980 unieron a maestras, obreras, pobladoras, feministas para condenar públicamente y a nivel nacional aquella política que mantiene a la mujer alejada de la vida pública y la hipócrita ideología burguesa que la respalda. Los enfrentamientos callejeros y las numerosas detenciones realzaron sus acciones.

Las trabajadoras domésticas y las amas de casa también se organizan y movilizan. En 1980 en Trujillo y Chimbote estas últimas lo hicieron en el "Movimiento para una Nueva Mujer", exigiendo, entre otros derechos, trabajar fuera del hogar y que la pareja acepte tal situación. Las empleadas domésticas llegaron a constituirse en sindicatos demandando, principalmente, permiso para asistir a la escuela. En Lima (con más de 75 mil empleadas) se creó la

residencia colectiva Micaela Bastidas, en 1975, con el objeto de vivir independientemente, cocinar y cuidar a los niños en reciprocidad, apoyar a las compañeras desempleadas y hacer vida en pareja con sus compañeros.

La prostitución tolerada y muchas veces prohijada por el Estado se ejerce legalmente con licencia y pagando impuestos. A mediados de los años sesenta estaban registradas legalmente unas cinco mil prostitutas y dos décadas después se calculaban en cien mil. Si se incluyen las clandestinas, su número es incalculable. En algunos puertos como Callao y Talara los municipios ajustan sus presupuestos con las licencias e impuestos a estos antros, representando hasta el 50% de los ingresos de prostibulos y prostitutas. Estas mujeres se organizaron llegando a realizar huelgas y protestas contra esta situación; asimismo, impidieron los permanentes abusos, exigieron tarjetas de salud a los clientes y prohibición al servicio a personas ebrias.

El estado es inoperante respecto a la violación y al aborto. El 90% de las violaciones denunciadas no tienen consecuencias legales. En los últimos años se ha incrementado su número en correspondencia con la militarización de la sociedad. La prohibición del aborto es un factor de alta mortalidad femenina.

Con el desarrollo de la crisis de mediados de los setentas, los enfrentamientos de clase se generalizan al

aumentar la explotación, los despidos y la marginación femenina como primera opción del capital.

Con la mayor opresión que acarrea el desarrollo de la crisis, las mujeres ofrecen una valerosa respuesta que va desde las luchas callejeras, acciones sindicales, ocupaciones de fábricas, hasta las más avanzadas formas de organización y lucha que impiden su "lumpenización masiva".

Las vendedoras ambulantes, ante las constantes amenazas de expulsión o "reubicación", viven en un estado permanente de combate con las autoridades estatales (prefecturas y municipios).

El papel de la mujer en las luchas magisteriales siempre fue destacado como fuerza principal en acciones de apoyo y como dirigentes. Recordemos que la absoluta mayoría docente primaria estaba compuesta por mujeres.

Desde finales de la década de los sesenta comienzan a organizarse como mujeres en frentes específicos y determinadas adscripciones de clase e ideología.

Esto era favorecido por sus nuevas actividades laborales, su responsabilidad como educadoras en el hogar y la escuela, la incorporación de la juventud en la política, las actividades comunales y vecinales, que les permiten mayor ingerencia social.

En diciembre de 1974 surge el Comité Coordinador Nacional del Movimiento Femenino Popular, con la intención de retomar plenamente a Mariátegui y politizar, movilizar y

organizar a las mujeres del país. Un documento político publicado por primera vez en 1974, "El marxismo, Mariátegui y el movimiento femenino", contiene las orientaciones políticas para crear organizaciones y secciones femeninas en los organismos de masas. Dichas directivas se fundan en un análisis histórico del problema femenino en general y sobre la condición de la mujer en el Perú, vinculados ambos a los problemas de la propiedad, la familia y el Estado. Establecen un claro deslinde con las corrientes teóricas erróneas o reaccionarias y sus epígonos, como las ideológicas sobre la naturaleza deficitaria de la mujer, del reduccionismo biologista, el feminismo burgués y pequeño-burgués, y la liberación femenina. Propuestas que promueven la exclusión de la mujer de ciertas esferas de la vida social, el mayor acceso a la producción, el sufragismo, el abstracto igualitarismo o la oposición sexual como soluciones al problema de la mujer.

Para ellos el núcleo de la cuestión femenina es la naturaleza histórico-social de la mujer, definida por el carácter de las relaciones sociales y su inserción clasista en la sociedad.

El desarrollo del capitalismo sienta las bases materiales para su mayor participación económica e incorporación en la lucha de clases, impulsando su politización.

A la explotación y doble opresión de la mujer

reconocida por los clásicos del marxismo, por el sistema y la sexualidad, el movimiento femenino agregará los originales planteamientos de Mariátegui acerca de la servidumbre e idiosincracia colonial de la mujer peruana. Asimismo, retoman el feminismo proletario, que exige la necesidad de politización y organización de la mujer, consustanciada con la fe de multitudes revolucionarias en la lucha por el socialismo.

Las secciones femeninas entendidas como centros de educación política y lugares de incorporación de la mujer a la lucha de clases van de las aulas universitarias y sindicatos hacia el campo. Para el PC del P las mujeres sólo pueden organizarse correctamente si lo hacen desde una posición de clase. Debe ser un movimiento generado por el proletariado para conseguir la movilización clasista de la mujer en torno a los objetivos de la revolución peruana, oponiéndose a las supersticiones, prejuicios, apoliticismo y deformación ideológica. Deciden movilizar ideológica y políticamente a la mujer con base en la propaganda y la agitación mariáteguista contra el imperialismo, la feudalidad y el oportunismo.

Este proceso debe conseguirse uniendo la mujer a las luchas populares y a las masas, organizando a la mujer en todos los planos, formando conciencia clasista y espíritu de servicio para el pueblo, combatiendo junto a él por sus derechos, conquista y libertades democráticas, y dentro de

ellas por los propios intereses de la mujer.

Los sectores más combativos se localizan en los asentamientos populares (barriadas), comunidades campesinas y campamentos y pueblos mineros. Como vimos, las barriadas son tradicionales centros contestatarios desde el mismo momento de su establecimiento por invasiones y batallas campales con la policía y el ejército. En estos barrios y pueblos las madres sost_iene a sus niños y esposo con la mitad o menos del salario mínimo oficial, ingresos inestables y carencia de los servicios indispensables: agua, drenaje, luz, transporte. Con una alta mortalidad infantil por desnutrición (75% de la tasa corresponde a niños), no obstante destinar las dos terceras partes del ingreso familiar a la alimentación, la acción manipulad^a asistencial y clientar de gobiernos y partidos políticos (con el apoyo de la AID, Caritas, Iglesias, fundaciones) fácilmente logra arraigar en la población y someter la furia de la mujer. Empero, la respuesta popular trasciende los "desayunos infantiles", los quinientos comedores populares en 1980 (1 500 en 1989), la solidaridad popular y provincial, y se orienta cada vez más a la acción política independiente.

La mujer andina que vive en extremas condiciones de miseria, con una expectativa de vida de 43 años, gran parte de ella dedicada a la lucha por la sobrevivencia de sus niños (un tercio muere antes del año), sufre

cotidianamente la violencia del sistema patriarcal, incentivado por la cultura mestiza de rechazo al trabajo, al alcoholismo y la violencia doméstica. De ahí que el suicidio y el filicidio se hayan incrementado en respuesta a la extrema desesperación que provoca enfrentar sola los desafíos de la conservación familiar y comunal.

Con el desarrollo de la guerra popular, la incorporación de la mujer principalmente campesina y barrial, ambas víctimas de las más crueles e inhumanas formas de degradación, fue de carácter masivo. En el campo más de un tercio de los niños mueren antes de cumplir un año, la expectativa de vida es de 43 años y las condiciones de vida son de extrema pobreza. Los hombres han emigrado definitiva o temporalmente, adoptando con ello la cultura mestiza y el machismo. Muchas veces la desesperación lleva a los padres al suicidio y al filicidio.

En las ciudades, dos terceras partes de los ingresos de la familia se destinan a la alimentación. 75% de la mortalidad es infantil, principalmente por desnutrición. 80% de la población tiene ingresos inestables y carecen de servicios. Mientras, el Estado y los partidos políticos institucionalizados manipulan sus necesidades en su búsqueda de consenso y legitimidad.

La respuesta estatal a la creciente incorporación de la mujer a la lucha armada es su degradación y humillación, el genocidio, etnocidio, estupro y violación.

5. ESPACIO SERRANO DE LA VIOLENCIA POLITICA

a. La Violencia Económica Anticampesina.

La colonización española desintegró la economía y la sociedad precolombinas, exterminó la población, sometió el núcleo de la economía -la agricultura- a la minería y desarrolló el feudalismo colonial.

Todo el periodo republicano es una prolongación del anterior, en el que continúa la expropiación, la monetización y la mercantilización de un sector agrario sometido a otros sectores y a la ciudad.

El acaparamiento de las mejores tierras -escasas y generalmente pobres- por los terratenientes, viene acompañada de una permanente resistencia.

La rápida monetización y mercantilización de la economía agraria en la década de los sesenta y la incapacidad de respuesta terrateniente a la industrialización y trasnacionalización de la economía, conduce a un mayor entramamiento de la acumulación rural. Ello se pone de manifiesto en la producción-productividad, proletización, ingresos y en los cambios en la frontera agrícola, que paralizan la descomposición de las haciendas y la diferenciación campesina. Únicamente pequeños sectores campesinos se desintegran en burguesía-proletariado.

El entramamiento no sólo debe ser visto como la profundización del semicolonialismo sino también explicarse por los condicionantes naturales, la debilidad política de

la burguesía, la resistencia étnico-campesina y la crisis.

Todo el conjunto del sistema económico llega a sus límites. Ni la industria ni la agricultura pueden absorber el crecimiento vegetativo y por migraciones de la fuerza de trabajo, al encontrarse detenida la inversión.

El campesinado rico no llega a descampesinizarse totalmente, incluso al trasladar su actividad empresarial fuera de la tierra (comercio o transporte). Su movilidad se da a través de la educación o la burocracia de inferior nivel. El campesinado medio o pobre opta entre la seguridad de la posesión de la tierra y el riesgo de salir al mercado. Cuando adopta la primera opción tiene presentes las otras alternativas, y lo hace a pesar del deterioro de sus tradicionales formas orgánicas y la frustración de nuevas necesidades.

No basta examinar la diferenciación en términos sociales, económicos y culturales. Hay otros factores como el color de la piel, el lugar en el sistema de dominación, la religión, el status... que configuran los rasgos de una diferenciación estamental variada regionalmente y compleja, en cuya base se encuentra una extensa población extremadamente pobre debido a factores sociales ecológicos, físicos, tecnológicos, escasos rendimientos y de ingresos.

La penetración mercantil que trae la expansión capitalista en la década de los setenta va unida a una atropellada redistribución de tierras impulsada por el

Estado, a la internalización de la racionalidad comercial en la familia campesina, a cambios tecnológicos, culturales y políticos que potencian la diferenciación.

Por su parte, el Estado concentra más el poder político y lo monopoliza a través de las Fuerzas Armadas, la burocracia, los gremios, el control total de las empresas asociativas y el control parcial del comercio y los créditos, lo cual redefine el gamonalismo. A esa tarea contribuyen los nuevos moldes paradigmáticos de control y prestigio como la educación, la cultura y el lenguaje.

La comunidad campesina se descompone ante el violento impacto del mercado. A esta mercantilización de los productos le sigue la del trabajo y la tierra. La comunidad se fragmenta parcialmente y se privatizan algunas áreas, individualizándose la posesión.

Esas tendencias se enfrentan a las ancestrales tendencias comunales del dominio de la naturaleza y la resistencia a la invasión, opresión colonial y explotación.

Defensa territorial, identidad étnico-clasista, relaciones comunales y administrativas, parentesco, solidaridad y reciprocidad, se acrecientan ante la violencia exterior -que se expande desde la economía al Estado- y se expresan en la década de los setenta en grandes movilizaciones campesinas.

Una resistencia a la penetración capitalista desde fuera y por medio siglo no puede obstruir una destrucción asociada a difíciles condiciones ecológicas y

productivas, que conforman una indefinida transición. La agricultura andina aún es una actividad autónoma poco integrada a la industria y a la agroindustria.

La década de aplicación del modelo neoliberal de política económica (1975-1985) provocó un negativo impacto de las transnacionales sobre el conjunto de la sociedad. Las grandes transnacionales productoras de insumos, procesadoras de alimentos y materias primas, así como las grandes agencias financieras y de distribución impusieron en vastos espacios del agro un modelo neocolonial de desarrollo asociado a la técnica, insumos, provisión de maquinaria y equipos, y a la producción de alimentos procesados, aumentando de modo creciente la dependencia del crédito internacional.

Estos procesos desarrollan la tendencia a la polarización en el campo, entre las grandes empresas asociativas creadas por la reforma agraria y la empresa privada, que producen para la agroindustria y alimentos de consumo masivo y otro sector constituido por un extenso campesinado, el cual produce alimentos básicos para la población de bajos ingresos.

La dependencia agraria se expresa en endeudamiento interno, dependencia en importaciones, inseguridad alimentaria, reducción de mercados domésticos, imposibilitando un desarrollo equilibrado interno.

En el medio rural se produce una violenta

desintegración de la agricultura de subsistencia, pauperización, migraciones, desnutrición que contradictoriamente refuerzan las estructuras comunales. La reforma agraria no ha significado la solución del problema de la tierra. No sólo refuerza los latifundios adjudicados a socios sin títulos de propiedad, sino que la tierra susceptible de ser apropiada -tierras de cultivo y pastos- es escasa y no supera el 14.6% de la superficie total del país. Las tierras de cultivo representan el 2.9% de la superficie total, y el área activa de éstas por poblador rural es de 0.43 Has. A su escasez se agrega la concentración y la atomización. En 1972 un número reducido de unidades agropecuarias poseían las dos terceras partes de las tierras, mientras que tres cuartas partes de las unidades agropecuarias menos del 7%.

Esta situación se ve agudizada por la productividad de las tierras de sierra, donde el 3% es de cultivo bajo riego, el 11% de secano y el 86% de pastos (191).

Todo esto significa que con la reforma agraria la contradicción latifundio-comunidad no sólo no ha desaparecido, sino que se ha agudizado. Beneficiado con tierras el 17% de las comunidades reconocidas -de las cuales ni el 60% recibió tierras de manera directa-, la proporción recibida por comunidad se reduce significativamente si incluimos 2 000 no reconocidas a las

3 050 que si lo están, con lo que baja el porcentaje a menos del 10%, la mitad de las cuales recibió tierras (192).

El 69% de las comunidades estaban ubicadas en las zonas centro y surandina del país; el resto casi totalmente en el área norandina.

Las comunidades representan más del 50% de la PEA del campo.

Su población -al parecer disminuida- es de 2,745 400, que representan el 20.28%, y viven en el 14% del territorio nacional agricolamente más pobre. La comunidad campesina golpeada por el desarrollo capitalista, privatizadas sus escasas tierras, concentrando parte de su poder por el gamonalismo de nuevo tipo y el Estado, diferenciadas internamente, continúan siendo el principal organismo de defensa indígena y campesina y la principal forma de organización productiva, social y cultural de la población andina.

Todos los elementos de solidaridad y socialización implican y determinan que lo colectivo sea lo dominante como real y potencial organismo de cohesión, identidad y lucha.

El sector agropecuario, por sus seculares contradicciones estructurales, el papel de las transnacionales en la dominación semicolonial y la política económica neoliberal, se encuentra estancado en toda la década de los setenta. Entre 1970 y 1981 el PBI del sector

agropecuario creció a una tasa media anual del 1%, mientras la población crecía a un ritmo del 2.8%, y la urbana al 4% (193).

Este estancamiento es otra expresión de la acumulación semicolonial, que en las comunidades se manifiesta como una retracción comercial y monetaria. El sector agropecuario está sumamente segmentado, destinando el 23% de su producción a la industria procesadora; 30% al comercio y su extensa y compleja red de distribución; el 15% se revierte a la misma etapa productiva y un 30% es destinado al autoconsumo. Sólo un 1% de la producción se exporta y el 1% restante se destina a la venta en sectores de servicios (194).

La mayor parte de la producción comunera es destinada al autoconsumo. Esto, agregado a la transnacionalización de la producción agroindustrial, determina la fuerte dependencia de materias primas agropecuarias importadas.

Desde 1968 hasta 1980 los productos de consumo campesino disminuyen progresivamente, debido a la incapacidad de generar ingresos significativos con la venta de su producción excedente, la reducción de su mercado y el incremento de precios de los productos manufacturados y del crédito.

Con la cuarta parte del total de la producción no se vinculan a la agroindustria y sí -aunque cada vez

(193) Jorge Fernández Baca, Carlos Pardo y Fabián Tume, Agroindustria y transnacionales en el Perú, DESCO, 1983, p. 224.

(194) Op. cit., p. 219.

menos- a la producción de alimentos (195).

El capital comercial, generalmente independiente de la producción, articula a los productores campesinos y se constituye en instrumento de opresión y explotación y en fuente de la actual violencia, al transferir sus excedentes a los consumidores urbanos y a las industrias productoras de insumos.

Al papel que juega el capital comercial se agregan, como motivo de estancamiento: la estacionalidad agrícola, las calamidades naturales y la inestabilidad de precios por las fluctuaciones del mercado. El alza de los salarios se aleja cada vez más del alza inflacionaria de los precios de los bienes de la canasta campesina y de los insumos. Los riesgos y los gastos adicionales para emplearse complican la inestabilidad y la eventualidad del trabajo rural.

Esta transferencia permanente de ingresos determina el secular entramamiento del desarrollo y la pobreza campesina. De este modo, un 30% -según Adolfo Figueroa- de la población del país que opera con recursos marginales y se ubica en la ancha base de la pirámide de ingresos muy por debajo del salario mínimo vital urbano- se enfrenta a la incapacidad de la demanda agrícola a absorber una creciente oferta, creando una relación entre bajos ingresos y desempleo temporal por los mermados recursos con que cuenta el campesino.

Una posible alternativa es emigrar reduciendo la carga familiar, disminuir el consumo hasta el límite de la sobrevivencia, demostrándose así que el capitalismo semicolonial es anticampesino y generador de violencia.

b. La violencia política campesina.

La capacidad de resistencia al etnocidio, al genocidio y a la violencia política estatal -que acompaña la contradicción étnico-clasista-, muchas veces se transforma en resistencia activa. En la primera mitad del presente siglo se opusieron a la privatización de la tierra y a su mercantilización de modo defensivo y espontáneo. En la segunda, fue una violenta respuesta para conseguir mayores beneficios de su integración al mercado mundial.

La etapa de la reforma agraria inaugurada en 1969 se caracteriza por el uso de estrategias más radicales, puestas en su contexto; acompañadas de desobediencia civil, como las invasiones de tierras cuando las leyes no se aplican en todo el ámbito definido por el Estado para hacerlo. La reforma agraria, al adjudicar tierras conservando la estructura jerárquica tradicional, beneficia a los campesinos medios y ricos que pasan a formar parte del poder local neogamonalista hegemónico por el Estado y, ahora, mediado por las autoridades locales. Empero el problema es más complejo: estamos frente a una sociedad

rural-mestiza o mestizo-indígena integrada por estos sectores sociales en una unidad contradictoria, sintetizada por la revista Sur en tres tipos de problemas:

1. Problemas en la relación de la sociedad rural-mestiza con el Estado. Tanto por las formas de ejercicio directo del poder en la localidad como por las mediaciones que hacen a esa sociedad rural mestiza parte integrante de todo el país.

2. Problemas en la relación entre esa sociedad y los poderes locales que se concentran en las cabeceras mediadoras con el país (ciudades intermedias y capitales), tanto por la dependencia administrativa de los pueblos hacia sus cabeceras como por las formas de dominio de unos grupos sobre otros, en general, dentro de la localidad.

3. Problemas en la relación interna entre indígenas y mestizos, campesinos productores directos que tienen expresiones culturales diversas, pero sobre todo recursos muy escasos que deben disputarse aprovechando cualquier medio, incluso apoyar a los mediadores del Estado en los poderes locales (196).

En estas reflexiones podemos apreciar como de los motivos propiamente económicos, la violencia se extiende a todos los ámbitos de las relaciones sociales, y cómo interactúa entre la coerción estatal, los poderes locales y grupos estamentales, donde la "jerarquía del desprecio" esta enraizada y generalizada durante siglos. Se preparan las

condiciones para una confrontación directa y total en todas las esferas de las relaciones sociales entre "mistis", indígenas y mestizos. Tal cosa ocurre porque "el campesinado no sólo existe como un símbolo histórico o como fuente de nacionalidad, sino también porque existe como una fuerza actuante, como un actor político, como generador de riquezas: el campesinado es una de las clases explotadas fundamentales de nuestra sociedad" (197).

La toma organizada de 68 haciendas entre julio y octubre de 1974 en Andahuaylas, centralizada por la Federación Provincial de campesinos de Andahuaylas, es precisamente la culminación como experiencia reformista, de la ocupación de tierras incentivada por la propia reforma

La respuesta fue violenta, tal como ocurrió en 1964 cuando los campesinos de Ongoy, que enfrentaban legalmente a los terratenientes de Chacabamba y Mazobamba fueron baleados poniendo fin a un largo litigio judicial.

Los campesinos dirigidos por Vanguardia Revolucionaria y la CCP, ante el desmantelamiento de las haciendas propiciada por la colusión de la burocracia con los poderes locales y a pesar de haber sido declarada la provincia de Andahuaylas zona de Reforma Agraria desde 1970, decidieron impulsar o profundizar los cambios que desde el Estado se ofrecían.

Los iniciadores fueron los campesinos organizados en Asociación de Campesinos Revolucionarios (AFECAR) de los

(197) Orlando Plaza, "El problema campesino": apuntes para su discusión, en Quehacer, núm.4, Lima, p.123. agraria.

distritos de Cocharcas, Ongoy y Chincheros, quienes luego de tomar algunas haciendas constituyeron los comités democráticos campesinos que se dieron a la tarea de distribuir la tierra y organizar colectivamente el trabajo. Ni los dirigentes ni los campesinos comprendían que la reforma agraria no estaba destinada a las comunidades. Criterios políticos y económicos indicaban que mejor no se debían movilizar a la mayoría de campesinos pobres y medios. Las masas campesinas se encontraban distribuidas en 80 comunidades (48 reconocidas oficialmente) y en más de 80 haciendas y fundos.

La federación se formó en febrero de 1973 culminando preparativos que se alejaban hasta 1968. En 1973 se organizaron las asociaciones de campesinos de "Pachacutec", "Adecar", "Qorawiri" y "Chanca", con el indirecto auspicio estatal que ofrecía entregar tierras a los campesinos y su directa coerción para absorverlos en el proceso de corporativización.

Un hecho de gran significación fueron las marchas hacia los pueblos (desde Andarapa hasta Andahuaylas), ocupando a su paso caminos, haciendas y plazas públicas, a la vez que marcando una nueva época: la posibilidad del poder campesino. Los gamonales, terratenientes y comerciantes perdían espacios de mediación al ser obligados los funcionarios y las propias Fuerzas Armadas a negociar con los campesinos.

Este tipo de movilización no era otra cosa que una muestra de la tensión entre las aspiraciones campesinas y las limitaciones impuestas por la legalidad. Desde 1965 -para no mencionar la lucha defensiva de las primeras décadas del siglo- fue suficiente el incentivo de las guerrillas del ELN en la provincia de La Mar -cerca de Ongoy- para provocar movilizaciones en Santa María de Chicmo, Ocobamba y Ongoy, que sufrirían el feroz embate de las fuerzas represivas (198).

Las mencionadas asociaciones campesinas y de cooperación popular que agrupaban a federaciones, comunidades, parcelarios y trabajadores que preludivan la Federación Provincial de Campesinos de Andahuaylas (FEPCA), recibieron la orientación reformista de VR a través de dos exestudiantes: Quintanilla, de la Universidad de Huancayo y Mezzich de la Facultad de Medicina de San Marcos.

Entre el mitin realizado en Uripa el 23 de septiembre de 1973, que convocó y aglutinó a miles de campesinos exigiendo la tierra hasta el mitin del primero de mayo de 1974 en Andahuaylas -cuando más de 1 500 campesinos acordaron multitudinariamente tomar haciendas- se había logrado un gran avance en la conciencia de las masas.

El campesinado estaba decidido a morir por "mama pacha" (madre tierra). Era el momento de la realización de sus aspiraciones históricas y míticas.

La resistencia pasiva de los campesinos

(198) Abdón Palomino, "Andahuaylas 1974, un movimiento de reivindicación campesina dentro del proceso de la reforma agraria, en Alpha, núms. 11-12, Lima, 1978.

indígenas -ignorantes y sin tierras- se transformó en un movimiento activo étnico-clasista contra los señores mestizos que controlaban el poder gamonal mediante formas patriarcales feudales y la violencia directa.

Tomando las tierras decrece el poder gamonal, pero muy pronto se rearticularía con el aparato corporativo estatal, que sólo lograba la aceptación entre los campesinos que realmente se beneficiaban.

Dirigentes frustrados y campesinos que habían elevado rápidamente su nivel de conciencia, ahora estaban sin tierras y sometidos a un doble sistema de explotación y dominación que articulaba elementos servil-patrimoniales y coercitivo-estatales de corte corporativo; perdían su efímero poder viéndose obligados a reflexionar sobre la transformación de la ilusión del poder en su realidad posible.

Aunque no lo supieran, no actuaban solos. Campesinos andinos de Cajamarca, Puno, Ayacucho y de otros lugares de la costa (Ica, Piura, Lima...) los precedieron y acompañaron en un combate desarticulado en el programa de la CCP, que escindía la lucha por la tierra de la lucha por el poder. Paralelamente al ingreso de las ocupaciones de tierras a un segundo momento reformista, campesinos de Andahuaylas, Ayacucho, Cajamarca, etc. se reorganizan para luchar por el poder con programa y dirección transformados en revolucionarios. El fracaso de las empresas reformadas

enmarca el segundo momento.

Los campesinos indígenas persisten en su enfrentamiento por la tierra de Huancavelica, Cusco y Pasco..., con una dinámica de renacimiento de las comunidades campesinas. En Huancavelica, de un total de 189 haciendas (en Acobamba, Angaraes y Huancavelica), 117 pasaron a formar parte de seis grandes empresas; mientras que de 84 comunidades 21 reciben 34 haciendas con el 16% de las hectáreas afectadas.

Estas cifras muestran que las comunidades campesinas incentivadas por la reforma son objetivamente movilizadas - por una realidad que se les opone y reinician la lucha por la tierra.

Resurge en 1975 con la invasión de doce haciendas de la SAIS Huancavelica, por nueve comunidades, y tiene su punto más alto en 1979, cuando 16 comunidades ocupan cinco predios de la misma empresa. El resurgimiento comunal se expresa en la reconstrucción de la Federación Departamental de Comunidades campesinas de Huancavelica, que realiza su segundo congreso en 1979 después de ocho años de casi total inactividad.

En la propia área empresarial surgen nuevas comunidades. En la SAIS Huancavelica -también asediada internamente- se plantea la reestructuración de las empresas mediante el re-dimensionamiento. Sin embargo al pretender preservar la rentabilidad, aísla y reprime a las

comunidades.

El Estado crea cinco cooperativas de producción, nueve grupos campesinos y quince comunidades, se adjudican tierras disociando a los feudatarios de las comunidades colindantes e incentivando el enfrentamiento entre ellos.

En la SAIS, donde los comuneros proponen que los predios le sean adjudicados, se entregan tierras a 21 comunidades y se crean otras doce. De este modo el gobierno crea una contradicción entre las viejas comunidades con cuatro hectáreas por familia, en promedio, y aquellas nuevas con 56. Esta adjudicación reestructuradora era provisional y despertaba en los exterratenientes una ambición orientada a la restitución de sus dominios, mientras que las comunidades continuaban en un nuevo proceso de configuración, enfrentándose entre ellas por exhaciendas o linderos.

También en 1976, en el Cusco se inaugurarían los conflictos en la CAP Tupac Amaru II de Antapampa, cuando la comunidad campesina de Equecco Chacan toma el fundo de Huaypo Chico. Tal es el detonante de una explosión de tomas de tierras que conduce al redimensionamiento estatal, desde las tierras marginales hasta las centrales.

A fines de 1979 estaba liquidada la cooperativa, con lo que las comunidades recuperaban parte de sus tierras. Estas tomas de tierras ocurrían debido a que en la conformación de la CAP, 38 000 Has. de tierras fueron

adjudicadas a colonos y a 26 comunidades campesinas de un total de 36. Esta forma de adjudicación puede confundir si no aclaramos que las comunidades recibieron parte de los excedentes y oferta de trabajo, mientras los excolonos el control de las empresas. Esto mismo ocurriría casi en toda el área andina.

Igual que en Huancavelica, las comunidades se reconstituirían como organismos de lucha. Otras se reorganizan en oposición a la intervención fiscalizadora del Estado y ponen en evidencia las limitaciones de esa reforma agraria para solucionar los problemas comunales, en particular cuando éstas son marginalmente anexadas a la empresa.

El 28 de julio de 1980 los comuneros realizan las primeras tomas de tierras de las CAP y SAIS en el departamento de Pasco. Su generalización en más de 22 empresas, significaría la intervención de la Federación Departamental de Comunidades Campesinas de Pasco y de la Central de Cooperativas Agrarias Comunales y de Servicios de Pasco, produciéndose una confrontación entre ellas.

Estos conflictos se derivan de la ausencia de beneficios para las comunidades asociadas, mientras sus campos sobrepastoreados no resistían el crecimiento ganadero y las empresas pueden darse el lujo de desarrollar una ganadería extensiva.

Las comunidades sin apoyo estatal, técnico,

crediticio o de tierras, sólo tienen la única opción de recuperar sus tierras para tener acceso a mejores pastos. Estos tres casos parten de un movimiento mayor: costeño y andino, y muestran que el problema campesino no ha sido solucionado. Más de un millón de familias, sin tierra o con ingresos correspondientes a subocupados, viven con sus fuerzas productivas bloqueadas.

La CCP, en un manifiesto de septiembre de 1974, concibe una plataforma incoherente entre la lucha inmediata y sus objetivos programáticos de lucha por la tierra y por la liberación nacional (199).

La plataforma se basaba en dos consideraciones: a) la agricultura más rentable sigue orientada a la exportación, b) y continúa descapitalizándose, de donde se derivan sus seis propuestas de lucha: Toma de haciendas, contra el pago de la deuda y aumento de salarios, apoyo a los pequeños agricultores, trabajo para eventuales y desocupados, y por la defensa de las libertades democráticas.

En el V Congreso de la CCP en agosto de 1978 se aprueba un programa de "tierra, pan, trabajo, liberación nacional y un gobierno popular revolucionario", que mantiene las características reformistas de cuatro años atrás procesada por la coyuntura democratista del momento político (200). Allí afirmaban que con la reforma agraria continuaba el monopolio de la tierra y el atraso del campo. Las

(199) CCP, Manifiesto a todos los explotados y oprimidos del país, Lima, 1974.

(200) CCP, Programa y plataforma de lucha, Lima, agosto de 1979

comunidades sufrían la agresión de una política agraria destructiva, los campesinos medios y ricos no contaban con apoyo estatal y el trabajador asalariado era más explotado que antes por las empresas creadas y dirigidas por el Estado.

Estas relaciones y el abuso discriminatorio sobre el campesinado indígena impidieron la democracia y negaron los mínimos derechos políticos ciudadanos. Para este gremio, el origen de las relaciones de explotación y dominación surgen de la reconcentración de la propiedad de la tierra, del predominio del capital imperialista, del gran capital nativo y del reforzamiento del poder estatal burgués de tipo semicolonial. Consecuencia de esta apreciación fue la sobrevaloración del desarrollo capitalista y de las contradicciones interburguesas por parte del cuarto Congreso de la CCP. Mientras reafirmaba su camino revolucionario, las fuerzas democráticas y socialistas persistían en proponer el derrocamiento del poder político reaccionario.

La plataforma de lucha de la CCP era otra vez independiente del programa "revolucionario". Las tomas de tierras, la organización de la lucha del proletariado agrícola, la defensa de la comunidad campesina y la lucha por el bienestar del campesinado eran planteamientos fuera de la lucha por el poder.

En 1980 presentan un pliego único al gobierno de Belaúnde Terry, que se puede sintetizar en democracia y

derechos de los trabajadores, defensa de la reforma agraria, apoyo a la producción principalmente alimentaria, comercialización campesino-estatal, apoyo a los campesinos que sufren sequía y fomento estatal del empleo (201).

Todo se reducía a presionar al Estado pero subordinándose a él.

El 21 de mayo de 1981, la CCP, la CNA, la Central Nacional de Empresas Campesinas (CENECAMP) y la Federación Nacional de Cooperativas Agrarias Cafetaleras del Perú (FENCOCAFE), concluyen un acuerdo de constitución del Frente Unitario del Agro Nacional (FUDAN) con el objeto de lograr la reformulación de la política agraria neocolonial del gobierno belaudista y la derogación de la Ley de Promoción y Desarrollo Agrario, que amenazaba con revertir la Reforma Agraria. Se quedaban en los aspectos técnicos de la promoción agraria y el apoyo a la agroindustria, al agrocomercio y al sector intermediario en desmedro de los otros productores campesinos.

El FUDAN establece un proyecto de defensa del agro al mejor estilo Kautskiano, ocultando las contradicciones entre los diversos productores: los intereses del campesinado expuestos en el programa de la CCP que presuntamente buscaban el poder para el campesinado y el proletariado, y los de la naciente burguesía agraria representada por la CNA, FENCOCAFE, CENECAMP, CECOAAP, ONA, FAR y la FEDETRAP.

Las contradicciones económicas, sociales, políticas e ideológicas conducirán a la obstrucción de los avances de la CCP como organismo de lucha campesina, más aún cuando su orientación se dirige a desarrollar su oculta finalidad de sumar fuerzas que coadyuven a la nueva estrategia de gobierno: el parlamentarismo.

Los diversos movimiento sociales que hemos visto, en su desarrollo fueron articulándose y radicalizándose empujados por las diversas corrientes políticas partidarias, no obstante su real generalización y la violencia política serán propiciadas por el PC del P que formula la unidad popular en torno a la lucha nacional democrática y el socialismo.

CONCLUSIONES

esa violencia irreprimible...no es una absurda
 tempestad ni la resurrección de instintos
 salvajes, ni siquiera un efecto del
 resentimiento: es el hombre mismo
 reintegrándose.

Jean Paul Sartre

1.- Hemos visto que el Perú estaba penetrado hasta sus dimensiones más hondas por varios procesos constitutivos de diferente intensidad, fundamentalmente en el periodo prehispánico y luego en los periodos feudal-colonial y capitalista. Los dos primeros impiden o inutilizan los proyectos de solución a la cuestión agraria y campesina, oligárquicos o burgueses, siempre contrainsurgentes que impulsa el capitalismo. Son precisamente la "domesticación del hábitat", la "memoria clásica y los símbolos de lo indio" (*) en el momento prehispánico, y el genocidio, etnocidio y la oposición comunidad campesina-hacienda en el proceso colonial, los acontecimientos que organizan los actuales ejes de eslabonamiento social de la violencia que estremece al país e interpela a sus ancestrales habitantes acerca de su disposición para incorporarse a la convocatoria para destruir el Estado como relación social de poder.

La tradición histórica fundante del Estado moderno y la "nación" como eufemismo, es la criolla-aristocrática a partir de la política y no de una

(*) René Zavaleta Mercado, La cuestión nacional en América Latina.

previa experiencia y práctica burguesas de construcción capitalista. En la misma medida en que las clases dominantes se articulaban al mercado mundial, no fueron eficaces para construir un orden político y social interno burgués y democrático, sino de simple dominio y opresión de una comunidad histórica que hoy enaltece su diferenciación se homogeniza y andiniza el Perú. Como resultante, en el Perú no existe un Estado nacional acabado. Es la unidad aparente de una realidad escindida.

2.- Las clases sociales, fragmentadas y heterogéneas continúan en su proceso de constitución. Existe una mayoría andina que aunque penetrada de elementos coloniales y republicanos pervive como etnia y sustento de la nacional en los siguientes aspectos (202).

1. Verticalidad y complementariedad de pisos ecológicos en micro-regiones y en comunidades;
2. Rearcaísmo en periodos de crisis: vuelta al trueque y a la autosubsistencia;
3. Autoridades tradicionales nativas;
4. Reciprocidad en la organización dualista como principio de organización demográfica, de ordenación del parentesco y alianzas interétnicas;
5. Expresiones artísticas: artesanía, ritos agrícolas, "queros" y arte culto de élites urbanas;
6. Esquemas mítico-religiosas para pensar la historia y el imperio inca como modelo, como soporte

ideológico paradigmático de los movimientos sociales;

7. Las lenguas quechua y aymara como concepción del mundo (Gramsci) en oposición al dominio y la explotación de una minoría criollo-mestiza que por más de 400 años no sólo ha extraído su plustrabajo, sino que la segrega y discrimina.

Hablamos de redefinición de su identidad basados en que el mundo andino es contradictorio y ambiguo, donde se presentan interrelacionados la unidad y la división, la democracia y el autoritarismo, el patriarcalismo y el clientelismo como instrumentos de dominación y como estrategias de reproducción. La conciencia también aparece dividida: alienación y autenticidad, religiosidad y paganismo, envilecimiento y humanismo, etc.

3.- La frustración del Estado nacional se encuentra en la persistencia de las relaciones coloniales y clasistas con la población indígena. El Estado oligárquico y luego la internacionalización del capital y del Estado no lograron disolver al campesinado, clase portadora de la nación y tributaria del Estado, el cual incorpora la condición indígena y plantea una solución democrática al problema de la tierra y de la integración.

Esta clase no contiene totalmente el problema indígena. La transculturación no es asumida por este sector social como pertenencia colectiva, sino formal y aparentemente.

Los ajustes históricos en sus múltiples dimensiones tendían a mantener la heterogeneidad, pero fundamentalmente su identidad al mismo tiempo que la expansión de la economía burguesa los admitía segmentariamente en su seno como proletarios y semiproletarios en una situación de gran inestabilidad, creciente en periodos de crisis. La comunidad campesina y el minifundio, las llamadas marginalidad y la economía informal establecen su condición mayoritaria y su desgarrada unidad. Esta mayoría indígena-campesina, portadora de particulares caracteres somáticos -que no conducen a hablar de una esencia indígena o a explicar los fundamentos principales de la diferencia-, ya no puede ser ocultada por la ideología oficial cada vez más aristocratizante y excluyente.

Ni el mestizaje ni la integración segmentaria, el patriarcalismo, la política indigenista, la incorporación a las fuerzas armadas, la andinización de la ciudad, la política agraria y campesina, han posibilitado la institucionalización de los mecanismos de gobierno, la internalización de la relación Estado-sociedad civil, la legitimación de autoridades políticas y la relación Estado-sociedad civil, la legalización de autoridades políticas y la relación ciudadanos-Estado.

El régimen de Velasco Alvarado sólo significó la internalización de las funciones públicas en el Estado al

ritmo de la transnacionalización de la economía y la política, produciendo reformas cuya sustancia contrainsurgente-desarrollista introduciría límites en la relación entre el campesinado pobre y el Estado al alejar este último al campesinado de su lugar en la reproducción de la sociedad y el Estado.

La relativa democratización social en el campo no desarraigó la ideología colonial, así como entre los sectores en proceso de descampesinización no resolvió su problema de clase la proletarización.

4.- Los movimientos sociales, particularmente los insurgentes andinos, invocaban el remozamiento teórico para interpretarlos, destacando la interrelación conceptual: nación, estado, cultura, etnia, colonialismo, constitución de clases, relaciones transicionales, acumulación, etc. Núcleos de oscura y discontinuad polémica de las izquierdas en el Perú.

Pensamos que el movimiento social conducido por el Partido Comunista del Perú, más conocido como Sendero Luminoso, es parte del proceso de democratización andina del siglo XX tan andinizado como universal. Sin embargo, está limitado por la escisión histórica de viejas líneas de división entre campesinos.

La lucha democrática se expresaba en los combates antifeudales, en la lucha por la tierra, por la educación, por autoridades propias en las asociaciones de provincianos

en la capital que luchaban por la supervivencia biológica y cultural. En síntesis, son batallas por su identidad, que avanzan en cortas coyunturas a contracorriente de parte del movimiento obrero.

El movimiento de Sendero Luminoso es obrero-campesino regional pero va más allá. Se basa en el potencial de violencia de los sectores no institucionalizados que surgen de la desestructuración de los Andes feudales y de la no construcción del capitalismo. Es un movimiento fundado en la diversidad étnico-cultural y actúa en un espacio fragmentado (etnias indígenas-mestizas, originarios y forasteros, agricultores y pastores, campesinos de hacienda y comunidad, etc.) y expresa tanto los modos en que los sectores sociales se integran fragmentariamente, como la resistencia cultural y la lucha por la identidad.

Esos sectores portan una mayor agregado de explotación y violenta opresión, y sintetizan una acumulación de tensiones sociales agudizadas por la segregación étnica y de clase.

Están integrados por aquellos que no tienen posibilidades de plantear sus demandas por ausencia de canales, que no perciben el mínimo de excedente; sin lugares de protesta, que se desenvuelven fuera de normas institucionales, que toman agrupaciones sometidas a mecanismos tradicionales de poder

caudillismo-cacicazgo-patriarcalismo.

En la medida en que se ahondan las diferencias intrarregionales y de clase, que crece la pobreza y la desigualdad social, que se subvierte la frágil base productiva, que crece la dependencia alimentaria, se empobrecen los suelos, se destruye la población indígena, el grado de confrontación social y política toca a todos los sectores sociales.

Esta organización política inicialmente bastante provinciana (huamanguina), ante el agotamiento del discurso interpelatorio sobre la guerra impulsa la práctica de la guerra.

La ideología y la política se expresan en lo militar.

En Ayaucho se encuentra un conjunto de hechos coincidentes: decadencia de la feudalidad, migraciones, formación de barrios, reapertura de la universidad, desarrollo mercantil y mayor presencia del Estado.

Estos elementos abren el campo y la ciudad a la lucha de clases y el PC del P pugna por colocarse a la cabeza, organizando y dirigiendo a los sectores populares en la lucha de masas. A mediados de la década del setenta su hegemonía es total y pocos años después acuerdan interpelar y convocar a las clases subalternas a la lucha por el poder.

5.- Una economía constreñida, una cultura mutilada y una conciencia enajenada pueden producir un

proyecto de resistencia con base en la retención de elementos culturales autónomos que expresen la historia de sus luchas, de su vida cotidiana y sus concepciones mesiánicas como síntesis del mestizaje interétnico colonial (203) y postcolonial entre elementos de las sociedades coloniales y nativas, como entre sub-conjuntos del pueblo colonizado.

Estas agrupaciones hoy localizadas en los confines de la miseria como campesinos, semiproletarios y desempleados, son convocadas por la propaganda armada y la agitación "senderistas" en oposición a los sectores de los criollos que, en un largo e ininterrumpido proceso de mestizaje, se localizan la cornucopia la abundancia como burgueses de ideología oligárquica.

La historia del Perú es la historia de las rebeliones étnicas, mientras que la historia del movimiento obrero es moderna y discontinua a pesar de las vinculaciones que se establecen entre ambas.

Los movimientos anarcomilenaristas (1914-1924) contra la expansión de la hacienda y la refeudalización tienen relación con el anarquismo que en los centros urbanos condujo la lucha por las ocho horas en la segunda década siglo XX y en el campo tuvo significativa presencia en los complejos agroindustriales. Poco después del movimiento de perfiles milenaristas de Rumi Maqui (1914-1915) el proletariado consigue la jornada de ocho horas (1919) e

(203) S. Assadourian, "Dominio colonial y señoríos étnicos", en Dialogos, México.

inicia su declive debido a la represión y el programa de modernización semicolonial del oncenio de Leguía (1919-1930).

Mientras tanto, entre 1920 y 1923 se inicia en el campo un proceso de ascenso de masas impulsado por los demócratas revolucionarios y anarquistas a través del Comité Pro-derecho Indígena Tahuantisuyo con rasgos autonomistas y milenaristas.

Constituidas nuevas formas orgánicas de mediación política, el APRA (1931) y el PC (1930), paradójicamente retrocede el movimiento obrero y el aislado movimiento campesino. No despiertan el interés de los partidos entrampados en la ambigüedad y el parlamentarismo (APRA) o en estrategias no revolucionarias (clase contra clase y frentes antifascistas del PC), hasta el ochenio de Odría (1948-1956), cuando ambas organizaciones -en la clandestinidad- van perfilando alianzas con los sectores burgueses de la oligarquía.

El apoyo que ambos le brindan a Prado significará una fase de expansión en el movimiento obrero y campesino, en el que nuevamente el movimiento obrero prelude las luchas campesinas.

En 1958 hay un paro nacional, y luego -entre

1958 y 1964- se producen dos grandes rebeliones campesinas que marcan una nueva época: la combinación de la lucha indígena-campesina y la lucha política.

Estos enfrentamientos corresponden a la segunda fase del proyecto de sustitución de importaciones, a una nueva entrega de recursos naturales a las transnacionales, al crecimiento industrial y del sector terciario, y a la ampliación del aparato estatal: procesos que impulsan la crisis de la hacienda y la pauperización campesina. Esta acumulación de tensiones concluye en las guerrillas de 1965 conducidas por un sector escindido del APRA y del PC.

Entre 1968 y 1980 continúa el proceso acelerado de transformación económica, social, ideológica y política, abriéndose con ello espacio a la lucha de clases y renaciendo el problema étnico en espera de factores de unificación.

6.- Transcurrido medio siglo desde la constitución del APRA y el PC, la contradicción continúa con nuevas expresiones.

El PC y Mariátegui proponían el proyecto de una nueva sociedad fundada en la solución -como central- del problema indígena-campesino y que colocará a la comunidad campesina como eje democrático articulador de la economía y la sociedad andinas. Perspectiva que sólo se podría lograr con la violencia revolucionaria.

El APRA, en cambio, le oponía un proyecto burgués

tomado de las sociedades europeas y elaborado bajo la dirección de la pequeña burguesía y la burguesía nacionales. En tanto "el proletariado es débil y el campesinado ignorante", su imposición sólo se lograría a través de la evolución social y el parlamentarismo.

Hoy el Partido Comunista del Perú (SL) articula en su proyecto una ideología y concepción del mundo marxista-maoista y un proyecto mariateguista que asume elementos culturales del pueblo colonizado: arraigo a la tierra, organización comunal, reciprocidad, experiencias de lucha andina, códigos de comunicación y representación simbólicas (lengua, mitos, ritos, tradiciones, costumbres, creencias).

Su proyecto incluye el respeto por los sentimientos, los valores y las motivaciones recogidos en himnos, la pintura, las canciones, el teatro, el proyecto de autonomía comunal, el quechua como requisito del combatiente andino, el uso de la dinamita, el patriarcalismo, el caudillismo, y el milenarismo. Es la alianza mestizo-indio, pequeña-burguesía y campesinos, obreros, sectores populares en proceso de constitución de clases, que tras el lema "La rebelión se justifica" impulsan la violencia revolucionaria para igualar desde abajo, homogenizar y ordenar la sociedad con base en su proyecto político.

A esta tendencia se le presenta como complementaria de la lucha municipal, sindical y

regional-popular, que unificando los intereses laborales y populares pretende constituir un eje popular nacional que a través de la destrucción del sistema político y las relaciones que lo sustentan democratice la sociedad y avance al socialismo. Sin embargo la tendencia hacia la unidad de la lucha revolucionaria del pueblo es conflictiva y prolongada.

7.- Hemos podido observar como la dinámica contemporánea de la economía capitalista mundial -que debe su cohesión a la internacionalización del capital y a su interiorización en los espacios coloniales de acumulación exige que la economía peruana tenga que funcionar de acuerdo a la lógica del capital financiero, haciendo imposibles terceras posiciones entre aquella y la construcción de una economía independiente.

La burguesía burocrática y el régimen estatal están obligados a funcionar bajo la racionalidad que impone esta forma de acumulación con sus momentos de expansión y crisis. En esta última -ahora de deuda externa- como sostiene Lotta:

la explicación más fundamental es que el contexto internacional no es conducente al crecimiento de la economía mundial, ni a la reestructuración sustancial de las economías domésticas latinoamericanas ni para nuevas inyecciones mayores de capitales. Y éstas son las

condiciones necesarias para que el imperialismo pueda manejar de manera sustantiva el problema de la deuda. Nuevas entradas de capital de suficiente magnitud como para reestructurar estas economías, no van a materializarse, ausentes las condiciones para una acumulación más rentable. Pero solamente las entradas de capital imperialista pueden crear estas condiciones. Central en esta crisis mundial de acumulación es el hecho de que a los centros imperialistas les falta estímulo de, y la capacidad para empujar hacia adelante el desarrollo y en la periferia, justamente por la elevada desigualdad, deformación y desarticulación resultantes de la penetración y transformación que les precedieron (204).

Las barreras a la acumulación surgen e interpenetran los eslabones de la acumulación mundial y los Estados -como el peruano- deben solidarizarse con el sistema.

Los puntos precedentes nos conducen a proponer que dada la articulación de la burguesía burocrática y el Estado con el capitalismo imperialista y la semifeudalidad, unicamente podrá construirse la democracia popular

(204) Raymond Lotta, "La crisis de la deuda externa de América Latina en su contexto: La economía política y las implicaciones estratégicas del desorden financiero mundial" Borrador presentado en conferencia en la UAM, Nov. 1988, México.

destruyendo al Estado y afianzando la soberanía popular desde el pueblo nación en el poder. Y precisamente la nación en el Perú es una construcción inconclusa, parcial e incompleta, cuya frustración radica en su historia colonial que llega hasta el presente.

8.- La nación como "agrupamiento colectivo cuya especificidad está dada en primer lugar por la naturaleza de la cohesión social interna... es el desarrollo de las fuerzas productivas, el vehículo de una articulación económica y el poder del Estado.. de su correspondiente integración social, a través de relaciones sociales que realizan al mismo tiempo la unidad contradictoria de clases en el seno de la comunidad" (205).

Considerando los elementos constitutivos de la nación podremos pensar, en términos hipotéticos, con más elementos de juicio el problema étnico-nacional:

a) rasgos culturales e históricos que se unifican a partir de una base étnica común;

b) conciencia colectiva que conduce a la identidad, cohesión e integración-participación sociales y que conforma un sujeto colectivo y soberano de defensa y rechazo a la dominación y la explotación común;

c) comunidad territorializada o espacio interior que, limitado políticamente, define el lugar de reproducción de instancias económicas, políticas y culturales;

d) comunidad económica de relaciones sociales de

producción contradictorias entre etnias y clases;

e) tradición común, experiencias compartidas de lucha y resistencia;

f) base material de la nación que la orientan a un destino compartido;

g) comunidad cultural como acto de hegemonía.

Sin embargo aún hoy el Estado y la ciudad son los lugares y los símbolos del poder, de la autoridad y de la violencia, que impiden iniciar desde allí la constitución de la nación, empero benefició a aquella parte de la nación con estrechos horizontes exclusivistas y rentistas.

La experiencia nacional se da en la política, frente a la cual se enfrenta otra concepción del mundo, símbolos y valores indígenas expresados en un conjunto simbiótico.

Las clases dominantes se articulan al capital imperialista como el Estado a la economía mundial y a la política colonial. La heterogeneidad estructural capitalista-precapitalista no permitiría la emergencia de una estructura nacional de clases.

El Estado pierde su soberanía y su carácter nacional, mientras el pueblo evoluciona lentamente a la clase y la nación forjándose al mismo ritmo una conciencia contradictoria y dialéctica entre la dictadura y la democracia.

El Estado se opone a la nación y la penetración

económica del exterior escinde las limitaciones a la soberanía estatal. El Estado se vincula cada vez más a otros estados y acepta las decisiones externas engarzadas al apoyo político-militar para evitar la explosión de la potencialidad de los antagonismos y la generalización del conflicto, así como la consolidación de las fuerzas integradoras.

9.- Lo externo se interioriza y lo interno se exterioriza en la dialéctica de una economía tan importante por la geopolítica como por sus riquezas internas.

Si bien es cierto que por el control violento que ejerce sobre la sociedad la dictadura cívico-militar es la materialización de la crisis política, ésta surge de la escasa capacidad estatal para resolver los desequilibrios estructurales creados por el crecimiento económico y las reivindicaciones populares nunca satisfechas.

La acumulación de antagonismos y la desobediencia generalizada conduce a graves rupturas.

La dinámica de la sociedad se da sobre un doble enfrentamiento: por un lado, entre fracciones del capital; por el otro, entre clases-etnias-burguesía y terratenientes "mistis" en oposición a campesinos y semiproletarios-proletarios indígenas e indios-mestizos, que hacen imposible la hegemonía, devalúan la dominación de clase y sus instituciones.

El Estado pierde parte de su propia naturaleza,

su capacidad y función ordenadora.

Una contradicción que señala Torres Rivas al referirse a este tipo de dictadura reaccionaria de clase es la siguiente: "...se trata no obstante de gobiernos electos y constitucionales, y al mismo tiempo represivos y anti-democráticos, prueba elemental de que cuando forma y contenido se divorcia, pueden surgir mecanismos no democráticos de legitimación y control" (206) Al parecer existe en el autor una discordancia entre su conceptualización de régimen político y Estado. La sustancialidad real del Estado es la violencia, y la legitimidad oscurece a aquélla en la misma relación que la regulación económica actúa sobre el orden de las leyes propias de la economía.

Es en este sentido que la sustancialidad real del Estado peruano es la violencia étnico-clasista, contenido que se objetiva como una ideología "anticomunista" que legitima la fuerza.

Mientras exista resistencia y cada vez se reduzca más el consenso pasivo y la alienación política, la crisis política tenderá a ser permanente y permeará toda la sociedad, la cultura y la vida política.

El desarrollo capitalista ofrece margen de legitimidad al régimen político en la misma medida en que se vuelve a agotar la capacidad de legitimarse.

El proceso para impulsar un nuevo patrón de

acumulación por parte del Estado y las transnacionales (1976-1985) condujo a un aparente auge de la economía cuando en realidad la desestructuraba, aún más desintegraba a las comunidades campesinas y descampesinizaba parcialmente a los trabajadores del campo.

10.- Hoy la guerra de guerrillas agudiza la crisis económica y política al acelerar los factores de debilitamiento del Estado, que no alcanza a garantizar las inversiones nuevas, estabilizar la economía o conseguir las imprescindibles divisas para la reproducción y la legitimación.

La necesidad de recomponer los factores del poder y de legitimación, de restablecer la inserción económica y política en el ámbito internacional y reactivar la economía, hacen impostergables las elecciones y la subordinación creciente de la política económica a los dictados del Centro de acumulación a través de los organismos de poder.

La solución de la crisis monetaria y particularmente fiscal, enfrentará serios obstáculos:

a) la guerra civil, que requiere de crecientes inversiones bélicas y, a la vez, necesita reducir los gastos de contrainsurgencia (que entre 1979 y 1983 se incrementó en un 500%);

b) frenar el deterioro del nivel de vida popular y el desempleo, al mismo tiempo que deberá impulsar los "polos de desarrollo", las "aldeas modelo" y los "comités

interinstitucionales" en las áreas campesinas insurgentes;

c) tomar medidas de política económica que no escindan más a las clases dominantes y reconstruir la economía del país, que incluye la reconstitución de la fuerza de trabajo sometiéndola a la dirección estatal.

Finalmente, las Fuerzas Armadas exigirán soberanía y autonomía en los máximos límites posibles para instrumentar las medidas contrainsurgentes y ser acreedoras de los beneficios que ella implica.

El conjunto de instituciones creadas por la contrainsurgencia tampoco puede ser abandonado: el sistema nacional de seguridad, las patrullas de autodefensa civil, empresas asociativas, polos de desarrollo y aldeas modelo no pueden ser dejadas de lado.

BIBLIOGRAFIA

- Abendroth W. y Ienk K., Introducción a la ciencia política, Anagrama, Madrid, 1971.
- Acosta J., Cómo ganar las elecciones, Lima, 1942.
- Alvarez Elena, Política agraria y estancamiento de la agricultura, 1969-1977, IEP, Lima, 1980.
- Política económica y agricultura en el Perú, IEP, Lima, 1983.
- Amara Giuseppe, La violencia en la historia, ANUIES, México.
- Amat Carlos, "La distribución del ingreso familiar en el Perú", en Socialismo y participación, Lima, 1978.
- Anaya Eduardo, Imperialismo, industrialización y transferencia de tecnología, Horizonte, Lima, 1977.
- Ansion Juan, Siete ensayos sobre la violencia en el Perú, Fund. Ebert, Lima, 1985.
- Aranibar Carlos, El señorío de los incas, IEP, Lima, 1967.
- Arblaster Anthony, "—Qué es la violencia?", en Trimestre Político, FCE, 1972.
- Arguedas José María, "La soledad cósmica de la poesía quechua", en Ideas, Artes y Letras, Lima, 1961.
- Formación de la cultura nacional indoamericana, Siglo XXI Editores, México.
- Indios, mestizos y señores, Horizonte, Lima.
- Arnaud Pascal, "El Estado nacional en América Latina: una derivación del capital", en Críticas de la economía política, núms. 16-17, El caballito, México.

Arnault Jacques, Historia del colonialismo. Futuro, Buenos Aires, 1960.

Assadourian Sempat, "Dominio colonial y señoríos étnicos", en Diálogos, México.

Basadre Jorge, Sultanismo, corrupción y dependencia en el Perú republicano. Milla Bartres, Lima, 1979.

Bastide Roger, Prefacio a Historia y Etnología de los Movimientos Mesiánicos, Siglo XXI, Editores, México.

Beltran Roberto, "El problema de la salud en el Perú", en Socialismo y Participación, núm. 2, Lima, 1978.

Blanco Hugo, De Obrero a Campesino, Periódico del POR, Lima, 1963

Bobbio Norberto, Diccionario de Política, Siglo XXI, Editores, México, 1982

Bonilla Heraclio, Estudio sobre la formación del Sistema Agrario Peruano, Folleto PUC, Mimeo., Lima, 1978.

Bonfil Guillermo, Utopía y revolución. Nueva Imagen, México, 1981.

Bourricaud F, La oligarquía en el Perú, Amorrortu, Bs.As., 1969.

Brundenius Claes y Chauca Pablo, Los cambios estructurales en la economía peruana y el fracaso del Gobierno Militar (1968-76). J.M. Arguedas, Lima, 1977.

Remuneraciones y distribución del Ingreso. INP, Lima

Burga Manuel, La sociedad colonial (1580-1780), Mosca Azul, Lima, 1977.

Burga Manuel y Degregori C., Artículos en Mundo Andino y Región, UNMSM, Lima 1984.

Caballero J.M., Reformismo, reestructuración agraria en el Perú, Folleto, CISEPA, PUC, Lima, 1976.

Agricultura, reforma agraria y pobreza campesina, IEP, Lima, 1980.

La reforma agraria y más allá, IEP, Lima, 1980.

Cabieses H. y Otero, Economía peruana: un ensayo de interpretación, Desaco, Lima, 1978.

Caravedo Baltazar, La burguesía arequipeña y el Estado peruano, IEP, Lima, 1978.

Carrabus Carlos, Génesis de una revolución, La Casa Chata INAH, México, 1983.

Clausewitz Von, De la guerra, Diógenes, México, s/f.

Cook Noble, La población indígena en el Perú colonial, Anuario del IIH, Rosario, 1965.

Cotler Julio, Clases, Estado y nación, UNAM, México, 1984.

Ponencia en Reunión sobre Teoría del Estado en América Latina, UNAM.

Dancourt Oscar, Aspectos económicos de la lucha campesina, PUC, Lima.

Degregori Carlos, Sendero Luminoso, los hondos y mortales desencuentros, IEP, Lima, 1985.

De Ipola Emilio, Estructura, coyuntura y las mediaciones, FLACSO, Mimeo., México, 1984.

De la Puente Luis, Folleto, Lima, 1968.

Del Prado Jorge, Mariátegui y su obra, Lima, 1942.

Del Río Eugenio, "El marxismo y la violencia", en El viejo Topo Extra, núm. 3, Madrid.

Departamento de Comercio USA, Revised Data Series on U.S. Direct Investment Abroad 1966-1974, Washington D.C., 1976, USA.

Díez Canseco Javier, Democracia, militarización y derechos humanos en el Perú 1980-1984, Lima, 1984.

"Un pueblo que se ha echado a andar", en Marcha, México, 1979.

Dobyns B., "An Outline of Andean Epidemic History to 1920", Boletín Ha. Medicina, 1963.

Dowse R., Hughes J., Sociología política, Alianza Editorial, Madrid, 1975.

Dumbar Roxane, "La violencia institucionalizada en relación al racismo", en Civilizaciones, núm. 2, México, 1984.

Duran Francisco, "Estado, capital y trabajo: Perú 1970-1980", en Análisis, Lima, 1982.

Notas sobre el problema de la burguesía en el Perú, sobretiro de la revista Debates en Sociología, núm. 7, Lima.

Eguren Fernando, et. al, Estado y política agraria, DESCO, Lima, 1977.

Engels Federico, Anti-Dühring, Grijalvo, México, 1968.

Espinoza Gustavo y Paredes Andres, "La clase obrera y el proceso peruano", en Marcha, México, 1979.

Fanon Frantz, Por la revolución africana, FCE, México.

Los condenados de la tierra, FCE, México.

Favre Henri, "Sentier Lumineux et horizons obscurs", en Problemes D'Amérique Latine, núm. 4751, París, 1984.

Favre Henri y Bourricaud f., La oligarquía en el Perú, Amorrortu, Bs. As, 1969.

Fernández Baca Jorge, et al., Agroindustria y transnacionalización en el Perú, Desco, Lima, 1983.

Fernández Salvatecci José, Terrorismo y guerra sucia en el Perú, FS, Lima, 1986.

Figueroa Adolfo, "Crisis y redistribución (1975-80)", en ¿Economía peruana hacia dónde?, Univ. del Pacífico, Lima, 1981.

Flores Galindo, Alberto, Violencia y Campesinado, Instituto de Apoyo Agrario (IAA), Lima, s/f.

Europa y el país de los incas, IAA, Lima, 1986.

García Sayán Diego, Las tomas de tierras en el Perú, DESCO, Lima, 1978.

Germaná Cesar, "Capas medias y poder en el Perú", en Revista Mexicana de Sociología, UNAM.

González Raul, "Las etapas: lo que quieren lograr", en Quehacer, núm. 42, Lima, 1986.

González Raul y Penfichi Aldo, "El largo insomnio del empleo", en Quehacer, núm. 23, 1983.

Gouldner Alvin, La crisis de la sociología occidental, Amorrortu, Madrid, 1978.

Graciarena J., Poder y clases sociales en el desarrollo de América Latina, Paidós, Bs.As., 1979.

Guasti Laura, en El gobierno militar: una experiencia peruana, 1968-80, IEP, Lima, 1985.

Guillén Edmundo, Visión peruana de la conquista, Milla Bartres, Lima, 1979.

Guzmán Victoria, El movimiento campesino en el Perú, 1956-64, Lima.

Handelman Howard, Luchas campesinas en los Andes, PUC, mimeo., Lima.

Hegel G.F., Lecciones sobre filosofía de la Historia, FCE, México, 1981.

Heller Agnes, Teoría de la Historia, Fontamara, México, 1984.

Henríquez Narda y Ponce Victoria, Lima: población, trabajo y política, PUC, Lima.

Hernández Max et al. Violencia y paz, Fund, Ebert y APEP, Lima, 1985.

Hobbes Thomas, El Leviatan, FCE, México, 1980.

Hobsbawm Eric, "Ocupaciones campesinas de tierras", en Análisis, Lima.

Marxismo e historia social, UAP, México, 1983.

Huizer Gerrit, El potencial revolucionario del campesinado en América Latina, Siglo XXI, Editores, México, 1976.

Hunefeldt Christine, Conciencia étnica y conciencia de clase en el levantamiento 1780-1783, Losontay, Lima, 1980.

Iguíñez Javier, Perú-EE.UU., evolución de algunos indicadores económicos 1968-72, PUC, Lima.

Redistribución y capitalismo en el Perú, Fenix Impresores, Lima.

Informativo Legal Agrario, núms. 11-12, Lima, 1982.

Locke John, Ensayo sobre el gobierno civil, Aguilar, Madrid.

Lotta Raymond, "Sobre el dinamismo del imperialismo y el entramamiento del desarrollo social", en Un Mundo Que Ganar, núm. 2, Bogotá, 1985.

Lukacs G., Historia y conciencia de clase, Grijalbo, México, 1959.

Mac Gregor Jorge, "Prólogo" a Siete ensayos sobre la violencia...

Mc Lintock Cintya, en El gobierno militar...

Maleta Héctor, "El subempleo en el Perú, una visión crítica", en Apuntes, núm. 8, Lima, 1978.

Malpica Carlos, La desnacionalización de la flota pesquera, una medida anti-histórica, Labor, Lima, 1975.

Alianza para el Progreso, una década de esperanzas y fracasos, Horizonte, Lima.

Los dueños del Perú, Peisa, Lima, 1970.

"Los nuevos dueños", en Caretas, 1984.

Manrique Nelson, "Los movimientos campesinos en la guerra del pacífico", en Alpanchis, núms. 11-12, Cusco.

"Guerra sucia, etnocidio y racismo", en Quehacer, núm. 39, Desco.

Mao Tse Tung, Obras escogidas, cinco vols, Lenguas Extranjeras, Pekín, 1970.

Maquiavelo Nicolás, El Príncipe, en Obras Políticas, Ciencias Sociales, La Habana, Cuba.

Mariátegui José C., Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, Amauta, Lima, 1970.

El Alma Matinal, Amauta...

Figuras y aspectos de la vida mundial.

La escena Contemporánea.

Historia de la crisis mundial.

Peruanicemos al Perú.

La organización del proletariado. Grijalbo,
Colección 70, México.

Markham Clement., Historia General de los Peruanos, Tomo IV,
Lima.

Marini Ruy Mauro, "Dialéctica de la dependencia", en Sociedad y Desarrollo, Chile.

Martínez Héctor, Reforma Agraria - peruana: empresas asociativas, Amsterdam.

Matos Mar José, Desborde popular y crisis de Estado, IEP,
Lima, 1984.

Marx Carlos, El 18 de brumario de Luis Bonaparte, Progreso,
Moscú.

Mejía J. y Matos J., Reforma Agraria, logros y contradicciones
IEP, Lima, 1985.

Ministerio de Vivienda y Construcción, Grado de desarrollo y grado de organización de las provincias y centros poblados del País, Lima, 1973.

Ministerio de Industria y Turismo, El capital extranjero en el sector industrial 1971-1973, Lima, 1975.

Moore Barrington, Los orígenes sociales de la democracia y la dictadura, Península, Barcelona.

MRI, Declaración, 10. de mayo de 1984.

Madalengoitia Laura, "El Estado oligárquico y la transición hacia una nueva forma de Estado en el Perú, en Burguesía y Estado Liberal." DESCO, 1979.

Muñoz E., Los partidos políticos en el Perú. Folleto, Lima, 1980.

North Lissa, Similarities and Diferencies in the process of revolutionary Transformation in Central America and the Andes. Congreso, LASA, Albuquerque, 1984.

Nun José, El otro reduccionismo. FLACSO., México, 1983.

Salazar Bondy Sebastián, Lima la horrible. Era, México.

Sánchez Vásquez Adolfo, Ensayos marxistas sobre Historia y política. Océano, México, 1985.

Sartre J.P., Antología de la violencia. FCE, México, 1975.

Schaff Adam, Ensayos sobre filosofía del lenguaje. Ariel, Madrid, 1973.

Skocpol Theda, Los estados y las revoluciones sociales. FCE, 1985.

Solis José Luis, Algunos elementos metodológicos para la teoría del Estado capitalista. CIDE, México.

Industrialización, crisis y estrategias alternativas de desarrollo en Centroamerica, en Economía de América Latina, núm.9, CIDE, México.

Sorel George, Reflexiones sobre la violencia. Alianza Editorial, Madrid.

Stein William, "Ideology in Rural Struggle: Contradictions of Popular Movements in Highland Perú," Ponencia, Simposium Washington, 1985.

Strauss Levi, Conversaciones con Charbonier, Anagrama, Madrid.

Suárez J., La política fiscal de la Junta Militar de Gobierno, IIES, Lima, 1978.

Sulmont Dennis, "Conflictos laborales y movilización sindical" en Revista Mexicana de Sociología, 2/78, México, 1978.

El movimiento obrero peruano 1890-1980, Tarea, Lima, 1980.

El movimiento obrero en el Perú, PUC, Lima, 1975.

Szeminski Jan, La utopía tupamarista, PUC, Lima, 1984.

Tamayo José, El pensamiento indigenista, Mosca Azul, Lima-

Taylor Lewis, Ponencia IASA, Albuquerque, 1984.

Thompson E.P., Tradición conciencia y revuelta: la economía moral de la multitud, Grijalbo, Barcelona.

Thorp R. Bertram A., Industrialización de una economía abierta: el caso del Perú en el periodo 1890-1940, PUC, Lima.

Tord Javier y Lazo Carlos, El movimiento social en el Perú virreynal: precisiones ontológicas, Lima.

Torero Alfredo, El quechua y la historia social andina, Univ. Ricardo Palma, Lima, 1974.

Torres J., Análisis de la estructura económica de la economía peruana, Horizonte, Lima, 1975.

Torres Rivas Edelberto, Vida y muerte en Guatemala, Educa, 1981.

Problemas en la formación del Estado nacional en Centro-américa, ICAP, 1983.

Touraine Alain, Las sociedades dependientes, Siglo XXI, Editores, México.

Tuya Carlos, La función histórica del Estado y la democracia, Akal, España.

Ortega Julio, "Identidad y cultura en el Perú", en Cuadernos Políticos, núm. 24, México, 1984.

La cultura peruana, FCE, México.

Ortiz Alvaro y Robinson David "La pobreza en Ayacucho" en Socialismo y Participación, núm. 28, Lima.

Palmer Scott, Ponencia Congreso LASA, Albuquerque, 1984.

Palomino Abdon, "Andahuaylas 1974: un movimiento de reivindicación campesina dentro del proceso de Reforma Agraria, en Alpanchis, Cusco, 1978.

PC del P "Puka Llacta", Orientaciones preliminares para el trabajo campesino, 1975.

PC del P (SL), Retomemos a Mariátegui y reconstituamos su partido, 1975.

Contra las ilusiones constitucionales y por el Estado de nueva democracia, 1978.

El proletariado y su papel en la revolución peruana, 1978.

Desarrollemos la creciente protesta popular, 1979.

Desarrollemos la guerra de guerrillas, 1982.

No votar, sino desarrollar la guerra popular, 1985.

Desarrollar la guerra popular sirviendo a la revolución mundial, 1986.

Pease H., El ocaso de la oligarquía, El Cid, Argentina, 1979.

Piel Jean, El etnocidio en las Américas. Siglo XXI, Editores, 1976.

Plaza Orlando, "El problema campesino: apuntes para su discusión", en Quehacer, núm. 4, Desco, Lima.

Puiggrós Rodolfo, De la Colonia a la revolución, Bs.As.

Quijano Anibal, "Las condiciones del enfrentamiento, en Sociedad y Política, Lima, 1980.

Recalde José Ramón, La constitución de las naciones. Siglo XXI, Editores, España, 1982.

Roca Luis. Imperialismo en el Perú: viejas ataduras con nuevos nudos, FCP, Lima, 1974.

Roel Virgilio, La república de las frustraciones, grandezas y miserias de la independencia, Alfa, Lima, 1977.

La crisis general del capitalismo y la economía peruana, Alfa, Lima, 1974.

Proceso y crisis de las economías peruana y norteamericana, Alfa, Lima, 1974.

Rousseau J. Jacobo, El contrato social, Porrúa, México.

Rowe E., The Incas Under Spanish Colonial Institutions, 1957.

Rubio Correa Marcial, Las FFAA, la política y la doctrina de contrainsurgencia, en Quehacer, Desco, Lima.

Rude G., Revolución popular y conciencia de clase, Grijalbo, Barcelona, 1981.

Rumiantsev A., "Comunismo Científico-Diccionario", Progreso, Moscú, 1981.

Urrutia Jaime, "Ayacucho, los frutos de la guerra", en El Zorro de Abajo, núm. 3, Lima, 1983.

Valderrama Mariano, Oligarquía terrateniente ayer y hoy, PUC, Lima, 1974.

Valqui Cachi Camilo, "Insurgencia y contrainsurgencia en el Perú", en Revista de la UAG, México, 1983.

Valle Riestra J., "Prólogo" a Democracia... de J. Diez Canseco, Lima, 1980.

Van de Wetering Hylke, "La reforma agraria: un enfoque dirigido a medir el impacto en la economía provincial", CEE-13, Min. Agri., Lima, 1970.

Varesse Stefano, Límites y posibilidades del desarrollo de las etnias indias en el marco del desarrollo nacional, FLACSO, 1984.

Proyectos étnicos y proyectos nacionales, FCE, México.

Vargas Llosa Mario, La Historia de Mayta, varias ediciones.

"Informe de la Comisión", en Caretas, Lima.

Vega Juan José, "Las raíces de Sendero Luminoso", en Diario La República, Lima, 25-04-85.

Vilar Pierre, Introducción al vocabulario histórico, Grijalbo, España, 1980.

Villanueva Victor, Ejército Peruano, Juan Mejía Baca, Lima, 1973.

Wankar, Tawantisuyo, cinco siglos de guerra quechua inca, Nueva Imagen, México.

Warman Arturo, Ensayos sobre el campesinado en México, Nueva Imagen, México.

Watchel Natan, Los vencidos, Alianza Universidad, Madrid, 1971.

Weber Max, Economía y sociedad, FCE, México, 1979.

Wolff Lenny, Semanario El Obrero Revolucionario,
núms. 357-358, USA, 1986.

Worsley Peter, "Frantz Fanon y el lumpenproletariado", en
Trimestre Político núm. 2, FCE, México, 1975.

Yépez del Castillo Isabel y Bernedo Jorge, La
sindicalización en el Perú, Paz, Lima, 1985.

Zavaleta Mercado René, "La cuestión nacional en América
Latina", en Boletín de Antropología Americana,
IPGH, México, 1982.

DOCUMENTOS

Banco Central de Reserva, Cuentas nacionales, Lima. Series
1968--1980. Lima, Perú.

Banco Mundial, Informes, 1972-1976-1980.

Ministerio de Trabajo, Ministerio de Industria, Ministerio de
Vivienda y Construcción. Documentos de trabajo.

Ministerio de Agricultura.

- La Reforma Agraria en cifras, 1972 a 1980. Lima.
- Manifiesto A los pobres del campo, 1974.
- Pliego único del campesinado. Lima, 1980.
- Programas y Plataforma de lucha.

CCP Varios documentos.